

CARLOS FAZIO

El tercer vínculo

De la teoría del caos a la militarización de México

Prólogo de Lorenzo Meyer

Primera edición: diciembre de 1996 Primera reimpresión: febrero de 1997
« 1996, Carlos Fazio D.R. * 1996, Editorial Joaquín Mortiz, S.A. de C.V.

Grupo Editorial Planeta
Insurgentes Sur 1162, Col. Del Valle
Deleg. Benito Juárez, 03100, D.F.

ISBN: 968-27-0690-4

Diseño de colección:

Gerardo Islas y Andrés Ramírez Fotografía del autor:
Dery Fazio Ilustración de portada:
Juan Salas G. (Fotografía original: Eloy Valtierra/EIKON)

*A Dery, Fernando,
Natalia y Bárbara,
mis hijos*

A Julio Scherer

A la Conai

Contenido

PRÓLOGO	4
INTRODUCCIÓN AL CAOS.....	8
CAPITULO 1	
La sombra de Washington	26
CAPITULO 2	
Los primeros cien días de Zedillo.....	38
CAPITULO 3	
Diciembre para recordar	44
CAPITULO 4	
El golpe del 9 de febrero	54
CAPITULO 5	
¿La ley trampa?	62
CAPITULO 6	
Quijotes de fin de siglo.....	73
CAPITULO 7	
Los años y los días.....	84
CAPITULO 8	
1996: Otro año incierto.....	95
CAPITULO 9	
La renuncia.....	110
CAPITULO 10	
Los nexos Cervantes-Perry.....	119
CAPITULO 11	
Mitos y realidades	136
CAPITULO 12	
Elisa, Javier, Fritz y los quebrados	149
CAPITULO 13	
¿Una grotesca pantomima?.....	163
CAPITULO 14	
Danza con lobos	175
EPILOGO.....	188

PRÓLOGO

Escribir y explicar lo que ocurrió en una sociedad cuando el fenómeno bajo estudio ya cumplió su ciclo vital y se convirtió en historia, no es tarea fácil, y las diversas escuelas y corrientes historiográficas mantienen una lucha interminable sobre las posibilidades de interpretación. Sin embargo, tratar de hacer lo mismo con el presente —explicarlo— es algo mucho más arriesgado, pues el humo, el estruendo y el polvo levantado por los conflictos que aún se están desarrollando, impiden la perspectiva mientras que la realidad obliga al autor, quiéralo o no, a ser participante en el acontecer, a ser juez y parte. Carlos Fazio es consciente del problema, y en ésta y en sus otras obras no pretende que se le tome por un observador distante en busca de objetividad —eso no existe—, sino que claramente toma su lugar en las filas de los inconformes, de los que demandan un cambio sustantivo en la dirección y naturaleza del proceso político mexicano actual.

Entender el presente es una tarea difícil en extremo y, sin embargo, es imposible no intentarlo. Como miembros de una comunidad política, simplemente no podemos tomar decisiones sin antes hacer el esfuerzo por ubicarnos, por trazar un mapa, aunque sea provisional o imperfecto, que nos permita saber de manera individual y colectiva donde estamos situados, cuáles son y dentro de que parámetros se mueven, las fuerzas que moderan nuestro presente y condicionan el futuro, pues sólo así se pueden fijar metas, conocer los alcances y límites de las fuerzas y actores que intervienen en el proceso y trazar las rutas y caminos más lógicos para evitar los peligros de los choques violentos, los callejones sin salida o los retrocesos.

Hoy, cuando está por llegar a su fin el siglo XX, las ciencias sociales han perdido —afortunadamente— mucho del dogmatismo que las caracterizó durante una buena parte del mismo especialmente en el periodo de la llamada guerra fría (1947-1990), en donde el imperativo ideológico se impuso al espíritu de la duda sistemática que debe de animar a la verdadera búsqueda de los cómo y los porqué. En la actualidad, son cada vez menos los que todavía pretenden tener la llave de la verdad sobre la naturaleza del presente social y su futuro. El que el dogma esté quedando marginado, no significa que el analista de hoy no pueda ser contundente en su visión del problema. La responsabilidad de la contraparte, el público, es hacer acopio de información y alternativas, para llegar a su propia conclusión y enfrentar de manera ética y práctica los dilemas, incertidumbres y peligros propios de la acción responsable del ciudadano en una época que se caracteriza, al menos en México, por ser el fin de un largo ciclo histórico de monopolio del poder y de rechazo a las posibilidades de la vida democrática.

El lector interesado en descifrar los signos del tiempo actual, va a encontrar en estas páginas comprometidas y apasionadas, una de las perspectivas desde las cuales se puede entender el proceso político mexicano. Es una visión hecha desde la izquierda que, a la vez que explora los fenómenos que apuntan en la dirección de un México más activo en la defensa y promoción de los derechos e intereses de los grupos y clases sociales mayoritarias, no minimiza el poder de los intereses creados para resistirse al cambio e incluso contraatacar, al punto de poder buscar el establecimiento de un autoritarismo menos embozado, más directo que el que se desarrolló a la sombra de una revolución mexicana que hace tiempo dejó de tener vigencia.

Es notable que en este tiempo mundial de caídas, tanto de muros de cal y canto como ideológicos, hayan llegado al poder en varios países, entre ellos el nuestro, precisamente algunos de los últimos dogmáticos. Me refiero, claro está, a los creyentes en la teoría económica neoliberal, que insiste en que la lógica de la asignación de los recursos debe estar guiada por el mercado, no obstante el elevado costo social que conlleva. En México este problema no sería en particular grave si ya estuvieran en su lugar los mecanismos de la democracia política que permitieran a las víctimas del mercado, a los inmodernizables, defenderse de los dogmatismos de manera pacífica, institucional y eficiente. Sin embargo, resulta que justamente esos mecanismos en virtud de los cuales los muchos pueden intentar neutralizar a los poderosos, aún no existen en México. En contraste, la brutalidad y la velocidad del proceso económico de apertura de mercados, disminución de la responsabilidad del

Estado y privatización, están polarizando a la sociedad, a un ritmo que hace temer que se pueda perder la gobernabilidad.

Al inicio de los años ochenta, y como resultado del fracaso de la clase política tradicional —cuyo mecanismo favorito de control era la cooptación bajo el manto de un aparato estatal omnipresente—, un puñado de jóvenes tecnócratas particularmente ambiciosos, trabajando desde dentro, se apoderaron de los centros neurálgicos del viejo sistema autoritario mexicano. El nuevo grupo impuso al conjunto un liberalismo francamente selectivo, que se aplicó en algunas áreas de la economía pero no en todas, y que en la política de plano se rechazó, aduciendo que combinar transformación económica con cambio político era inevitable. Como la tecnocracia no confiara en que el público mexicano aceptara la bondad de su esquema, desde el principio se propuso usar los viejos mecanismos autoritarios de control político —notablemente una presidencia sin contrapesos y un partido de Estado— para enfrentar las resistencias e imponer sus prioridades en el menor tiempo posible. Fuera de la estructura burocrática, la revolución neoliberal y tecnocrática encontró un apoyo muy decidido en los intereses económicos, nacionales y extranjeros, a los que favoreció la lógica del mercado en condiciones no democráticas.

La lentitud del crecimiento económico combinada con la rápida concentración del ingreso en México en el último decenio, es un indicador dramático de los efectos reales del modelo económico impuesto en nuestro país a partir de la crisis de 1982; en 1994 el 100 por ciento de los hogares más ricos recibieron el 41.24 por ciento del ingreso disponible en tanto que el 10 por ciento más pobre apenas sobrevivió con el 1.01 por ciento.¹ Mientras en 1996 tres millones de familias mexicanas viven, según cálculos conservadores, en la pobreza extrema, hay 15 familias —los Slim, Peralta, Azcárraga, Bailleres, Garza Sada, Romo Garza, Larrea, Aramburuzabala, Zambrano, Garza Lagüera, González Barrera, Saba, Arango, Autrey y Salinas Pliego—, cuyos activos, según cálculos internacionales, sumaban 36.3 millones de dólares.² Desde luego, se trata de una lista incompleta, pues no incluye los apellidos del gran dinero hecho directamente desde los cargos de responsabilidad política como resultado de la corrupción y el tráfico de influencias.

¹ Instituto Nacional de Estadística e Informática. *Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares*. México, INEGI. 1995.

² *Forbes*. 15 de julio de 1996.

El tercer vínculo es una interpretación del presente mexicano centrada en las consecuencias políticas del dislocamiento que ha causado en las estructuras sociales y en las instituciones políticas, el choque y la guerra sucia entre el autoritarismo y el radicalismo de los años sesenta y setenta, combinados con la resistencia a los rápidos cambios económicos y sociales impuestos a la sociedad mexicana a partir de los años ochenta. El golfo que hoy separa a las clases, grupos y regiones, se ha ensanchado al punto de someter ya a una tensión muy peligrosa los amarres sociales. México vive una crisis de fin de régimen donde han surgido nuevos actores pero, a la vez, nadie está en control del complejo y contradictorio proceso de cambio. Bien empleada, esta situación tiene la posibilidad de empujarnos a una salida positiva —a la transición democrática—, pero también, puede hacernos desembocar en una solución catastrófica, producto del choque entre los intereses creados —los internos y los externos, los viejos y los nuevos— y la organización y resistencia, a veces violenta, de los afectados.

Nadie puede pretender con éxito tener la verdad en el análisis y explicación de la dinámica de sistemas tan complejos y contradictorios como son las sociedades contemporáneas, especialmente las subdesarrolladas. Pero tampoco se puede intentar la neutralidad, pues es imposible. Todo intento de descripción y explicación de una coyuntura histórica como la mexicana, inevitablemente significa una toma de partido. El esfuerzo de Carlos Fazio por entregarnos una lectura de la complicada y peligrosa coyuntura mexicana de mediados de los años noventa, toma como punto de arranque al intenso año de

1994, aunque con algunas incursiones necesarias hacia el cuarto de siglo anterior. Su actor central es uno de los extremos de la resistencia a la injusticia provocada por el viejo autoritarismo y el nuevo reordenamiento neoliberal de la sociedad mexicana: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la nueva generación de insurgentes mexicanos.

En sistemas complejos como son los sociales, no opera el principio físico de que a toda acción corresponde una reacción en sentido inverso y de igual magnitud. No, una acción social masiva, como la insurgencia electoral de 1988, por ejemplo, puede finalmente desembocar en cambios relativamente secundarios dejando a las viejas estructuras casi intactas. En contraste, el empuje de un actor relativamente débil como el EZLN pero que presiona en un sitio estratégico y en un momento adecuado: el 1 de enero de 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, puede desencadenar reacciones de magnitud muy superiores a la que corresponde a su fuerza. En efecto, el levantamiento en armas de dos o tres mil indígenas en las lejanas cañadas chiapanecas, se desarrolló de tal manera que golpeó uno de los talones de Aquiles del sistema autoritario mexicano —el de la legitimidad— en un momento de gran vulnerabilidad —cuando el gobierno mexicano pretendía ser tomado como ejemplo de modernización exitosa por los países centrales. La reacción desatada resultó de una magnitud tal, que a casi tres años del hecho, la onda expansiva del estallido inicial sigue haciendo mover y chocar las piezas del inestable tablero político mexicano.

El análisis y las conclusiones sobre la coyuntura política mexicana contenidas en *El tercer vínculo* son polémicas, pero el tema que esta obra pone sobre el tapete de la discusión es importante en extremo y no debe ser ignorado so pena de pagar un precio muy alto. Es evidente que como reacción al surgimiento del EZLN primero y del Ejército Popular Revolucionario (EPR) después, y también como reacción a la impotencia y corrupción de la policía y del aparato civil ante las actividades del narcotráfico y del crimen organizado, el ejército mexicano se ha convertido en un actor político central. En efecto, el ejército ha transitado en unos cuantos años de las márgenes del sistema de poder —en donde había sido cómodamente colocado al concluir la segunda guerra mundial—, al centro mismo del escenario político. En realidad, hoy hay momentos en que se tiene la impresión de que el régimen desgastado y bajo asedio, se apoya más en los militares que en el partido de Estado. Ésa era la situación en el origen del sistema, allá en los años veinte y treinta; el gran logro político de la posrevolución fue desplazar, poco a poco, al poder militar de los centros de decisión. Medio siglo más tarde, el proceso político parece estar recorriendo el mismo camino pero en contrasentido, y las consecuencias de ello pueden ser desastrosas.

Los generales y jefes que hoy controlan al ejército mexicano fueron socializados en una cultura política muy alejada del militarismo. Las bases de esa educación eran la fuerza de un sistema político de bases civiles masivas y la inexistencia de otro ejército profesional al cuál confrontar: en el norte el poder militar era fuerte en exceso y en el del sur débil también en exceso. La dura experiencia propia —el golpe militar de 1913 desembocó en una cruenta guerra civil y en la destrucción misma del ejército que lo dio— y la serie de experiencias negativas de que está llena la historia del militarismo latinoamericano de este siglo, permiten suponer que los dirigentes de las fuerzas armadas mexicanas no serán fácilmente convencidos de abandonar su actual posición institucional para adentrarse en los peligros que entraña asumir directamente el poder en un momento en que el problema social se agudiza y la democracia es la única forma con legitimidad política en América Latina.

Es preocupante ver la cercanía de los mandos militares mexicanos con sus contrapartes en Estados Unidos, pero debe insistirse ante los responsables políticos en Washington que no está en su interés de largo plazo alentar la transformación del papel político del ejército mexicano. La prioridad norteamericana en México en el siglo XX es la estabilidad política, y ningún gobierno dirigido o apoyado en las bayonetas puede ser el garante de la estabilidad de largo plazo, sino todo lo contrario. Así lo consideró el presidente Woodrow Wilson cuando en 1913 le retiró su apoyo al general

Victoriano Huerta, y eso es más cierto hoy, cuando sin el pretexto de la guerra fría, simplemente ningún gobierno militar puede pretender que se le reconozca legitimidad a una dominación basada directamente en la fuerza.

Un examen inteligente, frío y realista del proceso político mexicano, debería llevar a la izquierda, a la derecha y al centro, a los actores nacionales y extranjeros, a la conclusión de que la única salida viable a la crisis histórica del régimen autoritario posrevolucionario, es su transformación en un sistema plural y democrático. Desde esa posición y con los instrumentos propios de la democracia, se debe y puede atacar el problema histórico de fondo: el creciente problema social. Ninguna modernidad es posible en México si no se le incorpora activamente a la mitad de la población que, hoy, está marginada. Ésa es la vía para desarmar definitivamente a la nueva ola guerrillera, y ésa es la vía para incorporar al esfuerzo nacional, la energía social actualmente desperdiciada de tres o cuatro millones de familias mexicanas que hoy no son parte del futuro en un sentido positivo.

Carlos Fazio ha cumplido con su papel de escritor: presentarnos lo que es en función de lo que puede ser, y ahora le toca al lector, al ciudadano, asumir su papel como parte activa en la discusión y la acción para construir un futuro colectivo que enfrente los problemas que se han arrastrado por mucho tiempo sin llegar a resolverlos: el indígena, el de la marginalidad y el de la democracia. Aún es tiempo de evitar un nuevo ciclo histórico que arranque con una solución catastrófica.

Lorenzo Meyer

INTRODUCCIÓN AL CAOS

El país real le estalló en la cara al presidente Carlos Salinas, con sus "mitos geniales" y el sueño de un México primermundista. En la primera media hora de 1994, la rebelión indígena en Chiapas opacó la coronación del salinismo en el arranque mismo del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA, por sus siglas en inglés).

El espectacular levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) abría un nuevo periodo de lucha armada en México y, al igual que la ofensiva TET de 1968 —que pese a haber significado una derrota militar para el Vietcong cambió el curso de la historia en la guerra de Indochina—, parecía encaminado a sacudir de manera decisiva las estructuras de las zonas más atrasadas del país.

A la incredulidad de la primera semana —"México no es Centroamérica"/ "No puede haber guerrillas en el país"— siguió un abanico de hipótesis: el levantamiento era producto de maquiavélicas jugadas al interior del sistema enfrascado en la sucesión presidencial; era una acción oficial de desestabilización contra la izquierda cardenista, a la que se le atribuían posibilidades de acceder a Los Pinos en los comicios de agosto venidero; sin descontar un intento de golpe de gracia contra el obispo Samuel Ruiz, a cargo de la diócesis chiapaneca de San Cristóbal, cuyo pedido de remoción ante el Vaticano había sido coauspiciado por el nuncio apostólico Girolamo Prigione y por la Secretaría de Gobernación desde un año antes.

Tras la caracterización inicial del *enemigo*, los sucesivos reportes de la Secretaría de Defensa fueron aceptando que el EZLN contaba con una vasta estructura militar y logística en cinco regiones de Chiapas, la cual incluía bases de operaciones, células políticas, campos de entrenamiento, cuarteles móviles, refugios en la selva y la montaña, armas modernas de alto poder, sofisticados equipos de comunicación y 172 estaciones de radio.

Si en un inicio tanto el entonces candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio como el presidente Salinas aceptaron como causales del estallido los rezagos históricos y los altos niveles de subdesarrollo en la zona, la lógica autoritaria condujo a una respuesta militar que por la vía de los hechos dejó sin efecto la autocrítica verbal. El guión respondía a los parámetros conceptuales de la guerra contrainsurgente según la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, remozada por los estrategias del Pentágono bajo la denominación de "guerra de baja intensidad", que desde el arranque pretendió anular cualquier explicación endógena sobre el brote de violencia indígena.

Pero la realidad se mostraba más compleja y menos maniquea que la que exhibían los cultores del México moderno y su dogmatismo *economicida*, como lo llamó Julio Bracho. La actualidad de la insurgencia zapatista estaba estrechamente ligada al fenómeno de la exclusión social producto de la reconversión capitalista a escala planetaria, y más que expresar los remezones anacrónicos de un pasado que se resistía a morir, significaba quizá el anuncio de convulsiones que podrían asociarse con la expansión explosiva de la pobreza que acompañó a partir de los años ochenta las estrategias dominantes de inserción en el mercado mundial, dictadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El alzamiento zapatista puso en entredicho el núcleo del neoliberalismo: exhibía la exclusión social generada por un modelo que produce una acelerada concentración económica y de poder, en beneficio de los centros financieros internacionales y sus intermediarios vernáculos. Fue contra ese sistema que se levantaron los indios chiapanecos al grito de "¡Ya basta!" y por una sociedad "en la que todos quepamos".

En círculos intelectuales y de prensa del priísmo, se especuló con que el levantamiento era fruto de un ajuste de cuentas al interior del sistema donde el principal perdedor era Salinas. Una conjura contra el mandatario de parte de sus compañeros de partido, por él perjudicados. En ese complot habrían participado Colosio, Camacho y algunos ex presidentes de la República en una alianza que, según esa teoría, había terminado de echar por tierra al recalentado proyecto transexenal de Salinas.

Así, como lo sugerían los cultores rumorosos de las leyes no escritas del sistema, la cúpula del

PRI le había pasado la factura a Salinas por intentar transgredir la regla número uno del arcaico presidencialismo local: la no reelección. De resultas que el *operativo chiapaneco*, con su estela de indios muertos y aldeas bombardeadas, no era más que un truculento invento de una de las parcelas del poder... para destronar a Salinas, lo que suponía, además, que detrás de los "zapatistas" había mano negra y que los coches-bomba que por esos días llenaron de pavor a los capitalinos respondían, según debía inferirse, a los dedos aviesos del dos veces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, dado de baja por el salinismo.

Pero en el décimo día de la explosión indígena que exhibió ante el mundo las contradicciones de un país subdesarrollado, que de manera anticipada había celebrado con bombos y platillos su ingreso al club de los ricos de la mano del NAFTA, los alzados obtuvieron su primera gran victoria política: voltearon al secretario de Gobernación, Patrocinio González, y forzaron al gobierno a negociar. Un Salinas nervioso y de rostro endurecido admitió ante las cámaras de televisión que "las decisiones políticas" adoptadas ese día (10 de enero) "son un reconocimiento de lo que no funcionó".

Salinas hizo enroques en el gabinete. Removió a su primo político Patrocinio González y en su lugar puso a Jorge Carpizo, hasta entonces Procurador General de la República, y al ex candidato perdedor en la sucesión presidencial, Manuel Camacho —designado canciller apenas cuarenta y tres días antes a raíz de las turbulencias por él provocadas tras el destape de Colosio como el ungido del PRI—, lo colocó al frente de una Comisión de Paz y Reconciliación para Chiapas, lo que fue visto como una derrota del ala más intransigente del gobierno que desde un inicio se inclinaba por la solución militar.

La reaparición del ala negociadora y dialoguista que encarnaba Camacho —posturas que le costaron la puja por la candidatura presidencial, ante la desconfianza del cerrado círculo salinista y de los *dinosaurios*, partidarios acérrimos del *statu quo*—, pareció abrir el camino hacia un arreglo negociado en Chiapas y a la recomposición de fuerzas al interior del partido de Estado.

Paradójicamente, la salida del entorno salinista de los partidarios de la guerra sucia, Patrocinio González y el hasta entonces superministro y virtual vicepresidente de la República, Joseph-Marie Córdoba —coordinador del gabinete y quien concentró en sus manos la responsabilidad del aparato de seguridad nacional—, fue adoptada frente a los amagos de un crack en la Bolsa de Valores y al calor del estallido de dos coches-bomba en la ciudad de México (reivindicado por un grupo ajeno al zapatismo) y de los atentados contra sendas torres de electricidad en Michoacán y Puebla, que generaron una psicosis de terror en el Distrito Federal.

De los cambios ministeriales se desprendieron dos datos importantes: por un lado, el gobierno reconoció de hecho la beligerancia del EZLN y envió a un negociador acreditado ante las fuerzas de izquierda —Camacho—, mientras intentaba ganar tiempo y ensayar respuestas antes de que el país entero terminara por desestabilizarse. En segundo lugar, al sacar de Gobernación al represor de los indígenas chiapanecos (Patrocinio González) y nombrar en su lugar a un abogado constitucionalista (Carpizo), se estaba enviando a los zapatistas la señal de que existía voluntad política para una negociación, encauzándose los acontecimientos conforme a derecho.

Los cambios ministeriales coincidieron con un descenso de la actividad militar. En ese marco, el EZLN dio a conocer sus condiciones para dialogar: reconocimiento oficial como fuerza beligerante, cese al fuego bilateral y simultáneo, retiro de las tropas federales de Chiapas (que debían regresar a sus cuarteles con pleno respeto a los derechos humanos), y cese de los ametrallamientos a poblaciones rurales. Cumplido eso y una vez nombrada una comisión nacional de intermediación, el EZLN se comprometía a acatar lo acordado si el gobierno hacía lo propio.

El EZLN reivindicó su componente indígena (sus combatientes pertenecían a las etnias tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal y otras); negó todo vínculo con las guerrillas del FMLN salvadoreño y de la URNG guatemalteca y toda relación con autoridad religiosa alguna, y afirmó que su armamento y equipo habían sido adquiridos durante diez años de acumulación clandestina de fuerzas.

Para los expertos, el gobierno combinaba la oferta de una amnistía, que en los hechos suponía la rendición incondicional del EZLN, con el propósito de ganar tiempo y aislar a los insurgentes

mediante un trabajo de inteligencia militar contrarreloj que buscaba aniquilar con un solo golpe, certero y espectacular, a la dirección clandestina del movimiento.

El EZLN, por su parte, daba muestras de querer iniciar negociaciones, pero mantenía sus banderas y demandas e insistía en que se le reconociera como fuerza beligerante. Su proyección pública había sido manejada con notable habilidad, en parte por el humor irónico y punzante del subcomandante Marcos, líder militar popularizado por su pasamontañas negro, su humeante pipa y su nariz grande.

Sin embargo, la pregunta que flotaba en el aire era si realmente el gobierno estaba dispuesto a dialogar. Había la impresión de que, mientras por un lado el discurso oficial daba la idea de una voluntad política, por el otro se preparaba para la salida de fuerza, con algunos ajustes de método. El esquema gubernamental, salvo matices introducidos por el comisionado Camacho, siguió basándose en que los "transgresores" eran un grupo de indígenas anacrónicos engañados por una dirigencia inescrupulosa, de origen extranjero, cuyo objetivo era dañar la imagen del país. Desde la lógica del poder, los pueblos indios no tenían —ni tienen— por qué rebelarse, ya que su naturaleza es la de callar y obedecer. Es más, ni siquiera alcanzan el rango de ciudadanos, ya que virtualmente siempre han sido "propiedad del sistema", por todo lo cual debían estar más que complacidos por recibir las dádivas asistencialistas del Programa Solidaridad.

El 21 de enero Marcos formuló 51 preguntas. Fue un texto que al menos sirvió para martillar algunas conciencias, avergonzadas por el secular agravio hacia los indígenas de Chiapas. El destinatario formal era Carlos Salinas, pero los destinatarios reales fueron todos los mexicanos. Se trató de uno de los documentos guerrilleros menos militaristas de que se tenga memoria, pero a la vez revelador de la situación imperante en Chiapas, con un cuestionamiento de tipo moral y político.

En medio de especulaciones acerca de que Camacho tenía los días contados, y que había sido utilizado por Salinas sólo para ganar tiempo, los caminos para llegar a la mesa de negociación con el EZLN parecían angostarse. Los tiempos de Chiapas incidieron, también, en los tiempos electorales. La prensa no descartó que a partir de una negociación exitosa en Chiapas, Camacho todavía estuviera en condiciones de desplazar a Colosio como candidato. Pero el comisionado tuvo que aclarar que no estaba involucrado en la carrera presidencial. La orden, se dijo, se la dio Salinas.

Analistas estimaron que la función de Camacho no fue otra que la de doblegar al EZLN en la mesa de negociación, mientras se intentaba corromper a la guerrilla aislándola de las comunidades, para así desarticular y exterminar al movimiento. Ello, combinado en el terreno con la presión psicológica constante sobre la población civil, atemorizada por la presencia militar y los sobrevuelos —pese a la tregua— de helicópteros y aviones que buscaban condicionar a los habitantes al reflejo-*preludio* de eventuales bombardeos; en medio de rumores sobre nuevos ataques zapatistas y la permanencia de puestos de revisión castrense que violaban el derecho constitucional al libre tránsito, y cuyo propósito era cortar cualquier posible suministro de víveres y medicinas a los insurgentes.

Dijo Carlos Fuentes: "Estoy en contra de la violencia, pero es indudable que los tiros del Ejército Zapatista, hasta los que se dispararon con fusiles de madera, se oyeron en todo el país, dieron en el blanco y han transformado a México. Nos han obligado a todos (...) a entender que hay un problema político básico en el país, que es una democracia funcional creíble."

Finalmente, el sábado 5 de febrero se inició el diálogo entre Camacho y el EZLN, con la mediación del obispo Samuel Ruiz. Pero el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) estaba disgustado. Un día antes, en un comunicado, rechazó la alusión hecha por el gobierno que habló del zapatismo *como fuerza política en formación*.

"No, no nos satisface", dijo el CCRI, "el EZLN no está mendigando su reconocimiento por parte del gobierno. El EZLN es una realidad política y militar a nivel regional, nacional e internacional".

En otro mensaje, el subcomandante Marcos dijo que "lo del reconocimiento al EZLN como

fuerza política en formación debe ser una broma de *monsieur Córdoba*", en alusión al jefe del gabinete salinista, hijo de padres españoles nacido en Francia y naturalizado mexicano, quien por entonces llevaba las riendas de la seguridad nacional.

¿Qué significa? ¿Que la miseria indígena no existe sino que está *en formación*? ¿Que no existió un 1 de enero de 1994 sino que está *en formación*? ¿Que no hay miles de indígenas alzados en armas (1 500 dicen los ingenuos del Pentágono) sino que está *en formación*? ¿Por qué esa reiteración a negar una realidad? ¿Todavía creen engañar a la sociedad o se tranquilizan a sí mismos con esa negación *en formación*? ¿Qué van a hacer? ¿Repetir un millón de veces el EZLN no existe, *está en formación*?

[...] ¿Ésta es la democracia que nos proponen a cambio de deponer las armas? ¿La democracia en la que el gobierno federal es juez y parte del proceso electoral? ¿Por qué el gobierno retira de la agenda del diálogo el punto referente a la política nacional? ¿Los indígenas chiapanecos son *mexicanos* para explotarlos y no pueden ni opinar cuando se trata de la política nacional? ¿El país quiere el petróleo chiapaneco, la energía eléctrica chiapaneca, las materias primas chiapanecas, la fuerza de trabajo chiapaneca, en fin, la sangre chiapaneca, pero no quiere la opinión de los indígenas chiapanecos sobre la marcha del país? ¿Qué categoría de ciudadanos tienen los indígenas chiapanecos? ¿La de ciudadanos *en formación*? ¿Para el gobierno federal los indígenas siguen siendo niños chiquitos, es decir *adultos en formación*? ¿Hasta cuándo van a entender? ¿Cuánta sangre más se necesita para que entiendan que queremos respeto y no limosna? Todo intento de hablar parece inútil, el gobierno federal quiere hablar consigo mismo. ¿Por qué nadie hace el favor de decirle al gobierno federal que lo que pide no es diálogo sino monólogo? ¿O es el monólogo un *diálogo en formación*?

Quieren mostrarnos como intransigentes ante la opinión pública poniendo más y más trabas al inicio de un diálogo respetuoso. Están sentando las bases para pasarnos *de fuerza política en formación a fuerza político-militar en proceso de aniquilación*. No les basta el cerco militar que nos imponen. Inician ahora el cerco político e ideológico. ¿Lo va a permitir la sociedad civil mexicana?

Para el EZLN estaba claro que precisaba de la sociedad civil. La insurgencia chiapaneca "está completa y en su cancha", dijo Marcos, no obstante se veía a la lucha armada como parte de un proceso más amplio. El zapatismo intuía que la puerta del diálogo ya estaba abierta, desde que el gobierno pareció comprender que era imposible aniquilar a la guerrilla. Pero se temía una trampa. En verdad, el EZLN no estaba preparado para el diálogo. Se habían preparado, sí, pero para un largo proceso de guerra de desgaste, de choques militares, de disputa política por los poblados, de lucha ideológica, donde finalmente el ejército federal los cercaría y los arrojaría a las montañas. Tenían preparada su defensa con minas y explosivos. Pero para entonces los cálculos iniciales habían cambiado: la sociedad civil había provocado el cese al fuego. Según Marcos, "ella tuvo un papel protagonice junto con la poca prensa honesta que hay en el país".

La negociación, por otra parte, también conllevaba riesgos. El gobierno buscaba aislar políticamente al EZLN, presentarlo como intransigente para que la sociedad civil dejara solo al movimiento, en medio de un conflicto bélico latente que incluía la *acción cívica* del ejército federal en las comunidades rurales como antes en Vietnam, Guatemala y El Salvador.

El EZLN no planeaba desarmarse: "En el primer punto del diálogo están nuestras condiciones de vida", dijo Marcos, para quien las armas eran su defensa y una garantía de sobrevivencia. "Ahorita las armas no pueden actuar políticamente a la ofensiva. Pero materialmente son capaces de actuar a la defensiva. Estamos en nuestro terreno. Para sacarnos tienen que venir por nosotros", agregó.

Los zapatistas también buscarían negociar el desarme de los caciques y sus paramilitares *guardias blancas*, entrenadas por el ejército y que actuaban al servicio de los terratenientes. El verdadero poder en Chiapas, al margen de soldados y policías.

Otro punto era el referido a la democracia. De nada servía cambiar las hojas de los árboles si las raíces estaban podridas. "Lo que nosotros decimos es: levantemos la raíz y volvamos a sembrarlo (...) Hagamos un trato, un espacio democrático, y el que convenza a la gente, ése que gane (...) No es paz con democracia; es paz con dignidad o guerra con dignidad (...)."

El día en que el subcomandante Marcos regresó a San Cristóbal, era domingo. Nadie sabía quién era el hombre más mencionado de México, uno de los pocos ladinos que habían tomado parte en el alzamiento. Sus características: un pasamontañas con nariz pronunciada, sangre fría y buen humor. Tal vez, hasta un buen estratega militar que se movía rodeado de otras sombras pequeñitas y encapuchadas, sangre maya de herencia rebelde: los descendientes de Juan López, el hombre invencible que vino del cielo, mito viviente de la Lacandona y Los Altos.

Los zapatistas se adiestraron diez años para la guerra, y la guerra duró diez días. Pero no estaban preparados para negociar, aunque en casi dos meses de existencia pública habían logrado a su favor el apoyo de un sector importante de la sociedad, que veía más que justificada la guerra indígena contra el "superior gobierno y los federales", al tiempo que se valoraba la disposición de la guerrilla al diálogo, la reivindicación de las distintas formas de lucha desde una perspectiva no dogmática ni verticalista, el desdén del EZLN por el vanguardismo; todo lo cual concitó el respaldo de diversas organizaciones sociales, particularmente campesinas, pero también obreras y estudiantiles, además de la solidaridad internacional de parte de intelectuales y organismos no gubernamentales de Europa y América.

El 21 de febrero los hombres pequeños penetraron en forma solemne en la catedral barroca. Desde los altares, la mirada de San Cristóbal Mártir, padre de los indios, lo abarcaba todo. Y el anfitrión, Samuel Ruiz —tan denostado por el jacobinismo priísta— hizo uso de la palabra, rodeado por el comisionado Camacho y una veintena de encapuchados. Calificó de histórico el momento, enfundado en una chamarra de beisbolista, tal vez para significar que estaba allí como mediador, más que como pastor.

"El diálogo se ha iniciado", dijo don Samuel, y Marcos se inclinó sobre el oído de la comandante Ramona, con su huípil rojo cargado de signos que hablan de centenarias batallas, según la usanza tzotzil. Ésta asintió, acariciando un envoltorio sobre sus diminutos muslos cubiertos de negras lanas. A través de sus gafas, Camacho miraba de reojo. Cuando el obispo le dio la palabra a los zapatistas, Ramona colocó el paquete sobre la mesa. Marcos lo desdobló y, tomándolo de los extremos, lo desplegó y se puso de pie, desapareciendo él mismo detrás de la bandera de México. Tras la sorpresa inicial, Camacho reaccionó y de un salto se pescó literalmente a la franja roja del lábaro patrio.

"Por mi boca habla el Comité Clandestino Revolucionario Indígena para informar al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo", Marcos comenzó diciendo. Explicó que no estaban allí para pedir perdón, ni estaban arrepentidos de luchar por sus derechos pero que veían que tal vez era un buen momento para que "en lugar de que hablara el fuego del fusil, hablara la palabra del corazón de los hombres verdaderos, que forman nuestro ejército".

A su turno, Camacho logró articular: "Hace unos minutos ustedes fueron testigos de un hecho muy importante: estamos todos sentados bajo la única bandera que tenemos los aquí presentes y también nos pusimos de pie ante esta bandera nacional que nos unifica. Este diálogo se está dando en territorio nacional.

El EZLN es una organización de chiapanecos, mexicanos, predominantemente indígenas (...) El punto clave de las negociaciones es que estamos pasando de la fuerza a la política. Se está pasando de las armas al diálogo. Están hablando las palabras, y no las armas."

Empero, el diálogo entre gobierno y zapatistas se empantanó poco después. Los primeros cuatro días de conversaciones transcurrieron en forma fluida, con la mitad del pliego petitorio del EZLN referido a cuestiones sociales, aparentemente aceptado por el gobierno. Pero el resto de las demandas arrinconaba a Salinas, ya que se referían a la transición democrática y a la exigencia indígena de que el presidente renunciara (uno de los puntos básicos de la I Declaración de la selva Lacandona) o, en su defecto, de la entrega del poder electoral a la sociedad civil para que no siguiera imperando el fraude.

El recordatorio de esa exigencia volvía a poner sobre el tapete el hecho de que el conflicto en Chiapas no estaba resuelto, pese a la tregua unilateral decretada por ambos bandos. Camacho había dicho al EZLN que gente armada, encapuchada, sin nombre y sin rostro, no tenía derecho a

decirle al país cómo tenía que hacer su democracia, y que además no era posible que el gobierno negociara como rehén de un grupo armado.

En un estado de derecho, Camacho habría tenido razón. Pero éste no era el caso.

La estrategia oficial fue la de tratar de encasillar al diálogo en los "problemas locales" dejando fuera los "problemas nacionales", es decir, aquellos que tenían que ver con la democracia y con las reformas al artículo 27 constitucional, que sancionaron el fin del reparto agrario en beneficio de las agroindustrias y las transnacionales estadounidenses en el marco del NAFTA. Pero en un régimen como el mexicano, férreamente centralizado, era un contrasentido pretender que existían "problemas locales", más aún en un estado como Chiapas, donde hasta el propio gobierno había sido designado desde Los Pinos.

El EZLN siguió presionando por sus demandas y exigió fechas y plazos de cumplimiento, sin dejar las armas y queriendo garantías del gobierno de que los cambios tendrían validez. El proceso se endureció y Marcos habló de diálogo, no de negociación ya que, dijo, entre ambos términos existe una diferencia sustancial: "Al EZLN no le preocupan tanto los acuerdos de esta primera ronda del diálogo, porque sabemos que no los habrá."

La negociación estaba estancada y según observadores, lo que pretendía el gobierno era que las ONG se cansaran y se fueran de San Cristóbal, perdiendo el EZLN la parte más neutral del triple collar de seguridad que rodeaba el recinto de la catedral. También, que la prensa perdiera interés por el conflicto, quedando los indígenas desprotegidos y aislados. El mismo Marcos había dado muestras de cansancio: "Estamos hasta la madre", dijo.

No obstante, con su pasamontaña, sus cananas cruzadas en el pecho a lo Pancho Villa y su aparente mansedumbre de filósofo, seguía marcando los ritmos sin dejar de reírse de sí mismo y *del otro*, el mexicano promedio con su capucha de todos los días y su conformismo a cuestas.

El 2 de marzo, luego de ocho días de conversaciones, Camacho y el EZLN dieron por concluida la primera fase del diálogo. El borrador del documento, que debía ser consultado por las partes, contenía 34 compromisos y el esbozo de un acuerdo final de paz.

El punto más controvertido fue el de la tenencia de la tierra. Se acordó que el gobierno tendría seis meses de plazo para pronunciarse sobre el tema, y también se habló de un nuevo censo agrario en Chiapas a fin de "detectar" latifundios simulados y/o prestanombres. Sobre el estatuto de autonomía indígena, habría un plazo de 90 días para que el Ejecutivo convocara a un periodo de sesiones en el Congreso, con vistas a aprobar una nueva Ley de Comunidades Indígenas.

¿Qué había pasado en la catedral de San Cristóbal? La guerra, como dijo Carlos Montemayor, ese gran conocedor de los indios, ¿estaba en el limbo, detenida, pendiente de consultas? ¿Y la paz? Al parecer, era aún un espejismo. El EZLN pidió en el diálogo cambios estructurales y el delegado del gobierno se limitó a tomar nota de los pedidos, sin abrazos finales. Ni siquiera un cortés apretón de manos que no le quitaría lo valiente.

Sin embargo, no había que subestimar lo logrado, ya que el proyecto de acuerdo entre el EZLN y el gobierno federal, dado a conocer del 2 de marzo de 1994 en San Cristóbal con el título "Compromisos por una paz digna en Chiapas" era, aunque parcial y ambigua, una primera respuesta política del salinismo.

De hecho ese papel de compromisos resultó un documento histórico, con impacto local e internacional, en el sentido de que varios miles de indígenas malamente armados habían obligado a un régimen autoritario a sentarse a la mesa de negociación y comprometerse a cambios sustanciales, con lo cual el gobierno de Carlos Salinas fue puesto en el banquillo de los acusados.

"La expectativa que tenemos es que la guerra quede conjurada por la presión de la sociedad civil. No creo que ello dependa de los resultados de las pláticas de San Cristóbal. Si la sociedad civil se cansa, se agota, se desinfla, se nos van a venir encima por la vía militar. El problema ya no somos nosotros, sino el país. Nuestro ciclo terminó", había dicho Marcos la víspera de su viaje hacia San Cristóbal previo al inicio del diálogo.

Once días después, un cansado jefe militar declaraba a la prensa que "si no se realiza la

transición que haga posible la democracia, no nos queda más que la guerra".

El asesinato de Colosio marcó un viraje en la historia política nacional. El magnicidio conmocionó a la sociedad mexicana y, como alguien gráfico, más bien parecía un disparo dirigido a la cabeza del país. Cada quien comenzó a fabricar su propio culpable en un desborde cuasi paranoico que entrañaba varios riesgos: una cacería de brujas en contra de la oposición política y de líderes de organizaciones sociales independientes; un recalentamiento del conflicto en Chiapas, o bien que el régimen cediera a su tentación autoritaria y el mandato salinista se prolongase por tiempo indefinido.

El hecho de que el atentado ocurriera en Tijuana, hizo a algunos establecer nexos con la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas, ocurrido el 23 de mayo de 1993 y cuya ejecución fue el preludeo de una violencia política de nuevo tipo en México. Ambos crímenes se asociaron a un posible ajuste de cuentas entre narcos, en tanto que de Tijuana habrían salido los presuntos matarifes del purpurado.

Dentro del vasto abanico de hipótesis, se dijo que el asesinato de Colosio podía ser una prolongación del alzamiento zapatista, aunque no necesariamente por una acción armada del EZLN —que a todas luces hubiera resultado desequilibrada— sino por sectores interesados en un desquiciamiento del Estado.

Por los días en que Colosio fue muerto, también fue secuestrado Alfredo Harp Helú, presidente de la principal institución bancaria de México; mientras un desconocido Movimiento de Solidaridad Iberoamericana empapelaba los muros de la capital pidiendo la cabeza del obispo Samuel Ruiz y de "sus compinches". Como recompensa se ofrecía "la paz nacional, la soberanía y unas Fuerzas Armadas íntegras".

Monseñor Posadas fue ametrallado en el interior de su automóvil Grand Marquis en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, a la sazón ciudad sede del poderoso cártel de la droga cuyos principales jefes estaban en prisión a raíz del asesinato del ex agente de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena, en 1985.

Al inicio, las autoridades recurrieron a dos versiones para explicar el atentado. La primera sostenía que Posadas había sido víctima del fuego cruzado entre dos bandas de narcos: la de los hermanos Arellano Félix (cártel de Tijuana) y la de Joaquín *El Chapo* Guzmán (Sinaloa). Empero, luego de que el médico legista Mario Rivas aseguró que los disparos fueron hechos de manera "directísima" (a un metro y medio de distancia), se dijo que el cardenal había sido "confundido" con el capo Guzmán, lo que fue calificado de inverosímil por la misma Iglesia católica.

Otras hipótesis hablaron de un "aviso" dirigido a frenar la cruzada contra el narcotráfico, lanzada por el entonces procurador Carpizo; o bien de un crimen político en el marco de una campaña antimexicana en Estados Unidos (los diarios *The New York Times* y *Los Angeles Times* publicaron sendos reportajes en primera plana sobre el narcotráfico en México) en vísperas del viaje del presidente Salinas a Boston y Nueva York. Así, el homicidio estaría dirigido a desestabilizar al país creando un clima de inseguridad y desconfianza en un año político clave —cuando el presidente elige a su sucesor— y en momentos en que las negociaciones en torno al NAFTA atravesaban la fase más dura de los convenios paralelos.

El gobierno, a su vez, negaba una y otra hipótesis mientras la cúpula católica pedía una explicación creíble de la matanza. Cuando en agosto de 1995 —ya bajo gobierno de Ernesto Zedillo— la Procuraduría General de la República (PGR) dio por cerrado el caso con base en la teoría de la "confusión", el sucesor de Posadas en la arquidiócesis de Guadalajara, Juan Sandoval, insistió en que el virtual carpetazo era una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos autores intelectuales del crimen. Para la Iglesia católica hubo complicidad entre funcionarios de la PGR, judiciales federales y narcotraficantes. Incluso, un documento del episcopado llegó a afirmar que autoridades del ejército estaban "involucradas en el cultivo, tráfico y consumo de drogas" con lo que, en forma implícita, se aludía a su eventual participación en el asesinato.

El fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla contempló ocho posibles móviles en el crimen de Posadas,

entre ellos: un complot político por intrigas de poder; que el cardenal fue muerto por un sector indefinido y extremista, en represalia por los logros de la Iglesia católica durante el salinismo (la beatificación del padre Miguel Agustín Pro en septiembre de 1988, el nuevo régimen de las relaciones Iglesia-Estado en vigor desde el 28 de enero de 1992, la expedición de la Ley Reglamentaria de las disposiciones constitucionales a ese respecto, consagradas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público el 13 de julio de ese año y la beatificación de los mártires de la guerra cristera), o bien que fue victimado por grupos de poder interesados en desestabilizar a México. Los otros móviles vinculaban el hecho al narcotráfico.

Curiosamente, la única persona de la jerarquía católica que apoyó la teoría de la "confusión" fue el nuncio apostólico Girolamo Prigione. Éste estuvo en la escena del crimen puesto que fue a él a quien Posadas había ido a esperar al aeropuerto el día de su muerte. Menos clara quedó la participación de Prigione en sendas entrevistas por separado, en diciembre de 1993 y enero siguiente, con los presuntos homicidas de Posadas, los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. Los encuentros privados tuvieron lugar en la sede de la nunciatura apostólica y, según el propio Prigione, éste comunicó al presidente Salinas sobre dichas entrevistas las cuales, explicó, se enmarcaron en el "secreto de confesión". También fueron informados Patrocinio González y el procurador Carpizo.

Según admitió posteriormente Pablo Chapa, los tres ex funcionarios tuvieron conocimiento de que los Arellano estaban en la nunciatura, pero no ordenaron su detención. ¿Por qué y bajo qué circunstancias actuaron así Salinas, González y Carpizo? Esas y otras preguntas siguen sin respuesta.

Cuando finalmente Salinas designó a su sucesor, Luis Donald Colosio (43) hubo consenso entre los politólogos en que de los tres candidatos al trono, a saber, el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, el regente capitalino Manuel Camacho y el secretario de Desarrollo Social, Colosio, fue a este último a quien como nunca antes se le había fabricado una imagen.

El sonoreense, nacido en Magdalena de Kino, cerca de la frontera con Arizona, y graduado en la Universidad de Pennsylvania en planeación de economías urbanas, era definido como un joven político tecnócrata. Su carrera podía hablar de una larga deuda con Salinas, si bien su expediente era el único que registraba, además de puestos en el sector público, los de elección popular y la presidencia del PRI. Pese a sus méritos, Colosio, cuyo origen no estaba en la llamada "familia revolucionaria", era visto como una hechura de su amigo, maestro y protector, en el marco de lo que se definía como el proyecto transexenal de la nueva élite de poder y que, previa reforma de la Constitución podría llevar a Salinas de regreso al sillón presidencial en el 2000.

La dependencia de Colosio respecto de Salinas se vio coronada a inicios de 1992 con su ingreso al gabinete presidencial, como responsable de una novedosa supra secretaría: la de Desarrollo Social (Sedesol) encargada de aplicar el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), proyecto consentido del salinato.

Para sus críticos, Pronasol fue diseñado como aparato de control político-territorial y garantía de continuidad del proyecto, en tanto brazo social del esquema neoliberal rebautizado por Salinas como *liberalismo social*: el Estado dejaba de ser benefactor pero seguía siendo *solidario*. Y si bien pudo haber redituado beneficios a millones de mexicanos en extrema pobreza, no ocultó su carácter como instrumento de estrategia electoral. Se convirtió en un mecanismo que pretendió recorporativizar al sistema estableciendo nuevas alianzas entre la sociedad y el gobierno, a fin de asegurarle base social al PRI y clientela en las urnas.

Para algunos, en la decisión de Salinas de escoger a Colosio influyó el grupo del entorno presidencial formado por su padre, Raúl Salinas Lozano, su hermano Raúl, su jefe de gabinete Joseph-Marie Córdoba, los gobernadores Patricio Chirinos y Otto Granados, el secretario de Comercio Jaime Serra, su jefe de información, José Carreño Carlón y el ex titular de Educación, Ernesto Zedillo, nombrado luego por Colosio como coordinador de su campaña.

Según el politólogo Arnaldo Córdoba, de los tres aspirantes con posibilidades, Aspe, Camacho y Colosio, este último ganó no sólo porque aseguraba la continuidad del proyecto sino por haber logrado convencer a los sectores más retardatarios del PRI —pese a haber sido él quien encabezó el

frustrado proceso de reforma del partido— de que sería un presidente de *continuidad*, incluso en cuanto al *statu quo* político.

En un editorial, el *New York Times* calificó la designación de Colosio como "una broma cínica" para el anunciado proceso de democratización, en tanto se estaba asegurando el mismo programa neoliberal con maquillaje asistencialista.

Por otro lado, Colosio debía pasar la prueba democrática en tanto la élite salinista se había impuesto en Los Pinos sobre la base de una carencia esencial: la falta de legitimidad en los comicios. ¿Lograría Colosio superar el reto? El complot de Tijuana no le dio la oportunidad de demostrarlo.

El atentado paralizó al país. La primera hipótesis fue que se trató de un complot político resultado de la lucha de facciones en el seno de la familia revolucionaria entre *dinosaurios* y *modernizadores*, esto es, entre la vieja clase política del PRI, desplazada por los reformistas Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, y el grupo de tecnócratas que en 1982 tomó por asalto al país.

Fueron pocos lo que creyeron en la teoría del *asesino solitario*, según la cual el sicario confeso Mario Aburto era un fundamentalista desquiciado. Los más dijeron que se trataba de una rebelión intramuros, un motín contra el tradicional proceso de relevo presidencial. De allí que a la indignación por el atentado siguió la ebullición por saber quién sería el sucesor. La reaparición de algunas figuras de la vieja burocracia partidista alimentó la idea de que se estaba en presencia de una pugna entre modernizadores neoliberales y patrimonialistas premodernos, dispuestos a regresar por sus fueros.

En medio de la confusión salieron a luz facturas sin cobrar: historias que se remontaban a los años en que, tras el arribo de los muchachos de Harvard a Palacio Nacional, se procedió al reordenamiento del aparato burocrático. Corría el sexenio de Miguel de la Madrid. La tecnocracia *yuppie* golpeó el corazón de la vieja clase política y la despojó de privilegios. Salinas, secretario de Programación y Presupuesto de De la Madrid, fue el artífice de esos cambios.

La vieja clase se disciplinó pero no enterró las hachas. Ante el féretro de Colosio y en medio de la ira de la gente que clamaba justicia y pedía que rodaran cabezas, el ex presidente Luis Echeverría levantó el puño y con un grito hizo recordar su viejo lema de campaña: "Lo dije como presidente de México y lo digo ahora: ¡Arriba y adelante! ¡Siempre con la Revolución mexicana y con el PRI!" Ya había hecho la guardia de honor y, serio y adusto, abandonó el salón y encaró a la prensa. Habló del clima de inseguridad en el país. Se refirió al conflicto en Chiapas y afirmó que la revuelta de los zapatistas "es el saldo de la deuda que tenemos con los indígenas de México", la cual no será pagada "mientras no alcancemos una plena democracia política y económica".

Alguien interpretó el grito de Echeverría como un intento de los *dinosaurios* por paralizar la historia, y la reaparición del nombre de Gutiérrez Barrios entre los presuntos *tapados* abonó esa teoría. Era él uno de los políticos más experimentados del sistema. Ligado durante veinte años a los servicios de inteligencia, ex secretario de Gobernación en los primeros años del salinismo, con ascendencia sobre un sector del ejército y de la clase política, Gutiérrez fue cesado por Salinas dos años antes de la campaña electoral por pretender, supuestamente, auto-postularse al sillón presidencial.

Salinas decretó un día de luto nacional, lo que ocasionó el cierre forzoso de bancos, la Bolsa y casas de cambio. La comunidad financiera internacional observaba atenta. La administración Clinton salió en respaldo de la economía mexicana y en forma más que inusual, aprobó una línea de crédito por 6 000 millones de dólares para evitar el pánico. Por esos días también se anunció el ingreso de México a la convención de países capitalistas desarrollados, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mientras los rumores daban por cierto el relevo de Zedillo, otro guardián de la ortodoxia salinista.

La Casa Blanca filtró en la prensa que sería un "retroceso" que la vieja clase política retomara el mando y diera marcha atrás a la reforma económica. Los nombres de Fernando Ortiz Arana (entonces presidente del PRI) y de Gutiérrez Barrios, fueron mencionados con preocupación en Washington.

Alineado con el esquema monetarista, el ex secretario de la SPP, Ernesto Zedillo (42) se convirtió en

la mejor opción para asegurar el continuismo, no obstante que en el trámite sucesorio anterior y frente a Camacho, Aspe y Colosio, había sido descartado. Nunca ocupó un puesto de elección popular, pero él también era amigo del presidente y pertenecía a la élite tecnocrática. Su destape complació a los banqueros de Nueva York.

La violencia ya estaba instalada en México cuando mataron a Colosio. La cosecha de Lomas Taurinas se había sembrado durante el salinismo. Previo a ese crimen hubo 240 asesinatos políticos en el país desde el 2 de julio de 1988, en su mayoría de miembros o simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Pero tras el magnicidio de Lomas Taurinas se temió un desborde de violencia. El subcomandante Marcos dijo que "se están abriendo las puertas de la guerra civil, (el asesinato) es un ajuste de cuentas interno (...) una provocación fraguada y ejecutada por la línea dura" del gobierno. Marcos no descartó un auto atentado para recuperar prestigio o desviar la atención aun a costa de desatar fuerzas incontrolables, como tampoco la eventualidad de un *fujimorazo*, un autogolpe de Estado salinista con apoyo militar.

El CCRI declaró: "Es lamentable que la clase gobernante no pueda resolver sus pugnas internas sin ensangrentar al país. La línea dura y la opción militarista dentro del gobierno federal fraguó y llevó a término esta provocación para anular todo intento pacífico de democratización." Y Marcos preguntó: "¿Por qué tuvieron que atentar contra la vida del candidato del PRI? ¿Dónde estaban los que lo cuidaban? ¿Quién patrocina esa mano *pacifista* que abre de nuevo la gigantesca puerta de la guerra? ¿Quién sigue ahora?"

El primer informe del fiscal especial Miguel Montes trazó el perfil de una conspiración. Como muchos otros, también pensó en ello el intelectual Héctor Aguilar Camín: la conspiración magnicida se incubó en alguna fractura del PRI. Pero al decir del escritor italiano Leonardo Sciascia "nunca se sabrá ninguna verdad respecto a hechos delictivos que tengan relación, incluso mínimamente, con la gestión del poder..."

Las especulaciones apuntaron al más alto nivel, aunque sin posibilidad de pruebas: Carlos Salinas y Joseph-Marie Córdoba, involucrados repentinamente en una madeja de sórdidos intereses que incluyó al narcotráfico y a la nueva clase narcopolítica. Una guerra entre cárteles de la droga incrustados en el sistema, tal vez los mismos que habían asesinado a Posadas y luego a Ruiz Massieu, se dijo.

Para el senador Heberto Castillo

se duda que la conducta de Salinas en estos hechos sangrientos haya sido limpia [...] parece que pudo llevar adelante su plan. A Ernesto Zedillo lo impuso como coordinador de la campaña de Colosio en calidad de candidato suplente. Cuando vio que la campaña de Colosio no levantaba y que éste se tuvo que pronunciar por alternativas distintas a las del neoliberalismo, y comenzar a romper el cordón umbilical con el salinato —cuando habló de la necesidad de acabar con la dependencia gubernamental del PRI—, se presionó más y más para que Colosio renunciara. Está a los ojos de todos que Salinas estorbó la campaña de Colosio desde el inicio. Al principio, para mantener el control político; más tarde, para propiciar un cambio de candidato. Realizó un juego perverso con Manuel Camacho y la ambición de éste lo hizo perderse al no definir su situación, al titubear siempre en su ruptura con Salinas, la que intentó al conocer la designación unipersonal en favor de Colosio, pero que abandonó cuando le fue ofrecida la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Según el perredista, "Salinas siguió el juego perverso cuando irrumpió la rebelión de Chiapas del EZLN y le rompió la imagen exterior de gran gobernante. (...) La sombra de una gran traición entre priistas se extiende por la nación, y la negativa tácita de Salinas a entregar la investigación del caso Colosio a una comisión independiente ensombrece el panorama aún más".

Esa interpretación fue compartida por muchos mexicanos. Se argumentó, incluso, que ante la casi segura derrota del PRI en los comicios de agosto de 1994, el oficialismo necesitaba un mártir. Y, en los hechos, durante el acto de su nominación, Zedillo se apropió de la imagen del mártir Colosio. Lo que Jorge Castañeda llamó *el efecto Pedro Infante*: tratar de ganar para el PRI

un buen caudal de votos "sentimentales".

En el segundo aniversario del crimen, el padre de la víctima, don Luis Colosio Fernández, decidió poner fin a 731 días de prudencia. "No hay voluntad política para aclarar el asesinato", dijo en Magdalena de Kino. Agregó que la justicia no llegaba "porque los hombres del poder no la dejan llegar" y sugirió que el de su hijo fue un crimen de Estado con "un manto de impunidad tendido por aquellos que tienen la responsabilidad de resolver el caso y no lo han hecho".

No dio nombres. Pero su oración fúnebre fue casi un retrato hablado. Un día después, el periódico *El Imparcial* de Sonora, resumió en un titular: "Culpa don Luis a Córdoba." En una entrevista, el padre de Colosio agregó que "ojalá que cuando la investigación apunte a Córdoba, el presidente Ernesto Zedillo no se eche para atrás".

—¿Córdoba, don Luis? ¿José María Córdoba? ¿Usted cree que él pudo haber planeado el asesinato?

—Creo que él tuvo mucho que ver —respondió Colosio al reportero.

La bomba hizo reaparecer a Córdoba, virtual vicepresidente de México en la era Salinas: el 28 de marzo de 1996 negó estar involucrado en el crimen. Esa misma mañana había dirigido una carta al procurador Antonio Lozano en la que "le rogaba" citarlo a declarar en caso de que su testimonio pudiese ser útil. Pero el día 29, *Reforma* abrió su edición con un documento anónimo, supuestamente verdadero: "Asesinato de Colosio: ¿Un error de Estado?" El texto describía que la operación de Lomas Taurinas había sido decidida por Córdoba tras una escalada en los enfrentamientos entre Colosio y Salinas. Córdoba usó un cuerpo de élite del Estado Mayor Presidencial que había organizado para satisfacer sus necesidades políticas. Ese comando, que dependía directamente del número dos de Los Pinos, tenía orden de desplegarse en el mitin del candidato del PRI en una formación "diamante", para que aquel de sus miembros que lograra situarse más cerca de Colosio le disparara "sólo para herirlo" y, supuestamente, levantar así su decaída campaña política.

Pero la tesis del "error de Estado" —según la cual la intención no era matar a Colosio— no explicaba la perforación en la chamarra *Buyberry* color ostión del candidato, ni el tiro en el cráneo. El columnista Miguel Granados Chapa consideró el texto como un intento exculpatorio de Salinas, que pretendía convertir a Córdoba en un chivo expiatorio.

El perredista Porfirio Muñoz Ledo recordó que Sherlock Holmes concentraba sus pesquisas en las motivaciones: ¿Quién tuvo interés en cometer el crimen? ¿Quién resultó beneficiado? La última pregunta tiene respuesta: el primer efecto del crimen fue la decisión de Salinas de colocar a Zedillo en lugar de Colosio, aventuró.

Según el periodista Yuri Serbolov el crimen fue producto de un complot que involucraba a militares, políticos y civiles. "Fue un crimen planeado, en el cual participó —en la creación del clima— el ex presidente Salinas y su asesor estratégico Córdoba. Hubo implicados intereses del narcotráfico. Se utilizó a tres Aburtos, todos con un gran parecido físico... para *fabricar* al asesino material y *desaparecer* al asesino intelectual." ¿El móvil?: Según esto, impedir "que Colosio llegara a la presidencia, ya que había dejado de garantizar los intereses de los Salinas (Carlos, Raúl y el padre de ambos) y ponía en riesgo los intereses del narcotráfico".

Otra variante fue la manejada por Fausto Fernández Ponte, quien adjudicó a la Agencia Central de Inteligencia (CÍA) la hipótesis de que el crimen fue "una operación de contrainteligencia realizada por encargo por alguna organización mercenaria especializada en el exterminio, con perjuicio extremo de personas". Sobre la identidad del grupo mercenario dio tres posibles pistas: narcotraficantes, soldados de fortuna o "alguna organización clandestina de inteligencia y contrainteligencia de algún gobierno que bien pudiera ser el de Estados Unidos".

Según el columnista, "en la CÍA se especula que la yuxtaposición de coartadas y presuntos asesinos significa que la operación fue muy compleja. Y esa complejidad sólo se explica en una planificación cuidadosa, detallada y, sobre todo, de mucho tiempo. Una planificación de esa naturaleza es resultado de amplia experiencia en ese tipo de operaciones de contrainteligencia.

Ante eso, en la CÍA se piensa, no sin certidumbre, que el asesinato de Colosio fue cometido por una organización con experiencia, formada por profesionales altamente entrenados, que un presidente de la República no puede contratar, pero sus allegados de mayor confianza sí". ("Colosio y la CÍA", *El Financiero*, 21/111/96.)

Un día después, Fernández Ponte insistió que desde la perspectiva de Langley —nombre de la localidad en Virginia donde se ubican las instalaciones principales de la CÍA—, la operación fue altamente profesional porque no dejó indicios de los móviles ni pistas que identifiquen o impliquen a los autores intelectuales o materiales verdaderos. "Esa impecabilidad en la realización de la operación contra Colosio es la huella dactilar más clara (...) que pudiera conducir a la identidad de los autores materiales verdaderos siempre y cuando así lo quisiera el gobierno de México." Por otra parte, las reiteradas retractaciones de los inculpados Aburto y (Othón) Cortés, contribuyeron "deliberadamente (...) a enredar la madeja del caso y a rodearla de cortinas de humo y espejos negros, con lo cual se oculta (...) principalmente la autoría intelectual. Muchos en Langley sospechan que el papel verdadero de Aburto y Cortés en este sangriento rompecabezas es precisamente el de la distracción, en una dialéctica de pistas falsas". (*El Financiero*, 22/111/96.)

La liberación de Othón Cortés el 7 de agosto de 1996, acusado de disparar el segundo tiro en el abdomen de Colosio, pareció confirmar la teoría de que su captura y posterior enjuiciamiento fue parte de una distracción. Pero con su puesta en libertad se perdió el eslabón para explicar la presunta conspiración desde Los Pinos en la que engazaría el general Domiro García, jefe del Estado Mayor Presidencial y jefe de seguridad de la campaña de Colosio. Por encima de García Reyes sólo estaban el general Arturo Cardona, Joseph-Marie Córdoba y Carlos Salinas.

Luis Garrido interpretó que la exoneración de Cortés fue una nueva fase de "la operación de encubrimiento tendiente a distraer la atención de los mexicanos, además de un ardid más para establecer la supuesta inocencia de Salinas. De ahí la campaña en los medios, que insiste que si Othón es inocente también lo son el Estado Mayor y el propio Salinas". (*La Jornada*, 9/VIII/96.)

Para el ex agente de la PGR Eduardo Valle *El Búho*, refugiado en Estados Unidos, quien a fines de agosto de 1996 reveló nuevas imágenes del video sobre el crimen, no había duda: "Salinas mandó matar a Colosio. Un grupo de la Presidencia, que tenía autoridad sobre coroneles, mayores y capitanes, y que rebasó a Domiro García por arriba y por abajo, planeó y ejecutó el asesinato de Colosio y después borró, ocultó huellas y seguramente ha actuado contra testigos molestos." (*Reforma*. 28/VIII/96.)

La eliminación de testigos fue una constante desde que el 29 de mayo de 1993 fue ultimado en Jalisco Juan Ramón Vázquez, vinculado con el asesinato del cardenal Posadas. Según el diario *El Financiero*, fueron eliminadas 17 personas relacionadas con la muerte de Colosio y seis con la de Posadas. En la cuenta del caso Ruiz Massieu sobresale un desaparecido: Manuel Muñoz Rocha. También destacó que entre el crimen de Lomas Taurinas y el de Ruiz Massieu, "la estructura que los eliminó tuvo la fuerza suficiente para desviar las investigaciones y borrar las huellas de los autores intelectuales, un *modus operandi* que distingue a los crímenes de Estado". (*El Financiero*, 25/VIII/96.)

La teoría del complot siguió en pie, e incluso se habló de un complot para ocultar el complot. El periodista José Reveles arriesgó varios nombres sobre el "segundo tirador", empezando por el absuelto Fernando de la Sota, ex miembro del CO47 (servicio de contrainteligencia mexicano de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad), entrenado por la CÍA en la década de los ochenta, y quien apareció con una pistola escuadra semiautomática en la mano en los segundos inmediatos a la caída de Colosio. De la Sota, con 24 elementos del paramilitar Grupo Omega, fue contratado para vigilar la campaña presidencial priísta, y el propio Aburto, en un careo, sugirió que De la Sota pudo ser el autor del segundo disparo.

Reveles mencionó otros nombres, entre ellos el del líder agrarista Jorge Romero, Mario Carrillo "El clavadista" (que se tiró a los pies de Colosio) y Jorge Sánchez Ortega, el agente del Cisen, dependiente de Gobernación, al cual se le halló sangre de Colosio en las ropas y le resultó

positiva la prueba de la parafina. (*El Financiero*, 9/VIII/96.)

El 30 de agosto de 1996 Zedillo designó a Luis González en sustitución del fiscal Pablo Chapa. González, se dijo, debía partir de cero. En ese sentido, hubo una nueva línea de investigación que no había sido seguida por sus tres predecesores. Según agentes de la DEA, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, incluidos la CÍA y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) tuvieron conocimiento con dos meses y medio de anticipación que se preparaba un atentado contra el candidato del PRI y hasta los lugares donde podía ocurrir el crimen: en Tijuana (Baja California) o en Nogales o San Luis Río Colorado (Sonora). La información fue divulgada por el periodista José Reveles, que mencionó como fuente a un ex agente de la DEA de origen mexicano, José Gárate Bustamante, nieto de un gobernador de Sonora, quien alertó a las autoridades mexicanas. (*El Financiero*, 11/VII/96.)

Lo curioso es que aparentemente la CÍA y la NSA no advirtieron a sus contrapartes en México —el coordinador de asuntos de Seguridad Nacional, Joseph-Marie Córdoba, y el propio Salinas—, o por alguna razón que se ignora consideraron inconveniente dar el aviso, ya que la información habría surgido de mensajes captados por medios telefónicos o radiofónicos.

Pero para el catedrático John Saxe-Fernández si la DEA, la CÍA y la NSA estaban al tanto del complot también lo estaba el Consejo de Seguridad Nacional de Clinton, coordinado por Anthony Lake, la contraparte de Córdoba. De ser cierto el ocultamiento de la Casa Blanca, el gobierno estadounidense resultaría, por lo menos, culpable de encubrimiento.

El 28 de septiembre de 1994, el mundo novelesco de Leonardo Sciascia había vuelto a ser realidad en el desmoronado México de Salinas. El asesinato del entonces número dos del partido oficial, José Francisco Ruiz Massieu, mostró el grado de pestilencia que emanaba de la cúpula del poder. Un ex presidente reconoció "sin paranoias... (que) en México hay una estructura maligna". Pero nadie pareció sorprenderse demasiado por esa confirmación. De hecho, más que la condena del crimen la principal preocupación fue saber quién era el siguiente de la lista.

Un revuelo de versiones, rumores y filtraciones prosiguió al crimen, entre ellas que detrás estaba el capo del cártel del Golfo, Juan García Ábrego (un narcotraficante luego detenido y entregado a Estados Unidos) y Joaquín Hernández Galicia, *La Quina*, líder sindical petrolero en prisión desde los primeros días del salinato.

Tres distintas hipótesis guiaron las pesquisas: el móvil era narcopolítico; el móvil sólo era político, o bien el crimen tenía relación con el narcotráfico, aunque lo más seguro era que quién sabe...

El entonces subprocurador y hermano de la víctima, Mario Ruiz Massieu, pidió hacerse cargo del caso donde fue involucrado como presunto autor intelectual el diputado priísta Manuel Muñoz Rocha. Otro de los coacusados, José Ramírez, empleado de la Cámara baja, reveló que la conspiración involucraba a personajes políticos de un nivel "mucho más importante" que el de Muñoz. Irving Dorrego, camarógrafo de la empresa pública encargada de filmar los actos del presidente de la República y del PRI —y con acceso a la agenda de Salinas en Palacio—, dijo que el atentado fue ordenado por Muñoz, ya que Ruiz Massieu era un estorbo para los intereses y planes "del grupo" al que pertenecía el diputado. Confeso de haber intervenido en el operativo de ejecución, resultó que el camarógrafo también había cubierto la breve campaña electoral de Colosio. Dorrego quedó en libertad un año después...

Con el paso de los días, fue evidente que Muñoz era un chivo expiatorio y hasta su familia lo dio por muerto, quizá ajusticiado por quienes planearon el homicidio. Si fue o no el narcotráfico, el hecho parecía secundario: para el politólogo Luis Garrido, desde el sexenio de Miguel de la Madrid el narco era "un elemento fundamental dentro de la estructura del poder en México". Un componente del sistema.

En una encuesta del diario *Reforma*, la gente dio su opinión en la calle: 72% dijo que las muertes de Ruiz Massieu y Colosio estaban vinculadas; 71 % estimó "muy probable" que estuvieran involucrados políticos, y uno de cada tres mexicanos consideró que el asesinato de

Ruiz Massieu provenía de las filas del PRI o del gobierno. Sólo 1.5 de cada diez culpó al narcotráfico.

Al igual que en el caso Colosio, se dijo que el crimen de Ruiz Massieu era "un golpe contra la línea renovadora del PRI" y se le atribuyó a un complot de los *dinosaurios* del sector sindical o político del oficialismo. En *El Financiero*, el columnista Carlos Ramírez apuntó hacia el Grupo Atlacomulco, liderado por el (ex) secretario de Agricultura, Carlos Hank González, cabeza de serie en la lista de los "duros". Otros medios mencionaron al ex secretario de Gobernación y luego gobernador de Puebla, Manuel Bartlett; Arsenio Farell, el férreo secretario de Trabajo de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas, luego encargado de la oficina de Seguridad Nacional y más tarde promovido por Zedillo a la Contraloría, y Joseph-Marie Córdoba, exjefe del gabinete salinista, quien tras el crimen de Tijuana fue enviado de manera apresurada a Washington como representante de México ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Si el crimen de Ruiz Massieu había sido obra de "los duros", era creíble entonces la versión que lo señalaba como el hombre llamado a romper la incestuosa hermandad PRI-Estado, y negociar nuevas reglas con la oposición. Hay testimonios que atribuyen a Ruiz Massieu la afirmación de que "voy por la presidencia de la República, yo soy el proyecto (del año 2000)". La misma fuente que reveló lo anterior, el columnista Juan Bustillos, dijo que Ruiz Massieu le confió que "había muchos compañeros de su partido dispuestos a cruzarse en su camino".

Tras su muerte, se dijo también que el político hubiera podido llegar a Los Pinos en el 2000, no obstante su récord como "duro" cuando fungió como gobernador del bronco estado de Guerrero, contrario a la imagen concertadora y aperturista del último año. Al igual que los tecnócratas de la llamada "generación del cambio" —según la frase acuñada por Colosio—, el pasado de Ruiz Massieu no lo asimilaba a un demócrata. En las elecciones federales de 1988, presuntamente ganadas en Guerrero por el Frente Democrático Nacional (FDN, precursor del PRD), el gobernador Ruiz Massieu "rehízo" los comicios a fin de favorecer con más votos a su amigo y ex cuñado, Carlos Salinas (José Francisco estuvo casado con Adriana Salinas) y, según denunció en su momento la revista *Newsweek* antes y después de los comicios de 1989 en Guerrero, Ruiz Massieu desató un clima de terror, multiplicándose las denuncias de homicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas contra la población.

De ahí que para Garrido, decir que Ruiz Massieu era una "víctima de la democracia" carecía de fundamento: "El sistema, el PRI y el grupo compacto salinista pueden llorar a sus muertos, pero no tienen demócratas."

En cuanto al (ex) subprocurador Mario Ruiz Massieu, éste llamó en afiebrado artículo a "abrir las cloacas del sistema mexicano (porque) si no sucediera así, se reforzarían los temores de que, cualesquiera que sean los inductores de los asesinatos, sus tentáculos llegan tan arriba en el aparato del poder como para herir de muerte las esperanzas despertadas por el sexenio de Salinas. La modernidad y la democracia de México están en juego". ("México insurgente", *El País*, 3/X/94.)

Y las cloacas se abrieron. Iniciando 1995, el autor de la frase fue acusado de haber montado una operación-encubrimiento para desviar las investigaciones sobre la muerte de su hermano. La hipótesis: borrar del expediente el nombre de Raúl Salinas, hermano mayor de Carlos, a quien la justicia pronto encarcelaría por coautoría intelectual. Según la fiscalía, "Mario vendió a su hermano". ¿Por qué?: "Pudo ser por posiciones políticas, poder, encubrimiento de los posibles nexos del ex subprocurador con el narco."

Cuando en febrero de 1995 Raúl Salinas fue detenido, ya el fiscal Pablo Chapa había anunciado que Mario Ruiz Massieu incurrió en el delito de encubrimiento y desviación de las investigaciones. El 2 de marzo, el autor del efímero *best seller* de la Editorial Diana, *Yo acuso. Denuncia de un crimen político*, arribó a las instalaciones de la fiscalía especial. Su declaración duró seis horas. Esa misma noche, Mario viajó con su familia a Houston. Al día siguiente voló a Nueva York y se embarcó en un vuelo a Madrid, de donde fue bajado por las autoridades migratorias

de Estados Unidos. La causa: falsa declaración del dinero que portaba. Más de un año y medio después, y tras sucesivos e infructuosos intentos de extradición por parte del gobierno mexicano, que agregó a su expediente presunto enriquecimiento ilícito, tortura y lavado de dinero, el ex subprocurador seguía retenido en Estados Unidos, ahora con libertad bajo fianza y previa *entrega* a las autoridades de ese país de toda la información a la que necesariamente Ruiz Massieu debió de tener acceso en materia de tráfico de influencias durante el salinismo, corrupción, narcopolítica, narcoeconomía —incluyendo el destape de las cuentas disfrazadas de Raúl Salinas en bancos suizos—, así como el estado de las pugnas inter-PRI, "la estructura maligna" a la que hizo alusión López Portillo...

Pero, como razonó el pensador italiano Giovanni Papini, la primera malicia del diablo es que no se crea en él.

Desde la perspectiva de las izquierdas, la transición del sistema de partido de Estado a otro de carácter democrático estaba enmarcada en ese año electoral por los evidentes signos de agotamiento del autoritarismo más antiguo del siglo XX —luego de la caída del régimen soviético y del liberalismo japonés—; la posibilidad del neo cardenismo como opción política; la aparición del EZLN y los cambios en la escena mundial.

Para el historiador Lorenzo Meyer, el cuadro de México a mediados de 1994 era singular: se combinaba una de las revoluciones económicas neoliberales más radicales y dogmáticas del mundo subdesarrollado, con el más reciente y menos ideológico de los movimientos insurgentes de América Latina. También se conjugaban el ancestral autoritarismo, que contabilizaba 77 años de dominación de caudillos y partido de Estado, desde Venustiano Carranza hasta Salinas, con una fuerza electoral de centroizquierda, el PRD, que pese a la violenta hostilidad del sistema había logrado consolidar una masa importante de votantes, que le permitió superar la marginalidad tradicional de la izquierda.

Otros analistas estimaron que una elección limpia, una afluencia masiva de votantes y el voto de castigo contra el PRI podrían resultar, conjugados, en un triunfo perredista donde Cárdenas obtuviera entre 35 y 40% de los sufragios (más de 9,6 millones), considerando un padrón de 45.7 millones de ciudadanos habilitados y bajo el supuesto de que 60% acudiría a las urnas. Pero las encuestas le otorgaban 9a 13% de la intención del voto, lo que lo ubicaba en un lejano tercer lugar, muy por debajo del candidato panista Diego Fernández de Cevallos; no obstante en 1988 el cardenismo fue desestimado por los sondeos que en el mejor de los casos le concedieron 25%, frente a 31.1% que Cárdenas logró con todo y el llamado *fraude cibernético*.

Pero una buena porción del *voto castigo* podría ser captada por el conservador PAN, habida cuenta de los desprendimientos hormiga durante el sexenio salinista del seno del oficialismo, por parte de militantes hastiados por la falta de democracia; además del cansancio de la población frente a la infatigable corrupción estatal, la creciente inseguridad e impunidad y los decrecientes empleo y salario.

Pero no hubo sorpresas. El partido oficial proclamó su triunfo, con un elemento nuevo: pese a las irregularidades y actos menores de fraude reclamados por la oposición, la sociedad votó mayoritariamente por el no cambio, a la vez que marcó la distancia tras seis décadas de prisma. Triunfó el miedo a la violencia, con el fantasma de la guerra en Chiapas y la satanización del PRD, además de las ventajas del oficialismo de recurrir a los recursos del Estado para fines proselitistas.

De cualquier forma, sí hubo avances: la afluencia ciudadana superó todas las expectativas, la votación fue copiosa y los comicios transcurrieron en orden. Si existió fraude, al menos esta vez no fue tan descomunal, lo que no impidió que florecieran las denuncias sobre irregularidades, entre ellas adulteración y "rasuramiento" del padrón que podría haber inhabilitado para el voto a casi nueve millones de mexicanos. (*Reforma*, 23/VIII/94.) El 22 de agosto el país amaneció dividido: 50% priísta y 44% entre conservador y moderado de izquierda. No obstante, sumando los votos PRI-PAN, esto es, las dos terceras partes del electorado, se estaba frente a la evidencia

de una sociedad profundamente conservadora.

Para Lorenzo Meyer el PRI representa "una mezcla de la vieja derecha autoritaria, corporativa y corrupta" —sus símbolos son el casi centenario líder sindical vitalicio Fidel Velázquez y el Grupo Atlacomulco de Garios Hank e Ignacio Pichardo— con "la nueva derecha autoritaria, neoliberal, tecnocrática" que no está libre de sospecha en materia de corrupción. El PAN, a su vez, representa a la derecha de extracción criolla y católica, más bien mocha y que, al haber sido siempre oposición desde su fundación en 1939 está, por lógica, más habilitada para hacer alarde de su honradez pública.

La noche del día 21, cuando sólo se había computado 4% de los votos, Diego Fernández reconoció implícitamente ante la televisión la victoria de Zedillo. El consejero ciudadano del IFE, Miguel Granados Chapa, concluyó que su aparición "resultó de un acuerdo con el gobierno (...) No sería extraño que lo hubiera ni es denigrante para las partes que se suponga que lo hubo, aunque en política los pactos secretos tienen un tufo desagradable".

El también periodista recordó que el "jefe Diego" fue uno de los autores de la fórmula de concertación con Salinas, en alusión a las *concertaciones* que tuvieron lugar en varios estados del país, al margen del resultado de los comicios y en beneficio del PAN. Se habló de un "priísmo empanizado", lo que confirmaba el desplazamiento del gobierno a la vereda de la derecha más conservadora.

La imagen del país como una dictadura perfecta, según la frase acuñada en 1992 por el novelista peruano Mario Vargas Llosa durante un coloquio en México y que le costó su inmediata y deshonrosa expulsión, refloreó tras los comicios. Consternado, el escritor Gabriel Zaid lamentó "que los mexicanos hayan salido a votar como nunca, para votar como siempre" y también dijo lo propio el politólogo Jorge Castañeda: "No hay manera de separar al PRI del Estado mientras el PRI no pierda, y no parece ser posible que pierda mientras no se separe del Estado. Por algo es tan difícil acabar con el sistema."

Pero los comicios de agosto dejarían muchas enseñanzas, entre ellas la importancia de la cibernética en el modelaje de las conductas. Para el catedrático John Saxe-Fernández, los comicios tenían que ver con el tema de la realidad virtual (*virtual reality*), que consiste en un conjunto de tecnologías prominentemente cibernéticas y televisivas, que permite a los usuarios proceder y reaccionar ante un mundo percibido, que no tiene ninguna relación con el real.

Según Torbjorn Hansson (*Información Científica y Tecnológica*, México, enero 1994) el término inglés *virtual reality*, aplicado por Ángel Film en Hollywood, consiste en "producir algo parecido a la realidad". Así, por medio de un programa de computadora pueden ser suprimidas realidades físicas como la ley de gravedad, y una persona puede trasladarse en tiempo y espacio y decidir uno mismo el desenlace y las experiencias. Naturalmente, todo depende, en parte, de lo que el programador del juego ha decidido que exista en él.

Basándose en Hansson, Saxe-Fernández aplicó al IFE el concepto de realidad virtual, dado que una de las funciones del órgano electoral controlado por Carlos Salinas y sus ingenieros comiciales, parecía haber coadyuvado a que "ocurra algo parecido a la realidad". (*Excelsior*, 30/VIII/94.)

Desde Chiapas, en su primer comunicado post comicios, Marcos dijo por todo comentario: "Ese cuento del 50% y el *carro completo* sólo se lo tragan los gringos. ¡Órale! ¡No se achicopalen! La táctica de ellos es repetir una gran mentira hasta que se convierta en verdad. Se van a equivocar otra vez, se les va a derrumbar todo como en enero. Sólo se necesita una sopladita."

Como miembro de la llamada "generación del cambio", Ernesto Zedillo fue electo presidente tras casi dieciséis años de servicio en la administración pública. Ejemplo prototípico de la clase política que gobernaba México desde 1982 —economistas con posgrados en el exterior y trayectoria ascendente en la burocracia federal desde puestos de responsabilidad intermedia—, Zedillo llegó al gobierno luego de haber sido secretario de Programación y Presupuesto (SPP) y

Educación Pública (SEP), y tras militar en el PRI desde el año 1971.

Fue educado en colegios públicos y, una vez concluida la preparatoria, ingresó en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo las más altas calificaciones. En 1972, antes de titularse, viajó al Reino Unido y en la Universidad de Bradford tomó un curso de evaluación de proyectos de inversión en capital humano. Al año siguiente realizó un curso propedéutico en economía en la Universidad de Colorado. En 1978 obtuvo el doctorado en Economía en Yale, donde fue compañero de Jaime Serra.

A su regreso de Londres trabajó nueve años en el Banco de México y luego pasó a la SPP, donde fue subsecretario de Programación. En diciembre de 1988, al formar su gabinete presidencial. Salinas lo nombró titular de esa dependencia. Como secretario de Programación. Zedillo había pronosticado un crecimiento de la economía mexicana cercano a 6. Apenas 24 horas después de su nominación como candidato presidencial, el gobierno informó que en 1993 la economía había registrado un estancamiento (apenas creció 0.4%, muy por debajo del 2,8% del año anterior).

En cuanto a su experiencia en la SEP, el escaso año y medio como titular estuvo marcado por la controversia, en especial el escándalo por los cambios en los libros de historia para alumnos de 5o. y 6o. grados, calificados por el magisterio de retrógrados y antipedagógicos, y que ocasionaron fuertes críticas y la censura de los altos mandos del ejército por la nueva versión que se ofrecía sobre la matanza de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Según cifras extraoficiales, en la masacre murieron unos 400 estudiantes y de ello siempre se responsabilizó al ejército, versión que fue recogida por los nuevos textos, los cuales debieron ser destruidos, pese a que ya habían sido impresos millones de ejemplares. Como consecuencia quedaron deterioradas las relaciones de Zedillo con los militares.

Su llegada al poder estuvo condicionada por las presiones de distintos grupos de interés, en especial el sector económico, apurado por asegurar el rumbo del gobierno tras lo imprevisto de la coyuntura. Zedillo enfrentaba no pocos retos: erradicar la anacrónica dualidad PRI-Estado, proceder a una separación real entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en el marco de un tránsito pacífico a la democracia; ser el autor de una auténtica reforma política que suponía un nuevo pacto para asegurar la leal competencia en las urnas, comenzando por la reforma electoral, y atender la situación de miseria de 40 millones de mexicanos, entre ellos los insurrectos indígenas de Chiapas.

Desde otro ángulo, también estaba pendiente la reestructuración empresarial de cara al NAFTA ante la sobrada incapacidad del grueso de la planta industrial mexicana de competir con los colosos de Estados Unidos y Canadá; mientras que sobre el narcotráfico ya se había dado el alerta en Washington de que México podía encaminarse hacia la "colombianización", con un Estado inerte frente al creciente poderío del crimen organizado y de los narcopolíticos —incrustados en el gobierno y con un campo de acción tan vasto—, capaces de acabar con la vida de un purpurado o de un candidato a la presidencia...

Cuando Zedillo fue nominado como sustituto de Colosio, tras su inesperada muerte, se le señaló como un candidato débil, falto de experiencia política y de capacidad de liderazgo. De allí, tal vez, la idea de que Carlos Salinas iba a seguir gobernando a través de su sucesor. El primer desafío que enfrentó Zedillo fue la designación del gabinete; de la selección de secretarios de Estado se podrían deducir las alianzas con los sectores económicos y políticos, sin excluir, por supuesto, a los militares y a la Iglesia católica.

El gabinete se dio a conocer el 30 de noviembre y las calificaciones que recibieron los ministros parecieron confirmar la tesis del continuismo: Jaime Serra en Hacienda, Guillermo Ortiz —funcionario hecho a imagen y semejanza de Joseph-Marie Córdoba— en Comunicaciones; en Comercio quedó Herminio Blanco, operador del NAFTA junto con Serra; Santiago Oñate (Trabajo y luego presidente del PRI) sustituía a Córdoba tras su excursión de verano al BID; Miguel Mancera, estrategia de la política económica salinista, conservaba su escritorio de caoba en el Banco de México, y José Ángel Gurría, el negociador oficial de los

gobiernos de Miguel de la Madrid y Salinas en materia de deuda externa ante el gobierno de Estados Unidos y la banca internacional era designado nuevo canciller.

Otros salinistas del gabinete eran Carlos Rojas (Sedesol) y Arturo Warman (Agricultura), a quienes se les sumaron personajes de trayectorias disímbricas como Ignacio Pichardo (Energía) —ex presidente nacional del PRI, vinculado al Grupo Atlacomulco y acusado de presunto encubrimiento en el crimen de Ruiz Massieu— y Silvia Hernández (Turismo).

Hubo varias objeciones al gabinete. Desde filas priístas se dijo que los responsables de la seguridad interior (Esteban Moctezuma en Gobernación y el panista Antonio Lozano, nombrado procurador general de la República) eran "demasiado jóvenes"; los empresarios y banqueros objetaron la ausencia de Pedro Aspe y José Ángel Gurría también fue criticado en distintos ámbitos, incluso públicamente por el escritor Carlos Fuentes.

Sólo un pequeño grupo era cercano a Zedillo, entre ellos Esteban Moctezuma y Luis Téllez, nombrado jefe de la oficina presidencial y ex protegido del *vicepresidente* Córdoba.

CAPITULO 1

La sombra de Washington

El 1 de diciembre de 1994, cuando Ernesto Zedillo tomó posesión como presidente de la República, la situación en Chiapas no había variado en relación a las condiciones que propiciaron el "¡Ya basta!" del 1 de enero anterior.

En materia militar, y con sólo diez días de enfrentamiento armado en un lapso de once meses, el conflicto pasó por varias fases: la primera, de propaganda armada, que para los analistas significó una verdadera hazaña de la guerrilla mediante el recurso del factor sorpresa en las tomas de las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, y la movilización casi sin bajas de unos dos mil milicianos, según estimaciones castrenses, que luego se retiraron en orden hacia su retaguardia natural en la selva Lacandona, tras apoderarse de alimentos, medicinas y armas.

El ejército federal respondió con la movilización de unidades de élite de infantería y aviación, en un intento por causarle al EZLN el mayor número de bajas y recuperar el control territorial en los municipios donde se hizo notoria la influencia zapatista. Pero la orden presidencial del 12 de enero de 1994 de cesar unilateralmente el fuego —cuando desde un punto de vista estrictamente militar, podía ser recomendable estrechar el cerco e intentar eliminar al EZLN—, dio un giro al conflicto que asumió rasgos de la llamada guerra de baja intensidad, profusamente experimentada por el Pentágono en escenarios latinoamericanos como Granada, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

La sociedad civil tuvo su mérito, cuando el 12 de enero diversas organizaciones sociales tomaron el Zócalo capitalino y exigieron detener la guerra y evitar un eventual genocidio indígena en Chiapas, luego de denuncias sobre ametrallamientos aéreos de poblados y ejecuciones sumarias de campesinos. Pero la decisión de Salinas tuvo otra razón: continuar la guerra por otras vías. Al momento del estallido, las tuerzas armadas reconocieron su impericia para emprender una campaña contrainsurgente en una geografía tan adversa como la impenetrable selva chiapaneca. Unos 30 años atrás, el ejército federal había combatido hasta su exterminio a las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, pero las sierras y montañas de Guerrero no eran la selva Lacandona.

Otro factor determinante era el carácter estratégico y geoeconómico de Chiapas. El 27 de enero, cuando el EZLN divulgó el documento *Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía*, dejó asentado que "en las tierras chiapanecas hay 86 colmillos de Pemex clavados en los municipios de Estación Juárez, Reforma, Ostucán, Pichucalco y Ocosingo. Cada día succionan 92 000 barriles de petróleo y 516 700 millones de pies cúbicos de gas. Se llevan el gas y el petróleo y dejan, a cambio, el sello capitalista: destrucción ecológica, despojo agrario, hiperinflación, alcoholismo, prostitución y pobreza. La bestia no está conforme y extiende sus tentáculos a la selva Lacandona: ocho yacimientos petrolíferos están en exploración".

Aparte del oro negro, considerado el recurso estratégico del siglo XX, Chiapas se encuentra diluvianamente inundado por el energético por excelencia del siglo XXI: el agua, además de contar con una reserva de la biosfera en los Montes Azules. Con cientos de lagos y lagunas, docenas de ríos y tres depósitos artificiales, el estado posee 25% de los recursos acuíferos de México. En su territorio se encuentra el conjunto de presas hidroeléctricas más importantes del país: Chicoasén, Malpaso (Nezahualcóyotl), La Angostura y Peñitas, que aprovechan los caudalosos flujos del río Grijalva. Y, como señaló el experto Alfredo Jalife, aún no empieza la explotación conjunta del río Usumacinta, que sirve de frontera geopolítica con Guatemala.

Según el investigador Sergio Suárez, de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), especialista en economía, energía y petróleo, las siete hidroeléctricas construidas en Chiapas aportan más de 55 % de la energía hidráulica que se produce en México aunque, paradójicamente, en el estado todavía existen 10 367 localidades de menos de 2 500 habitantes que no cuentan con servicio eléctrico.

Desde el *boom* petrolero de los años 70, Chiapas, junto con Tabasco, Veracruz y Campeche, pasó a formar parte de los estados que cuentan con mayores reservas de petróleo.

En su relativamente mínima extensión de 74 211 kilómetros cuadrados, Chiapas produce una tercera parte del petróleo nacional. Dicha producción se concentra en el municipio de Reforma, colindante con Tabasco, y en siete mil kilómetros del área mesozoica: campos de Cactus con su complejo petroquímico, Nispero, Iris-Giralda y Sitio Grande.

Al respecto, en su estudio *Pobreza y riqueza: el antagonismo que explotó en Chiapas*, Suárez afirma que durante 1994 uno de los ejes más importantes de las reservas y producción de Pemex se ubicaba en el mesozoico Chiapas-Tabasco: tercer lugar por el monto de sus reservas probadas de hidrocarburos (20.1 %); tercer lugar en reservas de petróleo crudo (15% de las existencias de México); segundo lugar en reservas de condensados (30% del total de los depósitos); segundo sitio en reservas de gas seco (31.1% del total nacional). La importancia de esta zona adquiere mayor significado a partir del siguiente dato: en 1979, dicha región aportó 73% de la producción total de petróleo nivel nacional y la consiguiente generación de divisas.

Las reservas probadas de crudo existentes en el mesozoico Chiapas-Tabasco son 6.4% más elevadas que las de Egipto; superan en 16.2% las de Canadá; 47.3% las del Reino Unido y equivalen a 28.2% de las reservas probadas de Estados Unidos. Además, de la región sur se extraen crudos de la más alta calidad. El eje Chiapas-Tabasco aporta al país 98% del crudo suave ligero Olmeca (de 38° API), 25% de crudo ligero Istmo (de 32°API) y sólo 0.07% del crudo pesado Maya (de 220° API), todos ellos los de mayor precio en el mercado internacional. Según datos de 1993, en ese año 98.6% del crudo Olmeca y 39.3% del tipo Istmo se exportó hacia Estados Unidos.

Por su parte, el campo Muspac, del que en 1992 se extrajeron diariamente 12 593 barriles de crudo, es el más importante productor de gas natural del estado de Chiapas, que al sumar su producción a la del campo Copano convertía a ambos en los más productivos de la región sur, representando 54% del total nacional.

Todo ello sin contar el potencial ya probado de los recursos petrolíferos aún sin explotar: según reveló Jalife, datos recientes de espectrofotometría de los satélites estadounidenses han localizado inconmensurables reservas potenciales en la selva Lacandona donde, por coincidencia, opera la guerrilla zapatista. Esto aumenta considerablemente la importancia geoestratégica de Chiapas en materia económica (ahí se localiza además oro, plata, cobre y maderas preciosas), energética y geopolítica —aspecto este último potenciado por la cercanía con el istmo de Tehuantepec, que tendrá especial relevancia para el comercio del NAFTA al concluir el contrato del canal de Panamá en el año 2000—, factores a su vez ligados a consideraciones de alta prioridad en materia de seguridad nacional tanto para México como para su principal socio comercial, Estados Unidos.

La apetencia de Estados Unidos por los hidrocarburos mexicanos quedó asentada en documentos oficiales de ese país, la mayoría de ellos confidenciales, desde mucho antes de que se iniciara la llamada globalización económica. En realidad y como ha venido señalando desde hace una década el experto en asuntos geoestratégicos John Saxe-Fernández, el proceso de integración de la *América del Norte* estuvo fundado en una estrategia económica dictada por los intereses corporativos y de seguridad nacional estadounidenses. Éstos incluyen sus proyecciones globales de poder militar, un servicio de inteligencia dedicado ahora al espionaje económico, tecnológico (con énfasis en la innovación de alta tecnología tanto militar como civil de sus competidores) y financiero, y presumiblemente, el montaje de operaciones clandestinas en estas esferas que son tan estrechas que se les puede calificar de simbióticas. A la fecha existen innumerables incidentes

documentados de la subordinación y/o superordenación entre el Estado estadounidense y sus organismos, como el Departamento de Defensa, la CÍA, la NASA, etcétera, y las corporaciones transnacionales originarias de ese país. En particular las grandes empresas mineras, petroleras y ferrocarrileras o contratistas del Departamento de Defensa para producir materiales bélicos, han desarrollado "lazos especiales" con organismos y personeros de la seguridad nacional.

En su análisis, *Globalización y regionalización*, Saxe-Fernández explica el papel subordinado del Estado mexicano respecto de las transnacionales y el brutal condicionamiento registrado en las cartas de intención firmadas con el FMI y el Banco Mundial: "El papel del Estado, tanto metropolitano como periférico, es crucial en esta etapa de condicionalidad acreedora. En el primer caso su fuerza militar, política y diplomática es central para auspiciar un tipo de globalidad que gira alrededor de los parámetros centrales de la geopolítica, y en el caso mexicano, especialmente en la geoeconomía del capital."

También el investigador norteamericano Michael Tanzer, experto en cuestiones petroleras mundiales, ha demostrado el enorme interés geoestratégico de que sean las empresas "estadounidenses" las que controlen directamente los recursos o las tecnologías.

Asimismo, el proceso de integración silenciosa de México a Estados Unidos ha venido produciendo sinergias en aspectos tan delicados como el militar y de seguridad. "El entusiasmo estadounidense por *continentalizar* la economía mexicana, es decir, someter las principales actividades económicas del país al dominio, control y administración de *sus* corporaciones petroleras, petroquímicas, gaseras, ferrocarrileras, eléctricas, portuarias, aeroportuarias, carreteras y de telecomunicaciones, coincide con los intentos prácticos de orden político-militar por mermar la soberanía de la federación mexicana", sostiene Saxe-Fernández.

En cuanto al "problema militar" y a cómo adquirió preeminencia la importancia estratégica del petróleo mexicano, el investigador afirma que fue a raíz del embargo petrolero de la OPEP contra Estados Unidos por su alineamiento junto a Israel durante la guerra de Yom Kippur (Día del Perdón), en 1973. A partir de la guerra de Medio Oriente, que exhibió el grado de dependencia de Estados Unidos del petróleo árabe, México pasó a convertirse en un problema de seguridad nacional para la Casa Blanca y el Pentágono. Fue también desde entonces que el aparato de inteligencia y contrainteligencia estadounidenses en particular a través de la estación de la CÍA en México, comenzó a investigar las reservas de hidrocarburos y gas natural —en momentos en que se descubrían los gigantescos yacimientos de Reforma en Chiapas— y a tratar de incidir en la política petrolera mexicana en general, y en la "dinámica interna" de la oficina de la Presidencia, de Pemex y de la Secretaría de Energía, en particular.

Ante la perspectiva de una nueva guerra petrolera, y luego de que fuentes de inteligencia de Estados Unidos lograron saber que las reservas probadas mexicanas superaban los 50 mil millones de barriles, cada barril de crudo nacional comenzó a tener un valor estratégico agregado y el aparato de seguridad nacional estadounidense inició presiones para *especializar* a México en la exportación de petróleo hacia el vecino del norte. Eran los días del presidente Carter en la oficina oval, y de James Schlesinger y luego de George Bush en la CÍA. Entre los escenarios posibles, *La Compañía* comenzó a manejar la hipótesis de que en caso de que la economía estadounidense sufriera un estrangulamiento, podría ocurrir una acción militar directa sobre México.

Según Saxe-Fernández, "los planes de contingencia para la toma de pozos e instalaciones petroleras en México y Oriente Medio fueron actualizados y revaluados". Sin embargo, en el caso mexicano, los estrategas estadounidenses tomaron en cuenta que, a diferencia de Medio Oriente, los costos de una iniciativa de tal naturaleza contra el vecino del sur podrían elevarse hasta niveles francamente inaceptables. Para asegurar el éxito de la operación, debían cumplirse varios requisitos de tipo técnico-militar, a saber: tomar intactas las instalaciones petroleras y asegurar su control, además de los pozos, complejos petroquímicos, gasoductos, poliductos y oleoductos dispersados en el territorio nacional, todo ello en contra de la voluntad de los dueños legítimos del petróleo, incluidas las fuerzas armadas mexicanas. Además y según el experto, "desde los tiempos de Elías Calles se hicieron referencias explícitas de que el ejército mexicano, a cuyo cargo deben estar la vigilancia y

seguridad de todas las instalaciones petroleras del país —es una de sus principales funciones en cuanto a seguridad nacional—, primero procedería con el incendio selectivo de pozos e instalaciones antes que entregarlos".

Con tales antecedentes, los estrategas del Pentágono estimaron a fines de los años setenta que equipos de sabotaje del ejército mexicano podrían impedir e incluso detener el flujo de petróleo desde su fuente, es decir, los campos petroleros, los puntos vitales de oleoductos y gasoductos y las instalaciones portuarias. De allí que se insistiera en *modificar* las funciones y misiones esenciales de las fuerzas armadas mexicanas, como garantes de la soberanía nacional y territorial, hacia otras de tipo represivo ante eventuales "enemigos internos".

Saxe-Fernández cita un informe (*Issue Brief*) del Pentágono, de 1980, según el cual especialistas advertían que "equipos profesionales de demolición pueden crear grandes brechas en los sistemas de recolección, donde muchos oleoductos corren paralelamente. Esto también podría lograrse con unas pocas bombas bien colocadas". Lo mismo podía decirse del incendio de tanques o refinerías: "El crudo liviano combinado con materiales volátiles es altamente inflamable y difícil de extinguir."

Fue ante ese panorama que surgió la opción menos costosa de una intervención no militar, a fin de controlar las políticas energéticas de naciones tan generosamente dotadas y tan cercanas a Estados Unidos como México. "En esta función son mucho más eficaces las capacidades de soborno, corrupción e intervención política de las estaciones de la CÍA, que los batallones de *marines*; las presiones, préstamos y condiciones del FMI y el Banco Mundial, que los aviones supersónicos; las amenazas del proteccionismo comercial contra las exportaciones mexicanas, que los submarinos; el chantaje contra un liderato económico y político corrupto y apátrida, que la artillería más moderna", precisa Saxe-Fernández.

En forma paralela, los "instrumentos no militares" lograron el consenso de Wall Street, donde los sucesivos directores de la CÍA, Schlesinger y Bush, convencieron a los magnates financieros de las bondades del espionaje telefónico y microfónico sobre la cúpula político-económica mexicana, corrupta o susceptible de corrupción, enredada como ya estaba en un entramado de vínculos ilícitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y/o narcotráfico. La diplomacia de Washington comenzó, así, a cultivar las "relaciones personales" y a recurrir de manera cada vez más metódica y frecuente a los instrumentos políticos, psicológicos, económicos y financieros, a fin de explotar las "vulnerabilidades individualizadas" del liderato mexicano, con objeto de estimular aquí la producción de gas, petróleo y petroquímica y lograr su control por medio de empresas domiciliadas en Estados Unidos.

Pese a que Salinas reivindicó con fines propagandísticos su paternidad sobre el NAFTA, en realidad la idea de un mercado común que integrara los vastos recursos energéticos de América del Norte se originó en Washington en 1979. Como señala Saxe-Fernández, el uso de instrumentos político-militares y de inteligencia para articular e intensificar el proceso de "integración subordinada", encontró que el camino monetario-financiero era el más prometedor, ya que en ese renglón las vulnerabilidades mexicanas eran —y siguen siendo— profundas. Fue en función de esos intereses específicos, llegar a controlar las políticas de Pemex y el petróleo mexicano, que se comenzó a utilizar la deuda externa como arma.

Al respecto y según Saxe-Fernández, "quien revise los programas de acción aplicados por el FMI y el Banco Mundial en México concluirá que el proceso que llevó al NAFTA a las propuestas inconstitucionales para la privatización y extranjerización de los complejos petroquímicos y del gas natural, entre otros, arrancó con la firma de la Carta de Intención formalizada en 1982 con el FMI".

A la condicionalidad del FMI, que se reflejó fundamentalmente en la dirección macroeconómica, se añadió el manejo de las "ramas" económicas más importantes y las empresas de mayor interés para los acreedores, por medio de préstamos condicionados del Banco Mundial, mismos que fueron articulados durante el sexenio salinista por Joseph-Marie Córdoba, enlace entre la Presidencia y el aparato de seguridad nacional estadounidense.

Según fuentes vinculadas con la conservadora Heritage Foundation, Salinas de Gortari fue

"persuadido" por Bush sobre las ventajas del NAFTA, promovido a través de la oferta de una "narcoamnistía".

Mediados de agosto de 1993. Durante su ceremonia de juramentación en Washington, como nuevo embajador de Estados Unidos en México, James R. Jones, afirmó: "El Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio es mucho más que eso: creo que es la más importante medida geopolítica de estos momentos [...]. En justicia, nuestra decisión sobre el NAFTA representa una extraordinaria estrategia para Estados Unidos."

Jones no hizo sino repetir lo dicho por especialistas como Michael Wilson, de la Heritage Foundation, quien había señalado que el acuerdo "comercial", "convertiría a Estados Unidos y México en socios geopolíticos" y en un memorándum que se dio a conocer desde mediados de 1990 añadió que "México, más que ninguna otra nación en el mundo (...) afecta directamente el futuro de la seguridad política y económica de Estados Unidos".

La concepción de establecer una zona de "exclusividad geopolítica", plasmada luego en la Iniciativa de las Américas de George Bush, fue precozmente concebida por Jefferson, Madison y Monroe, y ha sido un rasgo permanente de la "geografía política" de Washington para el hemisferio occidental.

Pero otro elemento adicional sirvió de contexto a las declaraciones del embajador Jones: el documento *Lineamientos para la planeación militar (Defense Planning Guidance, DPG* por sus siglas en inglés), elaborado para el periodo 1994-1999 y dado a conocer por *The New York Times* el 8 de marzo de 1992. Como consignó puntualmente Saxe-Fernández ("Contextos geopolíticos", *El Día Latinoamericano*, 4/X/93), el texto establece de manera específica que Estados Unidos debe tomar en cuenta los intereses de las grandes naciones industrializadas a fin de "disuadirlas de retar nuestro liderazgo o de tratar de dismantelar el orden político y económico establecido", añadiendo que "[...] debemos mantener los mecanismos para disuadir a cualesquiera competidores aun de aspirar a jugar un papel regional mayor o uno de orden global".

En el nivel subhemisférico, la geopolítica estadounidense define que ninguna potencia externa debe usar a América Latina como base para lanzar ataques contra territorio norteamericano; que se debe evitar cualquier alianza "entre naciones latinoamericanas que pudiera retar el dominio hemisférico de Estados Unidos", y que ninguna nación "latina" debe llegar a ser lo suficientemente fuerte para lograr ese fin. Visto así, el NAFTA es considerado por Jones no sólo geopolíticamente esencial sino también un paso importante en la intención de evitar que, frente a la integración monroísta que está en la base del NAFTA, se llegue a conformar en el subhemisferio occidental otro tipo de integración entre las naciones latinoamericanas, de carácter bolivariano.

Como parte de esta política, los gobiernos de Bush y Clinton han promovido a través del Pentágono un panamericanismo militar, logrando incorporar a la Junta Interamericana de Defensa (JID) como organismo asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese contexto, Estados Unidos incrementó de manera notable su presencia militar en América Latina en los últimos años, en función de un plan diseñado en Washington por la Escuela de Guerra, en noviembre de 1991. Esa estrategia está contenida en un informe de Frederick Woerner, quien tuvo a su cargo el Comando Sur en 1988 y que mencionaba al Capitolio "la existencia de miles de aeropuertos, muchos clandestinos o con cubierta comercial o para la lucha antinarcóticos" que podrían ser utilizados en el esquema de la guerra de baja intensidad, "mientras se continúa manteniendo la hipótesis de la expansión territorial".

Se dice que el conflicto en Chiapas inició el 1 de enero de 1994. Pero, en realidad, el gobierno y el EZLN estaban en guerra desde el 22 de mayo del año anterior, cuando una patrulla del ejército federal bajo las órdenes del general Miguel Ley va, jefe del regimiento de Rancho Nuevo, descubrió por casualidad el campamento zapatista de Las Calabazas, en la Sierra Corralchén, entre San Miguel y Morelia, municipio de Ocosingo.

Allí se libró la primera escaramuza militar entre efectivos del ejército y la guerrilla. Y a raíz de ese primer encuentro armado, los focos rojos se prendieron simultáneamente en la SDN en la ciudad de México y en el Pentágono, en Washington.

El alto mando castrense y sus asesores estadounidenses comenzaron a diseñar planes operativos para aniquilar a ese enemigo interno, cuyas dimensiones y poder de fuego fueron considerados, en un primer momento, como de pequeña monta y que supusieron focalizado en un espacio reducido del territorio chiapaneco. Como admitiría luego el ejército mexicano, se cometió un grave error de inteligencia militar al subestimar al adversario. Pero los tiempos del NAFTA obligaban a las autoridades mexicanas y al gobierno estadounidense a actuar con prudencia, por lo que se definió en forma conjunta un plan de aniquilamiento, so pretexto del narcotráfico, que sería ejecutado a partir del 10 de enero de 1994.

Sólo que los zapatistas se adelantaron y la irrupción pública del EZLN en el primer minuto del nuevo año, sólo fue la confirmación de lo que todos sabían pero prefirieron ocultar, desde las autoridades locales y federales, hasta el jefe de la VII región militar, general Miguel Ángel Godínez y sus superiores de la SDN. De allí la burla de los zapatistas que ocuparon San Cristóbal, cuando en los muros de la presidencia municipal escribieron: "No hay guerrilla en Chiapas". Firmado: Godínez.

Desde los violentos primeros 10 días de 1994 que conmovieron a México y a la opinión pública internacional, el conflicto evolucionó en dos direcciones simultáneas: de cerco y hostigamiento militar por parte del ejército federal, y de iniciativas de paz hacia una solución pacífica y negociada del conflicto, que se formalizaron en una agenda de diálogo que se discute desde abril de 1995 —con altibajos y reveses— en el poblado indígena de San Andrés Larráinzar, con vistas a un acuerdo global de pacificación para 1997.

Desde entonces la prédica del gobierno, incluidos los miembros de la comisión negociadora de la Secretaría de Gobernación (Marco Antonio Bernal, Jorge del Valle, Gustavo Iruegas) y su propio titular, Emilio Chuayffét y los jefes militares en Chiapas, han recurrido a la imagen de que la guerra ha desaparecido de la región de Los Altos y que el conflicto se encamina hacia una paz digna y duradera.

Algunas interpretaciones difieren, sin embargo, de esta óptica y aseguran que la ausencia de tiros no se muestra como lo que en verdad es: una tregua. Tregua a la que se ha llegado porque los adversarios son fuertes, cada uno a su manera: el ejército federal con gran poder ofensivo, y el EZLN más fuerte en la defensiva. Fuerzas, como destaca el experto argentino León Rozitchner, de cualidad distinta: la una apoyada en el poder de las armas, la otra implícita en el poder de los cuerpos. Si se toma en cuenta esto podría comprenderse que la "paz política" de 31 meses entre el gobierno y el EZLN es una tregua a la cual se vio forzado el Estado por consideraciones coyunturales.

Para los expertos en temas militares, sin embargo, el tratamiento del conflicto en Chiapas por parte del sistema mexicano no ha salido de la órbita de un proyecto de tipo contrainsurgente, de cuño estadounidense, con vistas al aniquilamiento del movimiento indígena. La notoria molestia del canciller mexicano José Ángel Gurría, porque "en Chiapas hay una guerra de tinta e Internet" —¿acaso hubiese preferido que corriera sangre en lugar de palabras?— parece ser un reflejo de las contradicciones en que ha caído el discurso y la acción oficial en relación con el movimiento zapatista, primero perseguido por el ejército y por el fuego de saturación de la aviación y la artillería pesada —con un alto costo político para México en el exterior— y luego acosado en su base social mediante el amedrentamiento de las comunidades indígenas enclavadas en la zona de Los Altos, por parte de soldados que virtualmente han militarizado la vida cotidiana de los poblados.

A partir del inicio de la tregua armada, el 12 de enero de 1994, y de manera más metódica desde la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995, cuando por órdenes del presidente Zedillo el ejército ocupó las zonas controladas por los zapatistas y arrinconó al EZLN en las profundidades de la selva, de espaldas a Guatemala, el equipo de Seguridad Nacional encargado de planear y ejecutar las políticas para Chiapas (integrado por miembros de la SDN, la contrainteligencia del ejército y los servicios de inteligencia de la Secretaría de Gobernación y la PGR) ha venido aplicando las directrices básicas de la llamada guerra de baja intensidad (GBI) concebida por el Pentágono en la década de los

ochenta, particularmente en lo que atañe a labores de inteligencia, acción cívica, guerra psicológica y el así denominado control de poblaciones.

Con base en documentos de inteligencia del gobierno y el ejército de Estados Unidos, que incluyen las nuevas teorías contenidas en la llamada Doctrina Reagan, luego de sus adaptaciones latinoamericanas a partir de los experimentos en Granada, Nicaragua, El Salvador y Panamá, la guerra psicológica —o la militarización de la lucha ideológica en México— sustituyó de manera temprana el plan de aniquilamiento inicial contra el EZLN; esto explica, a su vez, el hecho inédito de que en América Latina un gobierno autoritario, vertical y antidemocrático como el mexicano se sentara a negociar con un grupo armado apenas 12 días después de iniciados los combates.

Según un sumario ejecutivo del *Reporte final del Estado Mayor Conjunto* del ejército de Estados Unidos:

El conflicto de baja intensidad es una lucha político-militar limitada para alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos y psicológicos. Es con frecuencia prolongada y varía desde presiones diplomáticas, económicas y psicológicas hasta el terrorismo y la insurgencia. El conflicto de baja intensidad está en general confinado a un área geográfica y usualmente se caracteriza por restricciones en el armamento, tácticas y nivel de violencia.

Esta doctrina cambia la naturaleza de la guerra, la hace irregular, la prolonga y la convierte en un embate político-ideológico. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional. El centro de gravedad ya no es el campo de batalla *per se*, sino la arena político-social. Por eso la batalla es, sobre todo, política y psicológica. La propia naturaleza del conflicto exige un tipo de inteligencia especial: importan las estimaciones acerca del medio ambiente global (condiciones económicas, políticas y sociológicas), por lo que las tareas de análisis pasan a ser cruciales.

En la nomenclatura militar el concepto de operaciones psicológicas está relacionado, generalmente, con objetivos y herramientas que buscan influir en la conducta de la población civil, del enemigo y de la propia fuerza. En situaciones bélicas, la guerra psicológica trata de explotar las "vulnerabilidades" del enemigo y su base de apoyo: miedos, necesidades, frustraciones. Y esto incluye a mujeres y niños, porque en esta guerra no declarada no hay leyes que protejan a los no combatientes; el terror se utiliza como un instrumento político de control de las mayorías, que busca generar dependencia, intimidación e incapacitar toda proyección hacia el futuro de manera autónoma.

El manual de operaciones psicológicas de la CÍA en Nicaragua (Omang, 1985), define que la guerra psicológica es un tipo de operación militar que se ha delineado a partir de la Segunda Guerra mundial en una modalidad escogida, preferentemente, para controlar grandes masas y/o territorios, sin necesidad de recurrir a otras formas de guerra convencional. El ser humano es considerado el fin prioritario en una guerra política. Concebido como objetivo militar, el punto más crítico del ser humano es su mente. Cuando su mente es alcanzada, el "animal político" ha sido derrotado sin que necesariamente haya recibido un proyectil. El objetivo es la mente de la población, toda la población: "nuestras tropas, las tropas del enemigo y la población civil".

La guerra psicológica comienza por definir su campo de influencia más inmediato, directo y habitual: la propaganda. Luego especifica su objetivo: el principal procedimiento consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, sobre todo a través de la sugestión compulsiva y las técnicas psicológicas afines, con miras a alterar y controlar opiniones, ideas y valores y, en última instancia, a cambiar las actitudes según líneas predeterminadas.

Se trata de dominar la voluntad del otro, considerado enemigo. Para lograrlo se acude a medios habitualmente no calificados de guerreros: la dominación del espíritu. Así, en el caso de Chiapas, tanto en el marco de las escaramuzas bélicas como en la paz armada que se ha prolongado por más de dos años y medio, la guerra continúa por otros medios y buscaría invadir el cuerpo y la mente del *enemigo*, incluida la población en general.

El ocultamiento sistemático de la realidad es una de las características de la guerra psicológica,

que busca imponer la verdad oficial, distorsionando o falseando datos, o bien inventando otros. Se recurre e insiste en temas deliberados, principalmente a través de la sugestión compulsiva (por ejemplo, la psicosis nacional por el Chupacabras, para muchos un experimento de guerra psicológica) con miras a alterar y controlar opiniones, ideas y valores y, en última instancia, cambiar las actitudes sociales según propósitos predeterminados. Esta historia oficial se impone a través de un despliegue propagandístico intenso y muy agresivo, al que se le respalda incluso poniendo en juego todo el peso de los más altos cargos oficiales: el caso del presidente Ernesto Zedillo en la coyuntura militar del 9 de febrero de 1995, cuando apareció en la televisión como garante del avance castrense.

Se trata, en definitiva, de obtener un consentimiento activo en la población civil; plasmar un alineamiento y, si es factible, una organización activa y favorable de los ciudadanos. O, de otro modo, en el ámbito de la "paz" política imponer un universo cultural que organice la totalidad de la realidad en función de los objetivos militares. Ese universo se vale de los campos de la información (TV, radio, prensa escrita), de la política, de la economía y hasta de la religión para construir la "verdad" e imponerla de manera represiva.

En México y pese al discurso oficial, el plan guerrero de acción psicológica es el fundamento visible (militarización de la policía del Distrito Federal y la presencia militar, fuera de sus cuarteles, en una docena de estados de la República, lo que apunta, a su vez, a una militarización de la sociedad y de la vida colectiva) de la estrategia de dominio del sistema. Dentro de esa militarización de los efectos psicológicos incluidos en la guerra, los objetivos son redefinidos como el enemigo —los blancos— que debe ser destruido ya sea a nivel individual o colectivo. En el primer caso se trata, siguiendo la denominación de Rozitchner, del llamado *comunicador llave*: la persona de mayor popularidad, prestigio, representatividad natural y centro de polarización de un determinado público que constituye su auditorio habitual y a quien le irradia directamente sus opiniones y actitudes. Es el centro del blanco de la acción psicológica.

El *comunicador llave* es el modelo social del hombre en el cual se reconoce, como propuesta, un grupo o masa —público— de personas que lo toman como índice de la realidad, valoraciones o proyectos. Pivote que articula, por identificación, el núcleo de un sentido social que se expande. Especie de superyo colectivo, irradia directamente, por su presencia personal, unitaria (sensible y racional) sus opiniones y actitudes. Para el caso de México, el Cuauhtémoc Cárdenas de 1988, Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, el obispo Samuel Ruiz y, fundamentalmente, el subcomandante Marcos a partir de 1994, simbolizado en el "todos somos Marcos" esgrimido por la sociedad civil urbana. Por eso mismo, ese lugar personal-social de un colectivo, que lo tiene como la presencia encarnada productora de significados, es el "blanco" que debe ser alcanzado para desviarle de su poder (corrupción, soborno, cooptación) o destruirlo.

Cuatro ejemplos de blancos colectivos en la guerra psicológica son: el PRD con su estela de muertos a manos del salinismo y el zedillismo; los campesinos guerrerenses victimados en junio de 1995 en Aguas Blancas por órdenes del gobernador Rubén Figueroa, en previsión de un nuevo foco guerrillero en esa entidad; los integrantes de la diócesis de San Cristóbal (obispo, clero, monjas, catequistas) y los miembros de la comandancia general del EZLN, aunque estos dos últimos por ahora han podido sobrevivir (no sin sobresaltos en el caso de la Iglesia) a las embestidas oficiales.

Entre paz y guerra no hay diferencia para conseguir los objetivos, sólo los medios difieren, aunque en el caso de Chiapas los recursos psicológicos fueron usados por la política interior del Estado tras la sorpresiva aparición del EZLN, y bajo la amenaza siempre presente de recurrir a la fuerza si no se logra la rendición del movimiento. De ahí que se afirme que la guerra psicológica en Chiapas supone la continuación de la guerra: no hay un campo de paz, sino sólo la apariencia de tal mientras se vence al zapatismo y se le domina de otro modo. Pero si se fracasa, el Estado recurrirá, directamente, a la salida bélica como han amenazado en forma reiterada el embajador Iruegas y Marco Antonio Bernal.

La lucha psicológica se transforma en permanente, universal y total. Permanente, porque ese

tipo de agresión no distingue entre tiempo de paz y tiempo de guerra. Universal, porque los medios modernos de difusión no se detienen en las fronteras y porque el enemigo recluta sus aliados en las mismas filas del adversario. Total, porque la lucha es llevada hasta el espíritu mismo del hombre.

Así, y debido a que la manipulación psicológica está destinada fundamentalmente a desvirtuar la actividad colectiva (sobre la base de que la destrucción individual supone el fin del grupo), los medios y mecanismos de los que se vale son variados. Entre ellos figuran los que afirman o exaltan instintos y hábitos individuales y sociales (necesidades) cambiando creencias, intenciones y deseos de actores diversos de población (conversión, diversionismo). Los que por sorpresa, provocando emociones, distraen la atención pública de su fijación en objetivos inconvenientes (dispersión, diversificación de temas, pantallas, confusión, engaño). Piénsese en el experimento psicosocial, a través principalmente de la televisión, en torno al ya mítico Chupacabras, o en las filtraciones recurrentes sobre la situación de Carlos y Raúl Salinas o la existencia de tres Mario Abulto. Los que explotando principios de inercia psicológica o las tendencias al menor esfuerzo y a la fijación de hábitos, reiteran motivaciones y presentan explicaciones tendenciosas, simples o vulgares de hechos complejos (vulgarización, simplificación, repetición).

Puesto que la batalla es por el corazón y las mentes de la gente, el poder tiene conciencia de que los medios son el poder, y lo utilizan para incrementar el propio. Recurre así al poder de credibilidad de la palabra impune, escrita u oral, "planeada" por el efecto que tiene frente a la inercia y debilidad de la conciencia pública.

Actualmente, el centro neurálgico de los conflictos de baja intensidad, de las operaciones especiales y, en particular, de la guerra psicológica es Fort Bragg, situado en Carolina del Norte. Allí estudió el general Mario Renán Castillo, al frente ahora de la lucha contrainsurgente en Chiapas.

El organismo es conocido desde 1969 como Centro John F. Kennedy para Asistencia Militar. Fort Bragg alberga a la escuela de guerra psicológica más sofisticada del mundo, dedicada a actividades de instrucción, elaboración de materiales y desarrollo técnico-doctrinario. Allí se aloja el 4o. Grupo de Operaciones Psicológicas que jugó un papel fundamental en Vietnam. El grupo tiene personal especializado en inteligencia y propaganda. Posee equipo como transmisores y receptores de radio, proyectores, altavoces, laboratorios de fotografía e imprentas portátiles capaces de reproducir volantes a color, revistas de calidad profesional, panfletos, posters e incluso libros. Sus equipos de desarrollo publicitario están entrenados para desarrollar material escrito sobre cualquier tema o mensaje.

Genéricamente existen tres tipos de propaganda: blanca, gris o negra. La blanca se disemina ampliamente y tiene fuente conocida; se sabe quién la emite. La gris no será identificada por su fuente y queda librada a la imaginación del público. La negra pretende aparecer como originada por una fuente que no es la verdadera.

El sentido de todo este proceso tiene que ver con la elaboración de la verdad colectiva. Su intento es lograr que aparezca como verdadero lo falso, intercalándose en toda la trama social para producir un efecto que impida la lectura adecuada de los índices de la realidad en los habitantes y los grupos tomados como blanco (léase los zapatistas, la iglesia local de Samuel Ruiz, etcétera). Para ello, estos mensajes deben disfrazarse en la realidad y darse la apariencia de ser espontáneos y "naturales", como si surgieran desde dentro del fenómeno social. Se trata de un intento calculado y artificial para desvirtuarlo en su modo de aparecer: permitir sugerencias de espontaneidad, naturalidad, veracidad, que logren un impacto psicológico. Y culmina en la propaganda negra, la más siniestra, introduciendo un efecto disociador, destruyendo las redes de coherencia y haciéndoles emitir desde la misma fuente, como si fuesen propios, mensajes contradictorios que constituyen un vínculo doble y antagónico.

Libros como *La rebelión de las cañadas* o *México: en la frontera del caos* se inscribirían dentro de las técnicas de propaganda enseñadas en Fort Bragg y aplicadas a la guerra psicológica, según denuncias documentadas por expertos como Carlos Montemayor, gente ligada a las

víctimas de la guerra sucia, como Rosario Ibarra y Fritz Glockner, o vinculada directa o indirectamente a los protagonistas como Andrés Aubry, Javier Elorriaga y el propio subcomandante Marcos.

Sin embargo, como veremos en el caso de Chiapas y puesto que la GBI se libra de manera no convencional, además del uso maniqueo de la propaganda (amigo-enemigo/blanco-negro) echa mano de otros recursos complementarios dirigidos a incidir en los comportamientos colectivos, en las conductas y opiniones.

Las dos principales herramientas complementarias de la propaganda son la acción cívica y el control de poblaciones. La acción cívica (modalidad militar de la beneficencia pública) tiene como objetivos mejorar la imagen de las fuerzas armadas, construir un apoyo popular al esfuerzo bélico y recolectar información de inteligencia.

En su dimensión clásica, la acción cívica contiene iniciativas de alcance local. Se trata de llevar adelante, en forma preferente con personal militar nativo (de la provincia o comunidad) proyectos útiles a la población y atender sus necesidades básicas. La finalidad, según definió James Taylor, es reducir vulnerabilidades mejorando la calidad de vida de sectores subordinados (rurales y urbanos). La satisfacción de tales necesidades es el criterio clave y, por lo regular, se instrumentan obras y servicios variados como alimentación, donación de ropa y calzado, alfabetización de adultos, educación para niños, asistencia agrícola, infraestructura (construcción o reparación de caminos, escuelas, puentes, clínicas, agua potable, electricidad, casas habitación, comunicación), planificación familiar, recreación, medicinas, salud (vacunaciones, atención odontológica, médica y veterinaria) y corte de pelo.

Actividades como la construcción de caminos, presentadas como un beneficio a la comunidad, suelen tener objetivos militares netos para el control territorial y el traslado de hombres y equipos, como ocurre desde 1994 en Chiapas. Por otra parte, la acción cívica abraza también aspectos políticos y realza las reformas macrosociales. En ese sentido, da relevancia al fortalecimiento de los gobiernos locales, por ejemplo, municipales, lo que responde a una inspiración global que apunta a la idea de restaurar la credibilidad y estabilidad (institucional). De allí el inusitado activismo desplegado durante 1995 y 1996 por el gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro en favor del "bienestar y desarrollo sustentable" en esa entidad.

De manera facciosa, la "ayuda humanitaria" suele utilizarse como una categoría políticamente neutra y, sobre todo, no militar. Sin embargo, es parte de una estrategia global y contribuye a la edificación de un consentimiento activo.

Por su parte, el control de poblaciones opera sobre el desplazamiento de comunidades desarraigadas de sus lugares de origen, refugiados internos sobre los que se explota deliberadamente su experiencia de vulnerabilidad y de peligro, de indefensión y terror, a fin de marcar en profundidad su psique. Los ejecutores de estas políticas asumen un comportamiento prepotente que deja en claro quién es el señor, quién da o quita, quién define y decide.

En su aspecto práctico, el control de poblaciones consiste en la reubicación de los desplazados en nuevos asentamientos (aldeas estratégicas o equivalentes), genéricamente en condiciones de hacinamiento y donde el alimento y las medicinas recibidas terminan generando dependencia y quebrando resistencias, por la vía de amasar vínculos enajenadores y despersonalizadores para que, luego de una readaptación —el llamado "síndrome del refugio"—, sus miembros varones puedan ser reclutados en grupos de autodefensa civil (siguiendo el ejemplo de las patrullas civiles en Guatemala). El objetivo del control de poblaciones es simple: quebrar la infraestructura de apoyo de la insurgencia.

En la GBI, la influencia ideológica procura afianzar ciertos significados políticos, estructurados generalmente alrededor del concepto de nación y dirigidos a desacreditar al enemigo. Otras dos fuentes de justificación son la religión y la democracia.

No fue casual que durante la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) celebrada en 1988 en Mar del Plata, Argentina, bajo la jefatura de los generales estadounidenses John

Ballantyne, presidente de la Junta Interamericana de Defensa y Fred Woerner, titular del Comando Sur, se discutiera "la estrategia de penetración puesta en acción por la subversión a través de la teología de la liberación, que incide en diversos movimientos religiosos en escala continental", y "la aplicación de la teoría de Gramsci de avanzar hacia la conquista del poder mediante el control de la cultura y la educación, y los medios de difusión".

Ese encuentro castrense definió que en adelante se asimilarían los términos subversivo y guerrillero a todos los que pensarán y promovieran ideas que implicaran la negación del orden establecido, represivo y aterrorizante, incluidos los miembros de las iglesias. Desde entonces también, las fuerzas armadas de América —las de México incluidas— se promovieron como colaboradoras en la persecución que la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano ejerce en América Latina contra las mismas teorías. Así, tanto la cultura como las realidades sociales imperantes fueron definidas como blanco de dominación por las categorías de la guerra.

La importancia de la clave religiosa en el conflicto de Chiapas explicaría el comportamiento del nuncio apostólico Girolamo Prigione, quien desde el descubrimiento por el ejército del campamento zapatista en la Sierra Corralchén, comenzó a comportarse como un elemento orgánico al servicio de la política de seguridad nacional de México. Así, intentó quitar de la diócesis de San Cristóbal al obispo Ruiz y desmontar la iglesia local con rostro indígena, logrando no la remoción del prelado, pero sí imponiéndole un coadjutor (adjunto), Raúl Vera, con derecho a sucesión.

Tal y como fue concebida en sus orígenes, la GBI busca generar consenso pero, si no lo logra, entonces recurre al terror. El dilema es ganar a la masa o destruirla mediante un esquema de guerra psicológica (guerra sucia) orientada en lo fundamental contra todos aquellos que constituyen la base social de apoyo, material o intelectual, real o potencial, de los insurgentes. Y a falta de una justificación, legal o política, para encomendar a los ejércitos o a las fuerzas de seguridad la acometida contra la sociedad civil, la tarea es encargada a los aparatos clandestinos, conocidos tanto en Centroamérica como en Sudamérica, con el nombre de escuadrones de la muerte que secuestran, torturan y asesinan a sospechosos de colaborar con un movimiento revolucionario.

Hay que tener presente que la deshumanización de la guerra mediante el asesinato político y la tortura no es un resultado accidental sino un recurso que ocupa un lugar central en la estrategia de contrainsurgencia, cuyo objetivo fundamental es el aniquilamiento del movimiento revolucionario. En la nueva estrategia del Pentágono, la guerra psicológica hace las veces de guerra sucia pero su aplicación refuerza, prolonga y, en algunos casos, hasta amplía los daños psicosociales del terrorismo de Estado propio de ese esquema de control.

Dicha modalidad de guerra paralela busca alcanzar los mismos objetivos de la guerra sucia, pero eludiendo sus costos políticos y tratando de salvaguardar la imagen de democracia formal y aparentar el libre juego político; aunque ello exhiba, como en el caso de Chiapas, la contradicción que existe entre las necesidades militares y las exigencias políticas.

Como señalaron en 1977 los obispos brasileños en su XV Asamblea General:

La seguridad, como bien de la nación, es incompatible con una permanente inseguridad del pueblo. La inseguridad se caracteriza por medidas represivas arbitrarias, sin posibilidad de defensa, internamientos forzados, desapariciones inexplicables, procesos e interrogatorios degradantes, y actos de violencia cometidos con la fácil valentía del terrorismo clandestino y con frecuente y casi total impunidad.

Según los especialistas, la impunidad con que actúan los grupos paramilitares en Chiapas revela el grado de connivencia, apoyo y patrocinio con que cuentan de parte de los ganaderos locales, autoridades policiales, militares, funcionarios y legisladores del PRI, entre quienes destacan, según denuncias de ONG, el secretario de Gobierno, Eraclio Zepeda, los diputados priístas Samuel Sánchez Sánchez y Rafael Ceballos Cancino —ex presidente de la Unión Nacional de Productores de Café—, el ganadero Carlos Cañas Parada y el ex presidente mu-

nicipal de Bachajón, Abigael Morales.

Dos grupos paramilitares plenamente identificados por la prensa y los organismos de derechos humanos, que por ahora operan en el norte del estado, fuera de la llamada zona de conflicto (municipios de Tila, Sabanilla, Simojovel, Salto de Agua y Tumbala) son el Frente Cívico Luis Donaldo Colosio (los Chinchulines) y Paz y Justicia, ambos vinculados al PRI. A éstos se suman el grupo Tomás Munzer de Ocosingo y las Fuerzas Armadas del Pueblo de Venustiano Carranza, reportados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Por su parte, la Coordinadora Indígena de la Sierra del Sur (CISS) denunció que presuntos mercenarios centroamericanos contratados por caciques cafetaleros se desplazaban armados con fusiles de asalto por los municipios de ángel Albino Corzo, Motozintla y la región alta de Escuintla.

Otro grupo paramilitar vinculado al ejército, según el periodista Hermann Bellinghausen, es el denominado Cuerpo Maya, una fuerza especial integrada por soldados, transferidos formalmente a funciones policiales, que fueron entrenados en sobrevivencia y patrullan el monte alimentándose de raíces. Estos *scouts* tienen la particularidad de llevar el pelo largo.

CAPITULO 2

Los primeros cien días de Zedillo

El balance de los primeros cien días de gobierno de Ernesto Zedillo no pudo ser más desalentador. Según los analistas, 1995 habría de ser recordado como "el año del desencanto". De súbito, tras la devaluación del peso el 19 de diciembre de 1994 se rompió la magia. Terminó la creencia de que el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y al NAFTA, le daban al país la contraseña para acceder al Primer Mundo.

De la oferta de campaña zedillista "bienestar para la familia", en medio de un clima de paz y crecimiento sostenido, sólo quedaba en apenas tres meses un sabor a desánimo y a engaño colectivos. Zedillo había llegado a Los Pinos respaldado por 15 millones de votos, y ya que las protestas opositoras sobre el fraude electoral amainaron pronto, tuvo una legitimidad de la que no gozó su antecesor. Sin embargo, en apenas cien días de gestión Zedillo vio disminuir su popularidad como ningún otro mandatario en México. Cuando Salinas asumió la presidencia en 1988, logró en sus primeros cien días una "precisión política poco común", según sus apologistas, ya que logró recuperar la legitimidad que no obtuvo en las urnas. Al contrario, en ese mismo lapso, Zedillo la había perdido.

Para el primer trimestre de 1995 prevalecía la incertidumbre, la indefinición y la desconfianza en cuanto al rumbo político y económico. La oposición llegó incluso a decir que el presidente "se tambaleaba", dando a entender que había un estado de ingobernabilidad, a lo que Zedillo respondía que la popularidad personal no contaba. Más bien, se concentró en tratar de cumplir con prontitud dos promesas electorales: un nuevo equilibrio de poderes y la reforma del corrupto poder judicial. Se reunió con la dirigencia nacional del PRD, partido con el cual Salinas se confrontó en forma abierta durante todo su sexenio; realizó sendas visitas a la Cámara de Diputados y al Senado, y negoció con los cuatro partidos con representación parlamentaria un Acuerdo Político Nacional, proyecto que cristalizó el 17 de enero de 1995 con la presencia en Los Pinos de los presidentes del PRD, del PAN y del Partido del Trabajo (PT), y de personalidades como el poeta Octavio Paz.

El pacto intentó expresar el consenso sobre la necesidad de lograr la transformación democrática del Estado, de una forma civilizada y plural. Sin embargo, las reformas zedillistas al poder judicial y a la administración pública fueron aprobadas en el Congreso por la vía del mayoriteo, lo mismo que ocurriría poco después con el paquete de rescate financiero de Estados Unidos y de la comunidad internacional, por casi 50 mil millones de dólares.

La primera crisis en su gabinete —además del devastador *crack* de diciembre— la enfrentó Zedillo a los 28 días de asumir el gobierno, con la renuncia del secretario de Hacienda, Jaime Serra. La devaluación del peso y la repercusión en todos los mercados bursátiles del llamado *efecto tequila* convirtió al país en fuente de inseguridad. "México ha perdido credibilidad frente a los mercados financieros internacionales", sentenció *The Wall Street Journal*, no obstante desde octubre de 1992 el conocido economista Rudiger Dornbusch había advertido que el peso estaba sobrevaluado y que México tendría que modificar la relación de su moneda frente al dólar. Tras el *crack* de diciembre el secretario del Tesoro estadounidense, Robert Rubin, dijo que también a mediados de 1994 la administración Clinton ya había advertido al gobierno de Salinas sobre la posible crisis que se avecinaba.

Distintas explicaciones intentaron aclarar la salida masiva de capitales "golondrinos", previo al 19 de diciembre, siendo la más socorrida la tesis de la incertidumbre de los especuladores luego del asesinato de Colosio. La prensa mexicana no dejó de especular con que la fuga masiva de dólares en noviembre-diciembre de 1994 estaba ligada al crimen organizado en

una nación donde la economía está narcotizada desde los gobiernos de De la Madrid y Salinas. Es decir, que el capital especulativo sería un simple subsidiario de la economía criminal basada en el narcotráfico.

Antes de presentar su renuncia Serra había iniciado gestiones en Estados Unidos para obtener un paquete de ayuda financiera cercano a los 50 mil millones de dólares, para enfrentar el vencimiento de los Tesobonos (valores gubernamentales en dólares) por unos 30 mil millones, cuando el país tenía reservas menores a los 6 mil millones de dólares.

Ante el rechazo del Congreso estadounidense, el paquete de rescate fue impulsado en enero de 1995 directamente por Clinton, quien tampoco logró el apoyo de Europa y Japón. El paquete crediticio, que cambió deuda de corto por largo plazo y comprometió como prenda de garantía las facturas petroleras de Pemex, sirvió para que corredurías como la Goldam Sachs, de donde salió Robert Rubín para hacerse cargo del Tesoro, pudiesen recibir íntegro el pago de sus vencimientos durante ese año, siendo dicha correduría la mayor tenedora de los Bonos de la Tesorería.

El país cerró 1995 con un retroceso de más de medio siglo en materia de desempleo y producción, con una caída real del producto interno bruto (PIB) de 7%, inflación de 52% y más de 1.7 millones de empleos "desaparecidos". Según reconocería el presidente Zedillo en junio de 1996, la crisis costó al país 70 mil millones de dólares, además de que la deuda externa total creció 20% para alcanzar en ese mismo mes la cifra récord de 170 mil millones de dólares, y 14 mil millones en pago de intereses.

Tras 12 años de "ajuste estructural", con un doloroso costo social, el gobierno anunció el 9 de marzo de 1995 un nuevo programa de emergencia ya acordado previamente con el FMI y otros organismos multilaterales. Se comparó el efecto que tendría ese plan de choque con el equivalente a una economía de guerra, y se auguró una caída del PIB de 2%, que según el FMI podría llegar a 4%, pérdida de 750 mil empleos en el primer semestre de ese año, inflación de 42%, aumento de 5% en el impuesto al consumo (IVA), que pasó de 10 a 15% —igualmente resistido por amas de casa, comerciantes, empresarios, obreros y parlamentarios—; aumento de 35% en el precio de la gasolina y de 20% en las tarifas eléctricas y de gas, y un aumento de sólo 10% en los salarios.

Según el estudio "La pobreza en México", elaborado en 1991 por el actual subsecretario de Hacienda, Santiago Levy, 60% de la población total —sobre un estimado de 92 millones de habitantes— se clasifica como pobre mientras que de 20 a 25% vive en condiciones de pobreza extrema.

El 9 de febrero de 1995, un mes antes de que se anunciara el plan de choque, entró en operación un importante dispositivo de seguridad nacional llamado Reacción Inmediata de Máxima Alerta (RIMA), mediante el cual el ejército comenzó a entrenarse en "dispositivos de control de disturbios civiles". En medios políticos se dijo que los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían recomendado a sus pares mexicanos "extremar las medidas de seguridad" y un mayor endurecimiento con el propósito de prevenir un eventual desborde social por la crisis económica, que a su vez derivara en una crisis política incontrolable.

El 14 de marzo de 1995, en entrevista con el *Times* Zedillo admitió que estaba en una situación de "manejo de crisis". También aceptó que no se había imaginado que los primeros tres meses de su gobierno iban a ser "tan complejos", y dijo que fue sorprendido por el grado de vulnerabilidad de la economía mexicana. Respecto del plan de ajuste, que fue lanzado por Zedillo casi en solitario —sin el aval de los banqueros, los industriales y la cúpula obrera oficialista—, afirmó: "Sé que va a ser doloroso. Sé que a nadie le va a gustar. Pero esto es lo que el país necesita."

Y la acida receta del FMI y el Banco Mundial, tuvo el efecto de una operación sin anestesia.

El 1 de diciembre de 1994, cuando asumió funciones, Zedillo dejó de ser "el primer priísta del país". Ya antes había dicho que cuando jurara como presidente, pasaría a ser un "priísta en receso".

Tal afirmación estaba relacionada con su promesa de campaña de impulsar la separación PRI-Estado. Sin embargo, una tensa relación con su partido y los complejos problemas políticos que afrontaba —incluido un conato de revuelta en el estado petrolero de Tabasco— lo obligó el 6 de febrero de 1995, y luego el 4 de marzo siguiente, a reafirmar su militancia priísta y a reclamar el apoyo de sus correligionarios.

En el caso de Tabasco, donde el candidato ganador priísta Roberto Madrazo, fue desconocido por la oposición, que realizó masivas movilizaciones, el gobierno había llegado a un acuerdo tácito con el PRD para realizar nuevos comicios. Sin embargo, Madrazo se indisciplinó y no acató la orden del centro de pedir licencia. Madrazo contó con el apoyo del sector tradicionalista del PRI y con un grupo compacto de gobernadores priístas, interesados en detener cualquier reforma interna.

Desde otro ámbito, el de la justicia, Zedillo también enfrentó una crisis cuando el procurador panista Antonio Lozano comenzó a jalar del hilo de la corrupción. Un nuevo fiscal quedó al frente de las pesquisas sobre los homicidios de Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu: en el primer caso se concluyó que el crimen de Lomas Taurinas fue producto de un complot, lo que destruyó la teoría del asesino solitario (Mario Aburto), y en el segundo, las investigaciones llevaron a la detención del hermano mayor de Carlos Salinas, acusado de ser el coautor intelectual del homicidio de su ex cuñado.

El encarcelamiento de Raúl Salinas, confinado desde fines de febrero de 1995 en el penal de alta seguridad de Almoloya, significó una ruptura de las leyes no escritas —pero nunca violadas— del cambio sexenal. El presidente saliente guarda silencio y el entrante se compromete a no atacar a su antecesor, ni a miembros de su familia. La detención de Raúl rompió con ese pacto de oro que sostenía lo que el historiador Lorenzo Meyer llamó la "perversa solidaridad entre los miembros de la llamada clase política". Su cohesión se apoyaba en una cadena histórica de complicidades, ajena a cualquier estado de derecho. Pero el juramento de *omertá* —el código de silencio de la mafia siciliana— en su variante mexicana terminó con la impunidad en México, según palabras del propio Zedillo.

La captura de Raúl Salinas alcanzó visos de tragicomedia, cuando en protesta su hermano Carlos realizó una brevísima huelga de hambre; lo cual, pese a las ironías de la prensa, parecía indicar que en el fondo estaba en curso un proceso de degradación-degeneración del sistema político, en el marco de una profunda crisis económica que no se registraba desde 1982, además de dos crímenes en el seno de la élite gobernante, el asesinato de un cardenal, el alzamiento indígena en Chiapas, en la frágil frontera con Guatemala y el factor estadounidense incidiendo cada vez con más fuerza en todos los ámbitos del espectro nacional, incluyendo el tema de la seguridad nacional a partir del paquete de rescate financiero de la administración Clinton.

El caso Ruiz Massieu dio un giro con la detención de Salinas, este último considerado uno de los operadores tras bambalinas de Pronasol, padrino de muchos políticos regionales con posiciones clave dentro del aparato gubernamental y partidista, y vinculado estrechamente a Joseph-Marie Córdoba. Entre el cúmulo de hipótesis que se manejaron, se dijo que Raúl habría estado en confrontación con Colosio y con el ex secretario general del PRI y que el Grupo Atlacomulco, entre ellos Carlos Hank González, Ignacio Pichardo y el ex procurador Humberto Benítez, estuvieron vinculados al crimen. También se mencionó a la ex secretaria y presidenta del PRI, María de los Ángeles Moreno, electa senadora en los comicios de 1994.

Más allá de las especulaciones, lo que dejaba en claro la detención de Raúl y las investigaciones subsecuentes, es que dentro del otrora grupo compacto del ex presidente Carlos Salinas había ocurrido una ruptura muy profunda, lo que provocó que corriera la sangre.

El día en que Raúl Salinas fue capturado, su hermano menor apareció en un telenoticiero —horas antes de que en la calle se conociera la noticia— para protestar por las acusaciones de que estaba siendo víctima de parte de funcionarios del nuevo gobierno, que le imputaban haber obstruido las investigaciones sobre el asesinato de Colosio cuando aún era mandatario, y de ser el responsable de la crisis económica. Tras su alegato público, Carlos Salinas inició un ayuno inde-

finido... de algunas cuantas horas.

Pero el silencio había sido roto. El ex presidente dijo también que la devaluación del peso se debió a errores del gobierno de Zedillo, y finalmente, el día 4 de marzo, tras arduos forcejeos desde la cúpula, obligó a éste a pactar en lo que la mayoría de los analistas interpretó como una victoria del mandatario saliente. El gobierno emitió un comunicado destacando el ilimitado apoyo otorgado por Salinas a las investigaciones del crimen de Colosio (Zedillo lo exoneró de toda culpa, sin dar pie a que actuara la justicia) y se comprometió a difundir un documento que elaborarían los dos últimos secretarios de Hacienda (Aspe y Serra Puche), para dejar en claro los sucesos económicos que llevaron al *crack* financiero.

Posterior a ello, Carlos Salinas se trasladó a Estados Unidos y desde allí negó que fuera un autoexilio. Pero desde entonces su vida ha transcurrido en una virtual semiclandestinidad con residencias sucesivas o alternas en Canadá, Cuba, Jamaica e Irlanda.

La rabieta de Carlos Salinas demostró en todo caso el poder que todavía tenía el salinismo, y que avanzado el año 1996 conservaba ramificaciones importantes en el gabinete, con tres hombres en puestos clave como Guillermo Ortiz, Herminio Blanco y Carlos Rojas, y tres gobernadores leales: Otto Granados, Patricio Chirinos y Manlio Fabio Beltrones. Más aún, el salinato contaba con importantes aliados en la cúpula empresarial: baste mencionar a los 24 multimillonarios beneficiados por el proyecto privatizador, entre ellos Hank González, con una fortuna estimada por *Forbes* en 1 300 millones de dólares, y Carlos Slim, *el Rey Midas*, con riquezas superiores a los 6 600 millones de dólares.

Al cerrar 1995 podía leerse que hubo una ruptura entre dos grupos de poder y no se descartaba una purga entre funcionarios que ahora estaban con Zedillo, pero que antes habían jurado lealtad eterna al presidente en turno. Para que Zedillo se afirmara en el mando, era precisa una fractura del viejo y anquilosado aparato político; no obstante que, para ello, era preciso romper con las alianzas y candados heredados de Salinas. Parecería la salida más idónea, aunque eso requeriría de parte de Zedillo una voluntad de estadista y no de facción. Tendría que demostrar que estaba a la altura del desafío y encabezar una genuina regeneración del arcaico sistema político.

El escenario de un posible golpe de Estado no fue descartado por los líderes de opinión en los partidos y la prensa, e incluso se habló de un gobierno a la Fujimori, con los militares sosteniendo desde atrás la debilitada figura del presidente.

Nadie descartó al narcotráfico —o a la narcopolítica— como el posible enlace para entender la razón y secuencia de los tres crímenes ocurridos entre mayo de 1993 y septiembre de 1994, desde la "confusión" que le costó la vida al cardenal Posadas, hasta la bala que acabó con Ruiz Massieu. Y si Zedillo quería establecer en México un estado de derecho, y sanear y regenerar al sistema político como lo había prometido, necesariamente tenía que enfrentarlo.

Fueron muchos los reportajes y comentarios de prensa que por esas fechas especularon sobre las ramificaciones del narcotráfico, señalando por ejemplo que durante el salinismo el cártel del Golfo, comandado por Juan García Ábrego (posteriormente preso y expatriado a Estados Unidos por el FBI), había logrado ganar posiciones en la disputa a muerte con otros cárteles por el control de rutas y mercados, gracias a sus vínculos con la clase política. Otra versión sugería que en los asesinatos de Colosio y Posadas estaban metidas las manos del cártel de Tijuana, asociado al del Golfo, según las denuncias no desmentidas de un ex colaborador del procurador Jorge Carpizo.

El 7 de octubre de 1994, *The Wall Street Journal* se aventuró a señalar en un editorial que el asesinato de Ruiz Massieu respondía a un complot entre narcotraficantes del cártel del Golfo y "gente muy poderosa" del gobierno. ¿Incluía esa referencia a Carlos Salinas? En todo caso, no faltó quien se apropiara de esa hipótesis. Meses después, en marzo de 1995, el mismo diario y el *The Washington Post*, citando fuentes sin identificar, difundieron sendas versiones sobre supuestos vínculos de Raúl Salinas y el ex subprocurador Mario Ruiz Massieu con el cártel del Golfo. Según esto, mientras seguían las investigaciones por el crimen de su hermano José Francisco, Mario Ruiz Massieu habría "rasurado" declaraciones de detenidos para encubrir la

participación de Raúl Salinas en el homicidio, en "un pacto de silencio y mutua protección [...] Ni Raúl Salinas denunciaría las relaciones del cártel con el subprocurador, ni éste su implicación en el asesinato de su hermano" (*The Washington Post*).

Las pesquisas sobre la procedencia de las cuentas bancarias de Mario Ruiz Massieu en el Texas Commerce Bank de Houston, luego de que éste fue detenido en Estados Unidos, involucraron al empresario Carlos Hank Rhon, hijo de Carlos Hank González, principal accionista del Laredo National Bank y vinculado con el Texas Commerce en traspasos financieros oscuros, según afirmó el diario *La Jornada*. El 16 de marzo, *Los Angeles Times* señaló que Raúl Salinas realizó "lavado de dinero" para el cártel del Golfo, a través de múltiples compañías fantasma de las que era propietario el hermano del ex presidente. En nota de primera plana, el diario afirmó que Raúl Salinas fue visto junto con Juan García Ábrego en el aeropuerto de Agualeguas, Nuevo León, y en restaurantes del Distrito Federal. Ese mismo día, en Washington, el senador demócrata Ernest Hollings preguntó en una audiencia al director de la agencia antinarcóticos, DEA, si tenía conocimiento sobre "un posible vínculo entre Joseph-Marie Córdoba Montoya y la narcotraficante Marcela Bondestedt", del cártel del Golfo. Bondestedt fue también vinculada al ex secretario de Comunicaciones y Transportes de Salinas, Emilio Gamboa Patrón.

Hacia fines de 1995, la situación política de México era del todo impredecible. Analistas como Lorenzo Meyer pensaron que dentro de un panorama tan negro, "un átomo de optimismo" derivado de la acumulación de errores y corrupciones de la clase dirigente, aunada a una lenta pero creciente conciencia ciudadana, abrían la posibilidad de poner fin "al largo periodo de vida autoritaria".

Pero para que el autoritarismo y la antidemocracia dejaran de ser la norma, era indispensable que el presidencialismo fuera transformado. Que se le despojara de sus enormes poderes meta constitucionales y anticonstitucionales, y se permitiera por fin el surgimiento de un poder legislativo digno de ese nombre. Para ello era también condición necesaria que "el desprestigiado partido de Estado deje de existir como tal", dijo Meyer.

La posibilidad de un cambio sustantivo se basaba no sólo en la cadena de errores, ineficacia y corrupción de un sistema de poder monopólico, sino también en los cambios sociales y culturales que estaban teniendo lugar en México desde los últimos cinco lustros, y que hicieron posible el surgimiento de partidos de oposición reales y organizaciones ciudadanas independientes. Por otro lado, también las crisis económicas cíclicas y la falta de opción para las mayorías dentro de un modelo impuesto a partir de 1982, y que respondía a la lógica depredadora y especulativa del gran capital financiero internacional, amenazaban ahora, tras el *crack* de diciembre, la estabilidad de "la dictadura perfecta", cuyos pilares de un férreo presidencialismo y la simbiosis PRI-Estado mostraban signos de estar corroídos desde sus cimientos.

Empero, no pocos politólogos advirtieron sobre el riesgo de que en aras de construir una nueva institucionalidad democrática se generase un vacío de poder, presto a ser llenado por otra forma de autoritarismo, incluso más expedito y brutal. En concreto, un autoritarismo de bota militar o un gobierno civil tutelado por las fuerzas armadas. La constatación hecha por algunos observadores de un avance castrense muy cerca del entorno presidencial dio pie a inquietantes rumores.

El 9 de febrero de 1995, luego de reunirse con un grupo de militares, el presidente Zedillo ordenó al ejército proceder a la captura de la cúpula zapatista en Chiapas con el consiguiente despliegue de fuerzas, en momentos en que el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, se aprestaba a reanudar las conversaciones de paz con el EZLN.

Moctezuma "se enteró por televisión, como cualquier persona" del vasto operativo militar, según declaró un diputado, lo que hizo suponer que el alto mando castrense convenció a Zedillo de la necesidad de la medida, o bien que la SDN tomó la decisión de incursionar en Chiapas para poner fin al conflicto armado, haciendo a un lado al secretario encargado de conducir la política interior. La prensa habló de un golpe de Estado "técnico" y se agitaron los fantasmas de otro

fujimorazo.

Pero el sistema estaba obligado a recordar que más de la mitad de los mexicanos habían votado en 1994 en contra de la permanencia del partido de Estado, y que difícilmente la ciudadanía estaba dispuesta a transitar de buen agrado de un tipo de antidemocracia a otro.

CAPITULO 3

Diciembre para recordar

Casi día con día, antes de que el priísta Eduardo Robledo asumiera la gubernatura de Chiapas el 8 de diciembre, se insistió en que el reinicio de la guerra era inminente. El 1 de diciembre anterior el presidente electo ofreció dialogar con los "inconformes", y diálogo también habían pedido los diputados priístas, la oposición en el Congreso y el propio obispo Ruiz, al frente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), así como el subcomandante Marcos desde el poblado de Aguascalientes, en la selva Lacandona.

Sólo Robledo, gobernador por obra del fraude, pidió que se intensificaran los patrullajes militares en Tuxtla Gutiérrez y en la ciudad de San Cristóbal, donde el candidato local perredista Amado Avendaño instaló su "gobierno en rebeldía". Los dos ejércitos que cohabitaban en Chiapas, el oficial y el indígena, se declararon en alerta roja. El EZLN notificó el 10 de diciembre a la Cruz Roja el cese de la tregua armada que había sido acordada en las pláticas con Camacho, mientras los tres bastiones zapatistas en los linderos de la selva —Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo—estaban ya bajo un virtual cerco militar. Las *zonas francas* respetadas durante diez meses desaparecieron y los campesinos reportaron la intensificación de vuelos de reconocimiento por parte de la fuerza aérea y el paso de largas columnas blindadas.

A ambos lados de esa confusa línea Maginot selvática, milicianos del EZLN abrían trincheras y preparaban a la población para una eventual evacuación. La Conai calificó la situación de extremadamente grave.

El día 12 el EZLN dijo en un comunicado que la guerra era inminente y mientras la Conai llamaba a las partes a negociar, Zedillo ponía en duda la imparcialidad del obispo Ruiz en su labor de mediación y, en cambio, propuso crear una comisión legislativa plural integrada por representantes de los cuatro partidos con representación en el Congreso, lo que fue visto como un intento para restarle espacio y peso a la gestión religiosa.

"Con dos gobiernos y dos ejércitos se inicia una guerra civil", dijo Samuel Ruiz el día en que asumieron Eduardo Robledo y Amado Avendaño: el primero en la intimidad del priísmo, pero bajo un descomunal despliegue militar y policiaco, ya que a la toma de posesión había asistido el presidente Zedillo, y el segundo media hora después, en una plaza pública, ante unos cinco mil indígenas que le dieron a Avendaño el bastón de mando de las etnias chiapanecas, según el ritual maya.

"Robledo es la guerra", comentó Marcos tres días antes de su protesta, cuando recibió en la selva la noticia de que el gobierno federal estaba dispuesto a apoyarlo.

Antes de que Zedillo llegara a Los Pinos, Mario Luis Fuentes, joven asesor del presidente electo, contactó con el EZLN. Como emisario especial del futuro mandatario, fue el único representante del gobierno, después de Manuel Camacho, que estableció una comunicación directa con la insurgencia.

"Por cada guerrillero dispuesto a morir, usted va a necesitar cincuenta soldados dispuestos a matar, setenta fosas para la población civil y una chequera para pagar cien árboles destruidos que, cuando termine la guerra, todo el mundo va a venir a cobrarle a precio de oro", fue el mensaje que envió a Zedillo el EZLN. Más o menos, el mismo cálculo de costos que le hizo Fidel Castro a Carlos Salinas y al general Miguel Ángel Godínez, responsable militar en Chiapas.

Pero a Zedillo esas cifras le parecieron desorbitadas: el ejército federal no sería el primero en disparar, según había reiterado el nuevo presidente. Prefería dejarle la iniciativa bélica al adversario, aunque se pensara que la forma más expedita de resolver el conflicto era el

aniquilamiento de los rebeldes. Pero al parecer los militares priorizaron las acciones de inteligencia y Zedillo las de propaganda. Habló de paz y de diálogo, aunque se pensara en la rendición incondicional del EZLN.

El 12 de diciembre se anunció la creación del "municipio zapatista" de San Pedro de Michoacán, en Guadalupe Tepeyac (Las Margaritas), "estado rebelde de Chiapas". Así rezaba en un cartel al frente de la fachada del edificio donde despacharían las nuevas autoridades con base en la Constitución de 1917 y las "leyes revolucionarias". Al posesionar a los nuevos munícipes, el comandante Tacho les recordó que "las autoridades del pueblo deben mandar obedeciendo lo que el pueblo diga. Si ustedes se apartan del camino que marca la voluntad del pueblo, serán desconocidos por el mismo pueblo".

Varias regiones "autónomas" fueron instaladas en otros lugares de Chiapas, según la idea de Avendaño —quien contaba con apoyo rebelde— de mantener un gobierno transitorio mientras lograba "su plena legalidad a través de la formación de gobiernos legítimos en toda la entidad".

En Miami, donde participó en la Cumbre de las Américas, un Zedillo sonriente dijo a los periodistas que estaba descartada la designación de un nuevo comisionado para la paz en Chiapas. Habrá un canal "digamos, más institucional" cuando la tensión baje, afirmó por todo comentario.

Si alguien especuló con que el EZLN reiniciaría la guerra aprovechando la ausencia de Zedillo, esto no fue así. Ya Marcos había dicho que el EZLN no estaba declarando la guerra sino que "el tiempo se agotó", aunque reiteró su disposición a un diálogo con el gobierno pero "de cara a la nación, no en secreto y sin testigos". También pidió a Zedillo señales claras de distensión y que se viera en los hechos que sí se estaba procurando una salida política. Según Marcos, Zedillo planteaba el diálogo en el nivel discursivo, pero aplicaba la política salinista de dejar que el conflicto se desgastara. "El gobierno puede ser muy radical en el discurso y muy reaccionario en su práctica", dijo a la prensa.

Para los zapatistas, el puente que permitió el cese al fuego del 12 de enero y luego la apertura al diálogo se había ido angostando, en especial con la decisión de realizar elecciones en Chiapas —el 21 de agosto anterior— en medio de la crisis armada y con la candidatura de Robledo, un personaje impopular ligado a los gobiernos represivos del general Absalón Castellanos y de Patrocinio González, detonadores del levantamiento. Parecía que no había más camino que el del 1 de enero, cuando todas las puertas se cerraban.

En la capital del país el asesinato de Ruiz Massieu terminó por enturbiar el cuadro político, mientras que en el movimiento popular el apoyo a Chiapas mostró signos de reflujo. Para el EZLN, de la solidaridad de la sociedad civil dependía que no se regresara al estadio de la guerra; no obstante fue notorio el agotamiento de las formas y métodos de convocatoria de parte del movimiento democrático mexicano, plagado todavía de los vicios del asambleísmo, el coyunturalismo y el recurso de las marchas callejeras, a falta de otros contenidos y esquemas de lucha.

Hubo escepticismo y desilusión en las filas zapatistas: se había intentado el diálogo pero sin resultados, además de que la imposición de Robledo significaba, en los hechos, una ruptura del cese al fuego por parte del gobierno federal, que al entronizar a Robledo inclinaba la balanza en favor de las fuerzas tradicionales. Se podía sacrificar al movimiento indígena, que según el Estado ni siquiera era rentable en términos económicos y cuyo inesperado protagonismo cuestionaba el poder hegemónico de latifundistas, ganaderos, caciques y políticos.

"Cuando fracasamos en las ciudades tuvimos el recurso de regresar a las montañas. Si fracasamos en la política tenemos el recurso de regresar a las armas", declaró Marcos en una entrevista, no obstante la posibilidad de que un regreso al escenario de enero de 1994 supondría seguramente el suicidio del EZLN. Empero, en términos militares el zapatismo siempre fue un despropósito, un absurdo. Lo que lo hacía viable eran sus banderas.

"Puestos a escoger entre una paz injusta y una guerra digna, no vamos a dudar", agregó Marcos dando a entender que ya no había espacio para la maniobra. El gobierno ofrecía el

diálogo a cambio de la rendición y el EZLN pensó que había cometido un error al aceptar el alto al fuego: "Al país le hacía falta más muertos y más plomo", agregó el jefe militar al tiempo que rechazó como "un chiste de mal gusto" la oferta de Robledo de que renunciaría al cargo si el EZLN dejaba las armas. "Las armas zapatistas no están siquiera a discusión. Sobre eso no hay trato", añadió el encapuchado.

En la madrugada del 19 de diciembre el EZLN infligió un fuerte golpe a la imagen del gobierno al lograr sus milicianos romper el cerco del ejército y expandir su área de influencia en Chiapas.

Las fuerzas armadas estaban aplicando una estrategia de dos vías, ofreciendo diálogo mientras se reforzaba la presencia castrense, que tras el alzamiento zapatista llegó a sumar cerca de 60 mil soldados, la tercera parte del total de efectivos en México, según cifras extraoficiales.

Fuentes cercanas a la SDN dijeron que ya estaba listo el cerco de aniquilamiento contra el EZLN y sólo se esperaba el momento propicio para asestarle el golpe de gracia. Los medios de difusión, a la vez, se concentraron en proyectar la imagen de un Zedillo pacificador *versus* un Marcos guerrerrista que había optado por inmolarsse. Trascendió que los mandos castrenses, asesorados por expertos en inteligencia militar de Argentina, Guatemala y Estados Unidos tendrían planificada una guerra de baja intensidad que incluía acciones relámpago para que un comando de élite intentara exterminar a la dirigencia del EZLN. Las mismas fuentes dijeron al diario *El Financiero* que según estimaciones del ejército, el EZLN tenía unos mil hombres adiestrados profesionalmente en el arte de la guerra y que ése sería el objetivo de una eventual operación quirúrgica.

También, que uno de los planes de contingencia contemplaba el uso intensivo de helicópteros artillados y de vehículos anfibios y barreminas, a fin de poder penetrar hasta el corazón del espacio rebelde. Según las previsiones del Estado Mayor, la retaguardia del EZLN y sus principales líneas de abastecimiento estaban ubicadas en la zona del Marqués de Comillas y en la selva Lacandona, formando ambas regiones una vasta lengua que penetra hasta el territorio guatemalteco. Para el ejército, la guerra se definiría cuando se lograra ubicar a la tropa de élite zapatista.

Al parecer el plan gubernamental estaba diseñado para ejecutarse en un día, pero si Marcos preservaba a sus mejores hombres en la selva el choque se prolongaría por más de 72 horas, lo cual presentaba algunos inconvenientes. Pero pese a todo, la acción fue acordada.

Por otro lado, el gobierno federal mantuvo abierta la oferta de diálogo y propuso crear un grupo legislativo —la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)— como otra instancia de mediación aparentemente imparcial, al tiempo que Zedillo reveló a la opinión pública que tras los comicios de agosto había tenido un intercambio de seis mensajes con el EZLN, lo que hizo crecer la presión oficial sobre la guerrilla para que depusiera las armas. Pero el EZLN estimó insuficientes las propuestas de diálogo y puso tres condiciones: reconocimiento de la Conai como instancia mediadora, renuncia de Robledo y reconocimiento del "gobierno en rebeldía" de Avendaño.

Las exigencias del EZLN parecieron una desmesura, no obstante que por esos días una encuesta del diario *Reforma* reveló que 59% de los capitalinos apoyaba las demandas del EZLN.

Fue en ese marco que los indígenas rompieron la línea militar la madrugada del 19 de diciembre, por lo que el país amaneció con una nueva geografía en la zona de conflicto. Marcos anunció que cuatro columnas zapatistas habían burlado el cerco y tomado posiciones en 38 municipios de Chiapas, equivalentes en espacio a la mitad del estado. Con ello, el EZLN marcaba el reinicio de las operaciones y el fin de la tregua. A través de la Cruz Roja, Marcos le envió una carta a Zedillo: "Es mi deber comunicarle a usted que tiene una rebelión indígena en el sureste de la nación", le dijo.

En San Cristóbal, Samuel Ruiz inició un ayuno en favor de la paz y un día después el gobierno volvía a invitar al EZLN al diálogo, aunque le advirtió que haría "respetar la ley" en Chiapas. Pero lo cierto es que sin disparar un tiro los zapatistas habían logrado recuperar la iniciativa política y militar. La acción del EZLN demostró que la guerrilla conocía perfectamente el terreno y que contaba con un servicio de inteligencia eficaz y con capacidad de distracción. Para algunos observadores, la operación también sirvió para confirmar que el EZLN había ampliado o tenía una sólida base social, según lo

dicho previamente por Marcos de que la conformación del EZLN no era la de una guerrilla típica. El movimiento agrupaba a comunidades enteras, por lo que la salida militar suponía el genocidio indígena.

Para las fuerzas armadas, en cambio, la maniobra del EZLN fue una provocación: en la visión de los altos mandos, al movilizar a sus efectivos la insurgencia había reiniciado las hostilidades. Durante seis días, del 20 al 27 de diciembre, todos los accesos a la zona rebelde fueron cerrados y desaparecieron las *zonas francas*, y la televisión mostró imágenes de despliegue militar como si se tratase del conflicto en Bosnia o en Chechenia. El cerco se estrechó aún más y por primera vez desde enero de 1994 el ejército entró en los bastiones de Guadalupe Tepeyac y San Miguel, al borde de la selva.

No obstante, Zedillo cedió a las demandas y el 23 de diciembre reconoció a la Conai como instancia mediadora y nombró al secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, como su representante para el diálogo. Al día siguiente, la subsecretaría Beatriz Paredes se reunió en San Cristóbal con Samuel Ruiz y los miembros de la Conai por espacio de siete horas. Nadie habló por el momento de la futura Cocopa.

El obispo llevaba seis días de ayuno en San Cristóbal, mientras que en la capital federal la actriz Ofelia Medina y otros católicos imitaron al prelado. El ayuno se extendió también a 19 estados del país y a varias ciudades de Estados Unidos, Canadá, Italia y España, y fue levantado por pedido del EZLN que, tras el gesto presidencial, también dio pasos hacia la distensión: reconoció a Moctezuma como interlocutor y saludó la aceptación gubernamental de la Conai. A su vez, Zedillo ordenó el retiro del ejército de las comunidades zapatistas.

Y fue también en la mañana del 19 de diciembre que el secretario de Hacienda, Jaime Serra, se enteró por la pantalla de su computadora que el EZLN había roto el cerco. Pero algo más grave estaba ocurriendo en el país: tras semanas de incertidumbre, el gobierno había tomado la decisión de devaluar el peso.

La apuesta tecnocrática fundada en la especulación financiera mostraba al mundo sus límites y mitos en cuanto a generar riqueza y desarrollo, al menos no para las empobrecidas mayorías. El *milagro salinista* sustentado en los capitales "golondrinos" y el maquillaje de las cifras, mostró sus pies de barro dejando como saldo lo que Lorenzo Meyer llamó el autoritarismo de mercado, tan idealizado por el uruguayo Enrique Iglesias desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante 12 años se le había dicho a los mexicanos que el déficit en la cuenta corriente era resultado de la pujanza económica y que el incesante flujo de capital foráneo al mercado interno era signo de la confianza internacional en el futuro del país. Pero el alerta amarilla del peso sobrevaluado se había encendido desde 1993, pasando a roja tras la muerte de Colosio, apenas cinco meses antes de los comicios generales, donde el PRI debía consolidar su victoria, por lo que fue preciso esconder la basura debajo de la alfombra.

La devaluación fue presentada como resultado de la decisión del EZLN de poner fin a la tregua armada. Según dijo entonces Zedillo, la fuga de capitales y el desplome de las reservas internacionales del Banco de México habían sido producto de "factores internos de zozobra", en primer lugar, el conflicto en Chiapas. La empresa privada secundó al gobierno y por boca de Luis Germán Cárcoba, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que "en el país no podemos estar viviendo con un cáncer permanente sin extirparlo".

Pero las acusaciones no prosperaron. Desde Wall Street se escuchó el berrinche de los banqueros, principales hacedores del *milagro salinista*, que en forma enérgica protestaron por no ser consultados. El flamante secretario Serra, uno de los ideólogos locales del ALCAN, debió volar a Nueva York a darle explicaciones a la banca, con resultados por demás negativos: uno de sus interlocutores lo llamó "latino comemierda".

La primera en rodar fue la cabeza de Jaime Serra, pero Zedillo terminó por reconocer que la causa de la devaluación estaba en el déficit de cuenta corriente. La explicación era sencilla y cualquiera la podía entender: el país había estado importando productos por encima de lo que

exportaba y por ello había sido necesaria la devaluación. Haberlo dicho antes...

El 30 de diciembre, Marcos reapareció desde las montañas del sureste mexicano con un irónico "¿Me extrañabais?" Luego preguntó: "¿Qué ocurre? Crímenes, crisis económica, crisis política, peligro de guerra, falta de credibilidad, devaluaciones, fuga de capitales, desconfianza. ¿No era eso lo que iba a ocurrir si un partido de oposición llegaba al poder?"

Al sector empresarial le contestó que "si yo fuera el principal promotor del desempleo en Chiapas, sería presidente de la Coparmex y no un *profesional de la violencia*", en alusión a las palabras de Cárcoba a quien llamó "un señor ilustre y banquero, destacado miembro del sector social más poderoso, criminal y cínico, el del capital financiero".

En otro comunicado, la dirigencia indígena anunció que se comprometía a una tregua unilateral temporal, hasta el 6 de enero, y que planeaba conmemorar en paz el primer aniversario de la insurrección. El 1 de enero de 1995 los zapatistas lanzaron la Tercera Declaración de la selva Lacandona, llamando a Cuauhtémoc Cárdenas y a la Convención Nacional Democrática a encabezar un movimiento de liberación nacional bajo el formato de un frente amplio opositor que luchara por un gobierno de transición a la democracia, un nuevo Congreso y una nueva Carta Magna y la destrucción del partido de Estado para acabar con la simbiosis PRI-gobierno.

El documento hizo un análisis del último año del salinismo, señalando que en todo momento el EZLN resistió no sólo el cerco militar y las amenazas e intimidaciones de las fuerzas federales, sino también una campaña de calumnias y mentiras. Acusó al gobierno de engañar a la población con una supuesta voluntad de diálogo que "sólo escondía el deseo de liquidar al movimiento zapatista por asfixia". Mientras "el PRI, brazo político del crimen organizado y el narcotráfico, continuaba su fase de descomposición más aguda al recurrir al asesinato como método de solución de sus pugnas internas".

La guerrilla explicó el rompimiento del cerco militar como un intento de mostrar a México y al mundo que después de un año de "cinismo y desidia" gubernamentales, la agonía indígena continuaba igual que antes del estallido de enero. También aseguró que la cuestión indígena sólo tendría solución con una transformación radical del "pacto nacional", dando cabida a la autonomía de las etnias no como un factor de desintegración sino para integrar a las minorías más humilladas y olvidadas del México contemporáneo.

El 28 de diciembre, por conducto del secretario de la Reforma Agraria, Miguel Limón, Zedillo respondió al documento aceptando que las autoridades agrarias habían negado de manera sistemática una realidad evidente en Chiapas: la existencia tanto de latifundios simulados como de tierras susceptibles de ser repartidas entre los campesinos. Limón anunció entonces que serían fraccionadas las propiedades que "esconden latifundios" y que se iniciaría el reparto de 31 139 hectáreas en el estado. Una promesa que la prensa destacó en grandes titulares, pero que pronto se olvidó de monitorear.

Muy pronto quedó atrás el llamado "espíritu de Miami", que según el presidente Clinton impregnó la Cumbre de las Américas, de la cual México fue la estrella relumbrante en el nuevo firmamento neoliberal latinoamericano. La devaluación del peso en más de 41 % en las primeras semanas hizo volver a los mexicanos a la realidad. En apenas tres horas, México dejó de ser el socio ideal y el país más amigo de Estados Unidos entre el bloque de los subdesarrollados. Urgido por evitar un colapso financiero en cadena en la subregión, y pérdidas irreparables para los inversionistas y empresarios estadounidenses que habían convertido a las economías locales en virtuales paraísos de la inmigración *golondrina*, Washington salió apresuradamente al rescate de México.

Un hombre bien enterado, Warren Christopher, secretario de Estado norteamericano, le devolvió al país la categoría que en realidad se usa en la Casa Blanca cuando se analiza la situación del vecino pobre del sur: México es un asunto de seguridad nacional, recordó el jefe de la diplomacia estadounidense. Hubo temor en la Casa Blanca de que, en caso de ocurrir una quiebra a escala del modelo fondomonetarista en América Latina, se registraran nuevos brotes

sociales con su componente altamente desestabilizador.

Durante dos días Christopher defendió ante legisladores opuestos a la ayuda la necesidad del paquete de rescate, lo que hizo evidente que más allá de un simple problema técnico, de manejo —como se quiso relativizar—, el país se enfrentaba a una situación en verdad grave. El México de los "tecnócratas perfumados", como los llamó *Newsweek*, ya no era el *yuppie* bien portado ni el mejor alumno de la clase. Para el secretario del Tesoro, Robert Rubin, México había cometido un importante error de política al permitir que su déficit de cuenta corriente se elevara tanto en relación con los ingresos del país y financiarlo con dinero del exterior.

De allí que tanto Christopher como Rubin aclararon que el paquete crediticio del Tesoro por 20 mil millones de dólares se otorgaría bajo condiciones severas, a fin de proteger sus propios intereses. Más aún: ambos prometieron a sus compatriotas que dicho paquete no les costaría un solo dólar.

En cuanto al FMI, que contribuyó con casi 18 mil millones de dólares a un esquema de salvamento por casi 30 mil millones de dólares con otros países, todo apuntó a que dicho organismo repetiría la misma amarga receta de un drástico ajuste en las macrocifras, combinado con el esquema de privatizaciones a ultranza, con su correlato de entrega del patrimonio nacional —o de lo que queda de él— y mayores costos sociales. Era de esperarse que dicha "ayuda" añadiría nuevas presiones, políticas y diplomáticas, a la relación México-Estados Unidos, signada históricamente por la asimetría.

¿Cuánto habría de costarle a la sociedad mexicana el inusual esquema de aval financiero por cerca de 50 mil millones de dólares, entre Estados Unidos y la banca mundial? Aparte de que México debería restituir hasta el último centavo del dinero que fuese a utilizar, ¿cuál sería el costo adicional de ese salvamento a la nación de un desastre pronosticado?

Para los analistas era lógico prever que Estados Unidos aprovecharía el pretexto del *crack* para seguir apretando el torniquete y lograr la concesión del patrimonio energético al capital foráneo. De hecho, fueron los congresistas estadounidenses los primeros en exigir como prenda de garantía las facturas petroleras, una condición demasiado específica que no se aplicaba a otros países y que revelaba la ambición sobre los hidrocarburos mexicanos.

Al inicio, la Secretaría de Hacienda dijo sin convicción que en la operación de rescate no se hipotecaría el petróleo, ya que la Constitución lo impedía. Pero los negociadores estadounidenses partían de una realidad que saltaba a la vista: la debilidad real o aparente del gobierno de Ernesto Zedillo. La coyuntura colocó al mandatario ante el reto de convertirse en un estadista y gobernar para todos los mexicanos, o bien continuar el camino de sus dos predecesores, quienes administraron el poder en beneficio de una élite empresarial abundantemente favorecida por las privatizaciones y sus intermediarios del PRI-Estado. Tarde o temprano esa opción supondría para México el remate de su baluarte petrolero, símbolo del nacionalismo, como ya lo habían insinuado algunos círculos vinculados con la estrategia privatizadora.

La firma del memorándum del 26 de enero de 1995, redactado por los asesores del FMI como preámbulo de una nueva carta de intención con México, fue visto por sectores de oposición como otro factor de riesgo para el país en cuanto a que la hipoteca seguía aumentando, mientras que fue por *The Wall Street Journal* que los mexicanos se enteraron de que existían cláusulas secretas en el paquete de rescate.

El diputado Adolfo Aguilar Zinser apuntó que la nueva *diplomacia de la mendicidad* practicada por Tlatelolco llevó a aceptar condiciones políticas y financieras que mermaban la independencia y soberanía patrias, según el mismo modelo aplicado desde 1982 por el grupo en el poder y que el lingüista estadounidense, Noam Chomsky, describió como un *fraude total*, a la vez que exhibe la manera en que funciona el capitalismo en la periferia: privatizando las ganancias y socializando los costos.

Así, sobre las espaldas de los trabajadores volvió a caer el mayor peso del ajuste, con más de dos millones de empleos perdidos en 1995, un aumento de más de 60% de la canasta básica y la virtual

quiebra de la industria nacional.

Otra opción hubiese sido intentar negociar con la Casa Blanca y con el FMI un programa de recuperación pero con desarrollo, como el inicio de un nuevo camino para la nación en esas horas inciertas en donde, más allá de los vericuetos del discurso, lo que estaba en juego era la soberanía. En todo caso, hubiera sido una postura más acorde con la actitud que en materia de política interna había comenzado a adoptar la administración Zedillo, en torno a dos temas clave de la agenda política: el conflicto de Chiapas y una reforma electoral a fondo, con nuevas reglas y un nuevo escenario para el juego democrático.

Si bien desde el inicio de su gestión Zedillo insistió en el compromiso de apertura del régimen, no dejó de ser sugerente en esa coyuntura la rapidez con que se dio respuesta a viejas demandas opositoras, negadas durante décadas. Al respecto, pudo ser que la reforma política y las medidas de apaciguamiento formaran parte de las condiciones del paquete de rescate, en tanto el buen funcionamiento de una economía de libre mercado conlleva estabilidad política. No por nada Zedillo aceptó que la crisis económico-financiera de México no se había iniciado el 19 de diciembre, sino el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas.

Al intentar convencer al Capitolio de la necesidad del paquete de rescate, el presidente Clinton reiteró que no se trataba de un préstamo ni de asistencia financiera al exterior, y mucho menos de "un regalo". Estados Unidos sólo actuaría de fiador y, como tal, era lógico que pidiese garantías (las facturas petroleras). Ello era consustancial a cualquier operación crediticia... Por otro lado, el contenido de los borradores que por esos días circularon en el Capitolio, hicieron evidente el hecho de que nuevamente legisladores extranjeros estaban decidiendo el futuro de México. Y como en los clásicos del militarismo latinoamericano de los años setenta, existió para la ocasión un torturador bueno y otro malo. Por un lado, apareció el presidente Clinton y su cuerpo de detectives "amigos": el vicepresidente Gore, el secretario del Tesoro, Robert Rubin y el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, quienes bregaron por salvar a México de males mayores y para ello trataron de convencer a los negociadores mexicanos de que aceptaran cooperar. El precio fue las severas condiciones del paquete de rescate, un poco "dictatoriales" según admitió Christopher. Pero, dijo como para tranquilizar al gobierno mexicano, "sabemos que México siempre ha respondido bien a sus compromisos". Detrás suyo, Clinton insistió en que estaba haciendo el mejor esfuerzo para devolver la confianza en el país y restituirlo como modelo fuerte y estable para el Tercer Mundo.

En tanto, el Congreso estadounidense representó el papel de torturador malo exigiendo el petróleo como prenda, y que se rematara la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas públicas que se habían salvado de la guadaña salinista. Un juego de fuerza con el propósito de arrancarle a México mayores concesiones, aprovechando el momento para definir una nueva relación de subordinación en todos los ámbitos, desde la economía hasta la seguridad nacional pasando por la inmigración, el narcotráfico y... Cuba. Uno de los 16 puntos del borrador que circuló en el Capitolio prohibía la asistencia financiera de México a la isla. Las restricciones incluían la extensión de créditos directos, préstamos a tasas de interés concesionales, ventas de mercancías, reducción o eliminación de deudas o cualquier otro beneficio en términos más favorables que los que se podían obtener en el mercado aplicable. Los mismos conceptos desmesurados que contenía la Ley Torricelli, rechazada de palabra por México y por la ONU, por resultar una suerte de privatización de la política exterior de los países según los intereses de la triple alianza conformada por la Oficina Oval, el Capitolio y Wall Street.

Las autoridades mexicanas guardaron silencio. Parecía que el destino de la nación dependía de lo que pudiera lograr el canciller José Ángel Gurría, el hombre-orquesta en las negociaciones de la deuda externa en los años ochenta, cuyo papel le valió el mote en los pasillos de Tlatelolco de *El ángel de la dependencia*. México había sido exhibido en los círculos financieros del poder mundial como el modelo a seguir por los ahora llamados países de economías emergentes, pero la traumática transición salinista mostró los límites de esa experiencia, aplicada con mayor o

menor rigor pero en forma simultánea en Latinoamérica, con un patrón general: administraciones que gobiernan por decreto, militarización de la política (el caso de Chiapas era elocuente), exclusión política de las mayorías (el pueblo vota pero no participa en las decisiones), la democracia como un asunto formal y atendida a cuestiones de procedimiento; la satanización del Estado —por empeñarse en administrar empresas supuestamente deficitarias— *versus* la exaltación a ultranza del mercado —que no dudó en acaparar esos bienes— y una profunda regresión en materia laboral con pérdida de conquistas históricas fundamentales para la clase trabajadora, entre ellas el derecho a huelga y la contratación colectiva.

La crisis financiera y el conflicto poselectoral en Tabasco relegaron a un segundo plano el problema de Chiapas donde, no obstante, la situación seguía siendo de alto riesgo con la posibilidad siempre latente de una reanudación de las hostilidades.

El encuentro entre Esteban Moctezuma y el EZLN fue el primer paso hacia una tregua limitada para definir las condiciones del diálogo y fijar una agenda de negociación. Pero en la zona de conflicto una serie de garantías constitucionales como la libertad de tránsito, de expresión, de reunión y la inviolabilidad de domicilio habían sido suspendidas *de facto* y en algunas áreas existía un virtual estado de sitio.

El 24 de enero de 1995 presencié el cuidadoso registro, por parte de personal militar, a seis obispos latinoamericanos en uno de los retenes de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Según adujo el agente migratorio, se trataba simplemente de un procedimiento "estadístico" de los turistas extranjeros que ingresan en Chiapas.

En el grupo de prelados —dos paraguayos, un chileno y dos brasileños— estaba también el ecuatoriano Víctor Corral, obispo de la diócesis de Riobamba, Ecuador, en donde en 1976, en pleno auge de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, 16 obispos de Estados Unidos y América Latina fueron detenidos y expulsados porque el gobierno del almirante Alfredo Poveda Burbano los acusó de "planear la subversión continental". Entre ellos estaban Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz, a quien ahora venían a acompañar a Chiapas los seis prelados, en el inicio del sínodo diocesano.

Un día después, en un retén de Altamirano, tres visitantes internacionales que se dirigían a la comunidad de Morelia, en ese municipio zapatista, fueron retenidos por agentes de migración y se les dijo que la visita a ese poblado estaba vedada a los extranjeros. Finalmente pudieron llegar hasta el hospital de San Marcos y ya de regreso, tras pasar el mismo retén, un kilómetro más adelante uno de los vehículos en que viajaban fue asaltado por tres individuos armados y encapuchados. Dos de los asaltantes vestían ropa verde olivo. A uno de los extranjeros le pegaron un fuerte culatazo en la espalda y lo despojaron de todas sus pertenencias. Pero algo llamó la atención a la víctima: en medio del monte, los agresores tenían las botas limpias.

Amparado en el secreto y la autonomía castrenses, el ejército mantenía acciones de control e inteligencia en varios puntos estratégicos de la región, contrario a la orden gubernamental de replegarse. Las fuerzas armadas también tenían aseguradas sus posiciones en las llamadas zonas francas y en áreas que al momento del cese al fuego estaban bajo control zapatista, además de los operativos de inteligencia militar en bastiones del EZLN en la selva Lacandona, camuflados como actividades de acción cívica y en las que la prensa nacional fue usada en recorridos con soldados para testificar lo bien que extirpan las muelas los militares...

A todo esto, los sectores duros entre empresarios, latifundistas y ganaderos de Chiapas seguían reacios a sentarse a la mesa de negociación, apoyados por un sector del ejército y con aliados en los círculos de seguridad nacional, gracias a lo cual transformaron a sus *guardias blancas* en escuadrones de la muerte, bien pertrechados y con armas de alto poder.

El 26 de enero, la Coalición de Organizaciones Ciudadanas de Chiapas, integrada por los grupos de poder de la región, anunció que ante la pasividad de los gobiernos estatal y federal para restablecer el estado de derecho, habían decidido organizar brigadas de autodefensa civil; lo que según algunos

analistas, vino a complementar un escenario de guerra de baja intensidad en Chiapas: a los casi 60 mil efectivos del ejército se le agregaban ahora grupos paramilitares similares a las patrullas de autodefensa de Guatemala.

Mientras, en un mensaje sobre el paquete de rescate de Estados Unidos, Zedillo aseguró que el problema de liquidez de la economía mexicana había quedado plenamente superado y que se contaba con una solidez estructural.

El jefe del Ejecutivo argumentó que la crisis financiera que llevó a la devaluación del peso había sido producto del retiro de los capitales especulativos porque los inversionistas extranjeros "sintieron minada su confianza". Las causas, según explicó el presidente, fueron los acontecimientos políticos y de violencia registrados en el país durante 1994. Zedillo aseguró que una vez superados los problemas en el frente financiero, México estaría en capacidad de retomar el camino del crecimiento "firme y sostenido" y que también se abocaría a resolver los problemas internos que habían propiciado la fuga de capitales.

En esa perspectiva, la agenda tenía como prioridades la reforma política y la solución a los conflictos poselectorales en Tabasco, Veracruz y Chiapas, así como negociar la paz con la insurgencia zapatista. Zedillo reiteró que estaba dispuesto a trabajar por una paz justa y digna para los rebeldes indígenas, y expresó su voluntad de resolver las causas estructurales que llevaron al estallido en Los Altos. Pero hacían falta hechos además de palabras.

El 30 de abril de 1994 un despacho informativo fechado en Berna adjudicó al vocero del gobierno de Suiza, Achule Casanova, el anuncio de que había sido bloqueada la venta a México de 48 aviones militares PC-9 Pilatus por temor a que fuesen usados contra el EZLN. Según Casanova, el gobierno suizo no estaba convencido de que los aviones Pilatus fueran utilizados con fines pacíficos.

El aparato fabricado por la Pilatus Flugzeugwerke es de tamaño pequeño, ligero y de gran maniobrabilidad, ya que puede aterrizar en pequeñas pistas o difíciles y normalmente se vende con fines de entrenamiento, es decir, no tiene equipamiento bélico. Sin embargo, Casanova dijo que el gobierno mexicano insistió en que los aviones fuesen dotados con ciertos equipos "como monturas especiales en las alas que permiten colocarle tanques adicionales de combustible, bombas o lanzacohetes".

Funcionarios de la SDN negaron que existiera tal operación. No obstante, en Berna, la empresa Pilatus confirmó la información y dijo que la compra tendría un costo de 231 millones de dólares.

En enero de 1994 las Fuerzas Armadas mexicanas usaron aviones Pilatus PC-7 en Los Altos de Chiapas, que despegaron desde la pista de Terán, en Tuxtla Gutiérrez. Según la organización Americas Human Rights Watch y diversos medios de prensa, locales y extranjeros, entre ellos *El País* de Madrid, naves artilladas dispararon cohetes en las inmediaciones de El Carrizal, San Antonio de los Baños, El Ocotal y El Corralito, al sur de San Cristóbal.

El uso de aviones Pilatus PC-7 y de helicópteros UH-1H por la fuerza aérea, aparatos que fueron vendidos o donados a México para actividades civiles o de combate al narcotráfico, introdujo al país en la nueva modalidad de lucha contrainsurgente, con fuerzas de despliegue rápido y sofisticados equipos de detección, que incluyeron dispositivos electrónicos que permiten interceptar, almacenar y decodificar comunicaciones en tierra.

El caso de los Pilatus provocó reacciones en Suiza. Según el vocero del Ministerio de Defensa Nacional suizo, Patrick Cudré-Mauroux, se habían entregado aproximadamente 75 aviones PC-7 a México, la última entrega en 1992. Una parte de esas naves fue provista, tras su entrega, de equipo militar. El director de la fábrica, Osear Schenk, dijo que estaba enterado del uso de parte de los aviones para "entrenamiento militar". El portavoz del MDN adujo que se vendieron a un país calificado como "libre de tensiones".

Pero al parecer ése no era el caso, y mientras en Europa algunos sectores insistían en destacar las bondades originales del EZLN, que no pretendía tomar el poder, agitaba banderas democráticas y sólo pedía para los indígenas de Chiapas los mismos derechos constitucionales de que supuestamente goza el resto de los mexicanos, la SDN se aprovisionaba de tanques AMX 13, de lo último en materia de

bastones de tortura eléctricos de marca británica y pedía asesoría a los *kaibiles* guatemaltecos, al ejército de Pinochet y a los asesores en contrainsurgencia argentinos.

CAPITULO 4

El golpe del 9 de febrero

Cuando el 10 de enero de 1994 el presidente Salinas hizo alusión a "lo que no funcionó" y sustituyó a Patrocinio González, enviando a Chiapas a Manuel Camacho como su delegado personal, llevó también a la cancillería a Manuel Tello, un experimentado diplomático. Funcionario de carrera, Tello, quien habría de ejercer la jefatura de Tlatelolco en los siguientes once meses, se rodeó de un grupo de hombres de confianza y que al igual que él contaban con una larga trayectoria en el servicio exterior.

Entre ellos estaba el embajador Gustavo Iruegas, a quien le dio la responsabilidad de ocupar la oficialía mayor, con lo que éste se convirtió en el quinto hombre de Tlatelolco. Cuando Zedillo asumió la presidencia, Tello cedió el mando a José Ángel Gurría, e Iruegas quedó a disposición en espera de una misión importante, a la que aspiraba por méritos propios. Tal vez, la representación de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mientras aguardaba su nuevo destino se trasladó, con su esposa Susana, a California, a pasar unas vacaciones. Pero el 22 de diciembre una llamada inesperada alteró los planes de descanso. Era Tello, su jefe, quien desde México le pedía que se comunicara en forma urgente con el nuevo secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, a quien se le había hablado de Iruegas como experto en temas de seguridad nacional, con experiencia directa en los conflictos centroamericanos.

Iruegas se reportó a Bucareli y dejó sus coordenadas en San Diego. El día 23 Moctezuma le devolvió la llamada y le pidió se integrara a una comisión encargada de delinear las políticas para atender el conflicto en Chiapas. Era la víspera de la Nochebuena, pero Iruegas aseguró el regreso. El 25 de diciembre se trasladó del aeropuerto a las oficinas de Gobernación, donde lo esperaban Moctezuma y la entonces secretaria operativa, Beatriz Paredes. De inmediato quedó integrado al equipo que habría de negociar la paz con el EZLN, aunque Tlatelolco lo comisionó con la promesa del canciller Gurría de que una vez cumplido su trabajo se le enviaría a una emisión diplomática en el extranjero, como era su deseo.

Iruegas planteó que habría que abordar el diálogo con el EZLN a partir de una concepción estratégica, según la cual el objetivo principal sería restablecer la paz mediante la vía pacífica. Con base en el modelo salvadoreño, que condujo a los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el gobierno de Alfredo Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en enero de 1992, Iruegas planteó en el seno de la comisión gubernamental que había que proponer a los zapatistas que se transformaran en fuerza política, previo desarme de la guerrilla fiscalizado por alguna instancia acordada por ambas partes y con la precondition oficial de que se garantizaría la vida de los dirigentes rebeldes, en la clandestinidad desde su alzamiento.

Dicho punto estaría íntimamente ligado a la puesta en marcha de soluciones políticas para las otras demandas del EZLN, particularmente las relacionadas con reivindicaciones automáticas de las etnias chiapanecas y la entrada en vigor de las garantías constitucionales: forma de impartición de justicia, problemas de tierra, democratización, reforma electoral y desarrollo social de la región.

Un punto que preocupaba a Iruegas y a las instancias oficiales era el de la autonomía indígena. Desde el gobierno se temía que detrás del tema autonómico pudiera emerger una corriente que reivindicara la creación de una nación maya, montada a caballo de la frontera entre México y Guatemala. De allí que el equipo se abocara al análisis de experiencias similares, como

por ejemplo el caso de las regiones autonómicas en España, que preservan la soberanía nacional sobre todo el territorio del Estado configurado. Sobre esa base, el equipo de Moctezuma venía investigando eventuales cambios a la Constitución y la aprobación de leyes especiales que concedieran a los indígenas incluso autonomía para administrar la forma de ejercer justicia al interior de las comunidades, así como la preservación de la cultura, usos y costumbres.

En ese contexto, se analizó también la posible irrupción de escuadrones de la muerte a sueldo de latifundistas y ganaderos, cuyo accionar podría abortar una salida pacífica o, aun después de lograda la paz, desestabilizar el escenario actuando como fuerzas "incontrolables", según el ejemplo de moda por esas fechas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que con el conocimiento del presidente Felipe González desarrollaron métodos de guerra sucia contra la ETA; lo que en el caso mexicano hizo pensar en la eventualidad de adoptar algo parecido al modelo palestino, con la creación de una policía zapatista autónoma en algunas zonas de Chiapas.

El embajador Iruegas sabía de antemano que dentro del minigabinete de Seguridad Nacional y en el Estado Mayor del ejército existían grupos duros que intentarían bloquear cualquier forma de diálogo gobierno-EZLN, por lo que no descartó la posibilidad de renunciar a su misión ante eventuales diferencias con el resto del equipo.

Cuando Iruegas conversó con el autor, a inicios de enero de 1995, dijo que el mensaje que quería enviar al EZLN y al obispo Ruiz era que no lo vieran "como enemigo" por el hecho de integrar la comisión de la Secretaría de Gobernación. Por cierto, los antecedentes del diplomático hablaban de una larga ruta de colaboración y, en algunos casos, de amistad con comandantes del FMLN y de las guerrillas del FSLN y la URNG, en Nicaragua y Guatemala, respectivamente.

Iruegas buscó tener un contacto directo con Samuel Ruiz y con el sub-comandante Marcos, pero según trascendió entonces, la Conai vio con desconfianza su forma de operar. Algunos de sus miembros sabían de los cursos militares que Iruegas recibió en la Escuela Superior de Guerra y en otros centros especializados en seguridad nacional, por lo que su gestión no tuvo la bienvenida 'esperada'.

El equipo de Moctezuma trazaba su estrategia, pero tanto el gobierno como la guerrilla sentían recíproca desconfianza. Las partes insistían, verbalmente, en su disposición a negociar, pero observaban en los movimientos del oponente una actitud de no diálogo. El gobierno pensaba que el EZLN estaba cegado y ensoberbecido y que por eso planteaba demandas irreales como la caída de Zedillo. La idea de Moctezuma era hacer de la guerrilla una fuerza política pero circunscrita a Chiapas, contrario a la intención de los indígenas de trascender los linderos de su estado y aglutinar a otras etnias, mediante un esquema de frente amplio o de movimiento de liberación nacional que, potencialmente, podría integrar a sectores del PRD inconformes con su dirección y a otras fuerzas dispersas de la izquierda.

En las primeras horas del 9 de febrero, cuando aún no se había hecho pública la orden dada por el presidente Zedillo al ejército, de ocupar Chiapas, conocida como "Operación Arco Iris", Iruegas nos dijo que el EZLN ya no estaba en la línea de las armas porque "no son imbéciles y saben que el uso de las armas está deslegitimado". Interrogado sobre los escenarios posibles, admitió que durante un año el ejército se había preparado para exterminar al EZLN pero que tal opción no eliminaba el problema y, por el contrario, podía llevar al país a una guerra prolongada, incluyendo la masacre de la población civil. Iruegas estuvo de acuerdo en que un nuevo estallido armado en Chiapas le daría al conflicto un carácter nacional, además del riesgo de que se formaran células urbanas bien pertrechadas operando en las principales ciudades del país.

Según el diplomático,

si estalla una guerra de carácter nacional los gringos van a actuar. Hasta ahora se han movido con

prudencia porque también el EZLN se ha movido con moderación, con base en reivindicaciones democráticas y sin meter a Estados Unidos en el conflicto. Pero Washington no va a impulsar un paquete de rescate como el actual y a quedarse con los brazos cruzados frente a una guerra en México. Estados Unidos siempre interviene, en todas partes.

Ese día Iruegas hizo un esbozo del curso que tomaría el conflicto. Insistió en el carácter local del EZLN y minimizó la idea de una guerra en Chiapas: "Los zapatistas no tienen poder de fuego ni pueden tener ninguna posibilidad de victoria", dijo, y atribuyó esa visión a sectores "duros" de Gobernación. También apuntó que el EZLN no estaba en condiciones de imponer criterios para negociar e hizo el símil con el FMLN, que cuando llegó a un empate militar con el ejército salvadoreño y en una coyuntura política adversa tras el derrumbe socialista en Europa oriental, decidió negociar logrando el máximo de conquistas posibles.

"Se negocia a partir del poder real de cada fuerza, por lo que la URNG guatemalteca nunca podrá alcanzar lo logrado por el FMLN. Menos el EZLN", pronosticó Iruegas. Agregó que "la política de Pedro y el Lobo" se estaba desgastando muy rápido, en alusión a demandas zapatistas que Zedillo no podía cumplir, como las renuncias de Eduardo Robledo y Roberto Madrazo porque "esos compromisos los asumió Salinas". Además, el gobierno no iba a ceder a la precondition del EZLN de eliminar a Robledo de la gubernatura local, porque sería otra muestra de debilidad. Por lo mismo, a esas alturas le resultaba imposible aplicar una política de *linkage* (unión) entre los conflictos de Chiapas y Tabasco.

Tal vez fue un error involuntario de Iruegas esa afirmación, ya que existían suficientes testimonios, incluso de políticos opositores, que indicaban que Moctezuma en persona había pactado ambos conflictos poselectorales pero luego dio marcha atrás, cuando la insurrección de los priístas tabasqueños encabezados por Madrazo, con el apoyo beligerante del "sindicato de gobernadores" de línea dura, hizo imposible tal conexión.

Lo cierto era que Robledo y Madrazo no parecían negociables a la manera como lo había pedido el EZLN y aceptado Gobernación. Tal vez fue eso lo que quiso destacar Iruegas, cuando afirmó que:

Esteban Moctezuma no va a sacrificar su carrera por Marcos. Hay límites y tiempos. ¡Y no se va a arriesgar a que Marcos lo ridiculice en un próximo poema desde las montañas del sureste! Se insiste en que el secretario Moctezuma es blando, pero a la hora de la hora puede aprender a ser duro. Y el riesgo es que si él cae, entonces sí vendrá uno duro.

Por su parte, el EZLN percibía que Zedillo los estaba engañando, que el Ejecutivo insistía en negociar como bandera de propaganda mientras alentaba la actuación de Robledo y del priísmo local, aliados a las fuerzas tradicionales, se hacía de la "vista gorda" ante la impunidad de los *guardias blancas*, que según múltiples denuncias reciben apoyo logístico y preparación militar de elementos vinculados a las fuerzas de seguridad, entre ellos mayores del ejército y agentes de las distintas corporaciones policiales que lucran con esa actividad.

En ese contexto se ubicó el discurso de Zedillo en Querétaro, el 5 de febrero, donde pidió la corresponsabilidad del Congreso en el caso de Chiapas. No estuvo claro entonces si el propósito era implantar el estado de sitio o suspender las garantías individuales en el estado con apoyo del Congreso —lo que permitiría la represión "legal" del zapatismo por parte del ejército y la fuerza aérea— o si, por el contrario, se pensaba declarar la desaparición de poderes para convocar a nuevas elecciones.

En dos meses de gobierno zedillista, la lógica militar había ido ganando posiciones en Chiapas, teniendo como soporte la presión de los grupos locales más conservadores, esto es, latifundistas, finqueros, comerciantes y *las fuerzas vivas* apoyados por sectores castrenses que se movían con autonomía al margen de las directrices del presidente, por ley jefe supremo de las fuerzas armadas. Si bien el ejército se disciplinó en cuanto a respetar el cese al fuego del 12 de enero de 1994, la institución armada había desplegado acciones propias de una guerra de baja

intensidad, privilegiando el factor psicológico sobre la población civil.

La víspera del lanzamiento de la "Operación Arco Iris" sobre Guadalupe Tepeyac, voceros militares oficiosos como el periodista Javier Ibarrola, desde su columna "Fuerzas armadas", se aventuraron a decir que el mensaje de Zedillo dejaba traslucir la decisión de actuar en Chiapas y que lo que faltaba para proceder era el consenso del Congreso (*El Financiero*, 8/II/1995).

Algunos analistas debatieron si se estaba aplicando o no en Chiapas una guerra de baja intensidad, donde además del exterminio físico —o mientras esto no ocurre— se busca deslegitimar y aislar al adversario y a sus fuerzas aliadas, hasta nulificarlo políticamente, como el mote de "comandante Sam" dado al obispo de San Cristóbal.

El ejército también recurrió a técnicas de violencia y terror selectivos, mediante acciones limitadas de la aviación y despliegues masivos de tropas, junto a un notorio aumento de la actividad de los escuadrones en zonas alejadas del conflicto, una forma disfrazada de apología del terror estatal y que Chomsky llama el "fascismo cliente". La matanza de Chicomosuelo vino a confirmar esa hipótesis.

Un miembro de la comisión gubernamental para el diálogo reconoció por esas fechas que, pese a la voluntad negociadora del presidente Zedillo, no se podía descartar la posibilidad de que se montara una gran provocación —por ejemplo, un atentado contra el obispo Ruiz o el gobernador Robledo, para abortar la dinámica del diálogo. Tampoco se descartó un eventual genocidio indígena propiciado por los sectores más recalcitrantes, que confiaban en que después de la masacre habría tiempo para discutir sobre derechos humanos...

El 9 de febrero de 1995 el presidente Zedillo ordenó al ejército reiniciar las hostilidades, ratificando la percepción indígena de que su oferta de diálogo era más bien una estratagema de tipo diversionista, mientras las tropas federales ganaban tiempo para intentar aniquilar al zapatismo y Gobernación desmentía la ofensiva. También el general Ramón Arriela, que dirigió la loma de Guadalupe Tepeyac y su anfiteatro Aguascalientes, principal bastión del EZLN, negó a la prensa que se estuviese en una etapa de preguerra: "No, no es la guerra. Traeremos la ley, el imperio de la Constitución".

Años atrás, en la década de los setenta, el presidente uruguayo Juan María Bordaberry dio el mismo paso que ahora parecía dispuesto a ensayar Zedillo, terminando aquél como rehén de los militares. Uruguay, considerado en algún momento junto con Chile como el oasis de la democracia en América Latina, sucumbió sumergido en la larga noche del militarismo.

A partir de la ofensiva militar, el discurso oficial insistió en que se había restablecido el "estado de derecho" en la zona de conflicto. La PGR afirmó que había un respeto estricto por los derechos humanos y negó que aparatos de la fuerza aérea hubiesen bombardeado territorio rebelde. Pero de la decisión tomada se podía inferir la intención oficial de pacificar Chiapas, recurriendo a la vía de la fuerza. La pregunta era a qué extremos podía llegar la militarización, si sería un esquema permanente a aplicarse luego en otros estados conflictivos como Guerrero, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chihuahua y si esa movilización armada podía ser el preámbulo de un esquema de militarización encubierta del Estado mexicano.

Era de esperar que siendo tan sólo un economista, Zedillo desconociera el viejo apotegma de que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Se advirtió que de continuar por ese camino se llegaría a una dictadura, y que era verdad de Perogrullo decir que la violencia engendraba violencia. ¿Hacia dónde iba el gobierno? Nadie lo sabía, y ni siquiera, tal vez, el Ejecutivo.

En la prensa algunos comentaristas dijeron que el gobierno estaba a tiempo de salvarse y de salvar al país, y que era deber de todo buen ciudadano pedirle a su presidente que al menos actuara con un poco de sensatez, tan siquiera la necesaria como para modificar el rumbo, antes de que la maquinaria de guerra lo hiciera prisionero en Los Pinos.

Después del 9 de febrero la sociedad mexicana fue depositaria de un paroxismo discursivo sobre los "motivos patrióticos" que llevaron a la militarización de Chiapas. El uso intensivo de la

propaganda para justificar la medida oficial dejó en manos del gobierno el monopolio de la "administración de atrocidades", como lo denomina Chomsky. Mientras se hablaba de diálogo, la lógica castrense impuso sus reglas y condiciones.

Pero no faltó quien viera que, a la manera de Talleyrand, el gobierno había cometido una estupidez. Lo dijo por esos días el ex vicecanciller Víctor Flores Olea, hasta hacía poco embajador mexicano ante la ONU, quien opinó que en el caso de Zedillo se trataba a la vez de un error político y de una estupidez.

Se refería a la mutación sufrida por el mandatario al ordenar al ejército reanudar la guerra en Chiapas y renegar de sus promesas, repetidas hasta el cansancio, de querer buscar la paz y propiciar un diálogo con el EZLN. ¿Por qué había roto Zedillo la tregua en Chiapas, eligiendo la vía violenta pese a decirse convencido de las virtudes de la paz? El escritor Carlos Fuentes sugirió que tal vez pensó que era la salida más fácil "para desvanecer la imagen de debilidad presidencial", acosado como estaba por las fuerzas de poder internas y foráneas que le habrían aconsejado responder con un acto espectacular. Para Fuentes, sin embargo, Zedillo corría el riesgo de aparecer más débil que nunca como "prisionero del ejército, de los halcones nacionales, de los tiburones internacionales y aun del gobierno estadounidense".

Al optar por la militarización y enviar las fuerzas conjuntas a la selva Lacandona para intentar descabezar a la guerrilla, surgió la peligrosa duda de quién estaba manejando a quién, si el presidente al ejército, o éste a Zedillo.

El montaje de la militarización tuvo trazos ridículos, en tanto los "arsenales" descubiertos en la ciudad de México, Veracruz y Toluca y que fueron atribuidos al EZLN, no pasaban de sumar unas cuantas armas viejas, un botiquín con aspirinas, un par de botas agujereadas y algo de literatura izquierdista. Otra vez Carlos Fuentes calificó los hallazgos de "ridículos": cualquier narcotraficante en México dispone de un número infinitamente mayor de armas en su haber, dijo.

El hallazgo de las armas fue el argumento usado por el Ejecutivo para romper de manera unilateral la tregua. Ese día también dio a conocer la supuesta identidad del subcomandante Marcos, convertido a partir de entonces en un perseguido de la justicia; no obstante unas semanas atrás y a iniciativa de Zedillo, se había nombrado una comisión plural del Congreso para negociar la paz, luego de que el gobierno federal reconoció a la Conai como instancia mediadora y el propio secretario Moctezuma se había entrevistado con Marcos en una zona franca.

¿En qué momento los líderes zapatistas pasaron de ser "dignos representantes de los inconformados", como Zedillo los llamó inicialmente y con quienes su gobierno estaba dispuesto a negociar, para convertirse en "delincuentes dignos de ser exterminados", como ironizó Carlos Fuentes?

Es posible que algunos generales de línea dura, respaldados por los miembros del minigabinete financiero comandado por Luis Téllez, hubieran hecho atractiva la idea de que mediante una operación quirúrgica, breve aunque sangrienta, se resolvería el problema de "los indios de Chiapas".

El 11 de febrero Cuauhtémoc Cárdenas advirtió, durante un mitin en el Zócalo capitalino, de los riesgos de una guerra prolongada en México con su secuela de represión, cárceles, torturas y desapariciones; amén de la fuga de capitales y un mayor estancamiento económico. El ex candidato perredista afirmó que la orden de reiniciar la guerra en Chiapas había sido sugerida por los socios comerciales del grupo gobernante.

Para nosotros —dijo— os más impórtame una vida, cualquiera que sea, que los 50 000 millones de dólares (del paquete de rescate). No vamos a admitir que se nos designen virreyes que vengan a verificar si estamos cumpliendo con los términos de los acuerdos financieros. Que sepan que estamos decididos a que se nos gobierne desde este centro y corazón de nuestra República y no desde la Casa Blanca o del FMI, ni desde el Capitolio ni desde ninguna otra parte fuera de nuestro territorio.

A su turno, Porfirio Muñoz Ledo denunció que durante un año el diálogo había sido intencionalmente manipulado mientras se mantuvo la guerra en lactancia, y llamó a rechazar el "cuartelazo" del 9 de febrero.

No a los créditos atados al petróleo ni a la sangre de los mexicanos. No al tránsito de un sistema de partido de Estado a un pripartidismo de Estado. No a la pricracia, pero también no a la pancracia —dijo, aludiendo al nuevo maridaje PRI-PAN—. ¿Para qué querían los del PAN la Procuraduría General de la República? Para usarla como ministerio de la represión nacional.

Según Muñoz Ledo, quedaba el interrogante de si el país se hallaba ante una acción solamente de tipo militar o bien ante el inicio de una vasta operación política, dando a entender que detrás de la cortina de fusiles, como la llamó, se buscaría evitar que la opinión pública "siga exigiendo el castigo de los culpables de los crímenes políticos y económicos del salinato".

"¿Se trata acaso de una conspiración palaciega, de un debilitamiento del poder civil de la República y lo que flota en el ambiente es en realidad un golpe de Estado que liquidaría las instituciones republicanas y las libertades ciudadanas de los mexicanos?", se preguntó Muñoz Ledo.

Al parecer, la intención del gobierno al revelar la identidad de Marcos fue la de acabar con el mito. El nombre del mexicano de 38 años —al fin que no era extranjero— era Rafael Sebastián Guillen Vicente, a la sazón alumno ejemplar, condecorado en su momento por el presidente José López Portillo (1976-1982), por sus calificaciones escolares sobresalientes, y luego licenciado en filosofía y sociología y con una maestría en La Sorbona de París. Su curriculum impresionó a muchos, incluso a miembros del gabinete zedillista, luego del escándalo que ocurrió por esos días y que terminó con la caída del secretario de Educación, Fausto Alzati, quien falsamente se presentaba como doctor.

Un funcionario de policía fue el encargado de presentar a la opinión pública el verdadero rostro de Marcos, en un *show* televisivo que incluyó la superposición de imágenes que mostraban a cara descubierta al ahora "licenciado Guillen", un hombre barbado y de tez blanca, nacido en Tampico, con el cabello castaño, los ojos café claro, las cejas pobladas, nariz aguileña, mentón rectangular y complexión mediana.

Violado el mito, la gente reaccionó con enfado: "Guillen no es Marcos, tiene los ojos distintos." También el jefe rebelde se burló de la información y en un comunicado dijo que "escuché que ya descubrieron otro 'Marcos' y que es tampiqueño [...]. Bueno, y a todo esto, ¿ese nuevo 'subcomandante Marcos' sí es guapo? Es que últimamente me pone puros feos y se me arruina toda la correspondencia femenina".

Previo al "destape" de Marcos y sobre la situación en Chiapas, éste declaró en una entrevista que la rendición no figuraba en los planes del EZLN y que el gobierno los había estado engañando:

Han estado haciendo tiempo para atacarnos en periodo de seca, en tiempo de hambre [...]. Lo que sigue no lo para nadie. Es una guerra de guerrillas. Nos amenazan con el aniquilamiento; les mandé decir que pueden proceder. Los esperamos aquí en la montaña [...] a propósito, tengo 300 tiros, así que envíen a 299 soldados, porque la última bala será para un servidor.

La renuncia tardía del gobernador Eduardo Robledo, el 14 de febrero, abrió un compás de espera en el escenario chiapaneco aunque no pudo ser presentada por el gobierno como una contribución a la paz; desde su toma de posesión el 8 de diciembre, ante la presencia tan criticada de Zedillo, se supo que el candidato priísta no podría gobernar la entidad y, al contrario, analistas como Miguel Ángel Granados Chapa dijeron que "al compartir con él su ascenso, le correspondía, también a éste [Zedillo] la parte alícuota de la caída y de los costos políticos".

Para Lorenzo Meyer era difícil predecir qué sucedería, pero era obvio que el gobierno estaba aplicando la estrategia "del garrote y la zanahoria". Luego de empujar a la guerrilla hasta las profundidades de la selva y arrinconarla en un operativo de cerco y pinza entre el ejército mexicano y los *kaibiles* de Guatemala, Zedillo volvía a ofrecer la paz. Lo cierto era, como apuntó Meyer, que el Estado mexicano "no tiene legitimidad para matar indígenas porque nunca les cumplió las promesas que les hizo". De ahí que la fuerza del EZLN no estuviera en las armas, sino "en la mala conciencia de un régimen que además se sabe que está al final de su existencia". Según el investigador, "la larga transición mexicana del autoritarismo a un régimen plural se ha ido por uno de los caminos más tortuosos. Es una transición selectiva y por la derecha". Por lo mismo, Zedillo estaba sacrificando intereses de su partido, "pero todo lo que él sacrifica se lo está pasando al PAN, que desde 1989 viene apoyando la política neoliberal del salinismo y ahora del zedillismo, unidos en su enemistad en contra del cardenismo".

Desde Europa, un grupo de intelectuales de renombre, entre ellos Umberto Eco, Bernardo Bertolucci, Gillo Pontecorvo, el periodista Gianni Mina, Darío Fo y el editor Cario Feltrinelli pidieron a Zedillo que detuviera la guerra en Chiapas, con base en un argumento de difícil refutación: México, ejemplo de tolerancia y pluralismo en un continente martirizado por las castas militares y saqueado por los intereses extranjeros, corría el riesgo de ser aplastado por los tanques, sometiéndose al chantaje de los poderes ajenos. "No traicionen nuestro profundo respeto, nuestro amor a México", dijeron los intelectuales en una misiva que también pidió fuese respetada la voz y la obra del obispo Ruiz "que luchó y sigue luchando por una verdadera paz en Chiapas".

Fuentes cercanas a la SDN afirman que tras el anuncio del 9 de febrero debió seguir una acción relámpago de aniquilamiento de los bastiones zapatistas. Pero algo falló. La orden presidencial fue cumplida por el ejército con doce horas de retraso, lo que permitió el repliegue ordenado del EZLN hacia las profundidades de la selva Lacandona.

La "Operación Marcos" había sido concebida por la inteligencia militar mexicana al estilo del Golfo de Tonkín; con el fin de justificar la ofensiva contra esa original guerrilla indígena que no luchaba por el poder sino por la atención a sus demandas por espacio de 70 días, los mismos que llevaba Zedillo en la presidencia, la opinión pública se vio saturada por una campaña de publicidad que buscaba convencerla de la paciencia y voluntad negociadora del nuevo gobierno, quizás en preparación de las condiciones que justificaran el giro radical del 9 de febrero, cuando el EZLN dejó de ser una fuerza política —según la había catalogado Zedillo en sus cartas secretas a la insurgencia—, la policía reveló la identidad de Marcos y varios simpatizantes o miembros del zapatismo fueron capturados en operativos simultáneos.

Al parecer faltó coordinación entre el poder civil y el mando militar, y cuando 2 500 soldados fuertemente armados y cerca de 110 vehículos blindados apoyados con aviones y helicópteros artillados llegaron a Guadalupe Tepeyac y Aguascalientes a las seis de la mañana del día siguiente, sólo hallaron ancianos, mujeres y niños. Los hombres y los jóvenes de las comunidades se habían esfumado. No hubo resistencia ni enemigo que aniquilar. Sólo se registraron algunos tiroteos intermitentes, pero sin un choque frontal.

El EZLN había realizado un repliegue táctico hacia los Montes Azules, según recomienda desde hace más de 2 000 años el manual del estratega militar, el *Sun-tzu*, cuando dice que si el equilibrio de fuerzas muestra un desbalance, los más débiles en términos bélicos deben primero hacer trabajo político y romper las alianzas de los más fuertes, ya que la peor idea sería enfrentarse en forma directa al adversario. En las previsiones de los zapatistas estaba incluida la modalidad eventual de una guerra de guerrillas, para lo cual era necesario atraer al ejército a los terrenos selváticos, mientras en las comunidades mujeres y niños podrían convertirse en monitores de las actividades de los soldados federales, dando cuenta de sus movimientos, número de efectivos, horarios de patrullajes y tipo de armamento.

Tras lo que consideró como una trampa de Zedillo, el EZLN cambió su estrategia y de ejército rebelde con territorios controlados se transformó en un ejército fantasma, cuyos combatientes

podían ser, de día, campesinos y de noche, insurgentes. Pronto empezarían las lluvias y una posibilidad era que el ejército federal se empantanara en el lodo. La otra era que se privilegiara —dentro de un contexto de control militar— la vía política hacia las comunidades, según la vieja experiencia estadounidense en Vietnam, usada también en Guatemala: las llamadas aldeas estratégicas. Bastiones zapatistas ahora desérticos como Guadalupe Tepeyac, Ejido Morelia, Monte Líbano, La Garrucha y San Miguel, entre otros, podían servir para alojar a los miles de desplazados indígenas y campesinos por el conflicto, haciéndoles recipientes de la *acción social* para aislarlos del EZLN, mientras se intentaba cercar por hambre a las milicias zapatistas.

Con el anuncio del 9 de febrero se hizo evidente la intención del ejército de descabezar no sólo al EZLN —concretamente a sus mandos "ladinos"— sino también a la cúpula de las organizaciones sociales en la región, sin excluir los sectores pro indigenistas de la Iglesia católica, con Samuel Ruiz a la cabeza. Un número sin cuantificar de dirigentes populares fue asesinado en Chiapas por esas fechas, según denuncias de prensa y de grupos humanitarios, por medio del accionar de los *guardias blancas*, ahora virtuales escuadrones de la muerte.

El EZLN evitó un choque armado con el ejército por obvias razones y respondió a la ofensiva oficial mediante comunicados donde dejó en claro la decisión de los zapatistas de, llegado el caso, morir peleando. Pero insistieron en su voluntad de diálogo en negociaciones dignas y verdaderas, bajo control de instancias neutrales y denunciaron que el ejército los estaba arrinconando para llevarlos a un callejón sin salida: pelear o morir.

A raíz de la ofensiva de febrero y según expertos militares estadounidenses, quedó mostrado que el zapatismo era en la región "base y comunidad, comunidad y base" y no una fuerza extraña e impostada. Tampoco era una guerrilla tradicional. De allí que el problema fuese social, más que militar, además de que se percibió en forma más clara que la raíz del conflicto no residía en la belicosidad o voluntad guerrillera del EZLN, sino que la causa de la revuelta había que buscarla en la violencia estructural del Estado, la misma que desde 1993 al menos estaba fomentando la aparición de otros focos guerrilleros latentes, que la prensa cifraba por entonces en once.

CAPITULO 5

¿La ley trampa?

Con la formación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) prevista por la ley para Chiapas, parecía que se daba un paso importante para el restablecimiento del diálogo entre el gobierno y el EZLN. Sin embargo, no había elementos suficientes para asegurar que la lógica de la guerra hubiera sido remplazada por la dinámica de paz. Más allá de su ampuloso nombre, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas no aseguraba las condiciones para lograr sus metas.

Un primer punto incierto era que la negociación gobierno-EZLN, de darse en las condiciones imperantes, ocurriría en un contexto de militarización. En rigor, cuando Moctezuma se entrevistó con Marcos el 15 de enero de 1995, ya se había impuesto la lógica militar y el ejército estrechaba el cerco sobre las tropas regulares del EZLN. Cuando el 9 de febrero Zedillo ordenó la captura de la dirigencia zapatista, el discurso oficial justificó la incursión de las fuerzas armadas para defender el estado de derecho y recuperar la soberanía para honra de la nación.

El ejército instrumentó una maniobra envolvente e incursionó en los bastiones zapatistas de la selva por siete frentes de batalla, con generales al mando de tropa, dejando en ridículo al procurador Lozano y al propio Zedillo, quienes aseveraron que el operativo era un "asunto policial".

La ofensiva determinó que se crearan dos zonas de conflicto diferenciadas. Una abarcó los bastiones zapatistas ocupados en enero de 1994: los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y San Cristóbal. Allí, el ejército se posesionó de las poblaciones y comunidades y se dedicó a patrullar las inmediaciones, a sabiendas de que las milicias del EZLN y sus familias se encontraban en las montañas cercanas. Eran las milicias "mal armadas" a las que se refirieron algunos mandos militares.

La otra zona donde el ejército apretó el cerco, al suponer a partir de labores de inteligencia que allí estaban replegadas las tropas regulares de los rebeldes, fue el semicírculo que se extiende en torno de los Montes Azules y la región selvática de Marqués de Comillas. Ese cerco se estrechó con la construcción de helipuertos y brechas que permitieron la transportación de armamento pesado y su instalación en puntos estratégicos, junto con el emplazamiento de pequeñas guarniciones. La pinza se cerró con el despliegue de *kaibiles* guatemaltecos al otro lado de la frontera.

Ése era el escenario un mes y medio después de la ofensiva del 9 de febrero: una guerrilla aislada de su base social, con la milicia dispersa en la montaña y sus fuerzas de élite cercadas por la artillería y los comandos del ejército, que aplicaron el *abe* de la lucha contrainsurgente: dejar al pez sin agua. Fue entonces cuando Zedillo dijo: "Ahora negociemos". Pero, ¿cómo negociar con "transgresores"?

La oferta de una ley de amnistía fue el primer intento del Ejecutivo de destrabar sus propios candados. Hubo 18 borradores de ley desde el primero que elaboró el grupo de expertos aglutinados en la "Comisión Moctezuma" y cuyo espíritu era: "Le estamos haciendo un gran favor a esos delincuentes". Finalmente, y pese a la oposición de los "duros" del gabinete y los legisladores militares, se admitió la existencia de un conflicto armado y que el EZLN era una organización con nombre y apellido, incluida la palabra "ejército", considerada por el vocero oficioso de las fuerzas armadas, Javier Ibarrola, como ofensiva para la institución.

Empero, la lógica de la guerra prevaleció en la ley en tanto fijaba tiempos, ya que partía de la premisa de que no existía una voluntad real de diálogo por parte del EZLN. Los zapatistas capitalizan con su silencio porque apuestan al desgaste del gobierno, pensaba el ejército.

La realidad era otra: la guerrilla estaba incomunicada. No podía usar sus aparatos radiotransmisores porque sería detectada fácilmente por los satélites. De allí que la ley

retrotraía el escenario a su estado inicial: si el ejército no volvía a sus posiciones anteriores al 9 de febrero, sería imposible negociar. De lo contrario, su presencia seguiría siendo el principal obstáculo para destrabar el conflicto, a menos que permitiera espacios para el diálogo, las ahora llamadas "zonas grises". Con lo que, además, la institución armada se convertía de hecho —o en apariencia— en el principal enemigo del Ejecutivo, que seguía comprometido ante la opinión pública con su mensaje pacificador.

Tampoco había garantías para que miembros de la Conai pudieran hacer contacto con el EZLN, sin que sirvieran de carnada para que la inteligencia militar detectara la ubicación de los mandos insurgentes.

Sería oportuno conocer qué ocurrió en realidad el 14 de marzo, en el lapso que transcurrirá entre el anuncio hecho a mediodía por el vocero de Gobernación, Alfonso Durazo, en el sentido de que el ejército se replegaba de los territorios zapatistas y el posterior comunicado aclaratorio, esa misma noche, que emitió la misma oficina, ratificando la permanencia militar en la zona. Como sugirió el columnista Francisco Cárdenas, ¿acaso la SDN obligó a poner reversa a una decisión de Gobernación? En tal caso, ¿quién estaba tomando las decisiones, los militares o el responsable de la seguridad interior? Según la ley para Chiapas publicada en el *Diario Oficial*, las negociaciones debían concluir el 10 de abril. ¿Era ésa una ley trampa, por cuanto si el diálogo no ocurría en ese tiempo quedaba legitimado el uso de la fuerza con el aval del Congreso?

La campaña de intoxicación sobre Chiapas promovida por los sectores duros del gobierno terminó por encorsetar a los partidarios de la línea negociadora del zedillismo, que presumiblemente era representada por Esteban Moctezuma.

Por una jugarreta del destino, el 10 de abril —fecha de la traición de Chinameca— quedó fijado como el tope por ley para el inicio del diálogo directo gobierno-EZLN. Salvo que ocurriera un hecho excepcional, el 76 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata sería capitalizado políticamente por el EZLN. La propaganda de los partidarios de la guerra intentó colocar ese día como un ultimátum: el mensaje a los indios de Chiapas fue negociar o pelear. Pero la oferta tenía otros dos destinatarios: el presidente y su operador político, Esteban Moctezuma.

La discusión sobre el lugar de las negociaciones, siendo importante, no era fundamental. Las partes estaban en libertad de proponer sedes para el diálogo. Lo hizo Gobernación y también el EZLN, y sólo a ambos competía decidir dónde.

Quienes pugnaban por la rendición de los zapatistas centraron sus ataques sobre la propuesta del EZLN de dialogar en el Distrito Federal, bajo el argumento de que era un problema "local". De allí que, insistieron, debía resolverse en Chiapas, con el cerco de aniquilamiento del ejército estrechándose cada vez más. Para los "duros", el contexto de la negociación estaba en función de la debilidad militar zapatista. "En Chiapas sólo hubo una guerra de comunicados", argumentaron.

En realidad se desconocía el potencial militar del EZLN. Diez días de escaramuzas bélicas no habían arrojado datos suficientes sobre el armamento del EZLN, que pudo haberse incrementado durante 1995 al mismo tiempo que la guerrilla se dedicó a la "guerra de papel", terreno en el cual demostró una superioridad neta sobre su contraparte. Lo cierto es que desde el 12 de enero de 1994 el EZLN evitó cualquier provocación de tirar el primer tiro, a sabiendas de que con ello justificaría el plan de exterminio diseñado por expertos en contrainsurgencia, nacionales y extranjeros, emplazados en Chiapas.

Así, cuando el 9 de febrero el gobierno ordenó la ofensiva militar, el EZLN se replegó y eludió cualquier choque que hubiera conducido a una escalada del conflicto y alejado definitivamente la posibilidad de una salida negociada.

A su vez, el gobierno tenía que demostrar que quería una paz digna, como se afirmaba. ¿Era posible alcanzar la paz en una Chiapas militarizada? Tratándose de un gobierno sin políticas nacionales —por esos días el mayoriteo del PRI en torno al aumento del IVA había sido ordenado por los acreedores de Wall Street—, ¿era posible esperar que tuviera alguna política para un

problema local? Y si era un problema local, ¿por qué no lo resolvía el gobernador interino Ruiz Ferro y el converso Eraclio Zepeda? ¿Qué hacían metidos en el "conflicto local" el ejército mexicano, Gobernación, la PGR y el Congreso de la Unión?

Lentamente, como si se resistiese a crearlo, la ciudadanía fue tomando conciencia del nuevo mazazo a la economía familiar ordenado por el FMI e instrumentado por el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz. En la lógica oficial, si las elecciones intermedias tendrían lugar en 1997 había tiempo suficiente para que la población (vista por la tecnocracia sólo como el caudal de votos que cada tanto convalida de algún modo la existencia del partido de Estado), se olvidara del último saqueo. La pregunta era si después de ese castigo descomunal a la sociedad tras 12 años de capitalismo feroz, la masa votante de Zedillo y los diputados y senadores del PRI seguirían apostando a lo mismo. Por lo pronto, fue de lamentar el espectáculo dado por los legisladores priístas al festejar la aprobación del aumento del IVA a 15%. "Es por México, es por los trabajadores", alegaron los representantes en defensa del impúdico mayoriteo. Sólo dos parlamentarios priístas se opusieron a la antipopular medida, repudiada por todo el país: el diputado Alejandro Rojas y la senadora Layda Sansores, quienes votaron en contra de la instrucción presidencial, lo que les valió el virtual linchamiento público de parte de sus correligionarios.

Como es habitual, el costo de la crisis recayó sobre las espaldas de las mayorías: la clase media, el obrero, el campesino, el indígena, el estudiante, el ama de casa. No del banquero Slim, ni de los miembros de la dinastía Hank, ni del tortillero Roberto González Barrera, cabeza del Grupo Financiero Banorte. Algo quedaba claro: con la nueva "operación miseria", el régimen estaba desafiando al pueblo trabajador. La vieja fórmula del poder: sumiso frente a los intereses extranjeros, implacable frente a su propia sociedad.

Mientras en Chiapas, si bien el diálogo epistolar y confidencial entre Gobernación y el EZLN era un hecho positivo con miras a lograr un diálogo directo, el problema consistía en que el interlocutor oficial no era sólo uno. Además del equipo de Gobernación estaba el ejército y éste se movía con autonomía, lo que obstruía las iniciativas de Bucareli para abrir los espacios.

A fines de febrero de 1995 el EZLN puso como condición al diálogo el retiro del ejército a las posiciones que ocupaba antes de la ofensiva del día 9. Esto es, a las cabeceras municipales de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas y a los cuarteles de la 31 zona militar de Rancho Nuevo (San Cristóbal) y de la séptima región, con sede en Tuxtla Gutiérrez. El ejército, por su parte, sostuvo que había recuperado la "soberanía" de manos de los transgresores por órdenes del presidente, por lo que se negó a abandonarlas.

Gobernación mandó decir a los zapatistas que para que pudiera "hacer mover" a los militares, así fuera de manera parcial, era necesario primero que la guerrilla acudiera a la mesa de negociaciones. "Cualquier movimiento (de la tropa) dependerá del fruto de ese diálogo interpersonal."

En círculos diplomáticos extranjeros se valoró, no sin preocupación, que existía una virtual subordinación de la política interior a la SDN, y cada vez más se veía a Zedillo como un rehén de los militares.

Los sectores más intransigentes del ejército insistían que en Chiapas no había un conflicto bélico, sino una "guerra de papel". Esa fue la visión de dos de los hombres fuertes de Chiapas, los generales Mario Renán Castillo y Alfonso Hernández Morales.

Comandante de la séptima región militar y de la 31 zona militar, el general de división Mario Renán Castillo egresó del Colegio Militar y se especializó en *fuerzas especiales* en Fort Bragg, Carolina del Norte. Fue jefe de las zonas militares de Durango, Hermosillo y Minatitlán y participó en el diseño del Plan Cóndor para combatir al narcotráfico. Su foja de servicios lo ubica como agregado militar de la embajada de México en Canadá entre 1982 y 1984; director del arma de infantería en 1991 -1992 y director del Colegio de la Defensa Nacional, institución de educación superior del ejército mexicano. Fue inspector contralor del ejército y la fuerza aérea en 1992-1994 y es considerado entre sus pares como uno de los mejores estrategas militares del país. Convencido de que la fuerza armada no tiene enemigos internos, ha reiterado a la prensa que el ejército es una fuerza de disuasión

pacificadora y que no considera a los rebeldes zapatistas, a los que llama *grupo transgresor*, como enemigos.

Por su parte, el general brigadier Alfonso Hernández Morales, diplomado en guerra psicológica, fue enviado por Castillo a recuperar Las Margaritas el 9 de febrero y desde entonces es el encargado de las tareas de acción cívica y de los albergues y refugios para civiles desplazados. Tiene amplia experiencia y conocimiento de las guerrillas centroamericanas.

Fue por esos días que militares y funcionarios de Gobernación sugirieron que decenas de enviados de la prensa nacional e internacional mentían al informar sobre la destrucción de poblados y caseríos por elementos del ejército, así como del robo de enseres de los indígenas, semillas, muertes de animales y envenenamiento de agua potable.

Empero, entre los testimonios recabados por los periodistas destacó el del indígena Isaías, quien luego de 44 días de permanecer refugiado en las montañas, relató a un enviado que "el gobierno quiere doblegarnos y comprarnos. Nos ofrece que cambiemos nuestra dignidad por dos kilos de despensa [...] el dinero es el dios del gobierno, y a ese dios nos quieren sacrificar". Según este mismo testigo, luego que el ejército federal pasó por su comunidad destruyéndolo todo, "el gobierno empezó a sembrar Solidaridad y los soldados *servicio social*. Empezaron a ofrecer despensas y créditos a la palabra, y algunos lo aceptaron, porque el hambre es canija" (José Gil Olmos, *La Jornada*, 25/11/95).

Otro signo preocupante fue el anuncio hecho por el general Renán Castillo de que el gobierno de Chiapas trabajaba en la conformación de una Fuerza de Protección Ciudadana, que serviría de *punte* entre los elementos del ejército y las autoridades policiales locales. La nueva fuerza de tarea contaba ya con 400 hombres y, bajo otra denominación, podía pensarse que se estaba aplicando el mismo plan contrainsurgente que en Guatemala, donde las tristemente célebres PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) sembraban el terror en las *áreas pacificadas* por el ejército guatemalteco.

Expertos en el tema militar, con una visión más optimista, decían, en cambio, que la disyuntiva del ejército era cómo desmilitarizar el conflicto con una retirada digna y honrosa. Si Zedillo había ordenado a la fuerza armada recuperar la "soberanía", una contraorden sería inaceptable para la estrecha disciplina militar, lesionaría la imagen de la institución y podría generar fisuras en su seno. Sin embargo, la posibilidad de un repliegue militar, así fuese intermedio entre las áreas recuperadas en febrero y las que permanecían en poder de los zapatistas desde enero de 1994, resultó un prerrequisito político y físico indispensable para reanudar las negociaciones.

El diálogo podía ser de segundo nivel, sin la presencia de Moctezuma y de Marcos, pero era evidente que los tiempos de la ley no sólo corrían para el EZLN. También apremiaban al hombre que había prometido hacer de México un país de leyes.

Finalmente en San Miguel, Ocosingo, tuvo lugar el segundo encuentro directo entre el gobierno y el EZLN. En la reunión, y bajo el cerco del ejército federal, se fijaron las bases para el diálogo y la negociación de un acuerdo de paz y se resolvió que la nueva cita sería el 20 de abril en la localidad chiapaneca de San Andrés Larráinzar.

En la coyuntura, ese diálogo preliminar logró desplazar la lógica de la guerra. No obstante, algunos elementos llevaban a pensar que del lado oficial seguía latente la estrategia de una salida de fuerza. Si como reconoció el jefe de la oficina de la Presidencia, Luis Téllez, el 9 de febrero el gobierno intentó tender una trampa mortal a Marcos, ¿qué impedía contemplar la posibilidad de que desde Los Pinos se estuviera fraguando otra traición?

Desde el 1 de enero de 1994, primero con Salinas y luego con Zedillo, el régimen había desplegado la estrategia "del garrote y la zanahoria" en tanto no quería o no podía ofrecer una solución de fondo a los problemas de Chiapas. Hacerlo suponía estar dispuesto a sacrificar los intereses seculares de la oligarquía local; intereses que ya cinco siglos atrás habían obligado a fray Bartolomé de las Casas a abandonar, vencido, Ciudad Real.

Por otro lado, la transición del sistema presidencialista a un régimen bipartidista (PRI-PAN) se venía consumando bajo un signo conservador. De manera temprana, el Grupo SPP (Secretaría

de Programación y Presupuesto) le robó las banderas al PAN y ahora el "priísmo empanizado" aplicaba la ley en forma selectiva y clasista en contra de los más débiles y de quienes consideraba sus enemigos: el pueblo en general y el EZLN en particular.

No era extraño que así ocurriera. La tecnocracia estaba convencida de que la sociedad se había quedado detenida en la época de los *agachados* de Rius, capaz de soportar otro trago amargo de capitalismo salvaje para beneficio de apenas una treintena de grupos económicos competitivos en el nivel mundial, y a costa de generar millones de nuevos pobres absolutos.

Para los ideólogos de la modernidad no había por qué esperar reacciones violentas, en tanto el gobierno se sentía lo suficientemente fuerte como para controlar cualquier estallido social o bien neutralizarlo, así tuviese que echar mano de las fuerzas de seguridad. De ahí que los viejos sabuesos de la contrainsurgencia hubiesen sido llamados nuevamente a los puestos de mando o actuaran de manera clandestina en las alturas del poder; esto explica también la adquisición de carros blindados antidisturbios y las crecientes asesorías de expertos extranjeros en control de multitudes y guerra de baja intensidad.

El elenco gobernante se sentía fuerte. La realidad parecía darle la razón: el paquetazo económico del FMI, incluido el aumento al IVA; el alza del transporte; los nuevos incrementos fiscales del DDF; el golpe de mano nocturno y cuasi militar contra el sindicato de la empresa de transporte urbano Ruta 100 y demás medidas que en otras latitudes suelen generar protestas populares, represión y muertos, fueron aceptadas en principio de manera pasiva por la población o con manifestaciones aisladas que no revelaban un riesgo de ruptura social.

En ese contexto, ¿cómo asegurar que el Estado buscaba con sinceridad una paz digna para Chiapas, para esos "inditos alzados"?

Mientras el presidente Zedillo reiteraba su promesa de hacer de México un país de leyes, la prensa denunció las torturas físicas y psicológicas sufridas por los presos de Yanga y Cacalomacán, acusados de ser zapatistas por el gobierno y a quienes se les había obligado a firmar —según éstos dijeron— con los ojos vendados, declaraciones en su contra. El procurador Lozano intentó relativizar el caso afirmando ante organismos humanitarios que el asunto se había "politizado". Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la PGR para que investigara y en su caso consignara, a los agentes judiciales federales que hubiesen participado en las torturas a detenidos vinculados con el EZLN (José Reveles, *El Financiero*, 12/IV/95).

La tortura es la expresión más sádica contra la dignidad humana y aunque es practicada en forma científica, también revela los rasgos regresivos de una cultura. Pero la tortura es, sobre todo, un hecho esencialmente político.

En Brasil, Uruguay, Argentina y Chile se usó en los años setenta con fines contrarrevolucionarios. Formó parte de la metodología del terrorismo aplicado a la lucha social y política para configurar un Estado policiaco que vigilaba y censuraba al conjunto de la población. La tortura fue un instrumento político de dominación violenta que buscó crear un clima de terror para *disuadir* a los opositores, además de un método para obtener información. Ahora esas técnicas de interrogatorio, el *tercer grado* de la Gestapo, se aplicaba en México en contra del EZLN. Paradojas de Semana Santa: los delegados de Gobernación se opusieron en 1995 a que el diálogo en San Miguel se llevara a cabo en el interior de un templo, por aquello del artículo 130 constitucional. Pero si de apego a la Constitución se trataba, era injustificable que el pancristianismo de Lozano asumiera sin rubor la tortura, tan condenada por las leyes mexicanas como el uso de los templos para fines políticos.

Durante 1995 el gobierno siguió con la doble estrategia para Chiapas de forzar una salida militar y empujar a una negociación/rendición al EZLN. Dicha estrategia consideraba que no se podía conceder a los zapatistas en la mesa de diálogo, lo que éstos antes no pudieron conseguir con las armas. El periodista Jaime Avilés la llamó "Doctrina Iruegas", en alusión a la fundamentación sostenida en San Andrés por el hombre que había llevado la voz cantante en el equipo negociador, el experimentado embajador Gustavo Iruegas, un civil adoctrinado en las instituciones educativas del

ejército y que contaba con una maestría en administración militar con especialidad en seguridad nacional, otorgada por el Colegio de la Defensa Nacional.

Iruegas no era un improvisado. Como experto en seguridad nacional asesoraba al alto mando castrense en contrainsurgencia, lo que no le impedía tener nexos de amistad con ex comandantes sandinistas, del FMLN salvadoreño, del M-19 colombiano y de la URNG guatemalteca. Esa singularidad fue la que le permitió a Iruegas confiar al autor que "soy una persona que habla tres idiomas: el del gobierno, el de los militares y el de la guerrilla".

Hombre cercano al ex canciller Jorge Castañeda, jugó un papel clave en el rompimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua, hecho que aceleró el fin de la dictadura somocista; cumplió una función estratégica en el conflicto salvadoreño, en los días de la declaración franco-mexicana que reconoció al FMLN como fuerza beligerante, y estuvo muy vinculado a los dirigentes de la URNG, cuyas pláticas con los últimos gobiernos guatemaltecos tuvieron como escenario el territorio mexicano.

Iruegas sabía que el hablar "tres idiomas" no lo hacía necesariamente confiable para las partes involucradas en el conflicto de Chiapas. En la coyuntura de los diálogos de San Andrés, su manejo del *idioma* de la guerrilla le permitiría al menos inicialmente, moverse sin la rigidez propia de un militar o de un burócrata priísta. Pero en esencia su papel en la mesa de negociación era la de hablar el *idioma* del gobierno y del ejército, a riesgo de ser sacrificado como cualquier otro funcionario.

Durante una conversación con el autor, Iruegas reveló que en los prolegómenos de los diálogos de San Andrés él había sostenido ante el alto mando militar que el problema de las armas del EZLN no era prioritario. Que desarmar a la guerrilla era lo último de la agenda y no lo primero, y que de lo que se trataba era de *destruir* al zapatismo como fuerza rebelde, haciendo que se incorporara a la vida política como organización legal.

Iruegas creía —al menos eso fue lo que dijo— que en los tres meses y medio que llevaba como asesor de Moctezuma para el caso Chiapas, había logrado permear a sectores del Estado Mayor y del gabinete vinculado a la seguridad nacional, con la idea de que a los indígenas alzados del sureste les asistía la *razón histórica*. Incluso, dijo, dichos sectores estaban "convencidos" de que las reivindicaciones democráticas del EZLN eran justas.

Públicamente, Iruegas había declarado que la intención del gobierno no era aniquilar al EZLN, aunque afirmaciones como ésas bien podían ser parte de la *guerra de papel*, como el diplomático llamaba en privado a la lucha con el EZLN, aunque por otro lado no podía ocultar que dentro del ejército existían sectores de línea dura, partidarios de una salida sangrienta.

Más aun, al enfatizar la principal característica de la negociación sobre Chiapas —la ausencia de enfrentamientos armados—, mencionó a la prensa la posibilidad de que surgieran "incidentes", lo que llevaba a pensar en escaramuzas bélicas o en un atentado desestabilizador promovido por quienes deseaban una solución de fuerza, lo que a su juicio no debía ser motivo para interrumpir las negociaciones.

Según su impecable lógica, así como en el medio de la negociación Moctezuma-Marcos el gobierno había ordenado unilateralmente el avance militar, el EZLN también podía ahora intentar el cambio en la correlación de fuerzas por la vía armada, como había ocurrido en El Salvador con las principales ofensivas bélicas del FMLN en plena fase negociadora.

Sin embargo, una cosa era lo que Iruegas pensaba o decía en público y otra el mandato impuesto por sus jefes del equipo de seguridad nacional para ser ejecutado en la mesa de diálogo, según la premisa de que una guerra es el choque de dos fuerzas capaces de resguardar, cada cual, un territorio y vulnerar las defensas enemigas. Si un ejército no cumple con esos requisitos, no tiene derecho a nada, salvo a pactar los términos de su rendición. Es decir, el mensaje a los zapatistas era: "Si no pelean, ríndanse."

Para el alto mando castrense, el hecho de que el EZLN se hubiera replegado a las montañas tras la ofensiva de febrero demostraba su extrema debilidad bélica. Al mismo tiempo, el cerco de aniquilamiento montado por el ejército sobre los Montes Azules, hacia donde se replegaron los

zapatistas, había roto o dificultado en extremo las comunicaciones entre las tropas de élite del grupo armado y sus milicias y base social en las poblaciones de la selva. Si el pez se había quedado sin agua, estaba cerca el final de la guerrilla. Pero el zapatismo había demostrado, nacional e internacionalmente, que no sólo era un movimiento popular, también era un ejército. Un destacamento armado con mandos, tropas, disciplina y capacidad de fuego. Tras la ofensiva de febrero el EZLN se retiró de manera ordenada, siendo acompañado en su repliegue por aldeas enteras. Y si mantuvo el alto al fuego y eludió el combate fue por consideraciones político-militares.

Fuentes castrenses reconocieron, en privado, que pese a la debilidad relativa de los zapatistas en cuanto a su capacidad de fuego —el cual, en rigor, seguía siendo un misterio—, la guerrilla tenía a su favor un conocimiento privilegiado del terreno donde operaba y el apoyo de la población civil. Ese tejido social de la insurgencia fue uno de los blancos del ejército en la ofensiva de febrero, aunque a la luz de las posteriores movilizaciones indígenas en San Andrés había sido rápidamente reconstituido por el grupo armado.

Al parecer y según ocurrieron los hechos, la "Doctrina Iruegas" confundió los puntos de llegada con los de salida. El EZLN estaba muy lejos de ser derrotado en el terreno militar y sus fuerzas estaban intactas, lo mismo que su presencia en las comunidades y su autoridad moral en la zona. El gobierno, como es tradición en México, terminó confundiendo la realidad con su propia propaganda. Tras romper de forma unilateral la tregua armada, trató de arrinconar a la comandancia rebelde y poco faltó para que la volviera a tratar como "los delincuentes que son".

Al segundo (pre) diálogo en San Andrés, que siguió al de San Miguel Ocosingo, el gobierno llegó con un plan definido, el cual debió ser cambiado porque también el EZLN estaba aprendiendo a hacer política. Iruegas había cometido un par de errores en la reunión previa de San Miguel. Primero, cuando aceptó al poblado zapatista de San Andrés de los Pobres (Larráinzar) como sede permanente del diálogo. Y segundo, cuando a nombre del gobierno federal suscribió el documento base y estampó su firma junto a la de siete comandantes del EZLN (Tacho, David, Ramón, Zebedeo, Rubén, Fernando y Rafael), con lo que se reconoció, en los hechos, el grado militar de la dirigencia guerrillera, que exigía ser vista como fuerza beligerante.

El primer error de Iruegas fue calificado como una "ingenuidad" en fuentes militares consultadas. Previo a San Miguel, el EZLN había propuesto cuatro posibles sedes del diálogo ubicadas en la capital del país: la catedral metropolitana, la basílica de Guadalupe, la Ciudad Universitaria y la sede local de la ONU. El gobierno rechazó los lugares por obvios motivos, ya que la presencia del EZLN en el Distrito Federal suponía concederle a los rebeldes un estatus de fuerza nacional.

Cuando en San Miguel los zapatistas preguntaron por qué el gobierno no había aceptado negociar en la capital, Iruegas repitió que el de Chiapas era un problema local, a lo sumo regional. Ya en la ronda para fijar la sede, el EZLN propuso tres lugares rotativos: Guadalupe Tepeyac, San Miguel y San Andrés, a fin de que sus bases civiles siguieran de cerca el diálogo.

Iruegas lo rechazó y ofreció Aguascalientes, que según él tenía un significado simbólico para el EZLN, lo cual a su vez era una muestra de buena voluntad del gobierno. Allí se habían reunido en agosto de 1994 miles de delegados de la sociedad civil, con motivo de la Primera Convención Nacional Democrática y allí también, en menos de 40 días y a punta de machete, los indígenas levantaron un teatro griego, un barco pirata y una biblioteca simulando a la de Alejandría, en un mundo iletrado y analfabeta.

Cuando se registró la ofensiva de febrero, el ejército se ocupó de que en Aguascalientes no quedara piedra sobre piedra por lo que la oferta de Iruegas significaba llevar al EZLN a una zona ocupada militarmente. Tras rechazar el "gesto", los zapatistas propusieron San Andrés e Iruegas aceptó sin dilación, lo que luego le acarrearía el mote de ingenuo en los círculos militares, ya que el sitio es una zona de notoria hegemonía guerrillera, el último lugar que hubiera querido el ejército.

Quizá fue para salvar la cara frente a sus propios errores, que Iruegas se convirtió en San Andrés en un duro negociador.

Desde la primera reunión en San Miguel, y aun antes en comunicados y entrevistas de Marcos, el EZLN había anunciado la decisión de movilizar a las comunidades porque se quería un diálogo público, de cara a la nación. Incluso el modelo de los diálogos en la fase anterior, con Camacho, había sido el de reuniones privadas (en la catedral de San Cristóbal) pero con un entorno público: los cinturones de la sociedad civil.

Antes del encuentro de San Andrés, en la tercera semana de abril de 1995, el mediador Samuel Ruiz informó a Gobernación que se habían detectado movimientos en varias comunidades y que unos 10 mil indígenas se aprestaban a trasladarse al lugar del diálogo. Efectivamente, como en enero de 1994, cuando miles de indígenas de Los Altos tomaron cuatro cabeceras municipales, el 19 de abril más de siete mil personas se trasladaron hacia la cabecera municipal de San Andrés. Las marchas llegaron por los dos costados. Al frente iban mujeres y niños, atrás los hombres, casi en una formación militar. Vestían sus trajes tradicionales y por sus atuendos se podía identificar a los de Magdalena, San Pedro Chenalhó, Tenejapa, Chalchihuatán, Simojovel, Chamula, El Bosque, Zinacatán... Pero no fue una simple marcha: se trató de la primera acción pública de masas del zapatismo desde el inicio de la insurrección; una singular demostración de fuerza. El movimiento clandestino quería mostrar que tenía base social: el rostro indio, paupérrimo y pacífico de la guerrilla zapatista. Un nuevo golpe al mito oficial sobre el EZLN como un fenómeno circunscrito a cuatro municipios selváticos y a la visión paternalista del indigenismo priísta, fundado en los supuestos de Alfonso Caso sobre el natural infantilismo de los indios que los inhabilita para manifestarse libremente y defender sus ideas.

En la avanzada de los contingentes se enarbolaba la bandera roja y negra del EZLN, seguida por los sombreros campesinos con leyendas de "Yo soy zapatista" o "Todos somos Marcos" y vivas a Zapata, al obispo Ruiz, a la resistencia civil. Pedían libertad, justicia, democracia y que saliera el ejército de Chiapas.

La impresionante demostración de fuerza hizo decir al general Tomás Ángeles Dauahare, en un mensaje a Zedillo, que "no hay condiciones para el diálogo", por lo que el inicio de las pláticas se demoró dos días. Según el comunicado 122 de la Secretaría de Gobernación, los indios habían sido acarreados —siguiendo la tradición y metodología priísta— y aquello era un acto propagandístico del EZLN.

La prensa oficialista salió en defensa de Gobernación y acusó al obispo Ruiz y a la Conai de organizar el "acarreo" y de ser "aliados" del EZLN y "cómplices" de la violación de los acuerdos de San Miguel (en cuanto a evitar provocaciones en torno al diálogo). Pero los ataques en contra de la mediación se atenuaron cuando el ex panista Jesús González Schmall denunció que las "instrucciones" o "sugerencias" para montar la campaña en contra de Samuel Ruiz habían salido de Bucareli y que él mismo había sido censurado por el gobierno en su espacio radiofónico de Radio Fórmula. Al respecto, fue notoria la orquestación de mensajes por parte de conductores de radio y televisión como Javier Alatorre (Noticiero Hechos, TV Azteca); Jacobo y Abraham Zabludovsky (24 Horas, Televisa); Pedro Ferriz y varios columnistas de prensa escrita, incluyendo la agencia oficial de noticias, Notimex, que sin aportar pruebas acusó a los sacerdotes Pablo Romo y Joel Padrón de haber organizado la movilización indígena.

También el columnista del diario *El Universal*, Francisco Cárdenas Cruz, difundió información filtrada por los servicios para justificar un golpe del ejército contra el EZLN, en cuanto a que había sido descubierta cerca de San Andrés una casa de seguridad de la guerrilla, repleta de armas, información que resultó falsa.

La denuncia de González Schmall y la que formularon 40 periodistas nacionales y extranjeros en San Andrés, que acusaron a Televisa y TV Azteca de falsear los hechos al reproducir un video de la marcha indígena, editado en Los Pinos, para justificar los ataques oficiales, echaron por tierra la imagen del jefe de la misión del gobierno, Marco Antonio Bernal,

cuando dijo que la dignidad no era patrimonio exclusivo de los zapatistas...

Cuando finalmente al tercer día los delegados oficiales y del EZLN se sentaron a negociar, el clima era tenso. Ante la presión del gobierno, los indígenas se habían ido: "Si no quieren indios, nos vamos", dijeron, y se marcharon con su dignidad a cuestas. Sólo quedaron los ocho comandantes del EZLN y, afuera, los "indios neutrales" del ejército federal.

Para sorpresa de los zapatistas, la contraparte ya no estaba integrada solamente por funcionarios de Gobernación. Se había incorporado a la mesa un militar experto en contrainsurgencia, el general brigadier Tomás Ángeles Dauahare, ex agregado militar en Washington y secretario del general Enrique Cervantes, titular de la SDN y el mismo que en los años setenta combatió, en Guerrero, a Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Iruegas hizo a un lado su portafolio de diplomático "y develó el odio racista y la actitud aristocratizante de los delegados oficiales", según afirmó Julio Moguel, asesor del EZLN presente en el encuentro, luego de que el primero acusó a los zapatistas de "mentirosos e insolentes". Otro testigo presencial nos dijo que Iruegas se preparó "afectivamente" para la reunión: "Actuó todo el tiempo como un elemento provocador. Varias veces llamó a los comandantes zapatistas mentirosos y acosó permanentemente al mediador, Samuel Ruiz, quien en ocasiones traducía a las lenguas indígenas las posiciones del gobierno."

Agregó que "si la reunión fue desordenada se debió a la actitud del embajador Iruegas, que manejó su estrategia de negociación de manera soberbia y personalizada. Su comportamiento fue mañoso, violando constantemente los acuerdos de San Miguel de manera deliberada: actuó con mala fe, punto uno de los principios acordados; vulneró el segundo, que se refiere al respeto mutuo entre las partes al acusar a los zapatistas de acarreadores, animales, mentirosos, y tampoco respetó el noveno, que establecía la necesidad de informar a la opinión pública con objetividad. Además, otra de las trampas que puso fue provocar a don Samuel". Si bien los agredidos evitaron caer en la provocación, fue evidente que el gobierno estaba militarizando sus posiciones en la mesa, proponiendo Iruegas que las tropas del EZLN se concentraran en tres "sitios de reunión", lo que fue entendido por los indígenas como las reservaciones al estilo estadounidense para acorralar a los sioux o los apaches.

Según nos confió Iruegas, si la fuerza de los zapatistas crecía con las negociaciones "alguien se iba a hacer chiquito".

—¿Quién? —preguntamos.

—El obispo.

A fines de septiembre de 1995, el embajador Iruegas dio por concluida su participación en el diálogo. Su despedida quedó documentada en un largo texto que tituló "Por el bien de todos" y que apareció en tres entregas en el diario *La Jornada* (29 y 30/IX-1 /X/95) pese a que éste lo consideraba un medio "zapatista".

El escrito, una reivindicación de la llamada "Doctrina Iruegas", planteó dos mensajes básicos: 1) Durante los cinco primeros encuentros de San Andrés el proyecto original zapatista sufrió un proceso de cambio cualitativo, reduciendo sus aspiraciones iniciales de guerra revolucionaria a las de participación electoral, movimiento de liberación nacional y consulta para definir su destino, lo que a su juicio dio como resultado la "transformación virtual de una organización armada pero inactiva en un movimiento social de considerable respaldo". 2) Después del retiro del Comité de la Cruz Roja Internacional de Chiapas, quedó "confirmada la percepción gubernamental de que no hay combates, no hay acoso, no hay persecución, no hay hostigamiento y, por lo tanto, no hay conflicto armado [...] Ya se ha conseguido para México la solución pacífica del conflicto armado". (La versión sobre el supuesto retiro voluntario de la Cruz Roja fue rechazada por el sacerdote Pablo Romo, de la diócesis de San Cristóbal y por ONG como Conpaz, que denunciaron las presiones del gobierno para deshacerse de testigos internacionales y eliminar las llamadas zonas neutrales. La decisión fue adoptada luego de una reunión del presidente del Comité Internacional de la CRI, Cornelio Sommaruga, con el presidente Zedillo, el 2 de agosto de 1995.)

Por otra parte, la explicación de Iruegas de cómo se alcanzaron esos "logros", remite a su teoría inicial: "Hay una regla de oro: el insurrecto va a conseguir todo aquello que corresponde a su verdadera fuerza [militar]." Según esto, su doctrina se había impuesto en toda la línea. Ahora podía retirarse. Su próximo destino: embajador en Bélgica (nombramiento que recibió en agosto de 1996).

A partir de entonces las negociaciones quedaron en manos del experto en contrainsurgencia, el general Tomás Ángeles, "nuestro asesor militar", como lo llamó Bernal, supuesto titular del equipo. Los otros miembros fueron Jorge del Valle, pintoresco y locuaz ex trotskista que durante un tiempo se desempeñó como asesor de Jorge Carpizo e integró, como Bernal, una comisión especial del programa Solidaridad; Javier Zenteno, ex asesor jurídico de Gobernación; Uriel Jarquín, colaborador de Eraclio Zepeda, por el gobierno estatal, y un equipo de asesores, entre ellos Gustavo Hirales, ex guerrillero y ex asesor de Carpizo.

Del Valle, quien robó a Iruegas el calificativo de "zapatos" para referirse a los zapatistas ("¿Sabe por qué?" —le dijo a la periodista de *La Jornada*, Blanche Petrich— "Porque soy de Morelos y crecí muy cerca de la verdadera doctrina de Zapata, y no puedo aceptar que esos *neos* la representen"), fundamentó en diciembre de 1995 la estrategia contrainsurgente según la fórmula que llamó de *reducción* o *achicamiento*, una variante del pensamiento de Iruegas.

Durante una entrevista con *El Nacional* (4/XII/95), del Valle identificó dos fases en la línea del gobierno frente al conflicto en Chiapas: la primera estrategia, de marzo a noviembre de 1994, fue de contención para impedir que el EZLN ampliara su influencia política y territorial, y la segunda, a partir de la asunción de Zedillo, de *reducción* de esa presencia.

"Se pasa de la contención a la reducción, en lo territorial, en lo social, en lo político local. Esta lógica estratégica consiste en dar a los actores del conflicto el tamaño que tienen", dijo Del Valle y agregó que el *achicamiento* no se refería sólo al EZLN sino a los miembros de "la Conai, de la Asamblea Democrática Estatal del Pueblo Chiapaneco (Adepech) y otros. Es una lógica de reducirlos hasta que tengan su tamaño real".

Con ello cobraba sentido la afirmación de Iruegas de que el obispo Ruiz "iba a hacerse chiquito", además de hacer evidente la táctica oficial de golpeteo en la mesa de San Andrés; una táctica que el legislador de la Cocopa, Jaime Martínez Veloz, definió como una política de *negociación al límite*, que apuesta más al desgaste de su contraparte que a la celebración de acuerdos, y que busca "el acorralamiento y la negociación bajo presión, muy similar a los cánones propuestos por los manuales tradicionales de la lucha antiguerrillera". ("Chiapas, ¿principio o fin de la reforma del Estado?". Suplemento *Enfoque. Reforma*, 19/ V/96.)

Como observó en su ensayo Julio Moguel, la esencia de la "Doctrina Iruegas-Del Valle" remite a que las armas y no la voz

son las que mandan en las negociaciones: la lógica de lo militar subordina y dirige la lógica de las palabras y de los acuerdos. El resultado de esta línea de mandos es, en una de sus vías, guerra de baja intensidad, cerco y acorralamiento de los indígenas rebeldes, eutanasia por hambre y por enfermedad de amplios conglomerados; en otra de sus vías, es la dictadura del silencio en la apertura de la mesa de Democracia y Justicia, o la presencia de asesores ex guerrilleros o ex izquierdistas en la delegación gubernamental" ("Chiapas. Entre el diálogo \ la guerra". *Enfoque*.

Esas dos vías se cruzaron en cada una de las fases de negociación en San Andrés y el diputado Martínez Veloz llegó a afirmar que las "coincidencias" de atentados, desalojos, asesinatos y enfrentamientos, en donde las víctimas siempre eran campesinos o indígenas, eran al menos extrañas.

Jaime Avilés, en cambio, atribuyó al gobernador interino Julio Ruiz Ferro la administración de dichas "coincidencias". Ruiz Ferro, hombre de confianza de Raúl Salinas en los tiempos en que ambos estuvieron en Conasupo, se ha declarado partidario de la línea dura y ha tolerado y auspiciado a escuadrones paramilitares como Los Chinchulines y Paz y Justicia. Para Avilés,

estos micro ejércitos feudales surgieron como células que se multiplican por bipartición, a partir de las líneas que el ejército despliega a lo largo de cercos tácticos y discontinuos para envolver al EZLN en Los Altos, el norte y la selva Lacandona, y podrían servir como puntas de lanza para desencadenar una guerra civil prefabricada, que abriría a las tropas federales la posibilidad de asumir un papel *neutral* y arrasarse con unos y otros para restablecer el orden (*La Jornada*, 25/V/96).

CAPITULO 6

Quijotes de fin de siglo

Hacia nueve meses que nadie lo veía y en la ciudad de México corría el rumor de que se encontraba herido de gravedad. Pero durante dos noches consecutivas, del 20 al 21 de octubre de 1995, en La Realidad, el subcomandante Marcos se entrevistó en forma exclusiva con el enviado del semanario *Brecha* de Montevideo, Samuel Blixen, y con el autor. No rehuyó tema alguno. Habló del aspecto político, militar y cultural del zapatismo y advirtió que, al igual que en febrero anterior y pese al nuevo proceso de diálogo, el EZLN esperaba otra traición.

—Todo el mundo habla de su capacidad para montar escenarios... —se le dijo tras arribar al encuentro.

—Teatral es lo que dicen, no tengas pena —contestó Marcos, quien llegó a la entrevista a caballo por la brecha principal del pueblo como si fuese don Quijote acompañado por Sancho Panza, con el comandante Tacho montado en un burro.

—Sí, es cierto, le propuse al comandante Tacho que montara el burro del mayor Moisés, porque mi caballo es más flaco que un galgo. Pero Tacho me dijo 'ni madre' y desfiló en un caballo pequeño y con bandera —Marcos relató entre risas.

Cuatro días antes, Tacho había asistido en el Centro de Convenciones de San Cristóbal a la primera fase del diálogo con los representantes de Zedillo. Como Marcos, también él había aprendido a administrar los gestos y ahora parecía divertirse el hecho de asombrar a los presentes con una desenvoltura poco común entre los indígenas.

Desde la ofensiva del 9 de febrero. Marcos estaba prácticamente ilocalizable para la prensa. Hizo una fugaz aparición en las conversaciones de San Andrés, en abril, donde se acordó un reglamento para el diálogo y se fijaron los criterios de seguridad para la asistencia a las pláticas de la dirigencia del EZLN.

Por una confusión, aguardamos a Marcos en San Andrés por espacio de cuatro días hasta que nos llevaron a La Realidad, ese pueblo tojolabal suspendido en una cornisa de montaña, al borde de la selva Lacandona y en el corazón de la llamada zona de conflicto.

En el trayecto desde San Andrés, con Patricio Murphy Ruiz al volante y de guía, el patrullaje militar era intenso. En el camino que lleva a La Realidad y más allá, hasta Nueva Providencia y San Quintín —el abrupto territorio donde el ejército presume que Marcos se desplaza— fue común ver tanquetas y *jeeps* artillados, así como piquetes de soldados con fusiles a la espalda desbrozando el terreno a golpe de machete, o montados en motoniveladoras para abrir el sendero y permitir el paso de una misión de la Cocopa que por esas fechas sostuvo una entrevista de dos horas con Marcos en La Realidad.

Ya en el poblado, nos recibieron unas cuantas gallinas indiferentes y un enjambre de niños desnudos que chapoteaban en el arroyo, mientras sus madres aporreaban la ropa contra las piedras. Una colega de la televisen de Japón y su camarógrafo esperaban desde hacía tres días por una entrevista con Marcos, en la misma choza que ahora nos servía de albergue.

Cuando Marcos llegó al pueblo con su comitiva, despachó primero a los nipones que desaparecieron dejando una estela de latas vacías de refresco y, lo más sorprendente, de chiles jalapeños en escabeche.

La figura de Marcos con sus 1.75 metros de altura apareció horas después recortada en la abertura de la choza, ya entrada la noche. Vestía todo de negro, excepto la gorra militar verde y raída, el pañuelo descolorido y el rojo brillante de los casquillos de las balas que formaban una X en su pecho. Arrimó dos bancos sin decir ni hola, encendió las dos velas que traía e hizo algunos comentarios sobre el Uruguay, Gaicano, Benedetti y la experiencia de los tupamaros.

Durante varias horas Marcos habló casi en susurros recortado contra la penumbra, con su M-16 sobre las rodillas, la pipa encendida y el dedo índice acariciando el bigote a través del agujero del pasamontañas.

A la mañana siguiente, el sobrevuelo de una avioneta que fue seguida de un helicóptero anticipó la llegada de un convoy militar: dos tanquetas blindadas, dos *jeeps* artillados, dos camiones y una ambulancia bajaron por el camino, desembocaron en el pueblo y lo cruzaron lentamente. La llamada Ley de Pacificación y Concordia impedía al ejército federal ingresar en las comunidades indígenas, pero el convoy se detuvo en el centro de La Realidad y unos soldados filmaron y fotografiaron a propios y extraños. El convoy regresaría al atardecer, precedido esta vez por una flotilla de seis helicópteros.

Samuel Blixen preparó un mate durante la segunda noche de la entrevista y se lo ofreció a Marcos, pero éste declinó: "El mate es superior a mis fuerzas. Se los cambio por un asado."

Lejos de presentarse como un jefe guerrillero seguro y confiado, Marcos ni polemizó ni pretendió convencer con sus frases. Se limitó a responder y explicar. Antes de irse dijo: "Díganle a Galeano que recibí su libro" y luego se perdió en la oscuridad como devorado por la selva.

La primera parte de la entrevista versó sobre las circunstancias militares que condicionaban el diálogo. Marcos se mostró convencido de que el esfuerzo de la sociedad civil por promover la discusión de los grandes problemas nacionales, chocaba con la decisión oficial de resolver el caso de Chiapas por la vía militar. Lo que buscaba el gobierno con el diálogo era ganar tiempo, por lo que el EZLN esperaba "una nueva traición", en alusión al 9 de febrero cuando Zedillo ordenó su captura en momentos en que Marcos se disponía a reunirse por segunda vez con Esteban Moctezuma. Para Marcos era notoria la dependencia de México de la política del Pentágono y pronosticó una "bordaberrización" del país y la instalación de un modelo de Estado terrorista.

Según él, la ruptura del cerco en diciembre de 1994 fue

una acción de propaganda para decir que aquí estábamos. Que el problema no se había resuelto y que era necesario enfrentarlo. Parecía que la posición del presidente Zedillo era restarnos importancia, no hacernos caso. De ahí su aval a Robledo y su imposición como gobernador. Es entonces que empiezan los contactos. Se consigue que Zedillo reconozca a la Conai. Él la había tratado de hacer a un lado creando la Cocopa, con la pretensión de que ese grupo de legisladores sustituyera en la mediación al obispo Samuel Ruiz y a otras personalidades independientes.

Agregó que

Esteban Moctezuma hizo contacto con nosotros a través de Samuel Ruiz. Después de resolver varios aspectos de seguridad, a través de don Samuel se concreta el encuentro de Guadalupe Tepeyac, al que asiste Moctezuma. Se hizo junto a la pista de aterrizaje. Él llegó en helicóptero. La gente de Guadalupe Tepeyac hizo un círculo de seguridad. Con Moctezuma sostuvimos dos pláticas, una delante de la Conai y otra privada, en la cual participaron Esteban Moctezuma, Beatriz Paredes, Tacho, el mayor Moisés y yo. Moctezuma y Paredes traían el mensaje de Zedillo de que estaba dispuesto a resolver el problema. Que había que sentarse a negociar.

En la reunión privada, Moctezuma preguntó cuál había sido el problema con Manuel Camacho y por qué no se había llegado a un acuerdo de paz. Marcos explicó:

Le dije que habíamos enfrentado un doble discurso. Por un lado, Camacho nos daba reconocimiento como una fuerza con la que había que negociar, mientras Salinas insistía en que no existíamos, que éramos un grupo de transgresores. Ese doble lenguaje, el del negociador y el del mandante, no nos daba ninguna confianza. A su vez, nosotros le recomendamos a Moctezuma que no fuera a prometer nada que no pudiera cumplir, que nos hablara derecho: que lo que pudiera cumplir que lo ofreciera y lo que no, no. Dijo que sí, que así lo iba a hacer.

En esa ocasión el EZLN había planteado que el problema principal era el de la autonomía de las regiones indígenas,

pero Moctezuma dijo que el problema de la autonomía no existía, que en México ni siquiera la autonomía universitaria existe. Que el asunto era muy discutible, que no tenía ningún fundamento, pero que se podía llegar a tocar el tema. Quedamos en que nos íbamos a reunir regularmente. Yo planteé la necesidad de generar medidas de distensión por ambas partes. Nos comprometimos a que cuando ellos tomaran una medida de distensión militar, nosotros corresponderíamos con otra similar para desactivar la guerra, como ocurrió en 1994 cuando nos entrevistamos con Camacho.

Moctezuma nos dijo que el conflicto poselectoral de Tabasco estaba arreglado. Que era cuestión de días para que saliera [Roberto] Madrazo; que eso no iba a ser obstáculo" —recordó Marcos y dijo que

nosotros exigimos el reconocimiento del gobernador en rebeldía Amado Avendaño. Él dijo que eso había que negociarlo. Llegamos al acuerdo de que estuviera presente Avendaño, no podíamos negociar a espaldas suya. Quedamos en que a la próxima reunión invitaríamos a Avendaño y a Andrés Manuel López Obrador. El caso Tabasco era una de las demandas para reanudar los contactos, pero Moctezuma reiteró que se iba a arreglar, que eso no iba a ser problema. [...] Pero luego vinieron los problemas en Tabasco, la rebelión de Madrazo, por lo que no se alcanzó a concretar el segundo encuentro que había sido planeado para fines de enero de 1995. Moctezuma envió un enlace, el mismo que enviaba Zedillo cuando era candidato: Javier Elorriaga, que ahora está preso en Cerro hueco.* Elorriaga fue el que nos trajo las cartas de Zedillo y le llevó a él las nuestras. El primer contacto fue el 15 de septiembre de 1994, en La Garrucha. Elorriaga llegó con el equipo de video de la empresa donde trabajaba y dijo que se había ofrecido como enlace de buena voluntad para la paz y que traía un mensaje del presidente Zedillo. A él le dimos nuestras cartas para Zedillo. No sé qué mecanismo utilizaba para hacerle llegar las cartas. Pero sí comprobamos que en efecto era enlace del entonces presidente electo.

Al asumir la presidencia Zedillo, Elorriaga fue su enlace con Gobernación y con el EZLN, que acordaron una cita para el 8 de febrero. Marcos relató:

Habíamos hecho la cita para el día 8. Moctezuma nos mandó decir que lo de Tabasco se había arruinado por otros asuntos, pero que era necesario hablar para aclarar esos detalles. Había movimientos militares, nosotros nos estábamos quejando de ello. Insistió que era necesario reunimos para aclarar todo. Quedamos en una cita con su enlace para precisar la fecha, el día 8 de febrero. Nos reunimos con Elorriaga a las once de la noche. Él se llevó la cita, que sería entre el 15 y el 20 de febrero y nuestra propuesta de que concretaríamos los detalles —día, lugar y hora— a través de la Conai.

Javier Elorriaga saldría en libertad en junio de 1996, después de una fuerte presión del EZLN que condicionó la continuación del diálogo a su excarcelación.

Elorriaga salió en la madrugada del día 9. En esos momentos, después nos enteramos, su mujer era detenida en la ciudad de México y se estaban dando otros golpes en Veracruz y el Estado de México. Esteban Moctezuma sabía que ese día había un contacto conmigo en Guadalupe Tepeyac, que yo estaba allí y la principal ofensiva, la inmediata, fue la toma de Guadalupe Tepeyac. Pensamos que fue una trampa. Hicieron un cerco, se tiró una columna de tropas aerotransportadas sobre Guadalupe Tepeyac. Cerraron Nueva Providencia y San Quintín, que era nuestra línea de repliegue y ya no fue posible esa salida. Habían cerrado la trampa. Ellos sabían que yo entraba el 8 a Guadalupe Tepeyac.

—¿Qué le falló al ejército?

—No alcanzaron a poner a tiempo la trampa. Nosotros nos entrenamos para correr. Nos preparamos diez años para defendernos, para eludir ataques de ese tipo. El día 9 me avisan que Zedillo está diciendo que habían descubierto unos arsenales, y que ya sabía quién era Marcos y que estaba pidiendo la intervención del ejército. Entonces nos empezamos a replegar. El 10 es cuando empiezan a

cerrar, pero no cierran bien. La movilización de las tropas federales empieza el 9. El 10 toman Guadalupe Tepeyac y cierran Nueva Providencia y San Quintín. Tuvimos ocho horas para correr...

—¿El ejército lanzó un operativo de aniquilamiento?

—Más que de aniquilamiento fue de detección, al menos en la primera fase. Fue un cerco. Cerraron las entradas y las salidas, y empezaron a lanzar patrullas para detectar. Se supone que chocando ubican y entonces viene el golpe. Un esquema muy antiguerrillero. Tenían el lugar donde estaba la cabeza del movimiento, lo cierran y luego empiezan a peinar adentro para tratar de encontrarla. Del 10 al 13 logramos salir del cerco.

—¿Cómo interpreta la actitud gubernamental de lanzar una ofensiva militar en medio de la negociación? ¿Supo de ello el secretario Moctezuma?

—Según yo, sí. Él dice que no. Mandó decir luego que no, cuando escribo la posdata de "Chinameca, te falló Esteban Moctezuma Guajardo", él mandó decir: "No es cierto, yo no sabía. Me enteré por los medios de comunicación de lo que había pasado." Pero según yo sí sabía y estaba en el ajo, porque el golpe principal va sobre Guadalupe Tepeyac, no va sobre Prado.

Ellos pensaban que Guadalupe y Prado eran mis puntos de contacto. Y van sobre el primero, porque sabían que allí tenía el contacto con Elorriaga. Fue una emboscada, pues. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Creo que Zedillo nunca tuvo intención de negociar. Estaba buscando a ver qué podía averiguar mientras decidía el golpe. El Cisen o su policía política estaba completando la información que necesitaban para justificar el golpe, y los últimos en enterarse fueron los militares. Los militares no tenían planeado un operativo para entrar como entraron. Tuvieron que ajustarlo en ocho horas. El operativo del ejército federal estaba montado para la defensa, para resistir un ataque nuestro, como el que hicimos sobre las ciudades. Pero les ordenan atacar, instalar el cerco, y eso es lo que provoca el retraso, la lentitud del ejército los días 10, 11 y 12. Como que la sorpresa fue también para ellos.

—¿La policía política le dio la idea a Zedillo de que tenían localizados algunos locales del EZLN, la identidad de Marcos, el lugar donde iba a estar y que era posible el golpe?

—Creo que eso Zedillo lo estuvo pensando siempre. Tuvo a gente preparando ese golpe.

—¿Gente de seguridad nacional, no propiamente el ejército?

—Sí, seguridad nacional, no el ejército porque según evaluamos, el dispositivo militar hasta el día 8 era defensivo, no ofensivo. Por eso tardaron en reajustarse.

—Sin embargo, hay quienes estiman que a partir de ese momento la ofensiva contra el EZLN tomó la forma de un plan contrainsurgente, al estilo de las aldeas estratégicas.

—Habíamos previsto que buscarían quitarnos nuestra principal arma: la palabra. Para ello, el objetivo era sacarnos de las cañadas y aventarnos a la montaña. Pero se supone que el paso previo era descabezarnos: capturar a Marcos. El golpe principal falló, entonces trataron de impedir que hablara. Que no hablen los zapatistas, dijeron. Empezaron a peinar las carreteras y cerraron todos los accesos. Esos días la prensa no pudo entrar en la zona.

—¿Dejar al pez sin agua, separando a los combatientes del EZLN de sus milicias y la base en los poblados?

—Sí, ésa fue la idea una vez que fracasó el plan principal de descabezar a la dirigencia. Pero para entonces nosotros estábamos reajustando lo que preparamos durante diez años: el éxodo de los pueblos. Nos replegamos, pero nos replegamos todos. La tesis contrainsurgente era vamos a quitarle el agua al pez, y el pez lo que hizo fue agarrar el agua y se la llevó a las montañas...

—¿Qué balance hizo el EZLN de ese repliegue? Al parecer, el ejército logró el control de los territorios zapatistas.

—Así fue. Pero nosotros no valoramos el terreno como lo valora un ejército regular. Lo valoramos como guerrilla...

—¿Y el terreno no adquiere otra valoración estando la población?

—La población en general, así en abstracto, en términos militares, sí. Pero esta población, la población zapatista, adquiere otra valoración. Estamos hablando de un ejército guerrillero donde la frontera entre lo civil y lo militar está borrada. Lo que hizo el ejército federal fue entrar y quedar rodeado de zapatistas, porque el límite entre la fuerza combatiente y la población civil no existe. El ejército no alcanzó a aventar a la fuerza combatiente a ningún lado; quedó conviviendo con ella...

—¿Consideran que el EZLN está aportando con nuevas fórmulas a la relación entre una fuerza armada clandestina y la población civil?

—No es un aporte nuestro, es de las comunidades indígenas. Porque la forma en que nosotros

mantenemos el enlace con las comunidades, es algo que ellos [los indígenas] construyeron. Son esos túneles, a semejanza de los tupamaros, los que operan como puntos de enlace; los caminos de extravío, las picadas, los caminos reales, donde ellos se comunican y se tocan. Fueron ellos los que en todo momento mantuvieron el contacto con nosotros. Podíamos movernos o escondernos y ellos hacían el contacto con nosotros. Por eso fue posible un repliegue tan ordenado. La prueba de que el EZLN mantiene el control militar de la zona, es que en el repliegue no hubo choques armados. El aporte del movimiento indígena zapatista a la revolución se da también en el plano militar. Por ejemplo el éxodo, el repliegue. Ellos nos aportan la experiencia militar de sus pueblos, lo que viene de su pasado.

—En una entrevista usted planteó que el operativo militar del 9 de febrero fue planeado por Estados Unidos, concretamente por el Pentágono y la CIA, en el marco del NAFTA y de la existencia de yacimientos de crudo en la zona de conflicto de Chiapas. Por otro lado, está la llamada "Doctrina Iruegas", un esquema que algunos estiman de corte contrainsurgente según la premisa de que la mesa de negociación sirve al propósito de acelerar una rendición.

—Iruegas es sólo la cabeza visible de un grupo. El cerebro puede ser otro. Pero en concreto, Iruegas fue quien recomendó a Zedillo la acción militar del 9 de febrero. Él sugirió: "Hay que golpearlos y si los descabezamos podemos negociar. Hay que desactivar la parte grave del conflicto que es la cuestión indígena. No podemos hacer una guerra contra indígenas porque eso tendría mucho costo para la imagen del gobierno". Sí, habló de costos, pero no de vidas de indígenas sino de imagen del gobierno. ¿Cuánta gente necesitamos matar para salvar la imagen del gobierno? Necesitamos golpearlos militarmente, lo más duro posible y de manera rápida. El golpe tiene que ir a la cabeza. Ésa fue la recomendación de Iruegas a Zedillo.

—Entonces reviven la faramalla de que el EZLN no es un movimiento indígena ni es chiapaneco, con la ilusión de que destruida la dirigencia, negociarían con la base sin cabeza. La apuesta del grupo de Iruegas fue: "Vamos a negociar con las comunidades su hospital, su Conasupo, su Procampo y punto." Pero luego resultó que la cabeza era bastante escurridiza y no la pudieron agarrar. Y se metieron en un pantano. Cometieron la torpeza de dictar las órdenes de aprehensión y se toparon con un problema legal. Fueron Iruegas y su grupo quienes metieron a Zedillo en un callejón sin salida y el que lo sacó fue la Cocopa, que hizo la ley que lo obliga a dialogar. Luego, Iruegas dijo que dicha ley era un gran invento, pero hicieron la ley para sacar a Zedillo del atolladero en donde el propio Iruegas lo había metido.

Según Marcos, Iruegas llegó a decir que "en la mesa de negociación hay que ser duros, no hay que soltar nada". Éste quiso sacar provecho del anticamachismo de Zedillo: "Hay que hacer en la negociación todo lo que no hizo Camacho y no hay que repetir nada." Ésa fue, según recapituló Marcos, "la guía del grupo de Iruegas para la negociación, un grupo dentro del aparato de Seguridad Nacional que recibe orientaciones si no órdenes directas del Pentágono".

El subcomandante añadió que Iruegas —quien antes había sido asesor de Camacho—, recomendaba "que no había que soltar en la mesa de negociación cosas que nosotros no hubiéramos ganado en el campo de batalla. Entonces, no podía haber repliegue del ejército, porque el EZLN no había conquistado ninguna posición militar; no se debían plantear cuestiones nacionales, porque el EZLN no había hecho acciones nacionales para ganarse ese lugar. Finalmente, según esa visión, todo quedó reducido a un problema indígena en cuatro municipios y eso era lo único que se debía abordar en la mesa de negociaciones".

Iruegas

apoyó la línea dura. Traen al arrepentido ese de [Marco Antonio] Bernal, al otro renegado de Del Valle, se sientan e impulsan la línea que hace fracasar las pláticas de San Andrés I, II, III, IV y V. Hacen la última propuesta de retirar de la discusión el tema de las reglas de procedimiento, que es una invitación a que nosotros rompamos. Los delegados van con el comunicado donde rompen el diálogo para San Andrés VI. Se da la consulta del EZLN. La Cocopa se da cuenta de que algo está pasando con ese movimiento que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que se van a meter en un problema, y ofrece la salida de las negociaciones nacionales. Otra vez la Cocopa aparece para sacar a Zedillo del callejón sin salida en que lo había metido la "Doctrina Iruegas". Es cuando Iruegas se despide, después de dos fracasos.

Para Marcos,

si nosotros no hicimos acciones militares, ¿por qué el gobierno se sentó finalmente a discutir cuestiones nacionales, si ese derecho no nos lo ganamos en el campo de batalla como decía Iruegas? Porque el grupo en el poder se está rigiendo por los rencores y los ajustes internos y no por la inteligencia. Estamos ante un gobierno estúpido, torpe, que no razona, sino que siente. Y en ese sentido el grupo con el que estamos negociando ahora al parecer es el duro, con el que siempre nos amenazaban si salía Iruegas...

—¿Iruegas veía al EZLN como un enemigo peligroso?

—Ellos sienten un profundo desprecio por nosotros. Eso es lo que no aprendió Iruegas en la Escuela Superior de Guerra: nunca debes despreciar a tu enemigo, porque si lo desprecias nunca lo vas a poder derrotar. Para ellos no éramos nada, ni una amenaza política ni militar. ¿Saben cuántas veces mandó avisos diciendo que no teníamos ninguna capacidad militar ni iniciativa política? Y el EZLN lanzó una consulta en las circunstancias en las que estamos, que superó en 300% la convocatoria que hizo el gobierno, con todos los recursos, para el Plan Nacional de Desarrollo. Sólo con comunicados desde la montaña y con un video con un escarabajo con aspiraciones de caballero andante, que eso es lo que es el Durito.

—¿No fue efectiva entonces la gestión del embajador Iruegas?

—Bueno, a partir del criterio de la "Doctrina Iruegas", que se suponía era la efectividad, quedó demostrado que no fueron efectivos. No fueron efectivos porque fueron incapaces de reconocer que están frente a un problema nuevo, ante algo diferente, algo que no está dentro de los esquemas y manuales que manejan. Por más que les quiera ayudar Carlos Tello Díaz, el nieto del dictador, que les dijo: No, miren, yo se los acomodo de manera que entren al esquema de los grupos ultraizquierdistas, vanguardistas y político-militares o militaristas de los años sesenta". Como quiera, no les resultó. Están frente a un problema nuevo que nosotros mismos apenas alcanzamos a reflexionar desde adentro, con todos los errores que esto implica; no tenemos la suficiente distancia para saber qué está pasando. Les toca a otros reflexionar. Si ustedes ahora me dicen: "¿Cómo explicas al EZLN?", no sé. Eso lo tiene que explicar alguien que guarde una distancia con nosotros. Estamos adentro. No podemos entender cómo es posible que más de un millón de mexicanos, 1 088 000, se manifestaron en una consulta y se arriesgaron a dar su opinión sobre una fuerza clandestina armada, que está siendo perseguida, ilegal... no me lo explico.

—¿Qué piensa sobre la intervención de Estados Unidos en el conflicto?

—Que Zedillo se mete en la crisis económica a la que lo lleva su torpeza y que hace que estalle más pronto de lo que ellos habían planeado, cuando en realidad el plan era diferir la crisis hasta mediados de sexenio, después de las elecciones de 1997, para tener un Congreso más controlado. Su torpeza hace que la crisis le reviente a los 22 días de la toma de posesión. Va a pedir la ayuda y los gringos le dicen: "Sí, aquí está el dinero, pero quiero el petróleo." Estados Unidos quiere comprar el petróleo. Por eso está el proyecto de privatizaciones y finalmente la venta del subsuelo.

Pero en todo eso hay una molestia. Resulta que el más grande manto petrolífero sobre tierra está en el valle de Amador, abajo del ejido Pichucalco, adentro de la selva Lacandona, a 40 kilómetros de aquí. Ese estudio lo hicieron los estadounidenses en 1985-1986 y lo ocultaron. Se dieron cuenta de que había un chingo de petróleo y empezaron a rastrear los brazos, brincándose las montañas. Primero se brincaron la montaña de la cañada de Pathihuitz, luego la cañada de Las Tazas y después la de aquí, la cañada de Soledad-San Quintín, y todo apuntó al valle de Amador. Hicieron excavaciones y descubrieron que abajo del ejido Pichucalco, pegadito al ejido Amador, hay un gran manto petrolífero con el que nunca soñaron: es un petróleo de alta calidad y muy barato de explotar, porque está a la mano. Prácticamente el gas se puede oler.

Eso lo supo el gobierno de Salinas cuando entró en 1988 y lo saben los norteamericanos, nadie más. Porque si no, lo tenía que explotar el gobierno mexicano. Pero el plan fue que lo iban a explotar las empresas estadounidenses luego de que se aprobara en México una nueva legislación. Por eso se guardó el informe y se escondió. Sólo se coló en algún periódico del vecino del norte pero de inmediato lo pararon.

—Pero Estados Unidos no puede correr el riesgo de que una reserva tan estratégica esté en un lugar donde opera una guerrilla.

—Exacto. De allí que Washington plantee que ése es el precio. "Quiero el petróleo. Quiero ese manto petrolífero y ahí tú tienes una guerrilla. Quitámela." En 1993 la CÍA subestimó nuestra fuerza. Pensó que éramos un grupo pequeño y controlable. Pero en 1994 se dieron cuenta que esta guerrilla podía controlar este territorio y que no iban a poder entrar a explotar el petróleo con una fuerza de ese tamaño. "Tienes que eliminarla. Hay que limpiar y barrer", fue el mensaje que le mandaron a Salinas.

—Recapitulemos: tenemos una guerrilla con arraigo en la población, que desde el punto de vista militar no ha sido destruida ni aislada; hay petróleo en la zona de conflicto y Estados Unidos pretende eliminarla, por lo que presiona al gobierno de Zedillo en la dirección de una salida de tipo militar...

—Sí, así es, y el gobierno mexicano compra el plan: "Se busca guerrilla. Recompensa: 50 millones de dólares." Pero cuando digo que hay que limpiar y barrer no me refiero sólo al zapatismo. Me refiero a todo...

—¿Cuál es el margen de maniobra del gobierno mexicano?

—Tiene muy poco margen interno, pero a la vez carece de vocación para alterar los planes de Estados Unidos. Forma parte de esos planes. Su ascenso al poder y su ejercicio del poder son parte de ese plan del gobierno estadounidense.

—Y la "Doctrina Iruegas", ¿no fue la correcta? Acabar con el problema legalizando al EZLN, haciendo que se convierta en un partido y que sea uno más dentro del juego político.

—¡No! ¡Quieren matarnos! Tú dices: "Participen en política y les damos una diputación o lo que sea." Pero no es ése el plan. El plan es "salgan a la vida política y los asesinamos". ¿Dónde aprendió Iruegas? En Centroamérica. ¿O quieren más ejemplos de guerrilleros que pasan a la vida civil y son asesinados? ¿Colombia?

Hay que analizar la propuesta de Iruegas cuando habló de medidas de distensión... Esteban Moctezuma dijo: "Replegamos el ejército si el EZLN se compromete a no aparecer en las comunidades". Nosotros entendimos que eso fue propaganda que le servía al ejército federal. Algo así como ya los hicimos correr. Y llega Iruegas y dice: "No, queremos que bajen. Queremos saber dónde están y queremos que estén en un lugar", con el evidente objetivo de hacernos meter en su ratonera y allí agarrarnos. Es lo mismo que decir "sean una fuerza legal, méntanse a un partido que entonces los exterminamos".

—¿Cuáles serían las alternativas? ¿La guerra, un golpe militar o la implantación de un esquema de terrorismo de Estado estilo sudamericano?

—El terrorismo de Estado puede ser posible. Un golpe de Estado no, porque el ejército es muy reacio a la injerencia abierta, descarada, de un gobierno extranjero. Y es claro que en este proyecto está enfrentando un movimiento revolucionario o "subversivo", como le quieran llamar, que no entra dentro de lo que le enseñaron en Fort Gulick ni en la Escuela de las Américas. No están frente a una fuerza financiada por el extranjero, formada por el extranjero y que quiere implantar el comunismo y comerse a los niños crudos. Se trata de una fuerza indígena que está pidiendo democracia, libertad y justicia pero, además, el ejército nos da el trato de fuerza regular, no recurre a golpes bajos y reconoce el estatuto de ejército. El EZLN está frente a un ejército que lo trata como ejército. Eso para un militar es muy importante, es lo que nosotros llamamos el honor militar. Pero además, si alguien en los últimos años ha sido reacio a la injerencia o al control del gobierno estadounidense en la cuestión militar, ha sido el ejército mexicano. Ahí está, por ejemplo, la junta militar de Williamsburg, Virginia, donde el único país latinoamericano que no mandó a su ministro de Defensa, fue México.

—Hay quienes estiman que por la vía de los hechos las Fuerzas Armadas mexicanas se están plegando a la llamada Doctrina Cheney, según la cual la Defensa de Estados Unidos busca convertir a los ejércitos latinoamericanos en meros policías internos con el pretexto de la lucha antinarcóticos.

—La especialización del ejército federal data de 1980. La fuerza de intervención rápida, la Fuerza Arco Iris, se ensaya aquí en Chiapas en 1980. La ofensiva del 9 de febrero de 1995 la ensayó el ejército federal delante de José López Portillo y de militares de Estados Unidos. Guatemala y México quince años atrás, fue el mismo movimiento. Aquella vez, participaron 40 mil soldados. El plan existe desde el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, en 1979. Esas tropas de asalto, esa fuerza de intervención rápida compuesta por cuatro mil paracaidistas, está dislocada en lo que es el VII Cuerpo de Ejército desde 1985. Esa modernización del ejército mexicano, de la que tanto se habla ahora, está desde el triunfo del sandinismo, cuando los mandos evaluaron que podía incendiarse El Salvador, Guatemala y que el incendio se iba a meter en México. La Operación Triángulo, como también la denominan, la volvieron a ensayar en 1985 cuando el general Godínez. Bravo asumió la

comandancia de la séptima región, y ya entonces se involucraba al narcotráfico.

Entonces esa modernización contrainsurgente estaba desde antes y se inscribía en la modalidad que se utilizó en Granada y luego en el Golfo Pérsico. Guerras rápidas, golpes contundentes y masivos. En mayo de 1993, los generales Godínez y Menchaca metieron la fuerza de intervención rápida en la sierra del Corralchén. En menos de 24 horas pusieron a 1 500 hombres en un espacio de ocho kilómetros cuadrados. Por eso se mataron entre ellos.

Toda la parafernalia militar estaba montada desde antes, cuando menos de 1988. Nosotros no cometemos el error de menospreciar al enemigo. Sabemos que tenemos un enemigo poderoso enfrente, que no aprendió en enero de 1994, sino que estaba preparado para eso desde antes. Enero los tomó por sorpresa, pero desde mucho antes el ejército estaba preparado para aniquilar rápido, de un solo golpe, a una guerrilla de este tipo.

[Para Marcos] cuando digo que no creo que un golpe de Estado venga del ejército federal, quiero decir que el golpe vendrá de otro lado, pero que el ejército tendrá que cumplir su papel subordinado. Pienso que es más barato, en términos políticos, un golpe de Estado tipo Fujimori, avalado por el ejército. No pienso en un militar al frente del golpe, pero sí en un Castillo Peraza.

—Desde 1986, a excepción de Haití. Estados Unidos no ha admitido un golpe de Estado al viejo estilo...

—El hecho de que no pensemos que el ejército vaya a ser el protagonista de un golpe de Estado o de esa derechización, no quiere decir que no le demos el valor de aliado de las fuerzas golpistas. Para nosotros es un enemigo. Lo respetamos pero sigue siendo enemigo, está del otro lado.

En cuanto al terrorismo de Estado, el ejército como institución no se va a meter, pero sus tropas van a participar bajo otra fachada. Es lo que están haciendo con la PGR, donde están formando cuerpos de militares y le ponen mando civil. La imagen del ejército como institución queda limpia, pero sus soldados están participando. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un pueblo que resistió a la potencia militar más grande de su tiempo: España. España se propuso lo mismo que ahora intenta el gobierno, y no pudo. Esta gente tiene la experiencia de haber enfrentado en condiciones paupérrimas, las peores en términos militares, a España y luego a Inglaterra. Francia. Alemania. A todas las grandes potencias militares que fueron entrando. Ése es el apoteosis que dan las comunidades indígenas: la resistencia al poderoso. Cuando le enfrentas a alguien que es más poderoso no necesariamente tienes que pelear con él. Puedes resistirlo, buscando la forma de debilitarlo.

Sí, tenemos enfrente a un enemigo muy poderoso y vemos venir un golpe muy grande. Nomás que estamos como el pastor y el lobo. Estamos diciendo: "Viene el lobo, viene el lobo" y nadie nos cree. En noviembre de 1994, cuando iba a asumir Zedillo, advertimos: "Va a haber una ofensiva militar." Y nadie nos creyó. Pensaban que Marcos estaba alardeando, que no iba a pasar nada. Pero vino la ofensiva militar.

Ahora estamos igual. Decimos que el diálogo es una mentira, que están esperando mejores condiciones para golpearnos. Pero nadie nos cree. Nos dicen que el gobierno se ha abierto al diálogo, que está la Ley de Pacificación, que el gobierno está pensando discutir las cuestiones indígenas, que cómo es posible que planteemos eso. Es lo que nos dicen, como si realmente el proceso de diálogo hubiera entrado en una ruta de pacificación.

—En caso de una reanudación de las hostilidades, ¿la iniciativa militar saldría del ejército federal?

—Sí, nosotros no tenemos ninguna posibilidad política, no digo militar, de reiniciar las acciones bélicas. Por todo en lo que andamos y lo que le estamos respondiendo a la gente, no podríamos desencadenar una acción militar ofensiva que tendría costos políticos mayores. Ahora, en términos militares estamos preparados para otra traición en cualquier momento. Es el único antecedente que tenemos de cómo actúa el gobierno.

—En la hipótesis de una reanudación del conflicto armado, ¿están preparados para operar fuera del territorio de Chiapas?

—Sí. Pero el costo político, en caso de que nosotros tomáramos la iniciativa, sería mayor que las ventajas militares que pudiéramos obtener.

—¿Y si el ejército decide una operación de aniquilamiento sobre la cabeza zapatista?

—Nos vamos a la guerra de guerrillas.

—¿Contemplan la posibilidad de una guerrilla urbana?

—Sí, en todas partes. Una guerra de guerrillas en todas partes. Autónoma, sin mando central.

Descabecen o no descabecen, cada unidad comienza a operar según planes operativos que tienen, con decisión de autonomía. Ya no habrá un mando que diga detente o ataca. Ya no habrá control. Estamos preparados para que nos descabecen, y para seguir. Sería la guerra de largo plazo, de desgaste.

—¿Y en materia de armamento? ¿Tendrían acceso a armamento sofisticado?

—No tenemos posibilidad de acceso, ya no digamos a armamento moderno, ni siquiera al que tuvieron otras guerrillas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque siempre priorizamos el trabajo político sobre el militar y porque somos muy artesanales aunque políticamente nos hayamos desarrollado mucho. Paralelamente, enfrentamos a un ejército y a grupos paramilitares con un alto poder de tecnificación. Tratamos de contrarrestar eso conociendo sus alcances. Estudiamos en dónde es efectivo ese armamento y en dónde no. Por ejemplo, los señalamientos con rayos láser, las bombas inteligentes...

—¿Es una limitante para el EZLN carecer de armamento sofisticado?

—Un ejército que no tiene armamento es un ejército incompleto. Pero no tenemos posibilidades de acceso ni económicas, porque los pueblos nos reclaman el uso de los fondos para resolver las necesidades vitales. Vaya, no puedo decir: voy a comprar un helicóptero o un avión Awac, cuando hacen falta frijoles. Lo concreto es que nos hemos entrenado diez años para esto, y contamos con la experiencia indígena, que ha resistido a las potencias más poderosas. Nosotros no tiraremos el primer tiro, pero resistiremos.

—Pasando a otros temas, ¿qué opina del asesinato del cardenal Posadas y de la captura del "Chapo" Guzmán? La versión oficial indica que fue detenido en Guatemala, cerca de Tapachula, pero se dice que su captura ocurrió en el Distrito Federal. ¿Tiene el EZLN alguna información al respecto?

—Creemos que la versión oficial fue para justificar el plan que estaba diseñado para enero de 1994, bajo la fachada de la lucha contra el narcotráfico. Estaban preparando la versión de que en Chiapas había una gran red de narcotráfico, vinculada a Centroamérica, y que necesitaban militarizar el estado. En realidad era una medida preventiva para lo que les pasó el 1 de enero. Sólo que llegaron tarde, lo iban a hacer diez días después.

—¿Por qué el crimen de Posadas?

—Intuitivamente, pensamos que es por narcotráfico. Que Posadas sabía algo de implicaciones del narcotráfico muy arriba, a nivel del gobierno federal, y que había que eliminarlo como una medida preventiva. De algo se enteró el cardenal, tenía cierta información que le iba a transmitir al nuncio Prigione y lo eliminan antes de que se entrevistó con él. Nunca se llegan a encontrar, lo matan antes. No creemos en la teoría del *Nintendo* que manejó Carpizo, cuando pretendió reconstruir el crimen con la ayuda de computadoras, ni en la tesis de la confusión. Y el movimiento de que agarraron al "Chapo" en Chiapas era parte de la ofensiva que se preparaba contra nosotros. Ahí se ubica también el viaje de Zedillo a Guatemala. Ellos siguen filtrando que detrás del EZLN hay una gran infraestructura. Dicen que estoy saliendo constantemente al extranjero, que las armas nos llegan por vía aérea y la Operación Triángulo, según esto, es para interceptar nuestras comunicaciones y las presuntas naves que abastecen a la guerrilla zapatista.

—El EZLN denunció la presencia en Chiapas de asesores militares estadounidenses y guatemaltecos, y la de mercenarios argentinos que antes habían actuado en Honduras. ¿Pueden probarlo?

—Sobre la injerencia del gobierno norteamericano sabemos que por lo menos desde junio de 1994 enviaron a un grupo de asesores, *rangers* o su equivalente, bajo la denominación de Sistema de Operaciones Encubiertas [o secretas]. Al frente está un tal Propp, mayor del ejército norteamericano. A él lo detectamos desde junio de 1994 en San Cristóbal, y volvió a aparecer el 10 de febrero de 1995 en Guadalupe Tepeyac junto con la unidad del ejército que tomó ese poblado. Las prostitutas que fueron a dar servicio nos informaron que estuvieron atendiendo a un grupo de soldados, que suponemos de origen norteamericano, porque son altos, rubios, de ojos azules y hablan en inglés, dijeron.

Obviamente, no les vimos el pasaporte. Luego nos enteramos que Propp estaba en San Quintín, y ya lucía el grado de teniente coronel. Ése agarró el grado aquí en Chiapas; se promovió de mayor a teniente coronel. Por otra parte, sabemos que el gobierno estadounidense interfiere nuestras comunicaciones y se las pasa a las autoridades mexicanas. Por lo menos lo hizo durante los diálogos de San Andrés. Captaba las comunicaciones que teníamos con nuestra delegación y se las hacía llegar a la delegación gubernamental, a Iruegas. Eso también está confirmado. Para ello se necesita tecnología que no tiene el ejército federal.

Otro informe que tenemos es que el ejército norteamericano estaba funcionando como intermediario en la aportación de los mercenarios argentinos que están presentes en Chiapas; hay quien dice que están con

los escuadrones paramilitares y las guardias blancas. El ejército niega que tenga asesores argentinos. Pero tenemos las fotos de algunos de esos asesores, de cuando estuvieron dando instrucción en Honduras. A uno de ellos lo ubicamos aquí, preparando explosivos y dando instrucción en el uso de morteros.

En Las Tacitas, en la cañada de Las Tazas, hay una unidad militar que hace un avance sobre San Francisco, el ejido de Lázaro Hernández, el diputado del PRI, y observadores vieron a cuatro o cinco oficiales con distintivos del ejército guatemalteco. Nunca lo confirmamos. En cambio sí confirmamos que el ejército mexicano recibió adiestramiento en contrainsurgencia de los *kaibiles* guatemaltecos.

—Según algunas informaciones, la CÍA y el Pentágono le hicieron saber al gobierno mexicano que tenían ubicado al subcomandante Marcos y que lo podían capturar.

—Sí, que ya sabían dónde estaba y que tenían una unidad lista para capturarme. Que si me querían vivo o muerto, y que en cualquier momento lo podían resolver. Eso fue en mayo de 1995 y nos enteramos de esa oferta hasta julio. No sé si sea cierta, pero es la información que nos dieron. Otro informe señala que le dijeron al gobierno: "Sabemos dónde está Marcos, pero no le daremos esa información porque no conviene. Si le pasa algo a Marcos va a ser peor."

Lo de la CÍA y el grupo de operaciones especiales se lo mandamos decir a los gringos y contestaron que no era cierto. Les mandé decir que no sería la primera vez que el gobierno norteamericano no supiera lo que están haciendo sus propios servicios de inteligencia. Mi interlocutor era alguien del Consejo de Seguridad Nacional, que depende del Departamento de Estado. Me dijo: "No, no estamos haciendo nada. Estamos por la democratización y que se resuelva el problema indígena. No vamos a hacer ninguna maniobra militar." Le pregunté si él podía asegurar que la CÍA no estaba haciendo nada, y le puse ejemplos históricos de cuántas veces la CÍA había operado de manera encubierta sin que los del Departamento de Estado se enteraran.

—Acaba de decir que tenía comunicación directa con el Departamento de Estado. ¿Se puede saber cómo? Porque es insólito que una guerrilla tenga ese tipo de diálogo con Estados Unidos.

—Ellos lo buscaron. Estaban preocupados desde enero de 1994. No les checaba que usáramos computadora, ni nuestra ideología, ni nada. Entonces hicieron un contacto para averiguar de qué se trataba esta guerrilla zapatista.

—¿A quién se refiere cuando dice "ellos"? ¿Al gobierno de Estados Unidos, a la embajada aquí?

—Al Departamento de Estado del gobierno estadounidense. Así se presentaron por medio de enlaces. Querían saber qué pensaba Marcos de Fidel Castro, de Cuba. Les dije que eso se lo tenían que preguntar a los cubanos, no a nosotros.

También querían saber qué pensaba del problema de la inmigración [de mexicanos indocumentados hacia Estados Unidos]. Les dije que eran unos imbéciles con su política migratoria, que estaban haciendo todo lo posible por tener un problema ahí. Que lo que nosotros queríamos era una nueva relación, y que eso les iba a servir a ellos. Punto.

Y entonces, cuando les hice la denuncia de lo de la CÍA, mandaron decir: "No es cierto, ya investigamos. No le muevas a eso." Afirmaron que tenían el compromiso de no hacer esas cosas. Les dije que teníamos pruebas y que las podía exhibir en el Consejo de Seguridad de la ONU. En total fueron dos las comunicaciones que sostuvimos con los gringos. Pero no sé hasta qué punto sea *borrego* [falso] porque luego hay gente que anda diciendo: "Soy el enlace de Clinton", ustedes saben...

En el transcurso de la entrevista, Marcos hizo alusión varias veces a la experiencia popular en Uruguay: "Mi generación creció admirando la estructura, los aspectos técnico-militares y la creatividad de los tupamaros y, además, en términos políticos, el planteamiento de un movimiento incluyente, no sectario... Siempre quise ser un escritor argentino o uruguayo, pero cuando descubrí que había una relación directa entre la calidad literaria y el mate, decidí ser guerrillero" —dijo entre risas tras confesar que "no puedo con el mate".

Sobre el origen de su humor, Marcos explicó que "cuando entramos a la organización teníamos que ser serios, respetuosos, aburridos. El rock era contrarrevolucionario, imperialista. Todo lo que no fuera 'Patria o Muerte. Venceremos' y canciones de protesta, estaba mal. Si escuchabas música clásica no te ejecutaban, pero ya eras sospechoso, y si los libros que cargabas no eran *Materialismo histórico y empirocriticismo* o *¿Qué hacer?*, si en cambio era, por ejemplo, *Historia de cronopios y de fainas* o los poemas de amor de Benedetti, te quedaban

mirando raro".

Cuando el 9 de febrero de 1995 el gobierno reveló la supuesta identidad del subcomandante Marcos, lo identificó con el tampiqueño Rafael Guillen, ex profesor de artes gráficas y diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana. Según Marcos, la difusión de su presunta identidad fue parte del plan contrainsurgente para capturarlo, que incluyó "una traición y una trampa".

En su libro *La rebelión de las cañadas*, Carlos Tello avaló esa identificación de los servicios de inteligencia, además de dar otros nombres de comandantes del EZLN y relatar una historia sobre desavenencias entre los dirigentes guerrilleros, mostrando al zapatismo como una organización sectaria y mesiánica, que por razones oportunistas finge comprender la problemática indígena.

Durante la entrevista, Marcos dijo que "los periodistas extranjeros no olvidan preguntarme si soy Guillen. Les digo que no, que no soy ese señor y se quedan muy confundidos".

Para Marcos,

el libro de Tello Díaz tiene otras implicaciones. Tengo las fuentes informativas de Tello. Es un informe del Cisen (Centro de Información y Seguridad Nacional), los servicios de inteligencia de la Secretaría de Gobernación. Un desertor del Cisen nos lo pasó, junto con datos sobre la participación de Eraclio Zepeda en el financiamiento de las guardias blancas. En ese libro viene todo lo que según Tello es el producto de sus entrevistas con la gente. En realidad, él sólo transcribió ese informe y le dio coherencia, le puso un poco de literatura sobre el perverso Marcos, cómo se peleaban entre ellos y cómo mataron a Rodrigo.

El libro tiene un montón de mentiras que ahora no estamos en condiciones de revelar. Pero tengo la esperanza de que cuando se sepa la verdad, Tello regrese el dinero de la beca, porque ese libro es un fraude a la nación, ya que supuestamente es resultado de una investigación becada, cuando simplemente se trata de la transcripción de fichas policiales que el gobierno no podía manejar públicamente, porque violaría la Ley de Concordia y Pacificación.

El libro es parte de la campaña contrainsurgente. Es, también, un símil de lo que está pasando ahora: Carlos Tello, nieto de Porfirio Díaz, el dictador, quiere acabar con los nietos de Emiliano Zapata. Pero habría que recordarle a Tello que Díaz perdió con Zapata, como va a perder el con los zapatistas de hoy. Ahora Tello se da golpes de pecho: "Soy bueno, no quise decir lo que dije. Bueno, sí lo dije, pero en realidad no quise", asegura Tello. Mentira, es un peón. En realidad el libro lo escribió Aguilar Camín y lo firmó Tello.

El objetivo del libelo es crear un ambiente intelectual para seguir golpeando a la diócesis de Samuel Ruiz y aislar al EZLN en el único éxito que ha tenido: su política de medios. Está dirigido a ese sector de la clase media que se mueve en la solidaridad. Trata de decirles: "¿Qué pasó?, están muy entusiasmados con esos [guerrilleros] que en realidad son unos malos y perversos y que se comen a los niños como antes los comunistas." Nos tratan como si quisiéramos ocultar de dónde venimos. En mis entrevistas nosotros hablamos de la dictadura, del proletariado y todo eso, pero de pronto todos tuvieron amnesia y se les olvidó que nosotros habíamos declarado que veníamos de una organización político-militar que había sido derrotada en 1993 por los indígenas. Aquí hubo una revolución antes de la revolución y la perdimos nosotros y la ganaron los indígenas.

—La toma de las ciudades también fue exitosa...

—Yo insisto en eso, pero para todos ha pasado desapercibido. Me dicen: "Bueno, pero es que no han tenido ningún éxito militar." Momento, pues: sobrevivir en estas circunstancias, sin bajas, con un ejército de 60 mil hombres en contra... como soldados, sabemos que es un éxito. Pero no lo andamos diciendo porque después nos acusan de militaristas... Un ejército regular que no gana, pierde, y una guerrilla que no pierde, gana. Eso lo dijo Kissinger, no el Che Guevara.

CAPITULO 7

Los años y los días

Cuando llegó a la selva Lacandona, en agosto de 1984, no llevaba pasamontañas. Tampoco lo usaba el día en que los mestizos —revolucionarios de clase media y con mentalidad urbana— fueron derrotados por los indígenas y surgió el subcomandante Marcos, "para mandar obedeciendo". La cultura indígena determinó a la guerrilla en su organización, en su planteamiento operativo y en sus objetivos. Cuando apareció el pasamontañas ya se había completado la mutación de aquel núcleo guerrillero inicial y del propio Marcos, en un itinerario político e ideológico sintetizado así por el jefe militar:

—El EZLN vive tres etapas. Durante la primera, se desarrolla la fuerza de la que se surgiría luego el EZLN. La segunda es ya el EZLN, que se preparó diez años para la guerra. La última es la más conocida: es el EZLN a partir del 1 de enero de 1994.

La organización político-militar de la que surge el EZLN tenía la concepción que enmarcaba a todas las guerrillas latinoamericanas: la toma del poder por medio de las armas, derrotando al ejército, sostén del régimen, e instalando la dictadura del proletariado. Sólo que en las organizaciones políticas de las que nació el EZLN primaba la concepción de la acumulación de fuerzas en silencio, prepararse en el largo plazo para cuando fuese necesario, dejando un poco a la coyuntura o al azar el momento en que se pasaría a la acción armada, tanto en la ciudad como en el campo.

Ésa era la principal diferencia, con el agravante de que para todos los movimientos mundiales de izquierda la revolución era posible en todos los países menos en México. ¡Y la revolución armada, menos! El papel de México debía ser el de eterno solidario o el de retaguardia estratégica. De modo que los grupos revolucionarios mexicanos enfrentaban el clandestinaje en condiciones de aislamiento, lo que los obligó a nutrirse a sí mismos, sin otros referentes históricos contemporáneos. La izquierda revolucionaria mexicana era clandestina en dos sentidos: frente al aparato gubernamental y frente al resto del movimiento revolucionario latinoamericano. Y en eso incluyo a los cubanos, a los sandinistas, los guatemaltecos y los salvadoreños. Eso explica la acumulación de fuerzas en silencio. Había que prepararse para el día en que pudiera desatarse la lucha armada, y prepararnos aquí, porque no podíamos recurrir al extranjero. De allí las acciones de recuperaciones, los secuestros y los asaltos, que promovieron deformaciones y desviaciones en los movimientos político-militares de México.

La concepción de que el crecimiento debía ser sobre todo político es la que nos forma a nosotros. No queríamos un crecimiento ficticio: tener mil armas de buen calibre pero carecer de mil combatientes para usarlas. Estoy hablando de una organización pobre en recursos pero muy realista en cuanto a su crecimiento, haciendo hincapié en que el problema de la revolución es político y no militar.

Soñábamos. Estábamos apostando a un movimiento conspirativo de millones, reclutando de uno en uno. Reclutábamos a uno y lo probábamos mucho tiempo; estoy hablando de años. Creíamos en términos aritméticos para evitar las infiltraciones. Así se formó la generación que viene a la selva Lacandona en 1983 y 1984. En esa época mirábamos hacia el Cono Sur. Nuestros referentes políticos y militares eran los tupamaros y los montoneros, organizaciones integradas fundamentalmente por gente de clase media urbana. Pensábamos en el Che, en la montaña, en un movimiento guerrillero cercano a la imagen del Frente Sandinista, pero el deseo inmediato era crear una organización en donde nosotros nos movíamos. Y ahí el referente eran los tupamaros: la estructura que ellos logran construir en las ciudades, esos túneles que comunican una casa con otra es lo que luego aplicamos aquí en la montaña, los túneles históricos que comunican a una comunidad con otra y permiten

construir este proceso conspirativo.

Nos impresionaba mucho el ejemplo de Rufo [Raúl Sendic] y el proceso de resistencia a la dictadura uruguaya, incluso la resistencia de los presos en las cárceles. Para nosotros, los más jóvenes, era un referente más cercano que Centroamérica. Pensábamos que si lográbamos desarrollar una estructura similar con una creatividad similar, haríamos maravillas. Y en términos políticos el planteamiento tupamaro de un movimiento incluyente, no sectario, apuntando hacia un proceso de democratización de la vida del Uruguay. Pero eso vendrá después, en 1985 y 1986, cuando bajamos de la montaña a las comunidades.

Cuando hice contacto, ingresé en una organización bastante sana y pequeña. Sana en el sentido de que es muy política y poco militar. Estaba formada por soñadores: soñábamos con llegar a una guerra con bajo costo social. Gente que piensa en el largo plazo. Nos pueden decir: "Vamos a tenerlos cercados diez años." Perfecto, para eso estamos entrenados. Y decimos: "Es que tu revolución, así como la estás planteando, va a durar 50 años." Ya van 25. Faltan 25 nada más.

Era una organización un poco cerrada en el manejo de la vivencia del humor, pero en lo demás era bastante sana, que finalmente es lo que permitió que se construyera un ejército tan poco militar como el EZLN; lo que también después nos trajo problemas con desertores...

Un día, de pronto, aquella organización clandestina y urbana contacta a un líder indígena de Chiapas que ha pasado por todo el proceso de la lucha política pacífica y abierta, ha probado todos los partidos políticos y los movimientos campesinos y pasado por todas las cárceles del estado. Le decimos que hay que prepararse para la lucha armada, pero que no podemos ir a la guerra y aprender en la guerra porque si te equivocas te matan; que hay que aprender otras cosas: medicina, técnicas, política; y en el caso de los indígenas, hay que aprender español.

Entran los primeros indígenas a la organización, como militantes profesionales clandestinos. Empezamos a aprender que esos campesinos son primero indígenas. Nos damos cuenta, sobre todo, en el manejo del lenguaje. A la hora que ellos traducen el español, no están traduciendo una palabra sino una cosmología, una forma de ver el mundo. Manejan el español más con imágenes que con conceptos. Al aprender el español, ellos se apropian del lenguaje y le dan un nuevo significado. La organización, que había planeado una relación maestro-alumno, descubre qué es un indígena: alguien que tiene una cultura propia. No estábamos hablando con analfabetas. No estábamos enseñando nada.

Descubrimos que la organización tiene que aprender a traducir, no enseñar. Tiene que aprender a aprender. Eso es lo que va a permitir que nazca el EZLN y eso es lo que va a marcarme y lo que me lleva a producir los comunicados posteriores al 1 de enero de 1994.

El campesinado indígena empieza a crecer en la organización, sin apropiarse de nuestro método de reclutamiento. Utilizan el método familiar: un familiar le comenta a otro, y éste a otro y se da un efecto conspirativo familiar. En menos de un año el campesinado indígena es mayoría en la organización.

Estaban dadas las condiciones para instalarnos en la montaña. Teníamos gente con la capacidad física y los conocimientos para guerrillar. Comenzamos a buscar un lugar donde poder entrenarnos clandestinamente. Ellos nos dicen: "Vénganse. Aquí hay un lugar donde no llega nadie: ni el gobierno, ni Dios, ni nadie": la selva Lacandona.

El primer grupo entra en la selva el 17 de noviembre de 1983. Eran seis compañeros: tres indígenas y tres ladinos. Raúl, Alicia y Rodolfo eran los mestizos. Javier, Francisco y Jorge los indígenas. Nace el EZLN. Yo llego en julio de 1984. Fue muy difícil. Físicamente me acomodé rápido, pero la dificultad estaba en la cabeza. Veías que estabas solo y que no estabas haciendo nada, ni siquiera eras una unidad guerrillera que tiene la perspectiva de que va a atacar. Nunca como entonces entendimos la frase del Che de que el combate es apenas un instante pequeñito de la vida de un guerrillero. Pero no podíamos darnos el lujo de dudar. Dudar era derrotarnos a nosotros mismos.

La montaña es muy cínica: te desnuda. Lo bueno que tengas lo potencia. Y lo malo que tengas lo exhibe. Es muy difícil fingir o ser otro. La montaña te dice: "Éste es Marcos con sus bajezas y sus virtudes." Paradójicamente, no hay dónde esconderse. El último lugar en donde puedes esconderte

de ti mismo es la montaña.

En esa etapa la estructura de mandos era todavía de mestizos. Éramos una fuerza guerrillera muy pobre, sin recursos, que tenía que hacerse de sus armas, pero también tenía que hacerse de su doctrina militar. Aprendimos de los manuales estadounidenses, las tácticas de la CÍA y todo eso.

Los indígenas del grupo empiezan a bajar a las comunidades y a hacer trabajo político. La organización crece. En 1986 hay pueblos que ya simpatizan con nosotros y que nos ven como una fuerza de autodefensa. Nosotros llegamos como el ejército de los desposeídos que va a tomar el poder e implantar el socialismo; las comunidades nos reciben como los que íbamos a defenderlos del ejército y de las guardias blancas. Empezamos a crecer como un gran cuerpo militar, que las comunidades se dotan a sí mismas para defenderse. En ningún momento está planteada la guerra en sentido ofensivo.

Empieza el trabajo político y militar en las comunidades. Las primeras mujeres indígenas entran en la organización. Tenían derecho a un arma, a instrucción y a tener mando de tropa. Esa entrada nos trajo muchos problemas en las relaciones con la comunidad, porque estábamos planteando otro trato a la mujer.

Empezamos a descubrir que nuestra relación con las comunidades no iba a ser la que habíamos concebido: la base de apoyo que nos suministre alimentos e información. El cambio es gradual, pero partiendo del hecho de que sobre una tropa de 40 había sólo tres mestizos, los restantes eran tojolabales, tzotziles, choles, tzeltales. Nos dedicábamos más a la instrucción cultural que militar.

Se dio una relación de respeto y de admiración de las comunidades hacia nosotros. No nos veían como alguien a quien hay que pedirle, sino a quien hay que darle, ayudarle. Estábamos muy jodidos. Nos mirábamos y nos decíamos: "Somos el esqueleto del hombre nuevo." Pero fue muy importante la apreciación de las comunidades: éramos un grupo guerrillero que no venía de la ciudad sino que bajó de la montaña. Nuestra imagen coincidió con las historias de Zapata y las crónicas parlantes de los dioses; con la historia de resistencia de los pueblos indígenas y el papel que juega la montaña. Veníamos de una montaña adonde ellos no se atrevían a ir, por los misterios que encerraba. Ellos podían ir de día, de cacería. Pero ninguno se atrevía a dormir en la montaña ni hacer lo que nosotros teníamos que hacer sólo para sobrevivir.

En 1988 teníamos una fuerza regular de 80 hombres y apenas estábamos saliendo de la parte más profunda de la selva, los Montes Azules, hacia las cañadas. Entonces viene el cardenismo, los comicios presidenciales y el fraude electoral, y se produce el desengaño de la Unión de Uniones, lo que después va a ser la ARIC. Vienen los golpes de Salinas y la *modernización* del país al costo que sea necesario; la incrustación de México en el proceso de globalización, el neoliberalismo.

Coincidió con la presencia de un gran represor en Chiapas, Patrocinio González, quien había relevado como gobernador al general Absalón Castellanos. El clima político se radicaliza: ya no se puede ser reformista en Chiapas. O eres revolucionario, y estás muerto, o eres priísta, pero no hay término medio. Y en eso a Salinas se le ocurre reformar el artículo 27 de la Constitución y cerrar la última esperanza que quedaba a los campesinos: el reparto agrario.

Eso hace que un montón de gente se nos acerque: en 1989-1990 tenemos un ejército de miles de combatientes. Son decenas de pueblos que están conspirando. El EZLN empieza a dejar de ser un ejército de autodefensa para transformarse en un ejército reivindicativo, que les consiga (a los indígenas) lo que la ley les estaba negando, en este caso la tierra. No obstante, la operación militar más grande que hicimos en 1989 fue la construcción de una clínica médica en Ibarra: movilizamos a más de 1 500 combatientes.

Los del grupo original todavía seguíamos pensando en el socialismo y no en las cuestiones inmediatas de un grupo de comunidades campesinas indígenas. Pero crecemos mucho, en Los Altos y en el norte, en la zona tzotzil y zoque y nos extendemos en la tojolabal. Y llega un momento en que ya no podemos hacer nada sin que las comunidades lo sepan: movimientos, pláticas, entrenamientos. Sutilmente, sin darnos cuenta, llegó un momento en que les estábamos pidiendo permiso. "¿Podemos hacer esto? ¿Sí, no?"

En los hechos, en 1990-1991 las comunidades empiezan a mandar sobre la estructura político-militar que vino de afuera. Comienzan a convertirse en jefes, aunque no en términos formales. La comandancia la sigo teniendo yo, que era el mando militar. Me dicen: "Ya topamos con una pared. O nos morimos de este lado o nos morimos tratando de romper eso." En 1992, en el aniversario de los 500 años del *descubrimiento* de América, las comunidades indígenas discuten en asambleas si debían seguir esperando o si había llegado el momento. Se vota. Varias decenas de miles votan por la guerra. Los pueblos exigen el bastón de mando real y formal. Me ordenan: "No vamos a esperar que ellos vengan por nosotros, vamos a ir por ellos. Vamos a pelear y tú vas a hacer lo que te vamos a decir."

Pido un plazo. Tenía previsto un dispositivo militar para defendernos y ellos me estaban ordenando que fuera a la ofensiva. Dije: "Denme un año para plantear el nuevo dispositivo." Me dieron 1993: el límite era el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Así fue que la organización urbana se subsumió en el mando indígena del EZLN, aunque el Comité Revolucionario Clandestino Indígena se formaliza entre octubre de 1992 y enero de 1993.

Comenzamos los entrenamientos para la ofensiva. En plena montaña hicimos una maqueta en tamaño natural de los palacios municipales que íbamos a atacar. Hicimos ejercicios utilizando manuales de combate urbano de las fuerzas especiales israelitas, sirias, norteamericanas y de los grupos contrainsurgentes británicos. Hicimos un desfile de cinco mil hombres en La Sultana para probar si podíamos concentrar tropa, qué tanta tropa podíamos juntar. Ya sabíamos que podíamos dislocarla, tenerla desperdigada y controlar territorio.

Movimos gente de día, armada y con uniforme, por los caminos reales y por las carreteras. Para entonces ya era un escándalo la presencia del EZLN. El ejército, que ya había hecho varias entradas, vuelve a hacer otra en mayo de 1993. Nos enteramos varias horas antes, pero no queríamos un enfrentamiento en nuestro terreno, salimos en orden de la zona. Pensamos que por accidente los federales ubicaron uno de nuestros campamentos en Corralchén, donde teníamos un polígono de tiro. Eran 1 500 soldados que cuando ubican el polígono se desesperan, abren fuego y se matan entre ellos; nosotros ya nos habíamos pelado.

Cuando descubren Corralchén, el ejército sabe que algo se está preparando y que es en México, porque las maquetas reproducían a tamaño natural los palacios municipales de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, San Cristóbal. ¿Por qué ocultaron la información? Ellos dicen que no les dieron permiso para operar...

En ese momento ya estábamos listos para la guerra. Si el ejército hubiese seguido, en mayo de 1993, penetrando en la montaña por Corralchén, nosotros hubiéramos atacado San Cristóbal. Estábamos en condiciones de tomar Las Margaritas, Altamirano, San Cristóbal, Ixtán y Oxchuc. De todos los objetivos previstos en nuestro plan de ofensiva, únicamente habríamos tenido que renunciar a Ocosingo.

¿Por qué no nos golpearon? Según los prisioneros de guerra que hicimos en enero de 1994 y que después soltamos, el ejército se hizo una idea, en mayo anterior, de una fuerza de unos 40 guerrilleros; creen que se está preparando un golpe de mano, pero nunca se imaginaron que estábamos preparando una acción de miles de combatientes. Les falló la valoración, nos subestimaron y además estaban las negociaciones por el Acuerdo de Libre Comercio. No fue sólo Salinas quien decidió no actuar. La orden vino de más arriba: de Estados Unidos. Recién en noviembre de 1993 el Congreso estadounidense debía aprobar el ALCAN. Los aliados de Salinas en Washington le dijeron: "No le nuevas." No podían votar un acuerdo de integración económica con un país que tenía una guerrilla campesina indígena operando adentro. Claro, ellos seguían evaluando una guerrilla pequeña. La CÍA falló. Dicen que sí sabían de la existencia del EZLN pero les falló la valoración, nos subestimaron. Ellos siempre nos desprecian; por eso no nos pueden derrotar.

El ejército tenía planeada una ofensiva recién para el 10 de enero de 1994, una vez aprobado el Acuerdo de Libre Comercio. La cobertura iba a ser la lucha contra el narcotráfico. Vendrían a limpiar todo. El esquema era como ahorita: tomar las montañas y militarizar todo; peinar hasta chocar

y, cuando hubiera choque, el clásico cerco. Pelear en las montañas y a las comunidades dejarlas quietas. Lo que se llama el nudo corredizo: cercas y luego lo vas cerrando. La pregunta que siempre me hago es cómo "peinar" estas montañas. El manual de ellos lo dice, pero yo sé que no lo pueden hacer. Ocurre como el 13 de febrero de 1995, cuando nos lanzaron el cerco. Pasó una columna militar, eran 30; nosotros éramos tres y no nos vieron. Pueden meter miles de soldados y aunque hicieran una cuadrícula de un metro, igual les fallaría. Lo sé porque vivo aquí.

Así que en mayo de 1993 yo sé que ellos saben, que están sobre aviso y que el golpe les va a venir desde la selva. De pronto se repliegan. Alcanzo a reajustar para darle más fuerza al golpe. El golpe va a salir desde Los Altos y de las regiones de Altamirano, Oxchuc, Ixtal y Chalán. Así se vino el 1 de enero. Hice lo que hizo Pancho Villa cuando atacó Juárez, fingiendo el ataque a Chihuahua. Aquí igual: el 30 empecé a detener camiones en la zona de San Miguel. El ejército federal empezó a derivar tropas sobre Ocosingo. Y fue entonces que le agarramos San Cristóbal, Las Margaritas y Altamirano. Ocosingo fue hasta lo último, cuando el ejército está con todo lo demás tomado.

Cuando ya estábamos en los últimos detalles, dije: "Vamos a usar pasamontañas. Nuestra fuerza va a seguir el esquema zapatista de que son combatientes de noche y campesinos de día." Como nuestra guerra es una guerra de medios de comunicación, había que ganar la batalla de los medios. Tenemos que mostrarnos, pero al mismo tiempo tenemos que ocultarnos. Está la paradoja de que nosotros para mostrarnos nos escondemos en un pasamontañas, y para escondernos nos quitamos el pasamontañas. Así, nadie sabe quién es zapatista y quién no.

Ése es el fundamento del pasamontañas. Surge cuando vamos a tomar las ciudades, para que nuestros combatientes puedan presentarse a la nación y al mundo, y luego puedan esconderse sacándose el pasamontañas. Esa mecánica conspirativa la entienden todos. No saben ustedes hasta qué punto la entienden todos, hasta los niños. En Guadalupe Tepeyac, al Heriberto, un niño de cinco años con quien yo vivía en su casa, le preguntaban:

—Oye, ¿sabes dónde está Marcos?

—No.

—¿Pero sí sabes quién es Marcos?

—No, no lo conozco —y le enseñaban la foto. Aunque me acabara de ver, seguía negando.

El pasamontañas nace así. No teníamos nada que ocultar porque la población nos conoce, nos movimos en las comunidades y la gente conoce nuestros rostros. La cuestión era protegerse y si nosotros no nos poníamos pasamontañas, iban a decir: "Bueno, ¿por qué yo sí y tú no?" Lo mismo que cuando ordenas pelear, ¿cómo quieres que vayan a pelear si tú no vas al frente? Tienes que ir, tienes que estar en la primera línea de combate porque así es como te ganas la autoridad moral. Y la muerte también.

Así que el 1 de enero de 1994 lanzamos la guerra y peleamos 12 días. Habíamos previsto dos extremos: o toda la gente de México se alzaba con nosotros y derrocábamos al PRI, o se nos venía el mundo encima y nos aniquilaban. Entonces habíamos preparado el segundo escalón de mando, la gente que había quedado en la selva, que iba a ser el relevo. O sea: el 1 de enero salimos de la selva, lanzamos la guerra y bajamos a un país que habíamos dejado en 1983. Era otro país. Lo descubrimos el 12 de enero de 1994: nunca se nos ocurrió que la gente podía alzarse en todo el país, pero no en armas, sino para pedir la paz. Eso demuestra que la realidad es siempre más inteligente que la teoría más brillante que uno pueda elaborar.

Nos encontramos con el cese al fuego, y pensamos: "Están muy débiles, hay que seguir pegándoles." Pero también pensamos que qué tal si estaba pasando otra cosa. En ese momento, la voz del obispo Samuel Ruiz fue muy fuerte en las comunidades indígenas. Él dijo que había que probar la vía del diálogo. Y las comunidades dicen: "Pues, sí. No tenemos nada que perder." Nosotros podíamos haber interpretado: "Les estamos pegando más duro de lo que creíamos." Pero no, pasaba que había surgido esta tuerza que no conocíamos y que explicaba el porqué del alto al fuego. Nos dimos cuenta que el gobierno estaba débil pero porque tenía un problema grande en todo el país. Porque la voz de Samuel Ruiz detuvo la guerra y le dijo a los pueblos que había que buscar la paz.

Después analizamos que el golpe tuvo resultados. Nos habíamos dado a conocer y eso sacó a luz una situación de injusticia objetiva que era imposible ocultar, la situación de las comunidades indígenas en Chiapas. Y la gente presionó al gobierno: "Debes escuchar a los indígenas porque tienen razón y tú tienes la culpa de eso que está pasando."

El gobierno se encontró con que tenía las manos amarradas, el ejército no estaba preparado, empezó a hacer barbaridad y media, y además tenía a la prensa adentro de la zona de conflicto. Tuvo que parar, dialogar. Recién en febrero de 1995 intentó la masacre sin testigos, pero resulta que nosotros aplicamos la experiencia acumulada por los indígenas y el gobierno se encontró con que no tenía a quién masacrar. Todo el mundo se había ido.

Pensamos que eso fue lo que les pasó: era un gobierno muy sensible a su imagen, a la mentira que había logrado construir. Nosotros logramos arrancarle la capucha. Le quitamos el pasamontañas y ahora está tratando de acomodárselo.

El subcomandante Marcos había dicho que la guerrilla en Chiapas debió rendirse ante las comunidades indígenas. Durante la segunda noche de entrevista en La Realidad, el jefe militar explicó cómo y por qué esa rendición impuso a la organización matriz cambios en la estrategia, los objetivos y hasta en algunos conceptos básicos, como el de democracia:

Usted decía que las comunidades están impulsando la democracia, pero el concepto parece vago. Incluida la formal, hay muchas democracias.

Es lo que yo les digo [a los indígenas]. Les trato de explicar: "Ustedes pueden hacer eso [resolver por consenso] porque tienen vida comunal. Cuando llegan a una asamblea se conocen, llegan a resolver un problema común. Pero en otras partes no, la gente vive separada y usa la asamblea para otras cosas, no para resolver el problema." Y ellos razonan: "No, pero es que sí, a nosotros nos resulta." Y en efecto resulta, resuelven el problema. Y ese método lo proponen para la nación y para el mundo. El mundo debe organizarse así. Eso es lo que ellos llaman el mandar obedeciendo. Y es muy difícil ir en contra de eso porque ellos así resuelven sus problemas. Y al que no funciona, lo quitan y no hay tanto escándalo. Al comisario ejidal cuando se equivoca lo quitan y pasa a ser parte de la asamblea.

Hemos insistido en que lo que propone el EZLN no es la democracia representativa, la de los partidos políticos. Y nos dicen —en artículos, en los periódicos— que estamos mal, que en realidad las comunidades indígenas están derrotadas, porque aquí lo que vale es el individuo y las comunidades quieren hacer valer el colectivo. Sí. Por eso nosotros decimos: necesitamos otra fuerza política diferente, no partidaria. Cuando planteamos eso, lo hacemos como cuando lanzamos la guerra en 1994. En esa oportunidad yo les decía (a las comunidades que habían decidido lanzar la ofensiva), "nos va a llevar la chingada, nos van a partir la madre; está la correlación de fuerzas internacional en contra, nos van a hacer pedazos". Y los compañeros diciendo: "Vamos y vamos y vamos a la guerra." Y ahora es: "Vamos y vamos a este tipo de democracia." ¿Y cómo les dices que no sirve? Si han estado años así... ¡Qué mejor resultado que haber resistido todas las campañas de aniquilamiento! Por eso dicen: "El país debe organizarse así."

—¿Cómo está lo de la fuerza política no partidaria? ¿Los partidos políticos no sirven a la democracia que se está proponiendo?

—Traten de ponerse de este lado del pasamontañas. De este lado hay una gente que ha vivido doce años en comunidades indígenas. Que ha convivido con ellos. Es un indio, como dicen ellos. "Marcos es un indio como nosotros." Y piensa como ellos. Para ellos, ¿qué hacen los partidos políticos? Un partido político llega a dividir a una comunidad. Los partidos buscan que la gente vaya con ellos y los que no, van con otro partido. Gana el que tiene más fuerza. Los partidos dividen a la comunidad y fracturan todo. Así se fracturó la comunidad cuando entró el EZLN. Esa es la verdad. Cuando nosotros entramos lo hicimos como una organización política. Y sólo en el momento en que empezó a haber consenso, pudimos entrar. Si no, no hubiéramos podido. Estábamos entrando a dividir, como está haciendo el ejército federal ahora. Está poniendo las armas al servicio de una parte. Así como nuestras armas estuvieron al servicio de una de las partes y eso no sirve. Lo que sirve es que la comunidad se ponga de acuerdo y los partidos políticos impiden que se ponga de acuerdo la

comunidad, porque el partido político lo que busca es ganar individuos.

Entonces es necesario hacer una fuerza política que no divida, que no confronte. Y esta gente que está detrás del pasamontañas tiene que encontrar una forma de traducir esto afuera. Y si para buscar eso me tengo que pelear con [Porfirio] Muñoz Ledo, me peleo. Mi deber es impulsar eso. A lo mejor resulta, o no. A lo mejor es un 1 de enero de 1994 y resulta, a lo mejor es un 9 de febrero de 1995, y no resulta.

Se necesita una fuerza política que busque eso y no que busque el poder. Los partidos políticos entran y dicen: "¿Quién va a ser el comisariado ejidal?" Los compañeros dicen: "El problema no es quién va a ser el comisariado ejidal, sino que ese comisariado haga lo que dice la comunidad." Entonces, se necesita una fuerza política que organice a la comunidad para exigirle al comisariado ejidal, al presidente municipal, al gobernador, al presidente de la República, al Congreso, que le sirva a la comunidad y a la nación. Bueno, sé que estoy delirando...

—Le van a decir: "Entre al Parlamento e imponga sus puntos de vista por mayoría."

—Sí, lo sé. Pero los compañeros están diciendo: "Ese Parlamento debiera obedecer a los que dicen representar." Sé que estoy hablando de algo tan nuevo que es difícil de entender...

—¿Lo que está diciendo es tomar el poder?

—No, ejercerlo.

—Pero lo que no aclara es cómo hacer para que eso tome cuerpo...

—¡Porque no tenemos una puta idea de cómo hacerlo! Puedo imaginar una asamblea en una cañada, incluso en una etnia. ¿Por qué? Porque lo he visto. Sé cómo se organizan y cómo van resolviendo en una especie de mezcla de representatividad y asamblea.

—Y honestamente, ¿cree que eso puede funcionar para la nación?

—Sé que lo otro no funciona, lo que hay ahorita no funciona.

—¿Y está dando la perspectiva a la gente de que esto es una cosa que puede funcionar?

—Vamos a dialogarlo, decimos nosotros. Nosotros tenemos esta experiencia, pero a lo mejor los yaquis, los obreros o los trabajadores del sindicato Ruta 100, o el Encuentro Nacional de Derechos Ciudadanos tienen otras que puedan amalgamarse.

—Eso que ustedes proponen, ¿no es el brazo político de ninguna guerrilla?

—No. Es un nuevo mundo, así de sencillo.

—La guerrilla, entonces, ¿es el núcleo partidario de un movimiento comunal indígena?

—Así se había planteado, pero está resultando que no. Está resultando que la guerrilla del EZLN es como el comisariado ejidal: sirve en tanto la comunidad sienta que sirve. En el momento que ya no sirva, nos van a desechar.

—La pregunta sobre el núcleo partidario iba en el viejo sentido de cuadro, un militante más formado...

—Sí, ése era el plan. Nosotros podíamos tratar de construir un partido político a partir del EZLN, que hiciera el trabajo en las comunidades indígenas. No podemos. No podemos porque es otra cultura, es otra forma de hacer política. No son analfabetas políticos. Tienen otra forma de hacer política. Y lo que quiere hacer el poder es alfabetizarlos políticamente, es decir, corromperlos en este sistema político.

—Y, ¿cómo congenia eso con el verticalismo que debe haber en una estructura militar?

—Rindiéndonos [a las comunidades], que fue lo que hicimos en 1990.

—El planteo es en el sentido de que en una organización militar que crece y pasa a formas de consenso, cualquier miembro puede cuestionar una orden con el criterio de la asamblea comunal.

—Sí, pasa: necesito el aval de las etnias. Por eso necesito el mando. No es que yo esté dispuesto a obedecer al Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Lo necesito. Si no, no puedo darle órdenes a una fuerza guerrillera indígena.

—Y una vez que las da, ¿las cumplen?

—Sí, porque además es público quién la dio. Yo digo: "Vamos a hacer la guerra." Y me pueden responder: "Tú estás loco, ni madres." Y yo: "No, es que fue orden de allá." Yo no puedo mandar

militarmente. Es lo que nadie entiende. Marcos no necesita del Comité Clandestino como justificación de que se trata de un movimiento indígena, porque eso es innegable. Para tomar decisiones políticas y para poder ejercer el mando militar, Marcos necesita de la autoridad que hay sobre las comunidades. Necesita el aval de las comunidades para dar la orden de guerra, para dar la orden de repliegue. Si no tengo ese aval, no existo como mando militar. Sin ese aval de los jefes indígenas de las comunidades, no existe el EZLN. Hasta tal punto es así, que la existencia misma del EZLN depende de esto. En el momento en que las comunidades digan te vas, como le pueden decir al comisariado ejidal, me tengo que ir. O corro el riesgo de quedarme solo.

—¿Y qué pasa si Marcos desaparece?

—Dentro de la estructura del EZLN hay un escalón de mandos. Hay otro que sigue, los compañeros saben quién es el que sigue. Por lo regular mantengo informado al Comité Clandestino y a los segundos al mando de todo lo que estoy haciendo. O deshaciendo, ¡porque cometo cada burrada! Es decir, los compañeros tienen el rumbo de la organización, saben dónde estamos y por dónde hay que seguir.

—O sea que nada deja de funcionar si Marcos desaparece.

—Teóricamente, no.

—¿Y su papel como traductor?

—Ése no estaba planeado. Es culpa de los medios de difusión que sí querían entrar pero no sabían cómo. Estaban enfrentados con un movimiento de resistencia en el que el color de la piel tiene un significado ideológico, de opresión, de explotación, de mentira. ¡Cómo iban a conocer un movimiento que estaba compuesto de piel morena!

—Todo esto quiere decir que la estructura de las etnias es lo que se metió en el cuerpo de la guerrilla y rompe con todos los criterios de organizaciones armadas anteriores.

—En el papel, nosotros podemos argumentar lo que queramos. Pero la realidad siempre es más inteligente.

—Eso explicaría que ustedes estén siempre cambiando, que no haya un planteo estratégico corpóreo. Explica el proceso que arranca de la Convención de Aguascalientes, con el planteo de movimiento de liberación nacional, las venidas de Cuauhtémoc Cárdenas a la selva, la consulta, la opción por la sociedad civil y el planteo de forjar un polo de los sin partido y un frente amplio. ¿Tiene el EZLN una política de alianzas?

—Nosotros estamos pensando en dos niveles. El del frente amplio, con organizaciones políticas y el de la nueva organización política. Cuando decimos que en la discusión del diálogo nacional hay un tema que se llama "creación de una nueva fuerza política con base en el EZLN", es cuando nosotros preguntamos: "¿Nos hacemos fuerza política?" Sí, bueno. Esa nueva fuerza política nosotros la queremos hacer sin los partidos políticos, y vamos a relacionarnos con los partidos en el Frente Amplio Opositor o en el Movimiento Amplio Opositor. Imagínense: ¡MAO!

Ahora: esa fuerza política que queremos construir no es para acceder a puestos de elección popular. No es una fuerza en contra de los partidos políticos. Se trata de una fuerza a la que tengan que tomar en cuenta el gobierno y los partidos. En el menor de los casos, que la tomen en cuenta y en el mejor de los casos, que la obedezcan. Pero como quiera está el asunto de las organizaciones políticas que se plantean el problema del poder. El lugar de convergencia de esta gente, en la medida en que sean antisistema de partido de Estado y antineoliberales, sería el Frente Amplio Opositor. Serían dos niveles. Eso es lo que no entiende el PRD o algunos de sus dirigentes, como Muñoz Ledo y Pablo Gómez. Hacen análisis muy buenos. Pero hay que quitarle la tapa a los catalejos; si no, no se ve. Si no le quitas la tapa, el catalejo se convierte en un espejo...

Sé que la pregunta lógica es: bueno, ¿pero cómo va a ser posible construir una fuerza política que no sea un partido? No tengo la más remota idea. Lo que le estamos ofreciendo a la gente es "vamos a ponernos de acuerdo".

Nosotros hacemos política con tiros para hacernos oír, no para tomar el poder. Si nosotros no

hubiéramos tirado tiros, olvídate...

Al analizar el tema de la tierra en el contexto de las luchas campesinas latinoamericanas, Marcos habló del neoliberalismo, un proyecto que trajo consigo, dijo, la abolición de la patria y la propiedad:

—En todo esto hay un fenómeno nuevo: el tema indígena. Usted explicaba cómo ha sido decisivo que haya una cultura, una forma de relación social de las comunidades indígenas, que determina la solución del problema del crecimiento y de los propios objetivos del movimiento. ¿El problema de la tierra es el fenómeno determinante de toda esta lucha?

—Fue la gota que derramó el vaso. Señalo tres grandes causas: el cierre de la acción política con el fraude de 1988; el quinto centenario del *descubrimiento* y el problema de la tierra. Si alguna tiene predominancia, es el problema de la tierra.

—En América Latina el problema de la tierra no es exclusivamente indígena...

—El indígena vive en comunidad. Ellos ven el problema de la tierra no solamente como un problema individual, de pequeña propiedad. "Mi parcela, lo que necesito para vivir". Se trata de resolver el problema de la colectividad. En ese sentido, el ejido es más colectivo en las comunidades indígenas que en los campesinos no indígenas. Eso hace que la lucha por la tierra, en las comunidades indígenas, sea muy difícil de resolver por medio de la cooptación. La comunidad mantiene un control muy férreo sobre el individuo, es muy difícil fingir, ser otro. En la comunidad saben qué haces y por qué lo haces, cuando te ven desigual. Es más difícil la corrupción no porque sean mejores, más humanos o más honestos, sino por el control que tiene el colectivo sobre el individuo. No se aceptan soluciones individuales sino colectivas. Eso hace más difícil resolver el problema de la tierra para las comunidades indígenas. La cuestión no se arregla dando tierras para algunos...

A la hora que se cierra la posibilidad del reparto agrario, que siempre había sido una puerta para el movimiento campesino en general y para los indígenas, aumentan también los despojos y los fraudes de compraventa de tierras. Cuando se privatiza la tierra ejidal, los grandes ganaderos y finqueros empiezan a acaparar tierras, ahora no sólo extendiendo sus potreros o sus alambrados o asesinando, sino haciendo fraudes en la compraventa de terrenos. Cuando se cierra esa posibilidad legal el campesino indígena chiapaneco, no sólo el de las cañadas, enfrenta su sentencia de muerte. Dice: "Me van a matar porque me van a quitar la tierra." Ni siquiera está la perspectiva de que se pueda convertir en proletario agrícola, o emigrar y ser un trabajador temporal. No: "Me están desarraigando de mi historia y de mi cultura, no sólo del lugar donde produzco y que necesito para vivir", piensa él. Al momento en que se cierra el reparto agrario, el campesino indígena pierde su medio de producción, pero también pierde su historia. Eso, crúzalo con la realidad de una fuerza armada y organizada a la mano, tu brazo armado. Entonces madura el "Ya basta."

El zapatismo está marcando el reinicio y la reactivación de un problema. Las características del problema agrario en Chiapas toman la vía revolucionaria armada por esta conjunción. Pero en realidad se está señalando un problema: el resurgimiento del problema agrario, a nivel nacional, que el neoliberalismo ha decidido sacrificar en aras de la modernidad. Es decir: ser moderno y pasar al Primer Mundo es dejar de ser campesino. O sea, meter el proceso de mercado, el capitalismo, a todas y cada una de las relaciones sociales. Cancelar el reparto agrario, pero no sólo eso. Privatizarlo, darle entrada a las empresas agroindustriales, una mayor concentración de la tierra. Y lo que va a provocar es que empiecen a saltar movimientos campesinos, que no necesariamente seguirán la línea zapatista pero que señalarán el problema de cómo el capital financiero se apropia de las tierras y las mueve como si fuera capital: como si fuese el dinero de un banco, ahora mueven terrenos y deciden qué se produce, independientemente de qué es lo que quiere la gente.

—¿La insurrección zapatista marcaría un camino?

—Creo que sí, como si fuéramos un dedo índice: aquí hay un problema. Pienso que sobre ese problema van a empezar a darse muchas manifestaciones y experiencias. En 1993, antes del

zapatismo, hubo movilizaciones por la tierra en Ecuador, en Paraguay, la de los indígenas de la Amazonia brasileña. Nosotros decimos que el neoliberalismo es un proceso de reconquista de la tierra. Son los modernos conquistadores. Para el indígena adquirió esa connotación. En realidad son los mismos conquistadores de hace 500 años, contra los que se alzaron nuestros antepasados. De allí el problema del "Ya basta" y las armas. Eso sí: la conquista de la tierra no va a seguir el proceso de la conquista española. Va a seguir el proceso de la conquista del oeste norteamericano. Implica el aniquilamiento físico, cultural e histórico del campesinado. La promesa del capitalismo analizado por Marx: la desaparición del campesinado es completada ahora, de hecho, por el neoliberalismo de manera brutal. Hoy la sangre es indígena, pero mañana puede ser mestiza. "Tú eres un estorbo. Ya no sólo eres prescindible, además eres un obstáculo para el progreso", ése es el mensaje.

—Entonces, ¿el campesinado es la nueva clase revolucionaria?

—No. Pienso que no. Nosotros estamos planteando una revolución que haga posible una revolución. Estamos planeando una prerrevolución. Por eso nos acusan de revisionistas o reformistas armados, como dice Jorge Castañeda. Estamos hablando de hacer un movimiento social amplio, violento o pacífico, que modifique radicalmente las relaciones sociales de modo que su producto final sea un nuevo espacio de relación política. Pienso que el actor principal no está definido. Es esto que llamamos sociedad civil y que no se puede acotar en burguesía, proletariado, campesinado, clase inedia. Este proceso de globalización, a nivel del Estado nacional, toca tantas heridas y tantas partes que todos están enfermos de lo mismo, aunque uno tenga la piel blanca y otro la tenga oscura; aunque uno sea maestro en una universidad y otro proletario...

—¿Los cambios de estructura surgirán de esa prerrevolución, de esa revolución para la revolución?

—Sí, pero no derivan necesariamente en un sistema social nuevo. Ese sistema social nuevo será producto del nuevo juego político. Podemos equivocarnos, pero no decimos que se derrumba el neoliberalismo y al mismo tiempo se instala un nuevo sistema social.

—¿No es, en definitiva, el concepto de las etapas de las luchas por el socialismo de los años sesenta y setenta en América Latina, la fase de la liberación nacional, ; donde los actores eran múltiples?

—No es igual. Estamos planteando que en la nueva etapa del capitalismo, el neoliberalismo, se da una destrucción del Estado nacional. Para nosotros, una tesis fundamental del frente nacional es la existencia de la burguesía nacional.

Nosotros decimos que no hay patria. Se destruye el concepto de nación de patria, no sólo en la burguesía sino incluso en las clases gobernantes. Sería muy difícil pensar que hay sectores del gobierno que están por la defensa del proyecto de nación. A quienes defienden el proyecto de nación, los asesinan o los expulsan. El proyecto neoliberal exige esta internacionalización de la historia, exige borrar la historia nacional y hacerla internacional, exige borrar las fronteras culturales. El gran costo para la humanidad es que para el capital financiero no hay nada, ni siquiera patria o propiedad. El capital financiero sólo tiene números de cuentas bancadas. Y en todo ese juego se borra el concepto de nación. Un proceso revolucionario debe comenzar por recobrar el concepto de nación y de patria.

El principal error del neoliberalismo es pensar que se puede ir en contra de la historia. Esa injerencia sobre el problema de la tierra pretende prescindir de la historia y hacer como que aquí no ha habido historia ni cultura ni nada. Y entonces es cuando tocan y crean a uno de sus enemigos, tal vez no el más poderoso, pero sí el más tenaz: el zapatismo. El nuevo zapatismo, entendido como la insurrección de las comunidades campesinas indígenas que nació en Chiapas cuando el campeón del neoliberalismo, el ex presidente Salinas, modificó el artículo 53 de la Constitución y abolió la principal herencia de la Revolución mexicana: la tierra es para quien la trabaje. El desembarco del neoliberalismo en la cuestión de la tierra, en busca de su privatización, sólo consiguió que los campesinos indígenas se alzaran en armas.

En la última parte de la entrevista Marcos se refirió al Partido Acción Nacional y a sus propias declaraciones de fines de 1995, que según él fueron sacadas de contexto por la prensa, dando lugar a especulaciones que generaron más polémica con el EZLN de parte de un sector de la izquierda

mexicana:

Cuando escribí a Carlos Fuentes y le citaba a Macbeth cuando dice "cómo va la noche", le trataba de explicar que estamos en un periodo de indefinición donde se puede amanecer o regresar todo para atrás. Es cuando dije que Acción Nacional es el relevo del PRI. Estamos frente a la descomposición y desaparición del PRI como partido de gobierno, pero no frente a la desaparición del sistema de partido de Estado. Acción Nacional aspira a relevar al PRI como partido de Estado.

Estamos frente a un gran edificio que se está cuarteando y al que sólo sostienen dos delgadas telas de araña: el ejército y los medios de comunicación. En el momento en que le falle uno, se derrumba todo. Cuando digo que el PAN es la alternativa de poder, es porque piensan que Zedillo va a terminar por romper uno de esos dos pilares y entonces lo van a relevar y a retejer para volver a hacer sólido el edificio.

Lo que está ocurriendo dentro del PRI es un reacomodo en busca de la sobrevivencia. Y dentro de ese proceso están los pactos o alianzas con otras fuerzas políticas. Ayer con el PAN, hoy con el PRD. Ayer Salinas con Castillo Peraza, hoy Zedillo con Muñoz Ledo. Por eso decimos que lo de la transición pactada es mentira: el sistema de partido de Estado no va a pactar su desaparición o su sobrevivencia. A la hora que se le dice pactemos el tránsito, le estás diciendo pactemos tu sobrevivencia, es decir, pactemos que cambias. Hacía el símil de que el *cambio sin ruptura* de que hablaba Camacho, es la *transición pactada* de Muñoz Ledo. Y así como Camacho se da cuenta de que no es posible cambiar sin romper, esperemos que algún día Muñoz Ledo comprenda que no es posible transitar pactando.

En este reacomodo de sobrevivencia del PRI, el PAN dice "yo sí garantizo que el sistema sobreviva". No entienden la crisis como algo estructural sino como un problema de modo de gobierno. Es ahí la pugna entre los tecnócratas y los políticos. Por un lado los Gutiérrez Barrios, García Paniagua y la vieja guardia que hacía política, que garantizaron lo que era el orgullo del PRI: estabilidad y control. No había democracia pero sí estabilidad política. Hoy, dicen con razón, ni hay democracia ni hay estabilidad. Y por otro lado están los tecnócratas, que dicen que la estabilidad política se construía con medidas populistas que sacrificaban el desarrollo económico del país.

Ambos grupos priistas dicen "yo garantizo la sobrevivencia del partido y del sistema de partido de Estado". Y chocan. Para ambos, el enemigo principal es el otro. Es la imagen en el reflejo. El que lo ve más claramente es el PAN. Con Acción Nacional estamos frente a un grupo de dirigentes extraordinariamente inteligentes. Estoy hablando de Castillo Peraza, de Fox y de Diego Fernández. No digo que sean democráticos, digo que son inteligentes. Reconozco un hecho, no me adhiero a él. Ellos se proponen relevar a ese partido que se está descomponiendo, ofreciendo una nueva forma de hacer política. Una forma que mezcle el populismo, el explotar la imagen antigubernamental que ha conseguido el PRI y ofrecerse como la garantía de estabilidad y paz social que el PRI ya no puede garantizar.

Detrás de eso va la propuesta de ordenamiento de la moral, que es donde pienso que están los elementos fascistas de Acción Nacional. Empiezan por ordenar el cuerpo, que es lo que hay que mostrar, de ahí pasan a querer ordenar el pensamiento y eso es el fascismo. Le pueden poner otro nombre, pero es fascismo.

CAPITULO 8

1996: Otro año incierto

La dinámica política desmentía a diario los pronósticos, no obstante para muchos analistas, durante los primeros meses de 1996 se había estado tejiendo un nuevo pacto de poder ante la débil gestión de Zedillo y la sensación de un vacío en la conducción nacional. Los pilares del sistema, el trípode Ejecutivo-PRI-fuerzas armadas, mostraba signos de fatiga y la ruptura de la unidad interna parecía haber favorecido los crímenes de 1994. En rigor, el agotamiento político se venía incubando desde inicios del sexenio de De la Madrid, cuando algunos sectores tradicionales fueron desplazados del PRI por la vía del rechazo y la expulsión.

La fisura más notable se produjo con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y un grupo de cuadros asimilados a las políticas nacionalistas y estatistas, que pidieron la democratización del PRI y criticaron la toma de decisiones por la vía vertical y autoritaria.

Años después y si bien Carlos Salinas recuperó en parte los viejos métodos de cooptación e inclusión del sistema —aun en el caso de disidentes y opositores—, una nueva grieta confirmó los primeros signos de fin del régimen: la erosión del mecanismo para la sucesión presidencial.

Tras el "destape" de Colosio, la actitud de rebeldía de Manuel Camacho generó una especie de zona gris donde coexistieron dos candidatos del PRI, uno formal, Colosio, y otro virtual. La lectura de las dos *memorias* atribuidas a Camacho permite inferir que éste recurrió a la vía tradicional: le apostó a la lealtad al presidente en el entendido de que la misma tenía un precio. Pero Salinas no pagó.

El ex regente y operador político del grupo compacto del salinato ni estuvo de acuerdo con la decisión ni se disciplinó, si bien jugó de manera ambivalente y primero aceptó el cargo como canciller y luego como negociador personal de Salinas en Chiapas. Pero el mecanismo de sucesión se vio seriamente impugnado, aún más tras la muerte de Colosio cuando la fórmula del *dédalo* se hizo evidente con la selección de Zedillo.

La marginación de sectores del PRI en la selección del candidato sustituto originó nuevas turbulencias y Camacho terminaría renunciando al PRI en octubre de 1995, luego de una áspera polémica con el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, desplegando desde entonces un fuerte activismo con el fin de formar un nuevo partido o coalición política.

Zedillo surgió como seguro continuador de la política salinista, pero su nominación como candidato no gozó del consenso partidista: "Le es tan ajeno el partido a Zedillo como a los priístas Zedillo", dijo por esos días un viejo político oficialista y dejó entrever que su designación había sido resultado de una fuerte presión externa.

Un conjunto de factores ya citados coronaron su candidatura con el triunfo en las urnas y una abultada participación ciudadana. Pero el escenario se le complicaría con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien al parecer buscaba establecer en México un esquema similar al de la Quinta República, como en la Francia de Charles De Gaulle, para transitar de un régimen presidencialista autoritario a un sistema parlamentario, jugando —desde Gobernación— un rol de virtual primer ministro.

Su idea era transferir gradualmente mayores facultades al Congreso para limitar los poderes metaconstitucionales del presidencialismo. Pero dado el nivel de la cultura política en México, lo concebía como una transición controlada para evitar el caos. Sabía que estaba en capacidad de hacerlo, y se constituyó en el interlocutor de diversos grupos priístas con los cuales podía tejer una red de alianzas.

¿Quién y por qué mandaron matar a Ruiz Massieu? Frente a la hipótesis oficial del móvil como producto de una riña de poder y lucro entre éste y su ex cuñado Raúl Salinas, en círculos del PRI

se manejaron dos versiones: que el proyecto modernizador del secretario general del partido afectaba intereses y privilegios, o bien que era una forma de desestabilizar todavía más al país y dar la impresión de que el régimen había llegado a su ocaso.

El crimen de Ruiz Massieu y el *crack* financiero que estalló a los 20 días de su gobierno mostraron a un Zedillo atrapado entre los chantajes de los grupos de poder. Viejos cuadros del aparato gubernamental tuvieron la esperanza de que pese a su poca pasión por la política, Zedillo terminara por tomarle gusto al sillón presidencial. Pero pasaban los meses y no había señales de que el mandatario tuviese vocación de estadista. Fue en ese contexto que las contradicciones entre los grupos de presión alentaron el resurgimiento de las fuerzas desplazadas por la tecnoburocracia y comenzó a perfilarse un nuevo pacto para la sobrevivencia del sistema.

Según una fuente cercana al presidente del PRI, Santiago Oñate, la negociación tuvo lugar con alrededor de 15 grupos que incluyeron a ex presidentes, gobernadores en función, el sector financiero y la élite empresarial históricamente beneficiada por la política de subsidios del Estado. La nueva alianza habría acercado a los grupos antagónicos involucrados en la ola de crímenes, incluyendo el asesinato del juez Polo Uscanga y la matanza campesina de Aguas Blancas, y que también fueron corresponsables del derrumbe financiero.

La tregua fue el resultado de una preocupación común: ¿Quién era, a mediados de 1995, el enemigo principal? Al parecer se concluyó que éste era el PAN, pese a que durante el salinismo el PRI estableció una alianza con el panismo —que Salinas definió como estratégica— para la buena marcha de la economía a cambio de estabilidad política, llegando a fórmulas pactadas de cogobierno (*concertaciones*), negadas por la cúpula panista, entre ellos Carlos Castillo y Diego Fernández, pero admitida por sectores oficialistas.

En las elecciones de 1994 el PRI le ganó al PAN con 35% de los votos emitidos. Pero la llamada ola blanquiazul creció de manera sostenida en las urnas durante todo el salinato, y sus victorias le permitieron al viejo instituto conservador de cuño católico, fundado en 1939, gobernar en cuatro estados de la federación y en 11 ciudades capitales al despuntar en 1996.

La ilusión de acceder al poder en el corto plazo —ganarle por primera vez al PRI el control del Congreso en las elecciones parciales de 1997 y la presidencia en el 2000— estuvo alentando en la dirigencia panista un ajuste en su perfil opositor, lo que llevó a fricciones y al debilitamiento paulatino de la alianza PAN-PRI. Ello explicaría las frecuentes filtraciones del procurador panista Antonio Lozano —símbolo del cogobierno— en materia de narcotráfico y en torno a las pesquisas sobre las muertes de Colosio y Ruiz Massieu. El 2 de enero de 1996 se produjo un atentado fallido contra Lozano, cuando desde un auto en movimiento, desconocidos dispararon contra las ventanillas del vehículo donde viajaba el procurador, quien salió ileso gracias a que los vidrios eran blindados.

El acuerdo entre los distintos clanes que se disputan el control del PRI se selló con un voto de confianza hacia Emilio Chuayffet, quien desde Gobernación asumió de hecho la conducción política del país. Según una alta fuente priísta consultada, los grupos pactaron dejar a Zedillo como "presidente formal". Otros juicios más benignos hacia la figura del mandatario señalan que Zedillo es un hombre al que le gusta ir paso a paso hacia la concreción de sus objetivos y que, a falta de un equipo propio, ha tenido que ir construyendo los equilibrios internos de su gobierno.

Para evitar el avance electoral del PAN se acordó una línea de dispersión de la oposición, con vista a los parciales de 1997.

En caso de que el PRI siguiera debilitándose, los votos de castigo no deberían ir a parar al PAN sino al PRD y/o a otras fuerzas en formación, incluido un eventual agrupamiento camachista, o un frente amplio opositor donde podría participar Cárdenas como líder del movimiento de liberación nacional, en alianza con fuerzas independientes —incluso la guerrilla zapatista.

Según esta estrategia, también se evaluó que si el EZLN lograba consolidarse como un polo indígena en el nivel nacional, dichos votos también serían menos electores para el PAN.

La eventualidad de una alianza entre Cárdenas (con su Movimiento de Liberación Nacional-MLN) y el EZLN (Frente Zapatista-EZLN, no pareció preocuparle a los suscriptores del

pacto, cuya principal obsesión giraría en torno a cómo detener el ascenso panista.

Lo anterior explicaría el curso que tomaron las pláticas en Chiapas entre gobierno y guerrilla en los primeros meses de 1996, cuando se hizo evidente el giro —más de forma que de fondo— en las posturas oficiales, que pasaron de un triunfalismo inicial intransigente a una actitud dialoguista y conciliadora. Ese cambio le permitió al EZLN avanzar en puntos de la agenda hasta entonces vedados por el Ejecutivo, como si éste en lugar de cerrarle los espacios le estuviera dando juego. Pero la eventual conformación de un polo independiente MLN-EZLN obligaría al gobierno a cambiar de estrategia, apelando al ejército y a su nueva función de policía interna para contener, en caso necesario, el avance popular. La hipótesis de un golpe de Estado fue alentada por algunos medios de difusión, dando a entender que el poder castrense se encontraba activo y vigilante.

El último ideólogo del PRI. Jesús Reyes Heróles, solía decir que en política los vacíos siempre se llenan: durante el salinismo fue notoria la presencia de representantes de las instituciones armadas en la vida pública del país, misma que creció en el primer año de administración zedillista.

En 1995-1996 el Congreso registró seis legisladores militares del PRI: el senador Álvaro Vallarta, general de brigada diplomado de Estado Mayor y exjefe de inteligencia del ejército; el general Antonio Valdivia, senador; los generales Luis Garfías, Jesús Esquinca y Miguel Rodríguez, y el contralmirante Carlos Ponce de León.

La nueva alianza de los clanes priistas estuvo alentada por otro factor: durante su primer año de gobierno Zedillo no quiso o no pudo conformar su propio equipo. Incluso y por falta de oficio, éste debió sacrificar muy pronto a un zedillista considerado puro. Esteban Moctezuma, y permitir la reaparición de sectores lastimados por las políticas salinistas.

Desde fines de 1995 el conglomerado más poderoso fue el llamado Grupo Toluca, encabezado por el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien apenas arrancado el sexenio se colocó en la delantera en la carrera presidencial hacia el año 2000.

En un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el académico Álvaro Arreola aseguró que "los grupos de poder mexiquenses actúan como una auténtica hermandad de corte siciliano; han aplicado un modelo *sui generis* de control en la entidad, al mismo tiempo que el bloque mexiquense se ha caracterizado por la formación de abundantes cuadros políticos" (*La Jornada*. 5/VIII/96). Según el estudio de la Coparmex, desde Isidro Fabela, el Estado de México se caracteriza por no conocer la fragmentación política y, más importante aún, es una entidad donde no se admiten las fracturas, como lo reconoció en alguna ocasión Mario Ramón Beteta: "Una decisión no se discute, se acata en beneficio de la unidad."

Entre las figuras relevantes del Grupo Toluca están otros dos ex gobernadores del Estado de México. Ignacio Pichardo Pagaza y Alfredo del Mazo, ambos con experiencia ministerial y diplomática. Tanto Chuayffet como Pichardo y Del Mazo estuvieron ligados en sus orígenes al Grupo Atlacomulco, de Carlos Hank González. Pero cuando comenzaron a salir a la superficie la corrupción y las ligas con el narcotráfico del salinismo, el "profesor" Hank —apodado "el rey Midas de la política"— dio un táctico paso atrás y su grupo fue rebasado por el de Chuayffet (aunque el poder económico de Hank sigue siendo tan grande, que le permite controlar, aun desde las sombras, una cuota importante de poder político real).

Con fama de hábil negociador, Chuayffet es un duro de la política cuando los intereses particulares y de grupo así lo requieren. Una frase lo define: "En política hay que estrangular con manos de seda."

De lo que no había duda a comienzos de 1996 era que a sus 44 años, Chuayffet resultaba la estrella fulgurante del momento. En los hechos, y en virtud del opacamiento presidencial —en la coyuntura de su arribo a Gobernación y en el marco de signos de ingobernabilidad crecientes en el país que llevaron a especular con la renuncia de Zedillo— Chuayffet comenzó a desempeñar el papel de *primer ministro*, una figura inexistente en el sistema político mexicano.

Se constituyó, a todas luces, en el estratega del proyecto político del sexenio, luego de la crisis institucional que estalló en los primeros meses de 1995 ante el sesgo panista que adquirieron con

Lozano las investigaciones de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, que apuntaron directamente a los hermanos Salinas; la existencia de facciones sueltas del PRI que amenazaban con más violencia; la fallida captura del subcomandante Marcos el 9 de febrero; el desbordamiento de movimientos sociales como los de Ruta 100 y El Barzón, y las protestas postelectorales en Tabasco y Yucatán, que colocaron a México en el umbral de un quiebre político que podía desembocar en un golpe de Estado disfrazado, lo que fue llamado aquí un "oficinazo".

En ese contexto, su llegada a Gobernación en junio de 1995 expresó la consolidación de "amarres" entre los principales grupos de poder, pues si bien Chuayffet estaba ligado desde sus comienzos en la política al sector del ex gobernador mexiquense Alfredo del Mazo y al Grupo Atlacomulco, formó su propio equipo (Natividad González Paras, Juan Ramiro Robledo, César Becker, Luis F. Aguilar, Alejandro Ruvidio, su hombre de confianza en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y supo construir nexos o puentes con facciones como la de Joseph-Marie Córdoba, Fernando Gutiérrez Barrios (apoyado por un sector del ejército), el chihuahuense Liébano Sáenz, secretario particular del presidente Zedillo, el sector colosista, el autoexiliado Carlos Salinas y, en general, con la vieja guardia priísta.

Para algunos su nominación significó la entrega del poder político al aparato de la vieja burocracia partidaria. Pero para otros, su llegada a Gobernación constituyó el *candado* del cordobismo transexenal: se dijo que Chuayffet llegó a cerrar la pinza política de las otras dos piezas del grupo financiero que encarna Córdoba, con Luis Téllez en el control presidencial y Guillermo Ortiz en el manejo de la economía.

Lo cierto es que apenas en medio año de gestión, Chuayffet había logrado devolver a la Secretaría de Gobernación el control de la seguridad nacional —ese pilar de la inteligencia del régimen que tanto había fallado desde el crimen del cardenal Posadas— y con los cambios en los secretarios de Estado de diciembre de 1995 acabó por reconquistar el control de los medios de comunicación, que durante el salinismo habían quedado bajo el mando directo de Los Pinos.

Ése fue, a su vez, el sentido del nombramiento de Carlos Almada como director de Comunicación Social de la Presidencia, con lo que además de atacar el grave problema de imagen que sufría el gobierno, se buscó unificar el proceso de control y elaboración del mensaje político gubernamental, para tratar de romper con la contradicción que se generaba entre la dependencia encargada de la seguridad interior y la oficina presidencial.

Según Samuel del Villar, asesor jurídico del PRD y hombre cercano a Cuauhtémoc Cárdenas, a comienzos de 1996 los instrumentadores del fraude electoral durante el sexenio pasado ya tenían controlada la Secretaría de Gobernación y habían llegado a Los Pinos. Se refería a Chuayffet, director del Instituto Federal Electoral (IFE) en los primeros años del salinismo; a Arturo Núñez, quien sustituyó a Chuayffet en el IFE y cuando éste llegó a Gobernación lo convirtió en su brazo derecho al nombrarlo subsecretario, y a Carlos Almada, quien fue titular del Registro Federal de Electores en la época de Chuayffet, y de allí pasó directamente a oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, con el propio Chuayffet y Núñez, antes de ser nombrado vocero de la Presidencia.

Pero, sin duda, de los nuevos enroques del poder el de Arsenio Farell fue el más comentado. La llegada a la Contraloría del ex secretario del Trabajo durante las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, fue interpretada como una revalidación del salinismo.

Conocido por su dureza y por haber ejecutado la política antiobrera más coherente y eficaz de los gobiernos neoliberales —ocupó la titularidad de la Secretaría del Trabajo en forma ininterrumpida durante once años y cuatro meses—, Farell trabajó codo a codo con Salinas cuando éste se desempeñó como secretario de Programación y Presupuesto y luego bajo sus órdenes como presidente de la República. Fue, además, uno de los consentidos de Joseph-Marie Córdoba en el manejo de los sindicatos dentro del marco de las políticas neoliberales.

Oficialmente se dijo que su nombramiento como contralor obedeció a la voluntad del

gobierno de aplicar mano dura en contra de la corrupción institucional. Pero la misión colocaba a Farell ante una terrible paradoja: de ser consecuente con su fama de hombre inflexible, éste debía llevar hasta sus últimas consecuencias las pesquisas en torno a las cuantiosas e ilícitas fortunas amasadas por Carlos y Raúl Salinas a la sombra del poder. Pero pocos le concedieron el beneficio de la duda: la opinión generalizada fue que, con Farell, los Salinas estarían más seguros que nunca, por lo que su designación fue vista como parte de los acuerdos pactados entre las diferentes facciones del PRI.

A comienzos de 1996, otro sector comenzó a transitar por una fase de reagrupamiento: el llamado Grupo Sinaloa, detrás del cual se identifica al gran ganador político de todos los reacomodos del sistema: el ex presidente Miguel de la Madrid.

Ese agrupamiento, al que gente del PRI denominó con tono de sorna el grupo de los *bebesaurios* o *chilorio power*, reunió a viejos y jóvenes políticos como Enrique Jackson, Oscar Levín y Heriberto Galindo, aglutinados en torno al ex mandatario.

Pero la figura más destacada en la coyuntura fue el vocero presidencial Carlos Almada, sinaloense de origen y que según algunos podía convertirse en el eslabón clave en el tendido de puentes entre los diversos grupos de poder. Incluso Almada, quien fuera el instrumentador de la frustrada *renovación moral* durante el sexenio de De la Madrid, era visto como el hombre capaz de conformar un grupo zedillista.

Un tercer sector en ascenso, pero todavía sin la fuerza adquirida por el Grupo Toluca, estaría representado por el líder del Senado, Fernando Ortiz Arana y su seguidor Santiago Oñate, presidente del PRI. Oñate, señalado como una pieza importante en el juego sucesorio de Zedillo, carga consigo el sello de Salinas, aunque su vertiente de compromiso sería Joseph-Marie Córdoba.

En este grupo destacan también César Augusto Santiago y José González Fernández. En general, lo integra gente con formación política nacionalista que está de acuerdo con la necesidad de la apertura económica pero con políticas sociales y ciertas reglas. Contrarios, por tanto, a una apertura indiscriminada a la inversión extranjera. Pero aglutina, también, a *dinosaurios* como Jorge de la Vega Domínguez, Lauro Ortega y Gustavo Carvajal, y a experimentados políticos como Fernando Solana, David Ibarra y Sergio García Ramírez, todos revueltos, pero que en la suma de apoyos obtienen peso, valor e influencia frente al presidente de la República.

Desde la dirigencia partidista, Oñate protagonizó una dura confrontación con el presidente Zedillo a raíz del recorte presupuestal del PRI ordenado desde Los Pinos, lo que, prácticamente, lo dejó maniatado y sin capacidad para reconstruir el partido.

En ese contexto, y también como parte del acuerdo a que habrían llegado las diferentes facciones, a Oñate se le encargó la misión de obligar al titular del Ejecutivo a declararse priísta — cinco veces repitió Zedillo su "profundo orgullo" de ser priísta— durante el quincuagésimo aniversario del partido gobernante, el 18 de enero de 1996.

Ese día el jefe del Ejecutivo olvidó su promesa de establecer una sana distancia entre el gobierno y el PRI y la sustituyó por la de un *respeto recíproco* entre él y su partido. Para que no quedara duda, dijo: "Sólo la ingenuidad, la información torcida e incluso el dolo de nuestros adversarios pueden suponer que exista desencuentro, alejamiento y hasta divorcio entre el PRI y el mandatario surgido de sus filas."

Oñate era el responsable de conducir lo que Zedillo llamó en Londres, durante su gira europea de comienzos de 1996, la *abrumadora reforma* interna del PRI. No fue casual, entonces, que en la conformación del nuevo Consejo Político del PRI hubiera colocado a César Augusto Santiago, uno de los más eficaces operadores políticos del sistema en los dos últimos sexenios, funcional también al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. Asimismo, la presencia en el consejo del PRI de varios hombres muy ligados al ex secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett, marcó el regreso a los primeros planos del gobernador del estado de Puebla.

Así lo indicó la sorpresiva llegada de Fernando Elías Calles a la Comisión de Prospectiva y

Administración Interna, considerada una de las más importantes. Calles fue subsecretario de Gobernación con Bartlett y lo acompañó luego en su tránsito por la Secretaría de Educación Pública. Figuras como Santiago Oñate, y sobre todo Ortiz Arana —destapado por un sector del PRI el día en que asesinaron a Colosio— mantienen nexos cercanos con Bartlett.

En medios políticos se interpretó que la renovada presencia del grupo de Bartlett en los puestos de dirección del PRI avalaba la tesis de que la restructuración de grupos de poder estaba apoyada, prácticamente, en los mismos personajes que habían ocupado un lugar relevante durante el gobierno de De la Madrid.

La nueva conformación del PRI buscaría desarticular al equipo compacto que operó durante el sexenio anterior y recuperar a sectores lastimados o desplazados del poder por el homogéneo equipo salinista.

Otra figura en el nuevo pacto fue Joseph-Marie Córdoba. En los primeros meses de 1996 funcionarios de alto nivel, incluidos secretarios de Estado, pregonaron las virtudes de ese personaje y los supuestos beneficios que brindó a México durante el sexenio anterior, cuando se desempeñó como virtual *vicepresidente* de la República.

Entonces se dijo que no era una simple operación de lavado de imagen para salvarle su prestigio. La verdadera intención de la campaña fue impedir que se le involucrara como presunto responsable intelectual del asesinato de Luis Donald Colosio, según la sospecha —asentada en el expediente del caso— de varios políticos vinculados al ex candidato ultimado en Tijuana.

Tales versiones, calificadas de absurdas por Córdoba, indicaban que el ex funcionario del BID, que se había transformado en consultor del Banco Mundial en Washington, ofició en dos ocasiones como mensajero del presidente Salinas para pedirle la renuncia al indisciplinado candidato; una de ellas, el mismo día del magnicidio. Paradójicamente, el día que detuvieron a Raúl Salinas, Córdoba fue usado de mensajero por el presidente Zedillo para que fuese a enseñarle a Carlos Salinas el grueso legajo de la investigación que involucraba a su hermano en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Se dice que la reacción del ex presidente fue de enojo, pues suponía vigente la regla política que obliga al mandatario de turno a proteger a su antecesor y a su familia.

En círculos políticos locales se dijo que Zedillo era el candidato del Grupo Córdoba. La relación Córdoba-Zedillo comenzó cuando ambos se desempeñaban en el Banco de México bajo la protección de Miguel Mancera. Tras el asesinato de Colosio, y una vez designado Zedillo como candidato del PRI, Córdoba salió del país. Pero se afirma que junto con Luis Téllez, Córdoba preparó el programa de gobierno zedillista y el listado del nuevo gabinete. Dados sus privilegiados contactos con la comunidad financiera y el gobierno de Estados Unidos, Córdoba apareció como el salvador de la crisis post devaluatoria y, aunque mantuvo un perfil bajo, mantuvo contacto directo con el presidente Zedillo.

El nombre de Córdoba apareció vinculado al narcotráfico por su relación sentimental con Marcela Bodenstedt, a quien la DEA señaló como enlace del cártel del Golfo.

De ahí que se afirme que su reaparición pública en México en septiembre de 1995 y su posterior presencia en el país de manera intermitente, respondió a una campaña de lavado de imagen después que Zedillo logró sacar a Córdoba de la línea de la investigación sobre Lomas Taurinas. Así, Córdoba podría regresar al país como supra-asesor del presidente e incluso desde mediados de 1996 se especuló que ya se le tenía preparada una oficina en Los Pinos, bajo la cobertura de consejero del secretario de Hacienda, su amigo Guillermo Ortiz. También se mencionó como eventual lugar de residencia permanente el estado de Jalisco.

Para entonces Ortiz, cabeza visible del llamado Grupo de la Tecnoburocracia, había cambiado de manera radical su discurso, matizándolo con aspectos de política interna y problemas sociales. Dadas sus aspiraciones presidenciales, era obvio que sus armadores de imagen le habían recomendado dejar atrás el papel de burócrata frío y comenzar a reflejar, de cara a la opinión pública, cierta sensibilidad por los asuntos que atañen a la población.

Al margen de cualquier teoría de la conspiración, el poder de Joseph-Marie Córdoba durante

los dos primeros años del zedillismo fue inocultable: siguió siendo, como en tiempos de Salinas, el mediador entre la banca acreedora y el gobierno de México para la transnacionalización de la economía y las privatizaciones. Sin descartarse su injerencia en la acelerada militarización del país como coordinador de seguridad nacional durante el salinato, Córdoba debió tejer nexos cercanos con la comunidad de inteligencia estadounidense.

Cuando le preguntamos a una fuente muy cercana a Oñate sobre quiénes conforman el grupo salinista, se nos respondió: "¿El salinismo? ¡Todos!", aunque luego mencionó como los más cercanos al ex presidente a Carlos Rojas, Emilio Gamboa Patrón y al "sindicato de gobernadores".

Sin embargo, la parte más sustancial del nuevo pacto fue el "arreglo" entre el presidente Zedillo y Carlos Salinas —urgidos ambos por distintos motivos a poner fin a los conflictos— y del que forman y formaban parte grupos de poderosos empresarios beneficiados por la política económica del Estado benefactor, llamado neoliberal desde 1982.

Según una alta fuente priísta que habló con el autor a cambio del anonimato, el ex mandatario no tenía que preocuparse tanto por aparecer salpicado por los presuntos vínculos de su hermano Raúl con el narcotráfico y los crímenes de Estado —de los que Carlos Salinas ya habría sido exonerado por designio presidencial en virtud de la renovada alianza entre los clanes del PRI—, sino que el tema que pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles eran las lucrativas comisiones cobradas en el marco de la privatización de las empresas estatales estratégicas, entre ellas, principalmente, las instituciones bancarias.

A modo de ejemplo y según nuestra fuente, si Carlos Salinas se hubiera limitado a recibir solamente la cifra habitual en este tipo de *transacciones negras*, es decir, 5% de comisión sobre las ventas de las empresas privatizadas, se habría hecho acreedor a la friolera de 24 mil millones de dólares.

Sin embargo, cuando en junio de 1996 el periodista estadounidense Mike Wallace, reportero principal del programa "260 Minutes" transmitido por *CBS News* investigó acerca del dinero de Raúl, se refirió a él como "el hombre del 10% de los grandes negocios en México". Quedó claro entonces que Carlos Salinas estaba al tanto de las transacciones de su hermano, a través del banco de su amigo John Reed, el Citibank de Nueva York, y se infiere que a partir de la *sociedad familiar* el monto de las comisiones pudo haberse elevado a 48 mil millones de dólares... De ser esto cierto, la revista *Forbes* debería incluir a los Salinas como el grupo familiar más rico del mundo, dejando atrás a Bill Gates, de Microsoft, los Rockefeller y los jeques árabes.

Tres meses antes, cuando Joseph-Marie Córdoba reapareció en México de manera retadora —"le ruego se me cite a declarar", pidió en una carta al procurador Lozano—, el problema de Carlos Salinas era que si se investigaba a fondo y se tiraba del hilo de las privatizaciones, podrían comenzar a aparecer involucrados los hombres más ricos del país. Ese podría ser el mensaje que encerraba la insólita revelación de uno de los mecenas del salinismo, Carlos Peralta, cabeza del grupo Iusacell, del ramo de la telefonía celular y miembro de una familia a la que la revista *Forbes* le calculaba, en 1996, una fortuna de 2 500 millones de dólares. Según la publicación que cada año lista a los magnates del orbe, Carlos y su padre Alejo Peralta fueron "de los pocos empresarios que salieron prácticamente ilesos del proceso de deterioro que afectó a la economía mexicana" a partir de diciembre de 1994.

Después que la policía suiza sacó a la luz las cuentas del "hermano incómodo" del ex presidente y las vinculó con lavado de dinero, Peralta, socio mexicano de la empresa transnacional de telecomunicaciones Bell Atlantic, aceptó públicamente haber participado con 50 millones de dólares, sin recibos de por medio, en un fondo de inversión junto con Raúl Salinas y los empresarios Carlos Hank Rohn y Roberto González Barrera, accionista mayoritario del Grupo Industrial Maseca, un gigantesco consorcio de procesamiento de alimentos de Monterrey con plantas en California, Texas, Arizona y Georgia.

Pero meses después Mike Wallace acusó a Raúl Salinas de tráfico de influencias, al asegurar que Carlos Peralta pagó los 50 millones de dólares a cambio de obtener la franquicia de la telefonía celular en la mitad de la ciudad de México y sugerir que el dinero pudo

provenir de la Bell Atlantic.

Filtraciones de prensa indicaron, entonces, que las autoridades hacendarias y judiciales mexicanas trabajaban en un largo listado de empresarios que serían auditados e investigados por presuntos negocios ilícitos en el sexenio salinista, entre quienes sobresalían, además de los citados. David Peñaloza, del Grupo Tribasa (Trituradores Basálticos), beneficiado durante el salinismo con las concesiones de carreteras, y el locutor de Televisa Abraham Zabłudovsky, junior del popular Jacobo y principal accionista de MASA, una empresa de autobuses.

Luego se agregaría a la lista Ricardo Salinas Pliego, presidente del directorio de Grupo Elektra, quien durante el salinismo adquirió la red de TV Azteca (canales 7 y 13). Las investigaciones sobre Salinas Pliego giraron en torno a si una serie de transacciones por alrededor de 30 millones de dólares en un banco suizo fueron resultado de sobornos utilizados para ganar la concesión de TV Azteca cuando fue privatizada —en 1993, por 650 millones de dólares— o si, por el contrario, esa suma le fue facilitada por su socio Raúl, para que Salinas Pliego pudiera cumplir oportunamente con el primer tramo del paquete de medios, lo cual le daría la razón a quienes especulan que, en realidad, TV Azteca fue adquirida por la familia Salinas de Gortari.

El *affaire* dio lugar a una virtual guerra entre televisoras en julio de 1996. El día 1, la versión vespertina del diario *Ovaciones*, propiedad de Televisa, tituló sus ocho columnas: "Salinas más Salinas es igual a 7 y 13." Y en el texto se exhibían los hechos que vinculaban al dueño de TV Azteca en las transferencias ilícitas realizadas por el hermano del ex presidente. El noticiero *Hechos* de canal 13 calificó de difamatoria la nota de *Ovaciones*. Pero en el informativo estelar de canal 2, *24 Horas*, Jacobo Zabłudovsky insistió en las contradictorias declaraciones de Salinas Pliego sobre sus nexos con Raúl Salinas de Gortari, lo acusó de mentiroso y dijo que la concesión de TV Azteca al dueño de Elektra causó sorpresa pues se trataba, hasta entonces, de un empresario medianamente conocido. En verdad, el ganador de la subasta de medios era el que menos experiencia tenía entre todos los aspirantes: Salinas Pliego encabezaba Radio Televisora del Centro.

Pero más que la guerra sucia TV Azteca-Televisa, que llevó al secretario de Gobernación a reclamar prudencia a las partes, la preocupación de Zedillo —que terminó interviniendo en el conflicto con un llamado a la concordia, al respeto y a la civilidad—, estuvo motivada porque salieron a luz los dudosos mecanismos de privatización del llamado "paquete de medios", que además de los canales 7 y 13 de Imevisión incluyó a la cadena de cines COTSA.

Para entonces, la asociación de Raúl Salinas con el banquero José Madariaga Lomelín y Abraham Zabłudovsky en la empresa Mexicana de Autobuses Sociedad Anónima (MASA), era ya parte del escándalo y otra de las pistas que, a través de las privatizaciones, asomaban como la punta del iceberg de un gran fraude a la nación. Para colmo de males, "la banda del autobús gris" —como la llamó Luis Soto en *El Financiero*— estaba en suspensión de pagos y entre sus principales acreedores figuraban el Banco Bilbao Vizcaya (antiguo Probusa), Bancomer y Banco Mexicano. Madariaga, presidente de la Asociación de Banqueros de México (y accionista del Grupo Martí y Editorial Diana) había ocultado a su nuevo socio, Emilio Ybarra, presidente del Grupo Internacional Banco Bilbao Vizcaya, que entre los damnificados de MASA estaba el banco que había adquirido y que él, hasta entonces, había dirigido.

En ese contexto, Madariaga fue reelegido por unanimidad como presidente de los banqueros y Ángel Viveros comentó que la decisión de sus pares tuvo que ver con que era el hombre que mejor podría "cubrirlos" en las operaciones no permitidas por la ley (entre ellas el lavado de dinero):

Había coincidencia de criterios. Madariaga debía continuar en el puesto, conocía bien los intrínquilos de traspasos de dinero. Su experiencia en el *crack* de la bolsa de 1987, con el secretario de Hacienda Gustavo Petricoli, después con sus amplias relaciones con el ex presidente Salinas, quien hasta banco le

vendió, eran una garantía para la comunidad bancaria nacional.

Según Viveros, el humilde dueño de una casa de cambio convertido al vapor en uno de los multimillonarios de la lista de *Forbes*, "representa a un importante grupo de políticos y banqueros del salinismo [...] La misma fuente aseguró que Madariaga representa dinero de Raúl Salinas de Gortari, lo mismo que de empresarios en varios bancos, incluidos algunos del exterior" ("Cartelera Política", *El Financiero*, 3/VIII/96).

Mientras, iba creciendo la lista de hombres de negocios extraditables que estaban siendo perseguidos por el mundo como delincuentes de "cuello blanco". Entre ellos estaba el ex director de Aeroméxico. Gerardo de Prevoisin Legorreta, pionero del programa de privatizaciones salmista, acusado de haber defraudado a la empresa de aviación con 72 millones de dólares y confeso de haber "donado" ocho millones de dólares al PRI para la campaña presidencial de 1994.

Otro que ya andaba a salto de mata era Carlos Cabal Peniche, a quien un orgulloso Salinas exhibió como ejemplo de prominente empresario cuando muchos se preguntaban cómo le había hecho Cabal, en sólo tres años, para comprar los bancos locales Cremi y Unión y dos grandes compañías de alimentos en Estados Unidos. Luego se supo de los nexos del banquero prófugo con Raúl Salinas y las investigaciones involucraron al gobernador tabasqueño Roberto Madrazo, en cuanto a que si el aporte que éste recibió de Cabal para financiar su campaña a la gubernatura provenía de dinero sucio.

Para septiembre de 1996 el cerco sobre Cabal parecía ir cerrándose luego de que varios de sus socios, prófugos de la justicia, fueron capturados: Ángel Rodríguez, el Divino, ex presidente del Grupo Financiero Asemex-Banpaís, acusado de fraude patrimonial, fue detenido en Ibiza el 29 de julio de 1996 y el empresario Pablo Madero O'Brien había sido aprehendido días antes en Cerdeña.

La vieja tesis de la DEA de que el cártel del Golfo era un triángulo de tres caras: Juan García Ábrego, como cabeza visible; Raúl Salinas, como encargado de relaciones políticas, y Carlos Cabal Peniche, como responsable de lavado de dinero, había guiado las operaciones conjuntas del Departamento del Tesoro estadounidense y de la Secretaría de Hacienda de México sobre el Grupo Cremi-Unión, iniciadas en 1994, sobre lavado de dinero.

En julio de 1996 el vocero de la SHCP, Alejandro Valenzuela, anunció que en relación con los fondos utilizados para financiar la campaña de Roberto Madrazo en Tabasco, la dependencia concluyó que los recursos depositados en el fideicomiso PRI-F2939-1 que el partido tenía en Banco Unión, "no pueden constituir delito de carácter fiscal", porque en México los partidos políticos son sujetos excepcionales, ya que son personas morales no contribuyentes en términos de los artículos 70 y 73 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, agregó que la dependencia "se reserva el ejercicio de sus facultades en el caso de que sean proporcionados nuevos elementos de juicio" sobre las transferencias de fondos de las empresas de Cabal. Lomas Mil y San Carlos World Trade México, al fideicomiso del PRI.

La cantera empresarial podía resultar una caja de Pandora y, en ese sentido, otra fuente de sorpresas fue la investigación contable del resto de los 15 megamillonarios mexicanos hecha por *Forbes* y de los "amigos de Salinas", como los llamó *Business Week* (con los 24 de *Forbes* más Carlos Hank González, que no fue incluido por ejercer funciones de secretario de Estado, México se ubicó en 1994 en el cuarto lugar mundial, después de Estados Unidos, Alemania y Japón, cuando, al asumir Salinas, en 1988, sólo había dos multimillonarios).

Encabezando la lista se encuentra Carlos Slim Helú, hijo de un inmigrante libanes, arquitecto de los poderosos grupos Carso y Financiera Inbursa y accionista mayoritario de la empresa Teléfonos de México (Telmex), privatizada bajo el salinismo en momentos en que él proclamaba a los cuatro vientos que "México es una ganga", y sobre la que el PRD radicó una demanda penal. Slim, señalado como el cuarto hombre más rico del mundo en 1994, fue ubicado en el lugar 14 dos años después, con 6 100 millones de dólares (3 700 en 1995, el año de la crisis). Con frecuencia se le menciona como "el hombre de paja de Salinas".

La lista de los que lograron sobrevivir al *crack* de diciembre, el más drástico de los últimos 63 años, incluye, además, al *soldado del PRI* y dueño del consorcio Televisa, Emilio Azcárraga Milmo (dos mil millones), quien providencialmente, o producto de una infidencia reestructuró la deuda de su empresa de dólares a pesos antes de la devaluación de 1994; Alberto Bailleres —Mr. B— del Grupo Peñoles (minería), El Palacio de Hierro y miembro del consejo de la cervecera y embotelladora Femsa (1 800); Alfonso Romo Garza, presidente del *Holding* Pulsar, a través del cual controla La Moderna, el mayor fabricante de cigarrillos en México (1 400) y quien en 1996 reclutó como accionista al ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe; la familia Garza Sada, propietaria del Grupo Monterrey y cuyas cabezas son Bernardo Garza Sada (Grupo Alfa, corporativo Cydsa, Grupo DESC, Seguros América y Liverpool, y a quien se le atribuye una fortuna de 500 millones) y Eugenio Garza Lagüera (Visa-Bancomer, Cydsa, Femsa, Alfa, Seguros Monterrey, La Moderna, con 1 100), quien en 1996 se asoció con el ex secretario del Tesoro estadounidense Lloyd Bentsen; Marcelo Lorenzo Zambrano, dueño de Cemex, cuarto productor mundial de cemento (1 200); Jorge Larrea Ortega, llamado el zar del cobre por controlar el Grupo Minera México (que adquirió la estatal Minera de Cananea y es dueño de La Caridad, de Nacozari), además de accionista de Aluminio de México, Banamex y Serfin, y *el barón de la cerveza* Pablo Aramburuzavala y familia (Grupo Modelo, John Deere), cada uno con 1 400 millones de dólares.

Otro supermillonario beneficiado por el salinismo y ahora por el continuismo zedillista es Roberto González Barrera, *don Maseco*, pariente político de Carlos Hank, sindicado como uno de los desinteresados "inversionistas" de Raúl y quien prestara su avión a Carlos Salinas para trasladarse de México a Monterrey, cuando llevó a cabo su fugaz huelga de hambre en marzo de 1994 y el que poco después lo trasladó al exilio. González Barrera encabeza el Grupo Gruma-Banorte y no deja de ser elocuente que se haya asociado con el ex secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady y con Dwayne Andrews, dueño del consorcio Archer-Daniels Midland Co. (ADM), una de las procesadoras de alimentos más grandes del mundo (lugar 19 de las firmas exportadoras de Estados Unidos según la revista *Fortune*).

González Barrera fue protagonista de otro sonado *affaire*, en compañía de su consuegro, el "profesor" Hank, ocurrido en los tiempos en que éste fue secretario de Agricultura y su hijo Carlos Hank Rhon dirigía el grupo empresarial Hermes y participaron en negocios poco claros con la Unión Nacional de Productores de Subsistencias Populares (Conasupo).

Los casos Maseca y Conasupo, vinculados con una maraña de operaciones millonarias con maíz y frijol, además de subsidios aparentemente ilegales, fueron debatidos en el Congreso. Aparte de las irregulares relaciones entre Conasupo y Hermes, denunciadas ante la PGR, Hank fue acusado de desviar parte de la producción de maíz para entregarla a Maseca.

Por otra parte, y según los documentos aportados por el diputado Adolfo Aguilar Zinser, en 1989, Ernesto Zedillo, entonces secretario de Programación y Presupuesto, participó junto con Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y del director de Conasupo, Ignacio Ovalle, en una decisión que terminó liberando un pago de 15 761 000 pesos (unos siete millones de dólares de la época) de esa paraestatal a Maseca por concepto de deterioro financiero. Según Aguilar Zinser, que investigó la documentación relacionada con Conasupo, en los últimos 15 años se hicieron diversos sobrepagos por subsidios y otros conceptos a Maseca, por un monto de alrededor de 50 mil millones de pesos.

No deja de ser sintomático que los hombres que diseñaron la política macro-económica y de la deuda externa de México: —Bentsen, Brady y Aspe—, aparezcan ahora como socios privados.

La lista de *Forbes* se completa con Isaac Saba Raffoul y familia, accionistas de TV Azteca y dueños de hoteles, fábricas textiles y teatros; Jerónimo Arango y familia, del Grupo Cifra (Aurrerá, Superama, Suburbia, así como de los restaurantes Vips y El Portón); la familia Autrey Maza (Carlos, Xavier y Sergio), una de las principales beneficiarias de la venta de paraestatales, dueña del Grupo Acerero del Norte y otras trece empresas mineras y siderúrgicas, entre ellas

Altos Hornos de México y del Grupo Financiero Inverlat, y el ya citado Ricardo Salinas Pliego y familia, principal accionista de TV Azteca y Elektra.

Hacia julio de 1996 la fortuna de estos 15 conglomerados en conjunto ascendía a 25 600 millones de dólares, cifra equivalente a 9% del PIB de México estimado para el mismo año.

Pero la lista de los dueños del poder real, esto es, los capitanes de las corporaciones industriales-financieras mexicanas ligados al capital transnacional preferentemente con base en Estados Unidos, no se agota en esos grupos. Existe otro puñado de inversionistas que tomaron parte en el diseño y ejecución del modelo impulsado por el eje Salinas-Zedillo y que dio lugar al rompimiento del regionalismo de los grupos empresariales y a una reconfiguración de las élites políticas y económicas del país, sobre la base de un drástico desmantelamiento de la industria nacional en beneficio de una industria multinacional subsidiada y de la especulación financiera, lo que dio paso a un Estado neo oligárquico de corte neocolonial y bananero (una oligarquía tipo siglo XIX), como lo reconoció Jorge Castañeda cuando dijo a Guadalupe Loaeza, en un programa de televisión en el Canal 40, que el salinato fue un rotundo éxito para Estados Unidos, que "se consiguió un paisote [...] y además a precio de ganga" (7/VII/96).

En rigor, como afirma Castañeda, el proceso de desnacionalización y concentración del poder iniciado por Miguel de la Madrid y continuado por Salinas y Zedillo fue diseñado para que Estados Unidos se apropiara de México (en el marco de una recolonización imperial) y para sacar ganancias estratosféricas a escala mundial en plazos sumamente cortos, medidos en días o semanas, esto es, una economía especulativa, de tipo casino, subsidiada y manipulada por el Estado.

Así, luego de su recomposición y junto con los 15 de *Forbes*, el nuevo grupo hegemónico producto de la *salinastroika*, incluye nombres como los de Antonio Madero Bracho (Corporación San Luis. Alfa, Cydsa, Seguros América, Grupo Industrial Saltillo): Claudio X. González presidente de Kimberly Clark, accionista de Carso, Modelo, Alfa, Banamex, exlíder del Consejo Coordinador Empresarial y ex asesor de Carlos Salinas en materia de inversión extranjera: Gilberto Borja Navarrete, director de Nacional Financiera desde comienzos del sexenio de Zedillo y ex presidente del Grupo ICA, la empresa constructora más beneficiada por el gobierno anterior con la concesión para construir las autopistas de cuota, accionista de Femsa y Cementos Tolteca: los Clariond-Canales (IMSA): Javier Garza Calderón, "El Manitas" (Grupo Domos): los Sada González, propietarios de Vitro (la segunda empresa de México) y codueños de Banca Serfin; Roberto Hernández, del Grupo Financiero Banamex-Accival y accionista del Grupo Modelo, Televisa, ICA y Maseca: el político-empresario Carlos Hank González, quien en 1994 acumulaba una fortuna de tres mil millones de dólares: Alfredo Harp Helú (Banamex), primo de Slim: Carlos Hank Rhon, yerno del zar de las tortillas, González Barrera, amigo de Raúl Salinas y dueño del Grupo Interacciones, además de accionista de Transportación Marítima Mexicana y Tribasa.

El Grupo Financiero Interacciones fue investigado por presuntas operaciones irregulares relacionadas con la detención del promotor bursátil José Sánchez Pizzini, señalado como cómplice del ex tesorero Tomás Peñaloza Webb en el fraude por 360 millones de pesos cometido en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El Servicio de Rentas Internacionales (IRS, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense investigó a Interacciones y a Hank Rhon por el presunto delito de lavado de dinero, al realizar operaciones sospechosas *off shore* a través del fondo de inversión Financial Services LTD, abierto en Islas Caimanes a través del Bank of America.

El fraude contra el IMSS llevó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a investigar al presidente y vicepresidente del Grupo Financiero Anáhuac, Jorge Hurtado y Federico de la Madrid, sobrino e hijo del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Según pesquisas de la PGR, en el círculo de amigos de Sánchez Pizzini figuran, además, el ex secretario de Defensa Nacional del sexenio delamadridista, general Juan Arévalo Gardoqui y el director de Fonatur, Emilio Gamboa Patrón.

A mediados de julio de 1996 el senador Frank Murkowski, representante de Alaska en el Congreso estadounidense y presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales, pidió acciones diplomáticas contra México a raíz del problema de las drogas. Por esos días también fueron difundidos documentos que indicaban, aparentemente, que De la Madrid es poseedor de cuentas de inversiones por más de dos millones de dólares en bancos de Luxemburgo e Indonesia. De la Madrid negó públicamente la existencia de esas cuentas y las calificó como "imputaciones calumniosas". Los documentos fueron filtrados desde Estados Unidos para su difusión en medios mexicanos. Fuentes oficiales locales interpretaron las filtraciones como parte de una "campana de desestabilización" en contra del gobierno de Zedillo.

Otros miembros del selecto club de los ricos son Antonio Ariza Cañadilla, director de Casa Pedro Domecq, ligado a Casa de Bolsa Inverlat y Seguros América y señalado como sacadólares en 1987; Roberto Servitje, dueño de Bimbo y distribuidor de Sara Lee Corp.; Gregorio Ramírez, del Grupo Industrial Ramírez; Humberto Lobo Morales (Protexa); familia González Nova (Comercial Mexicana y socios de Price Club de Estados Unidos); Ángel Losada Gómez (Gigante, cafeterías Toks); familia Molina, propietaria del Grupo Embotellador de México y poseedor de la franquicia de Pepsi-Cola en el país; el "Cachorro de la revolución" y senador del PRI, Miguel Alemán Velasco (Aeroméxico, Grupo Industrial San Luis, Seguros América, Grupo Chihuahua, Grupo Novedades, Televisa); Juan Sánchez Navarro (Cervecería Modelo); Jorge Martínez Huitrón (Banamex-Accival, Telmex y Grupo Sidek, del ramo siderúrgico, metalmeccánico, turístico, inmobiliario y de servicios); Raymundo Gómez Flores, otro gran beneficiado por el salinismo, presidente del Grupo Empresarial de Occidente (GEO) que ganó la subasta del estatal Grupo Dina (autobuses, camiones, motores, plásticos automotrices) y accionista mayoritario de Tres Estrellas de Oro, Norte de Sonora, Transportes del Pacífico y Autobuses Estrella Blanca; el financiero Alfonso de Garay (Grupo Bursátil Mexicano), Eloy Vallina (Grupo Chihuahua, Vitro, Alfa, Celanese Mexicana, Seguros La Comercial), Carlos Abedrop (Aeroméxico, Mexicana de Aviación, casa de bolsa Fimsa, Seguros Olmeca), Antonio del Valle (Banco Internacional, casa de bolsa Prime, Grupo Penwalt, aseguradoras La Latinoamericana y Seguros Interamericanas); todos ellos financiadores del PRI desde que Salinas privatizó al partido de Estado y les pasó la factura a los beneficiarios de la venta de los bancos y empresas públicas.

Ninguno de ellos dijo nada cuando en diciembre de 1995 Raúl Salinas declaró ante la fiscal suiza, Carla del Ponte, que su fortuna provenía "de la gestión y asesoría que daba a empresarios mexicanos". El silencio de los magnates se combinó en algunos pocos casos con un deslinde tardío de negocios con la familia Salinas. Ejemplo de ello fue el empresario Carlos Abedrop quien, cuando la barrera entre lo legal y lo ilegítimo parecía borrarse, vendió 51% de las acciones del diario *La Prensa*, según revelaron funcionarios gubernamentales citados por Raymundo Riva Palacio.

Por otra parte, los cambios registrados en el ámbito de los medios de comunicación demostraron que allí estaban en juego importantes intereses, sobre todo en los electrónicos, donde según *Forbes* los tres más grandes magnates de México tienen sus principales negocios.

Como señaló el periodista Yuri Serbolov, "la próxima guerra será ideológica y se peleará en los medios de comunicación". Señaló el caso de Carlos Slim, quien creó una División de Comunicación dentro de su grupo y se lanzó a la adquisición de paquetes accionarios en varios medios electrónicos e impresos: Medcom, Cablevisión, TV Azteca, Grupo Acir, *El Financiero* y *La Jornada*. (Aunque el columnista especializado Alberto Barranco Chavarría interpretó un comunicado de la Comisión Federal de Competencia del 29 de julio de 1996 como un "hasta aquí" a la penetración de Slim en el campo de las telecomunicaciones —Grupo Acir y Medcom—, lo que pudiera extenderse, dijo, a los diarios *La Jornada* y *El Financiero*.)

Además citó a Alfonso Romo, el nuevo jefe de Pedro Aspe, quien adquirió 29% del paquete accionario que Rosario Cárdenas y Alejandro Zorrilla mantenían en *El Financiero*. Aspe, por su parte, es director editorial de McGraw-Hill. Mario Vázquez Raña, dueño de la poderosa

Organización Editorial Mexicana y "los soles", fue quien le compró *La Prensa*, el diario de mayor tiraje, a Carlos Abedrop y Jesús de Polanco (*El País*, de Madrid). Roberto González Barrera realizó operaciones con el influyente Grupo Estrella de Oro, de Monterrey, que tiene posiciones en radio, televisión y prensa escrita. ("Columbros: ¿Próxima guerra ideológica?", *El Grito*, 1-7/07/96.)

Según Serbolov, se especula que detrás de Vázquez Raña está el ex presidente Luis Echeverría, en tanto que "a la sombra de Slim, Romo y "El Maseco" están los intereses del ex presidente Salinas". Miguel de la Madrid se afianza con el lanzamiento de *La Crónica*, el nuevo dicho que dirige Pablo Hiriart (quien fue director de la agencia oficial Notimex con Salinas y estuvo muy vinculado a José Carreño Carlón) y también mantiene posiciones en *Unomásuno* y *El Día*.

Asimismo, durante el sexenio pasado por el cual desfilaron dos secretarios de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso y Emilio Gamboa Patrón, a Televisa se le cedieron 62 canales estatales (aparentemente sin licitación pública) y se concesionaron los canales 7 y 13 con 170 repetidoras en todo el país a TV Azteca. Televisa pasó a manejar 50% del mercado de televisión abierta nacional, contra 30% de TV Azteca y menos de 20% repartido entre otras empresas. Televisa también libró otra batalla, en este caso por el control de los cielos latinoamericanos, con Multivisión de Joaquín Vargas. Azcárraga se asoció al Grupo Globo (Brasil), Tele-Comm Int'l y Rupert Murdoch, en Sky Latin America, mientras que Vargas lo hizo con Gustavo Cisneros, el magnate de la televisión venezolana, TV Abril de Brasil y General Motors (que contribuyó con 60% de la inversión) en el Grupo DirecTV. En ambos casos la aventura es costosa y partieron de cero, pero el mercado potencial oscila entre seis y ocho millones de usuarios en Latinoamérica.

En ese marco, la guerra de las televisoras reflejó también una pugna entre grupos políticos que hizo evidente sus nexos con prominentes empresarios de los medios, en particular de la televisión, que colocó a ambos en un lugar más distante que nunca del papel que les corresponde como interlocutores entre el gobierno y la sociedad civil.

Cabe consignar que dos de los máximos exponentes de la tradicional aristocracia financiera mexicana, don Manuel Espinosa Yglesias (Bancomer) y Agustín Legorreta (Banamex, Grupo Financiero Inverlat y el otrora Multibanco Comermex) quedaron en el camino tras la aplicación del nuevo modelo impulsado por el Grupo SPP. Ambos cedieron ante el empuje de una nueva generación de financieros parabancarios que, como ellos antes, crecieron gracias a los subsidios y las dádivas del poder, la corrupción y el solapamiento de ilícitos.

Manuel Espinosa, accionista mayoritario de Bancomer, decidió retirarse de los negocios luego de la nacionalización de la banca en 1982. En mayo de 1990, al inicio de la reprivatización, intentó recuperar Bancomer pero reconoció ante el secretario de Hacienda que "nada tenía que hacer", no sólo por los montos tan elevados en que se estaban vendiendo los bancos, sino porque la banca era ahora muy distinta a la que él había conocido. En realidad su retirada fue una expresión de la guerra intraoligárquica, aunque en varias ocasiones Espinosa Yglesias sugirió que fue sacado del juego por decisión del gobierno.

Baste recordar que fue Agustín Legorreta quien en 1988, ante un auditorio estudiantil en la Universidad Anáhuac, confesó los secretos del pacto de estabilidad económica impuesto a Miguel de la Madrid por un grupo de 300 empresarios que se sentían dueños del país (pese a su arrogancia, ésta era una verdad a medias, ya que la decisión la tomaron Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial en su plan de reconquista de México y América Latina). El objetivo del pacto, dijo entonces el banquero, fue reducir la inflación y se le advirtió al gobierno que en caso de no aceptarlo "corrían el riesgo de perder el poder". Con una inflación cercana al mil por ciento y en víspera de elecciones, la élite política entendió el mensaje y accedió a las condiciones impuestas por el FMI a través de los planes de ajuste estructural iniciados en todo el Tercer Mundo en 1982, luego de la crisis de la deuda y asumido por la cúpula empresarial mexicana. Fue así como se acordó la quiebra y liquidación de empresas y su traspaso a la iniciativa privada, mientras de manera paralela México —y otros países— subsidiaron a Estados Unidos a través de

la fuga de capitales.

Los dislates de Raúl Salinas terminaron por exhibir a los padrinos del PRI, junto a una bochornosa red de complicidades, maniobras subterráneas, operaciones turbias y actividades delictivas, unidas en una relación de beneficio mutuo con la clase política y amparadas por el signo de la impunidad.

El Libro Blanco de las privatizaciones, encargado por el gobierno salinista al ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe y a su mago de la desestatización, Jacques Rogozinski, es un documento impoluto. De allí que las investigaciones de la PGR estuvieran dirigidas sobre al menos cinco grandes empresarios.

Sin embargo, los escándalos por anomalías en la venta de empresas públicas siguieron creciendo y muchas voces reclamaron que se investigara a los "peces gordos" (Carlos Salinas) y también la actuación de Aspe y Rogozinski. La situación de Pedro Aspe estuvo vinculada a su presunta participación directa en la subasta de Banpaís, que benefició a Ángel Rodríguez, y en la desincorporación de los complejos siderúrgicos (Sidermex), donde Rogozinski no intervino ya que Aspe se lo encomendó a Aarón Tornell.

En noviembre de 1994 Jim Moody, subdirector asistente de averiguaciones criminales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), aseveró que paraestatales privatizadas bajo el salinismo "están siendo compradas por organizaciones de narcotraficantes mexicanos y colombianos". El 9 de mayo de 1995 *El Financiero* publicó las declaraciones de Moody y en julio de 1996 varios legisladores mexicanos pidieron que se citara a Jacques Rogozinski, cerebro de las privatizaciones como coordinador general de la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda, para que explicara la venta de empresas y bancos entre 1990 y 1993, periodo en el cual, según su propio relato, se vendieron 228 compañías nacionales, entre ellas Teléfonos de México y 18 instituciones bancarias (véase *La privatización de empresas paraestatales*, FCE, 1993).

Pero el polaco-francés-mexicano ya estaba haciendo sus maletas para dirigirse a Washington, el refugio preferido de los tecnócratas salinistas. El 15 de julio Rogozinski fue nombrado asesor en desarrollo del sector privado por el BID, donde trabaja directamente con su presidente, Enrique Iglesias y la vicepresidenta, Nancy Birdsall.

El 3 de septiembre siguiente los legisladores del PAN, Ricardo García, Alejandro González y Fernando Pérez, presentaron ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda la denuncia de que en un acto de "simulación absoluta" el gobierno federal se "autoconcesionó" la operación de Imevisión (canales 7 y 13, hoy TV Azteca), a través de la creación "*ex profeso* de ocho empresas". Con esa maniobra de simulación, argumentaron los legisladores, "se favoreció a un grupo de capital vinculado con la esfera gubernamental". La fracción panista también demandó que se revisaran la venta de Teléfonos de México, MASA, los bancos Serfín y Probusa (ahora BBV) y Productora Mexicana de Tubería (PMT), ante la sospecha de que en su enajenación se cometieron serios ilícitos.

Según datos del IFE, el propio Zedillo fue favorecido con 83.2% de los fondos privados canalizados al financiamiento de los partidos durante la campaña de 1994, cifra que quintuplicó a la del financiamiento público y que superó en 5.6 veces a las aportaciones recibidas por el PAN y en 67.9 a las del PRD.

El nuevo pacto cupular habría incluido el "no moverle más" al asunto, a condición de que la familia Salinas se sosegara y que los empresarios que se beneficiaron con la política económica le echaran "una mano a México", repatriando sus capitales y generando nuevas fuentes de empleo.

Por otro lado, después de dos años de gobierno zedillista, ninguna de sus ofertas de campaña se habían cumplido a cabalidad: ni la *sana distancia* PRI-gobierno, ni la prometida reforma democrática del Estado —hay quienes afirman que lo que está en juego es una lenta y gradual contrarreforma política para dismantelar la Constitución de 1917, en beneficio del capital

financiero transnacional—, amén de las concesiones parciales sobre la reforma electoral "definitiva".

Ni qué decir de las promesas de bienestar para la familia; fin de la impunidad —véase el caso Aguas Blancas, por citar sólo un ejemplo—; esclarecimiento de los crímenes de Colosio y Ruiz Massieu, y la edificación de un país de leyes, entre tantos otros compromisos proselitistas.

Al contrario, los únicos signos de cambio tras 24 meses de gestión fueron la cancelación de los derechos sociales de los mexicanos junto a la creciente militarización del país y de las funciones de seguridad pública (con todos los mandos de las distintas policías capitalinas en manos de generales del ejército), que so pretexto de combatir a la delincuencia parecería estar dirigida más bien a legitimar la represión del movimiento ciudadano en beneficio del nuevo pacto del poder y de la reconstrucción del presidencialismo autoritario.

La escandalosa recuperación de los multimillonarios tras el *crack* de diciembre fue una prueba irrefutable de que, al menos en cuanto a los objetivos económicos de los grupos dominantes, el modelo ha funcionado muy bien. En ese sentido no puede hablarse de la ineficiencia del zedillismo, ni de que es un gobierno débil o que existe un estado de ingobernabilidad. Vitro, Iusacell, Maseca, MASA, las grandes televisoras y los banqueros, o las más grandes empresas vinculadas con los negocios de Raúl Salinas, han continuado operando en condiciones de absoluta normalidad, sin que la justicia se haya tomado el trabajo de molestarlos. Mientras Jorge Castañeda demandaba la creación de una *comisión de la verdad*, legisladores del PAN y del PRD denunciaban la cerrada negativa del contralor Arsenio Farrell, de brindar al Congreso información sobre las privatizaciones.

CAPITULO 9

La renuncia

Desde mediados de mayo de 1996 y por más de mes y medio, el tema de la renuncia o relevo de Zedillo alteró el escenario político y fue materia de controversia pública.

Tema tabú en el pasado, los rumores y especulaciones sobre el eventual cambio de figura en Los Pinos, que tuvieron como telón de fondo la militarización de la seguridad interior en el Distrito Federal y una nueva ola de malestar social por la crisis económica, hicieron que una nueva burbuja especulativa amenazara a los mercados financieros. Varios factores, internos y externos, económicos y políticos, se conjugaron para poner nuevamente a prueba los niveles de confianza, el *riesgo-país* y, en especial, la sensación de inviabilidad del rumbo seguido por la actual administración que podía conducir a una mayor ingobernabilidad.

Expertos económicos y científicos sociales coincidieron en que en el fondo de la crisis estaba la imagen de debilidad del presidente Zedillo, una idea compartida por inversionistas nacionales y extranjeros.

El asunto, que mantuvo ocupados a los principales comentaristas de radio y prensa escrita, tuvo dos tiempos. Al inicio el rumor fue manejado y debatido en los medios de difusión como producto de una disputa entre los grupos de poder que llevaron a Zedillo a la presidencia y que, ante el vacío generado por el hombre considerado como "el mandatario más débil de las últimas décadas", intentaban ocupar los espacios y asumir las decisiones.

Según esa versión, Zedillo ya perdió la confianza de los grupos empresariales y los sectores duros del PRI, quienes habrían considerado sustituirlo después del 1 de diciembre, cuando el mandatario cumpla su segundo año de gobierno. La fecha no es arbitraria, ya que a partir de entonces comienza el plazo en que, según el artículo 84 constitucional, el recambio presidencial no obliga a convocar a elecciones, lo cual sería contraindicado para el partido en el poder en las actuales circunstancias.

En ese sentido, el origen del rumor sobre la renuncia de Zedillo provendría de su propio equipo y se inscribiría en una lucha palaciega por el poder. El tema fue de la mano de otro asunto que también tuvo su fuente en un sector del gobierno: la eventual victoria del PAN en las elecciones del Estado de México, en los comicios legislativos y la elección del regente capitalino en 1997, así como en las presidenciales del año 2000. En el caso de la regencia de la ciudad de México, el contrincante del PAN podría ser el PRD y aun un candidato independiente, como el ex regente Manuel Camacho.

Así, los rumores sobre la renuncia de Zedillo responderían a una doble lógica: la de los costos de una transición que inevitablemente derive en la alternancia en el poder, y la del *aviso* de los grupos hegemónicos que ni siquiera quieren pensar en la posibilidad de que el PAN gane el Congreso y mucho menos la providencia.

Desde la renuncia de Esteban Moctezuma en junio de 1995 se venía repitiendo que Zedillo estaba solo, aislado, sin colaboradores de confianza y que los secretarios de Estado eran de factura salinista. De ahí que se dijera que los rumores sobre su salida tuvieron por objeto obligar al presidente a pactar con ciertos grupos de poder desplazados y construir nuevas alianzas de cara a las elecciones de 1997 y del 2000.

Al parecer, la lucha por la sucesión presidencial comenzó muy temprano y hay quienes afirman que Zedillo podría llegar a tener muy poca intervención en la nominación de su relevo. Iniciado 1996, los precandidatos más mencionados eran el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; el ex secretario y embajador Alfredo del Mazo, gran perdedor en la sucesión de Miguel de la Madrid; el titular de Hacienda, Guillermo Ortiz y el secretario particular de Zedillo,

Liébano Sáenz.

Se supo que al estallar la crisis de mayo, en círculos cercanos al presidente se usó un término muy duro para definir la situación: derrocarlo. Sin embargo, en los medios políticos se habló de sustituir. Los motivos: la impericia de Zedillo en el manejo de los asuntos de gobierno, que exhibía una ausencia de dirección en la conducción del país: las quejas priístas sobre las presuntas alianzas de Zedillo con el PAN; la reaparición de Joseph-Marie Córdoba, quien desde su regreso a México estaría empujando la recomposición de grupos de poder en la coalición zedillista y el desbordamiento de problemas nacionales que dibujaban un escenario de cuasi ingobernabilidad.

De hecho, éstos eran los temas que se venían debatiendo desde comienzo del sexenio en círculos políticos, empresariales y militares, y que apuntaban a un relevo anticipado, pasivo u obligado del mandatario.

Todo comenzó el jueves 27 de octubre de 1994, cuando una noticia corrió por las redacciones de los periódicos y los círculos políticos: un hombre —luego identificado como Lino Salazar— se había introducido en la casa del presidente electo, en el sur de la ciudad de México, con intenciones homicidas. Los custodios de Zedillo negaron el hecho y él mismo, al ser consultado, dijo que el rumor se había convertido en un deporte nacional. Con el tiempo Zedillo sufriría en carne propia la conversión de los rumores en noticias de primera plana.

Sobre el tema de su renuncia, el primer aviso surgió cuando se conocieron los nombres de quienes integrarían su gabinete. Las presiones surgieron, evidentemente, de aquellos que no alcanzaron un puesto. Pero los rumores se acentuaron con el violento *crack* de diciembre. Se dijo que Zedillo no estaba a la altura de la crisis y no terminaba el primer mes de su gestión cuando un órgano de Televisa, el diario *Summa*, se refirió al tema en su nota titulada "¿Renunciará el doctor Zedillo?" (30/XII/94). El hecho enfureció al mandatario y el diario fue cerrado un mes después.

En el transcurso de 1995 fue el mismo Zedillo quien dio lugar a nuevos rumores al identificar a un pequeño grupo de "malosos" como los causantes de los problemas de México. Era el 23 de junio y el presidente realizaba una gira de trabajo por municipios del Estado de México. Allí declaró: "Después de las cosas malas que nos han venido ocurriendo, empezamos a suponer que en este México hay un pequeño grupo, muy pequeñito, de malosos... de malosos que quisieran que las cosas fueran como antaño... Yo les digo: ¡Están equivocados!"

Pero Zedillo nunca identificó a los *malosos*, dando pie a todo tipo de especulaciones. Y el 4 de julio siguiente volvió a confundir a la opinión pública, cuando dijo tener indicios de que detrás de los hechos criminales que se habían registrado en el país, existía "un propósito común de desestabilización social".

El 10 de agosto de 1995, durante una conferencia de prensa con el presidente, el reportero de *Ovaciones*. David Romero, le preguntó: "En los últimos días ha permeado la sociedad una inquietud por el hecho de que usted pudiera no llegar a terminar su periodo constitucional. Para algunos, pudiera sufrir un golpe de Estado. Para otros, pudiera, tal vez, renunciar. Quiero saber cuál es su opinión al respecto." Con visible enojo. Zedillo minimizó el asunto y lo atribuyó a "opiniones muy aisladas". Pero la pregunta del periodista y su respuesta fueron mutiladas de la versión estenográfica por la oficina presidencial, en tanto Romero fue despedido.

A juzgar por la reacción del secretario de la SDN, general Enrique Cervantes, pocos días después, en víspera del Primer Informe de Gobierno, el periodista censurado no estaba muy errado. Durante la junta general de comandantes de regiones, zonas y bases aéreas. Cervantes dijo en presencia de Zedillo: "La profesión militar perdería su razón de ser si no contara con un valor axial, el de la lealtad, la cual no admite matices ni gradualidades. Se es o no se es leal"

Fue un priísta distinguido, conocido por sus elocuentes gestos. Humberto Roque Villanueva, líder de la Cámara de Diputados, quien el 30 de septiembre señaló que en México no existían condiciones para un intento golpista por parte de las fuerzas armadas.

Un día después del informe presidencial, el general Cervantes volvió a hablar de lealtad: "El régimen de Ernesto Zedillo, como pocos, ha venido sufriendo diferentes embates." Se refirió

directamente a "los rumores aviesos y pueriles [que] no prosperarán, porque los mexicanos cuentan con la fortaleza intelectual y anímica para no caer en el juego". Según el columnista Ricardo Alemán, en el interior de las tuerzas armadas existía preocupación por la ola de rumores, que inclín e ron una supuesta "enfermedad" de Cervantes y su eventual relevo.

La institución castrense volvió a intervenir con su voz el 29 de octubre cuando, con motivo de la firma de la Alianza para la Recuperación Económica (ARE), el ejército dio un desusado "apoyo convencido y enérgico" al presidente y reiteró que las fuerzas armadas eran un "ejemplo de unidad y confianza". Por esos días circulaba un nuevo rumor: Zedillo había viajado en forma secreta a Monterrey donde habría escuchado propuestas para dejar el cargo.

Cinco días después, en la mañana del 3 de noviembre, la agencia estadounidense AP Dow Jones, de la empresa que edita *The Wall Street Journal* y que tiene como miembro de su consejo editorial al ex presidente Salinas, difundió un cable que citaba las palabras de Frank Fernández, consultor sobre mercados emergentes en Wall Street:

Los inversionistas parecen estar crecientemente preocupados por la habilidad del presidente Ernesto Zedillo para conducir el país a través de un mar de elevados retos políticos. Los militares mexicanos han adoptado una posición de más alto perfil en las semanas recientes, agregando más fuego a la especulación de que la posición de Zedillo, de 43 años, es aún débil once meses después de que asumió el gobierno. Uno de los rumores más descabellados que están circulando es que el ejército está negociando con Zedillo para que renuncie a favor de un gobierno interino militar hasta que convoque a nuevas elecciones.

Antes de mediodía la versión de que se habría producido un golpe de Estado en México fue reproducida por la agencia inglesa Reuter y leída en todos los noticieros radiales. Distintas versiones daban como un hecho que el ejército había tomado el control del país y que en Chiapas se libraban enfrentamientos armados con el EZLN. También se manejó que Guillermo Ortiz había dejado Hacienda y que el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, había sido víctima de un atentado. El pánico se apoderó de los mercados, con el consiguiente desplome del peso y la bolsa de valores.

Para apaciguar a los inversionistas la Casa Blanca emitió un comunicado desmintiendo los supuestos hechos. Simplemente, se había tratado de un "golpe especulativo".

El gobierno mexicano enfocó las sospechas en contra del villano favorito, Carlos Salinas, munido repentinamente de una supracapacidad para instrumentar ese tipo de operativos de desestabilización. Pero lo cierto es que nadie estaba seguro de si el rumor había sido *plantado* de manera deliberada o fue el resultado de la suma de mensajes confusos que emanaban de la propia oficina presidencial.

Dos días después el director de la CÍA, John Deutch, publicó un artículo en la página editorial de *The Washington Post*, donde aludió a las actividades clandestinas desarrolladas por el Directorio de Operaciones de dicha agencia, que incluyen la desestabilización de gobiernos mediante el rumor, la desinformación y la propaganda. La versión fue recogida por Fausto Fernández Ponte en *El Financiero* (8/XI/95). El columnista añadió que en relación con el "golpe de Estado" en México, fue la propia CÍA la que alertó a la Casa Blanca de que el rumor presentaba todos los indicios típicos de una operación de inteligencia orientada a desestabilizar al gobierno mexicano. Y se preguntó: "Empero, ¿sabrá la CÍA quién realizó esa operación desestabilizadora y con qué fines?"

En diciembre de 1995 la revista *Mira*, dirigida por el escritor y periodista Humberto Musacchio, publicó en la portada una foto del líder del Senado, el priísta Fernando Ortiz Arana, con el título: "¿Presidente sustituto?" Pero meses después, el 8 de marzo siguiente, el articulista de *La Jornada* Emilio Zebadúa, con fuentes de información en los altos niveles de gobierno, escribió: "Quedó muy atrás el día en que en Los Pinos se redactó un borrador que contemplaba la renuncia del Presidente..."

Hacia finales de marzo *The Wall Street Journal* —otra vez Dow Jones, ¿de nuevo Carlos Salinas?— publicó un artículo de Matt Moffett con un título sugerente: "Zedillo quiere ceder." Allí se hablaba de un presidencialismo devaluado y de una presidencia venida a menos, al tiempo que se presentaba al titular del Ejecutivo como cumpliendo el papel de simple "asesor administrativo de la nación". De derecha a izquierda, Moffett citaba a críticos del mandatario que lo definían como un "presidente enclenque" (Vicente Fox) y como "el presidente lite" (Adolfo Aguilar Zinser).

Pero sería hasta mayo de 1996 cuando el problema adquiriría dimensiones incontrolables. Todo inició cuando el escritor Jaime Labastida publicó en la primera plana de *Excélsior*, el día 11, un texto sobre el tema del relevo presidencial, "especie que corre de boca en boca y la difunde gente de los más altos niveles", dijo.

Atribuyó la extensión del "rumor insano y provocador" a empresarios, políticos, miembros de la Iglesia y amas de casa: "No se discute si sucederá sino cuándo, pues se da como un hecho. La pregunta no es si va a renunciar, sino quién habrá de suceder a Ernesto Zedillo".

Labastida censuró el rumor y lo calificó como un "crimen de lesa patria". Sin embargo, la reacción oficial fue de repudio; el gobierno canceló un programa que el escritor dirigía en el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Qué llevó a Labastida a denunciar el rumor? El ensayista no lo aclaró en una entrega posterior, donde se quejó amargamente de la censura del gobierno.

Lo curioso —si es que en política existe la casualidad— es que la información sobre el débil liderazgo de Zedillo venía recogida en un *background report* de inteligencia elaborado por la CÍA y fechado el 29 de abril de 1996. Clasificado como *top secret*, el informe "descriptivo" sobre México daba una visión pesimista del país, un balance contradictorio con el que públicamente manejaba el presidente Clinton, y donde se decía que Zedillo tenía escaso respaldo y era incapaz de controlar las guerras faccionales dentro del PRI.

El documento confidencial fue leído por el secretario de Estado, Warren Christopher y por la procuradora Janet Reno, previo a la XIII Reunión Binacional México-Estados Unidos y filtrado a la corresponsal de *El Financiero* en Washington, Dolia Estévez. Apareció publicado en México el 9 de mayo de 1996, dos días antes de que Jaime Labastida retomara el tema del rumor sobre la renuncia de Zedillo.

En ese contexto hubo otra dudosa coincidencia: el lanzamiento con bombos y platillos del libro de Andrés Oppenheimer, *México en la frontera del caos*. El autor, que acostumbra ufanarse en sus textos de su acceso a los círculos de inteligencia de Estados Unidos y al *lobby* cubano anticastrista de Florida, se refiere de manera explícita a la debilidad de Ernesto Zedillo y desde el título de la obra deja sembrada la idea del "caos". En 1984 el analista de la CIA, John Horton, renunció a la agencia cuando su jefe, William Casey, arquitecto de los esquemas ilegales, intentó forzarlo a modificar su evaluación para retratar a México al borde del caos económico y político y justificar, así, operaciones encubiertas en contra del gobierno de Miguel de la Madrid.

El 19 de mayo Humberto Musacchio publicó en el diario *Reforma* un artículo titulado "La renuncia". El matiz agregado y supuestamente "discutido ya no en voz baja sino en todos los tonos [en] desayunaderos políticos, escritorios de numerosos funcionarios, los ámbitos parlamentarios, círculos empresariales y hasta los salones diplomáticos", no giraba sobre la "factibilidad" del hecho (la renuncia de Zedillo) sino en torno a "la fecha más conveniente".

Musacchio dio razones: "Lo innegable es que una profunda insatisfacción recorre el país. No se ve mando firme, liderazgo claro y aptitud para despertar la esperanza y convertirla en fuerza constructiva." Para las fuerzas del sistema, adujo, "no conviene una renuncia antes del primero de diciembre, pues de ser así, el Congreso tendría que nombrar presidente interino que tendría la obligación de convocar a la elección de un presidente que deberá concluir el periodo respectivo".

Del 21 al 30 de mayo la prensa se volcó sobre el tema. Pero una gota derramó el vaso de la pasividad gubernamental: el día 30 el analista financiero estadounidense, Christopher Whalen, reputado en algunos espacios intelectuales como *mexicanólogo*, se hizo eco de los rumores sobre

la renuncia del presidente en un artículo publicado en *Journal of Commerce*:

La fábrica de rumores en México está trabajando a marchas forzadas a causa de la creencia, en ciertos círculos, de que el presidente Ernesto Zedillo se verá forzado a dejar el poder después del 1 de diciembre. Los rumores crecen junto con la percepción de que el gobierno de Zedillo está acosado por la inestabilidad política y de que muchas partes del país son ingobernables.

Continuó:

El reciente asesinato de varios agentes de seguridad de la guardia personal de Zedillo sugiere a ciertas personas que los días del gobierno están contados [...] Las figuras centrales sobre las que se rumora están detrás de los esfuerzos por desplazar gradualmente a Zedillo del poder son el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien está aliado políticamente con el mandarriero priísta Carlos Hank González, y Joseph Córdoba Montoya, el lugarteniente del ex presidente Carlos Salinas.

A través de su embajada en Washington, el gobierno de Zedillo envió una carta al diario donde acusó a Whalen de utilizar información sin sustento y fuentes cuestionables para presentar una imagen distorsionada de México. Según diría después Whalen, él ofreció una conjetura y el gobierno mexicano sobrereaccionó.

Sin embargo, para el periodista Fausto Fernández Ponte, especializado en la comunidad de inteligencia norteamericana, detrás de las afirmaciones de Whalen hubo algo más que simples conjeturas. Según él, Whalen se habría basado en especulaciones emanadas de ciertos sectores del PAN y del clero católico mexicano, de círculos diplomáticos extranjeros acreditados en México, incluida la embajada de Estados Unidos, y en ciertos "vestíbulos del poder real (económico-político) mexicano entreverado con intereses estadounidenses".

Veterano ex corresponsal en Washington, Fernández Ponte precisó que *Journal of Commerce* es un diario especializado de Nueva York, editorialmente independiente, pero que en ocasiones pudiera reflejar en sus páginas las opiniones o juicios *plantados* por una gama muy amplia de personeros de intereses creados, que van desde el gran comercio transnacional hasta ejecutivos de las industrias del petróleo y la petroquímica, "insatisfechos por la lentitud del gobierno mexicano para cumplir los compromisos adquiridos", es decir, la privatización de Pemex. Para él, Whalen expresa los intereses de esos círculos de poder estadounidense y mundial, y su escrito estuvo dirigido a "desestabilizar" y "presionar" al gobierno de Zedillo a fin de lograr "objetivos de influencia, control y dominio de la realidad política que benefician los intereses del gran comercio transnacional y del petróleo y la petroquímica".

Cabe recordar que el artículo de Whalen apareció antes del viaje de Zedillo a Canadá y cuando existían expectativas sobre la emisión de una declaración conjunta Zedillo-Chretién en contra de la ley Helms-Burton.

Por su parte, el diputado independiente Adolfo Aguilar Zinser —para quien un "paralizado" presidente Zedillo estaba flotando en el aire, sin amarres ni sustentos sólidos—, señaló en *Reforma* (31/V/96) la posibilidad de un cambio "hacia un nuevo arreglo autoritario, represivo y despótico; un golpe de mano orquestado básicamente por los mismos intereses que hoy dominan el escenario político nacional; un golpe para conservar, no para entregar el poder".

Según su visión, "quienes le transfirieron el mando y a quienes supuestamente representa o sirve [el presidente], están cada día más insatisfechos y frustrados con él y son precisamente los que conjuran o conjeturan sobre su eventual sustitución". Para el legislador, existían síntomas evidentes del final del régimen político que emergió de la revolución mexicana: "El desmoronamiento es inexorable y tarde o temprano tendrá un desenlace. Lo que la pasividad y exceso de confianza de Zedillo propician no es un desenlace ordenado, una transición pacífica a la democracia, sino una sórdida pugna por el poder de perspectiva autoritaria y golpista".

Desde otro ángulo, el presidente panista Felipe Calderón alertó que "la transición no puede

ser permanente. Se requieren definiciones rápidas, sólidas, definitivas". Y reconoció: "El futuro es incierto. No sé dónde vamos a terminar, si en un régimen endurecido o autoritario, o en el democrático que deseamos," La tendencia al autoritarismo de Zedillo fue compartida, parcialmente, por el ex candidato presidencial panista, Diego Fernández de Cevallos: "La política de este sexenio tiene como denominador común el zigzag. Hay datos que apuntan hacia el autoritarismo, y otros hacia la posibilidad de acuerdos, pero no se sabe."

A su vez, el presidente de la Coparmex, Carlos Abascal, dijo que "quienes hablan de la renuncia de Zedillo son grupos que pretenden, por la vía de la ruptura de la democracia, tomar el poder". Y adelantó: "No aceptaremos intentos golpistas ni rumores desestabilizadores."

Todavía el 2 de junio un nuevo actor sorprendería a la opinión pública, al denunciar la existencia de una conspiración para deponer al presidente de México mediante un golpe de Estado y advertir que "si para salvar a la República tenemos que apoyar la presidencia, no vamos a titubear en hacerlo, la ocupe quien la ocupe".

Quien dijo eso fue Andrés López Obrador, líder del PRD en Tabasco, donde contendió por el gobierno pero fue víctima del fraude y quien aspiraba a suceder a Porfirio Muñoz Ledo en la dirigencia de ese partido con el respaldo abierto de Cuauhtémoc Cárdenas. López Obrador, reputado como radical, extremista y desestabilizador por el gobierno, afirmó que "está en marcha un proyecto para deponer al presidente Zedillo, inspirado y promovido desde el extranjero y vinculado a grupos políticos y económicos que traicionan al régimen para apoderarse de las riquezas del país, especialmente los yacimientos petroleros".

El dirigente identificó como parte de la conspiración a Carlos Salinas, actuando desde el exterior, y a Carlos Hank González y al "sindicato de gobernadores" salinistas (Manuel Bartlett, Roberto Madrazo, Otto Granados, Rubén Figueroa y Patricio Chirinos, entre otros) actuando al interior del propio gobierno y del PRI.

La declaración produjo respaldos y divergencias en el PRD. Según Cárdenas, López Obrador planteó una salida constitucional a la crisis y no un respaldo a Zedillo o un cambio de personas. Pero lo más llamativo fue que nadie del gabinete presidencial ni de la primera línea del PRI salió a responder los ataques y rumores, cualquiera fuese su signo, en contra del presidente de la República.

La segunda fase de la crisis estuvo marcada por una contraofensiva oficial encabezada en solitario por Zedillo y destinada, al parecer, a desviar la atención del debate sobre su renuncia y reorientarla hacia presuntas maniobras del salinismo y sus nuevos aliados.

El 31 de mayo, durante una reunión con empresarios en Sonora, el presidente hizo a un lado las tarjetas preparadas para la ocasión e improvisó. Visiblemente molesto se lanzó contra los informadores y columnistas quienes, dijo, sistemáticamente ocultan las buenas noticias, destacan las malas y son incapaces de reconocer lo mucho que se ha logrado en los últimos tiempos gracias al esfuerzo de millones de mexicanos. Acto seguido, pronosticó la derrota de "los pesimistas, los derrotistas, los alarmistas, los sensacionalistas".

Según interpretó Lorenzo Meyer, "identificar a la sociedad y a la nación con el gobierno y el gobernante, es un recurso tan viejo como falso... e inútil" (*Reforma*, 6/VI/96). Meyer citó los resultados de dos encuestas realizadas un mes antes por el diario *Reforma* en todo el país y por la Universidad de Guadalajara, y en las que los consultados, en una escala que iba de 1 a 10, dieron en promedio a la actuación de Zedillo como líder del país un puntaje de sólo 5.5 en el primer caso y de 5.3 en el segundo.

El 3 de junio, durante una entrevista concedida al periodista Nicolás Kasanzew con motivo del establecimiento de un acuerdo entre el consorcio Televisa y la televisión argentina, Zedillo afirmó que no estaba limitando su actuación como presidente de la República, "lo que estoy haciendo es simplemente renunciar a facultades metaconstitucionales que son realmente reminiscencias, vestigios, de un antiguo autoritarismo". Y volvió a arremeter contra enemigos no identificados: "Evidentemente hay nostálgicos del autoritarismo" a quienes les inquieta y preocupa que el Ejecutivo se atenga "rigurosamente" a las facultades que le otorga la

Constitución. Pero, insistió, "afortunadamente representan una minoría en la sociedad mexicana".

Pero las críticas al presidente no cesaron y se sumaron nuevos nombres a la fila de "los derrotistas". Algunos, con cierto humor negro como Germán Dehesa, señalaron que de seguir como iba, el presidente corría el peligro de semejarse a la dinastía de los Austria —la de Juana la Loca y Felipe el Hermoso— pues en menos de dos años había pasado de ser *Zedillo el débil*, a *Zedillo el bienintencionado* y ahora *Zedillo el incomprendido*.

Otros no tan cáusticos pero igualmente corrosivos, como el politólogo Raymundo Riva Palacio, dijeron que existía la percepción, incluso entre miembros de su propio gabinete ampliado, de que Zedillo "no tiene la pasión para gobernar". Agregó que no veía una conspiración en "el desgano por el poder mismo [del presidente] con el cual se encontró no por vocación sino por accidente", sino la existencia entre las élites políticas y económicas de una percepción de que faltaba liderazgo y que Zedillo estaba dejando enormes vacíos de poder.

Según el periodista, con acceso a fuentes de información privilegiadas, miembros del gabinete lamentaban en privado que el presidente hubiese delegado la parte política de su mandato a Emilio Chuayffét "a quien tiene convertido, *de facto*, en el primer ministro de México. Al presidente, encuadran la queja, no le interesa la política; sólo atiende la economía". De allí que a su juicio "la preocupación no es si alguien lo empuja, sino si el presidente se cansa y dice: 'Yo prefiero hacer modelos econométricos desde un cubículo del Banco de México'".

Se preguntó si "objetivamente hablando, ¿es posible que el presidente Zedillo renuncie? No. El país no está en quiebra institucional, las élites mantienen la hegemonía, el apoyo externo [la Casa Blanca] y el de las armas [el ejército] están con el presidente. Subjetivamente hablando, es su carácter lo que genera preocupación de que renuncie". Riva Palacio dijo tener la impresión de que a Zedillo "empieza a gustarle el poder, pero todavía no sabe cómo ejercerlo." (*Proceso y Reforma*, 10/VI/96).

Faltaba la opinión de los militares o de alguno de sus sectores. Javier Ibarrola, vocero oficioso de las tres armas desde su columna semanal en *El Financiero*, titulada sugerentemente "Fuerzas Armadas", se preguntó: "¿Quién quiere que se vaya Zedillo? Por exclusión también vale preguntarse: ¿Quién no quiere que se vaya Zedillo?, y, por ende, ¿quién lo apoya?" A continuación, expuso: "El vocerío maniobra para que todo posible análisis de la situación tenga un solo punto convergente: las fuerzas armadas. Ese subdesarrollo político, en el que se mueven los nostálgicos del autoritarismo, ha aprovechado la confusión y la tardía respuesta gubernamental para imaginar *oficinazos*, *fujimorazos* o una forzada presentación de facturas por parte de quienes jamás han escatimado esfuerzo y sangre en el cumplimiento de su deber."

El 12 de junio, con Zedillo de viaje por el exterior, el semanario *Siempre!* llamó en su editorial al ejército a poner orden en caso de que "los distintos actores políticos insistan en crear condiciones de ingobernabilidad". Bajo el título "El ejército, única institución a salvo", la revista vinculada a los sectores de seguridad nacional elogió el papel de las fuerzas armadas y afirmó que "mientras en el gobierno y en los partidos políticos hay desorden, en el ejército hay disciplina y organización. Mientras en las autoridades hay inexperiencia, confusión, falta de mando e ineptitud, en las filas militares hay capacitación, claridad de metas, autoridad y eficacia".

Según el editorial, cuyo tono y contenido molestaron al jefe del Ejecutivo y a los funcionarios de Gobernación, "mientras el gobierno no gobierna [...] y no quiere darse cuenta de que su inestabilidad se encuentra en su negativa a ejercer el poder", el ejército permanece "en orden, unido y con una idea muy clara de lo que el país necesita".

Irónicamente un día antes, en Ottawa, durante su segunda jornada de visita oficial a Canadá, Zedillo eligió a la conductora del programa *The Lead*, Elizabeth Palmer, de la televisión de Toronto, para defenderse de los ataques en México.

Fue un mensaje bien pensado, que exhibió a un mandatario tranquilo, relajado, seguro de sus respuestas como si supiera lo que se le iba a preguntar.

De entrada, Zedillo atajó cualquier comentario sobre su presunta debilidad: "No estoy

preocupado por los rumores. Soy un presidente fuerte que llegó al poder con 17 millones de votos en las elecciones más limpias de la historia de México." Y explicó: "Los rumores, para que los haya, necesitan de dos cosas: una persona o un grupo de amigos que decidan empezar con el rumor, pero también medios de comunicación que repitan y amplifiquen los rumores."

Desde hacía algunos días la versión del "grupo de amigos" era tema de varios columnistas oficiosos como Leopoldo Mendivil, Juan Bustillos, Juan Ruiz Healy, Jorge Fernández Menéndez, José Luis Camacho —que escribe bajo el seudónimo de Alejo Garmendia— y Ángel Vivero, quienes formaron parte de una acción de contrarumor a pedido, de Chuayffet según la prensa independiente, tras su discurso del 7 de junio con motivo del día de la libertad de prensa cuando fustigó a los críticos del régimen.

Se dejó traslucir que había un complot que involucraba al ex presidente Salinas, con residencia temporal en Irlanda —se le llamó *la conjura de Dublín*—, a Manuel Camacho, peleado con Carlos pero ahora reconciliado; y a personajes como el escritor Jorge Castañeda y Aguilar Zinser y embajadores Agustín Gutiérrez Canet (Irlanda) y Andrés Rozental (Reino Unido), todos ellos supuestos promotores de la campaña de desestabilización contra el doctor Zedillo.

El gobierno filtró entonces a la prensa que Carlos Salinas y Jorge Castañeda se habían reunido el 6 de mayo anterior en Dublín. Las autoridades mexicanas supieron de inmediato del encuentro, pero éste se divulgó hasta el 7 de junio, cuando se lanzó la versión de una supuesta conspiración Salinas-Camacho en contra de Zedillo.

El 17 de junio *Proceso* publicó en la portada una sombría foto del ex presidente y un escueto titular: "El miedo a Salinas." Un cintillo decía: "Encuentro en Irlanda: Castañeda cuenta todo."

Según Castañeda, la que sostuvo con Salinas fue una reunión privada en la cual no se habló del tema de la renuncia de Zedillo ni, obviamente, de los rumores que aún no comenzaban a circular en México. Salinas tampoco habría expresado crítica alguna, reserva, duda o comentario positivo o negativo sobre la gestión de su sucesor y, según su percepción, el malestar y hasta exasperación del ex presidente con Manuel Camacho continuaba.

Además, y para evitar rumores y "teorías conspirativas", el politólogo Castañeda, hermano del embajador Andrés Rozental (ambos hijos del ex canciller Jorge Castañeda), aseguró que comentó la existencia de la reunión a una quincena de personas, entre ellas Carlos Fuentes, Julio Scherer, director de *Proceso*, a los embajadores Gutiérrez Canet y Rozental, a su amigo Bob Pastor, al profesor estadounidense John Womack, al periodista Alan Riding y a Manuel Camacho.

Para Castañeda, la campaña de ataques contra él y el "grupo de amigos" tuvo la marca y el estilo de su ex amigo Joseph-Marie Córdoba, el funcionario más "poderoso y omnipresente del sexenio anterior, quizá con excepción de Carlos Salinas, el más poderoso".

En lo inmediato el saldo visible de la batalla fue la remoción de Gutiérrez Canet, el eslabón más débil de "la conjura", a quien se retiró de Irlanda porque el canciller José Ángel Gurría "le perdió la confianza" —declaró el embajador— y entonces le ofreció Haití (¡sic!). Pero éste no aceptó el nuevo destino y exigió explicaciones, por lo que fue puesto a disponibilidad de manera intempestiva por órdenes de Gurría, en violación del reglamento interno del servicio exterior mexicano. Llevaba apenas siete meses en el cargo.

El rumor surgió y creció en medio de un caldo de cultivo propicio: la ausencia de liderazgo político proyectada por Zedillo y su incapacidad, real o aparente, para controlar a los distintos grupos de poder. Cualquier afirmación del mandatario era rebasada rápidamente por la realidad. Había caído en lo que el semiólogo mexicano Pablo Espinosa Vera definió como el "síndrome de Roger Rabitt", donde se pierde la distancia entre la realidad y la fantasía. Ese desfase entre las palabras y los hechos contribuyó a generar incredulidad, además del bajo perfil asumido por Zedillo como presidente ocupado en actividades meramente protocolarias, sin acercarse a la gente y no dejando que la gente se le acerque.

Para los sectores ilustrados, la ausencia de discurso de Zedillo no significa que éste no tenga un proyecto: lo tiene y es el del FMI. Llegó a Los Pinos para continuar el modelo económico de Salinas y Córdoba. Por eso ante los ojos de la población, es un mandatario sin sentido de nación.

Otros, como el ideólogo de los empresarios. Juan Sánchez Navarro, piensan que Zedillo ha estado muy por debajo de las exigencias del cambio político en México. Según el director del Grupo Modelo, dicha situación ocurre no porque Zedillo sea débil sino, fundamentalmente, porque tiene enfrente a poderosas fuerzas negativas y reaccionarias, "la vieja dictadura de la clase política que se expresa en un partido de características similares al corporativismo fascista".

Zedillo, recordó Sánchez Navarro, ha dicho: "Soy fuerte, voy a llegar al fondo". Pero la incógnita es si podrá hacerlo.

En medio de los rumores, el eje de la discusión ya no fue la capacidad o no de Zedillo de mantenerse en el gobierno, sino la conveniencia de los grupos de poder de tener un mandatario débil. ¿Quiénes no deseaban un Ernesto Zedillo fuerte? En primer lugar. Carlos Salinas de Gortari. Por estos días se comentó que en el lapso de 18 meses, el jefe del Ejecutivo no había podido sacudirse la sombra de su antecesor ni parecía tener los recursos para hacerlo, mientras Salinas conservaba intacta una estructura de poder a su servicio. Un Zedillo débil permitía un Salinas fuerte. Cuauhtémoc Cárdenas lo manifestó así: "Estamos en el octavo año del gobierno de Salinas".

El PRI también quería un Zedillo débil, pero que no renunciara. Los llamados *dinosaurios* del partido de Estado veían que el bastión estratégico del sistema político priísta, la presidencia de la República, estaba desmoronándose. El presidencialismo tradicional era la garantía de sobrevivencia del PRI. Pero la dirigencia del partido con 67 años en el trono asistía temerosa a su propia caída.

Estados Unidos también requería de un presidente débil, porque ello le brindaría mayores oportunidades a Washington de intervenir en la recomposición de las alianzas internas en México. Sus cartas de presión seguían siendo el manejo de la deuda externa mexicana y otros dos comodines invaluable: la omnipresente corrupción y la narcopolítica. Con un Zedillo débil, Estados Unidos podría operar la transición política 1997-2000 porque la Casa Blanca iba a ser, finalmente, el gran calificador de esos procesos electorales.

Asimismo, el PAN quería un Zedillo débil, ya que en esa debilidad sustentaba su fuerza como partido de oposición. Había iniciado su campaña de propaganda anunciando que sacaría a Zedillo de la presidencia, pero hasta el 2000 y por la civilizada vía de las urnas. Si Zedillo se iba antes, el país entraría en una zona de turbulencia incontrolable y el PAN perdería su oportunidad histórica de llegar al poder por el voto.

Al parecer, a todos y cada uno convenía debilitar a Zedillo pero sin llegar a "renunciarlo". Pero no se siguió discutiendo el asunto, porque la atención de la sociedad fue abruptamente desviada hacia un fenómeno casi tan inverosímil como los sucios entretelones de la política: la aparición del mítico Chupacabras, una mezcla de criatura espacial y *vampyrus spectrum* que sangraba a sus víctimas, sembrando el terror desde Chihuahua hasta el Distrito Federal y que terminó convertido en los semáforos capitalinos en una burda máscara de orejas salientes y calvicie prematura con la misma sonrisa burlona que Carlos Salinas.

CAPITULO 10

Los nexos Cervantes-Perry

Por la vía de la mayoría automática y con la "zanahoria" propagandística de los llamados candados legales, con lo que pretendían simular que estaban cumpliendo con su papel de tribunos y no con el triste papel de "levantamanos" del presidente, los legisladores del PRI se aprestaban a sacar al vapor, a fines de abril de 1995, la iniciativa presidencial que privatizaría la distribución de gas y gasoductos.

A más de un mexicano honesto pudo sorprenderle que las propuestas de modificaciones de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional no fueran llevadas antes por el poder Ejecutivo a los foros de consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo, ya que era un problema estratégico que ponía en juego la soberanía. Pero también se sabía que los "foros ciudadanos" organizados desde el poder son sólo un juego de espejos, amén de que el equipo económico estaba conformado por los mismos hombres del salinismo. Pero había coherencia: aparentar la consulta democrática mientras se gobernaba por decreto a espaldas de los intereses de la nación.

La privatización en la distribución del gas y de la petroquímica básica —que no secundaria— fue concebida como el caballo de Troya para la posterior enajenación del petróleo, por más que lo negara el secretario de Energía, Ignacio Pichardo y el director de Pemex, Adrián Lajous; más aún, luego del antecedente ominoso de que las reservas de crudo del subsuelo se han convertido en el aval-factura del macrocrédito de Estados Unidos y el FMI para el rescate de las finanzas privadas —que no del aparato productivo del país.

En rigor, y por más que ahora se le criticara, el autor intelectual de las reformas al artículo 27 enviadas al Congreso por el presidente Zedillo había sido Salinas, por lo que se podía colegir que la estrategia para la desnacionalización de Pemex respondía al continuismo. La contrarreforma petrolera obedecía al interés de las empresas transnacionales y a los intereses de seguridad nacional de Washington, y había sido instrumentada en 1982, cuando México firmó una carta de intención con el FMI. Fue entonces que el Banco Mundial comenzó a fraguar la privatización de Pemex, obligando al gobierno de De la Madrid a "reestructurar" el sector energético por decreto, por la vía de reclasificar los petroquímicos básicos como *secundarios* y abriéndolos a la participación del sector privado. Pero particularmente después de la guerra del Golfo Pérsico, el petróleo y las operaciones nacionales e internacionales de Pemex formaron parte de los compromisos secretos pactados entre la Casa Blanca y Los Pinos, como lo documentó el experto John Saxe-Fernández.

Saxe-Fernández denunció que desde 1992 existía una "quinta columna" dentro de Pemex, que venía actuando vigorosamente en favor de la desnacionalización *de facto* del monopolio estatal. Como confirmó oportunamente Timothy O'Leary, vocero de la representación comercial de Estados Unidos, "sin modificar la Constitución mexicana el petróleo entró en las negociaciones del NAFTA", pero para disminuir los costos políticos internos la propaganda oficial siguió asegurando que se mantendría el "control nominal" sobre el hidrocarburo.

La vocación antinacional e inconstitucional de los "topos" privatizadores seguía las instrucciones del Banco Mundial y de FMI, aunque el discurso del poder pretendiera ocultarlo. El 4 de enero de 1995 Tod Roberson dio a conocer en *The Washington Post* que el ajuste diseñado por Zedillo para lograr el aval de ambas instituciones multilaterales incluía "la privatización de empresas estatales cruciales, incluida una subdivisión de Pemex".

La extranjerización de la industria petroquímica de la mano de la privatización del gas y los gasoductos requería que los legisladores que ya habían autorizado el aumento del IVA eliminaran ahora la concepción revolucionaria del artículo 27 constitucional que funcionó como contrapeso

de la noción fundamentalista del Destino Manifiesto. Salinas enterró el nacionalismo como ideología; ahora, con la entrega del petróleo, se pretendía acabar con parte de la identidad nacional.

La realidad desmentía cada día el lenguaje virtual de los hombres del sistema. Sólo por casualidad, el discurso del poder coincidía con la verdad. Abundan los ejemplos. El 23 de abril de 1995 el secretario Pichardo aseveró a la prensa que la privatización del gas y de los gasoductos no se traduciría en la apertura de la petroquímica básica "por la puerta trasera" ni pondría en riesgo la soberanía nacional. No obstante, con la privatización de las plantas petroquímicas y los gasoductos de Pemex, literalmente toda la infraestructura de México en la materia quedaría en manos de inversionistas extranjeros, como alertó el experto de la Canacina, Gilberto Ortiz Muñiz. La extranjerización del sector gasero nacional llevaría, implícitamente, a que las decisiones en el sector las tomaran empresas como la poderosa Alberta Northeast Gas Limited, General Electric, Valero Energy, Betchel, el Paso Natural Gas y las canadienses Nova Corporation y Novada, en lugar de Pemex.

Y con la privatización del gas, en la puerta trasera estarían haciendo fila la Dupont Chemical, Exxon, Texaco, Union Carbide, ARCO Chemical International, Dow Chemical y Phillips Petroleum, entre otras corporaciones, que aspiraban llegar a México por el botín mayor: el petróleo. Sólo que para que ello ocurriera, se requería seguir endosando modificaciones a la ley reglamentaria del artículo 27. De nuevo Pichardo aseguró que no se daría ningún paso hacia la reprivatización de la industria petrolera.

Pero los grupos empresariales y de seguridad nacional de Estados Unidos y sus socios locales no quitaban el dedo del renglón. Por esto era posible pensar que así como antes la conservadora Heritage Foundation abogó y logró la reorganización de Pemex en varias divisiones —pese a la negativa verbal de los funcionarios de turno—, al tiempo que se adelantaban artimañas publicitario-administrativas y se llegó a la reclasificación de la petroquímica básica en *secundaria* mediante engendros inconstitucionales, ahora podría ser cuestión de tiempo la privatización *de facto* del monopolio estatal.

El discurso oficial le mintió a la sociedad durante las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio. El petróleo se negoció secretamente con Estados Unidos, aunque por razones de "seguridad nacional", vinculadas con las elecciones de agosto de 1991, no se incluyera en los documentos. En un estudio elaborado para el Congreso estadounidense por la Comisión de Comercio Internacional (CCI), el poderoso *lobby* bipartidista adelantó que "las autoridades mexicanas estudian mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución y conservando para Pemex el control *nominal* sobre el hidrocarburo, permitan la participación extranjera en ese sector, por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la exploración y subcontratación de diferentes servicios" (véase *La integración comercial de México a EU y Canadá: pregunta alter o destino*, de John Saxe-Fernández, 1992).

Ya entonces los legisladores del CCI revelaron que las trabas constitucionales no eran un obstáculo para la extranjerización de Pemex, pues según el informe, "el actual régimen mexicano ha dado muestras de su desapego al ordenamiento constitucional por su proclividad a aplicar mecanismos que le den la vuelta a la Carta Magna". Las presiones de Washington durante el salinismo se dieron en el marco del "ahora o nunca", puesto que, como dijo Michael Wilson de la Heritage, "[Salinas] sabe que la seguridad mexicana es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos".

Salinas preparó el terreno, pero no pudo culminar el proyecto privatizador. No obstante, delegó en Herminio Blanco, en Pichardo Pagaza, en el "ángel de la dependencia", Gurría y en Guillermo Ortiz el encargo de terminar con la faena. El equipo idóneo para rematar a Pemex y... al país.

El dogal de la deuda externa había llevado a México a una situación de absoluta subordinación política y económica respecto de Estados Unidos. Pero aún faltaba el tercer vínculo...

La reunión de ministros de Defensa de las Américas, convocada por el Pentágono los días 25 y 26 de julio de 1995 en Williamsburg, Virginia, siguió al pie de la letra la *Doctrina Cheney*,

que busca la militarización de Latinoamérica bajo el ala de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El cónclave militar hemisférico, inscrito por sus patrocinadores en el marco de la Cumbre de las Américas realizada en Miami en diciembre de 1994, aparecía en la propuesta de programa como una reunión de carácter técnico, donde se evaluarían las distintas experiencias registradas en materia de seguridad en la región, al tiempo que se estudiaría el papel de las fuerzas armadas continentales "en las democracias del siglo XXI".

Sin embargo, un análisis detenido del borrador al que el autor tuvo acceso antes de la cumbre dejaba al descubierto las claves cifradas sobre la verdadera razón de Williamsburg: el jefe del Pentágono, William Perry, debía obtener de los ejércitos del área su aval para un nuevo documento sobre planificación estratégica de defensa, bajo control estadounidense.

El día de la inauguración los militares escucharon diversas exposiciones sobre tres temas básicos. El primer tema incluyó un intercambio de información de defensa con base en *libros blancos* y documentos de planificación estratégica del Pentágono, y se pasó revista a los registros de la ONU y de la OEA sobre armas convencionales en la región.

El segundo tema se centró en la cooperación de defensa, con varios subtemas que incluyeron el intercambio de experiencias y las lecciones aprendidas de los esfuerzos de "manutención de la paz", eufemismo utilizado por el Consejo de Seguridad de la ONU para denominar a las fuerzas militares encargadas de "fabricar" la paz en las zonas calientes del planeta (Bosnia, Somalia, Ruanda, etcétera). Ese bloque abarcó, además, espectros como las acciones de desminado y labores de búsqueda, rescate y asistencia a desastres. Y un subpunto que figuró bajo la denominación *counterdrugs* que, a la usanza de la contrainsurgencia, denotaba una política más activa en el combate a las drogas.

El tercer tema abordado fue el más sugerente: bajo el título de "Las fuerzas armadas en las democracias del siglo XXI", incluyó la educación civil y militar y el entrenamiento en democracia, abarcando cursos sobre derechos humanos; la contribución de las fuerzas armadas al desarrollo nacional y el diseño de los ejércitos del futuro (reclutamiento, estructura, etcétera).

En realidad, los objetivos del Pentágono —"y lo que va a pasar en Williamsburg", según nos adelantó entonces una fuente diplomática mexicana—, fueron: formar un mecanismo de seguimiento de ese tipo de encuentros castrenses; sacar un "acuerdo" para darle una participación más activa a la Junta Interamericana de Defensa (JID), porque los mandos estadounidenses "consideran que es un desperdicio que esté sin hacer nada" (la idea sería involucrar a la JID en tareas de desminado y otras, pero con mayor protagonismo) y "mandatar" a la OEA para que asuma mayores papeles intervencionistas en la subregión.

Asimismo, se buscó definir mecanismos de persecución del narcotráfico con fuerzas navales y aéreas de interdicción; una especie de "regionalización" del combate al narco por áreas, a lo que México se había opuesto en la OEA de forma sistemática. Previo a la cita, Washington consiguió que algunos países centroamericanos le "pidieran" que echara a funcionar el plan, y a comienzos de julio de 1995 elementos de élite de los ejércitos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice y Guatemala, bajo supervisión del Pentágono, iniciaron en el Golfo de Fonseca entrenamientos tácticos conjuntos contra el narcotráfico y el terrorismo, en el marco de la "Operación Fuerzas Unidas 95". Los ejercicios bélicos se inscribieron dentro de la propuesta de Washington de consolidar a la JID y recogía la vieja idea de formar una fuerza militar intervencionista regional.

Sobre otro de los objetivos de la agenda, la "democratización" de los ejércitos americanos, la misma fuente ironizó con un "se trata de educarlos para que sepan un poquito de todo, desde derechos humanos hasta cómo debe funcionar la democracia".

Así las cosas, la cumbre de Williamsburg presagiaba un regreso a la Doctrina Monroe: el mismo proyecto desde 1823.

La reunión organizada por el Departamento de Defensa estadounidense formó parte de una estrategia global que incluye la militarización de la OEA junto con el impulso de la democracia y el libre comercio, a la usanza de Washington. Se trata de una réplica actualizada de la *Doctrina Cheney*.

Dicha estrategia fue sintetizada en un documento del Pentágono concebido en los días de Richard Cheney al frente del Departamento de Defensa por su segundo, Paul Wolfowitz y difundida por el *Time* en marzo de 1992.

En los hechos, el plan se ha venido aplicando en la región. En el marco de esa estrategia y en coordinación con la DEA y la CÍA, el Pentágono ha trasladado a los países andinos sofisticados sistemas de detección (radares, satélites, globos aerostáticos) y aviones Awacs, E-2 y P-33. Otra red de radares y aparatos sofisticados monitorea permanentemente el Caribe, Centroamérica y México.

Todos esos elementos forman parte de un mismo proyecto estratégico que pretende "modernizar" el control del Pentágono sobre las fuerzas armadas latinoamericanas. En diciembre de 1992 el coronel Adolfo Touchard, alto funcionario del Ministerio de Defensa boliviano, denunció que la denominada Doctrina Bush —como también se le conoce— busca ir eliminando gradualmente a las fuerzas militares de la región para sustituirlas por fuerzas especializadas, de menor envergadura y bajo control norteamericano al estilo de Panamá.

Con la excusa de la guerra a las drogas, Estados Unidos ha modificado sus nexos con los militares latinoamericanos. El Pentágono continuó su proyecto bipartidista de seguridad hemisférica con Clinton en la Casa Blanca. La razón del continuismo es obvia: el Departamento de Defensa ha invertido demasiado tiempo y recursos en la consecución de ese plan, además de que logró involucrar a la DEA y a la CÍA en el esquema.

Bajo el mandato de Clinton, por citar un ejemplo, la crisis haitiana fue demostrativa de la nueva doctrina del Pentágono de intervenir con fuerzas de despliegue rápido en los conflictos internos de la región, lo que generó contradicciones con los mandos de algunos ejércitos latinoamericanos.

Por otro parte, y desde 1987, Estados Unidos dio un nuevo impulso a su vieja idea de convertir a la OEA en un brazo regional de la ONU y a la JID en los Cascos Azules de América Latina. Se trata, en esencia, de la sustitución de la doctrina de la seguridad nacional —tan cara a los mandos castrenses latinoamericanos— por otra de la *estabilidad nacional*, que daría a los ejércitos funciones de fuerzas de disuasión internas (policiales) ante las previsibles protestas populares originadas por la aplicación de las políticas neoliberales.

Con base en la llamada *soberanía limitada*, el plan del Departamento de la Defensa estadounidense encontró resistencia durante 1993 en algunos ejércitos latinoamericanos, que se opusieron a que los *ajustes fiscales* llegaran al interior de los cuarteles por la vía de un redimensionamiento de las fuerzas armadas. Pero dos años después Washington parecía ir ganando esa batalla. Así como los ejércitos de Brasil, Colombia y México terminaron sumándose, a regañadientes, a la guerra contra el narcotráfico, todo parecía indicar que también la reconversión y compactación de las fuerzas armadas del área podría ser sólo una cuestión de tiempo.

El peligro de un *intervencionismo bueno* apoyado en fuerzas de despliegue rápido y bajo el manto de la *soberanía limitada*, pudo ser desactivado en Nicaragua, en junio de 1993, durante la XXIII Asamblea General de la OEA. En su lugar, la llamada Declaración de Managua incorporó una visión integral de la realidad del continente y recomendó a los Estados miembros que dieran prioridad en sus programas de gobierno a los proyectos destinados a satisfacer las necesidades vitales de sus pueblos. Con hambre y marginación social, fue el mensaje, la democracia es inviable.

La idea de convertir a la OEA en una instancia supranacional calificadora y con derecho a intervenir militarmente en aquellos países que, a juicio de Estados Unidos, no apliquen *la democracia* como régimen de gobierno, viene siendo promovida por Washington desde la Asamblea General de Santiago de Chile, en junio de 1991, cuando se decidió implantar el nuevo concepto de "democracia preventiva" o "reactiva".

Desde entonces el Pentágono dio pasos dirigidos a modificar la realidad en algunos puntos conflictivos del hemisferio para, seguidamente y ya con el control absoluto del Consejo de Seguridad de la ONU, introducir sus postulados intervencionistas en la Carta de la OEA. El objetivo: militarizar el organismo y convertirlo en un gendarme continental, encargado de

decidir quién es democrático y quién no, para habilitar la opción de un acto punitivo de carácter colectivo.

Ya desde la reunión de Santiago la diplomacia argentina había venido operando como el principal peón de Washington para convertir a la JID en un organismo militar que jurídicamente sólo tiene facultades consultivas en el brazo armado de la OEA.

El tema de la instauración de una fuerza militar interamericana "para defender la democracia" figura desde entonces en el orden del día de las reformas a la Carta de la OEA. En las reuniones del organismo en Nassau y Washington, en mayo y diciembre de 1992, respectivamente, Estados Unidos y sus aliados siguieron avanzando en sus presiones contra aquellos países que se oponen a que el organismo interamericano opere como juez de la democracia en América, con patente de "corso" para intervenir militarmente allí donde ellos entiendan que dicho sistema no funciona y, de manera adicional, con capacidad de imponer sanciones y exclusiones.

En Washington, precisamente, la OEA aprobó por 30 votos a favor, sólo el de México en contra y con las abstenciones de El Salvador y Jamaica, la suspensión de cualquier país miembro en el que haya sido derrocado un gobierno electo democráticamente. En esa oportunidad, la delegación mexicana rompió el consenso y pidió una votación nominal por considerar que las reformas a la Carta de la OEA daban al organismo atribuciones punitivas, excluyentes y supranacionales que atentaban contra los principios soberanos de las naciones.

Durante la XXIII Asamblea General de la OEA en junio de 1993, y con el marco regional de un estancamiento en las negociaciones multilaterales en torno al caso haitiano, la situación en Venezuela y los tres golpes fallidos en Guatemala, el tema de la fuerza de intervención interamericana volvió al primer plano.

Con la excusa del caso haitiano y bajo el esquema de la *democracia preventiva* —cuyo enunciado democrático no alcanza para ocultar su vocación hegemónica—, se intentaría legalizar la creación de una fuerza militar multinacional para la "reconstrucción", según la iniciativa del Pentágono. La propuesta se inscribía dentro de las tendencias que impulsan nuevas doctrinas sobre las funciones de los ejércitos del continente y sobre las concepciones que pretenden una nueva dimensión del principio de la soberanía.

Sin embargo, en el último momento y por alguna razón desconocida, el equipo encabezado por el subsecretario de Estado, Clifton Wharton, replegó posiciones y dejó sin piso la iniciativa. En círculos diplomáticos se especuló que el asunto de Guatemala y la situación de los Balcanes vino a complicar el escenario de la política exterior estadounidense.

El entonces secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, firme impulsor de la noción de *democracia preventiva*, dio un leve giro a su posición al promover la tarea *urgente* de vincular el desarrollo económico y la democracia en América Latina con justicia social. Wharton dijo que la administración Clinton tenía una "nueva visión" hacia América Latina. A su juicio, "ahora sí" la democracia "echará raíces y florecerá, ya no como ideología de la guerra fría, sino como garantía de libertad y prosperidad". La base para este milagro será, dijo, el establecimiento de una comunidad hemisférica de socios económicos con base en la expansión del comercio, el estímulo a la inversión y la revitalización de la economía de Estados Unidos. Afirmó el enviado de la Casa Blanca: "Los días de los paternalismos se han terminado, así como los días de los lemas cansinos que a veces servían de sustituto a la acción eficaz; nos necesitamos los unos a los otros para crecer y prosperar".

La cumbre de Miami, a fines de 1994, sería el escenario para reactivar el concepto de *democracia con seguridad*.

Según se le adelantó oportunamente por las vías diplomática y militar a William Perry, anfitrión del cónclave castrense, México decidió participar en Williamsburg como observador. La delegación oficial mexicana estuvo encabezada por el embajador en Washington, Jesús Silva Herzog, quien fue asistido por el agregado militar, general Rafael García Aguilar. La representación de Silva Herzog en el evento de todos los ejércitos del área indicó,

de forma clara, que el gobierno de México había optado por un perfil bajo.

Durante un viaje a Washington entre el 19 y el 22 de junio de 1995, donde se reunió con Perry y con otros altos jefes militares, el secretario mexicano de la SDN, general Enrique Cervantes Aguirre, fue virtualmente presionado por sus pares norteamericanos para que México se involucrara de manera directa en el proyecto de seguridad hemisférica que sería lanzado en Williamsburg.

Según confió un diplomático mexicano cercano a los protagonistas, el encuentro de Cervantes con Perry fue complejo. El titular del Pentágono le insistió en las bondades que para México tendría aceptar una mayor cooperación militar estadounidense, bajo el argumento de que sería igual "a la cooperación bilateral que existe en otros órdenes de los nexos entre los dos países". La fuente señaló que Cervantes "se manejó con el capote, aquí y allá" y dejó claro que las fuerzas armadas mexicanas "no le entrarán" al proyecto del Pentágono.

Formalmente, Cervantes fue a Washington invitado por el general Gordon Sullivan a su ceremonia de despedida. Pero también asistió a la toma de posesión del general Dennis Joe Reimer como nuevo jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas estadounidenses y se entrevistó con Perry y con el general John Shalikashvili, titular de la junta de jefes de Estado Mayor.

El militar mexicano es un amplio conocedor de las políticas estadounidenses desde 1968, cuando fue como asesor y delegado a la JID en Washington y agregado del ejército y de la fuerza aérea en la embajada mexicana, entre 1986 y 1988. Durante ese lapso conoció a varios generales que ahora integraban los estados mayores conjuntos de esas dos armas del país del norte, así como de las áreas de inteligencia y contrainteligencia según consignaron, entre otros, Fausto Fernández Ponte (*El Financiero*, 23/VI/95) y Gerardo Román (*Reforma*, mayo de 1996).

Según el corresponsal Jim Cason, el encuentro entre Cervantes y Shalikashvili fue cordial; ambos se conocen desde mediados de los ochenta, y coincidieron en la Comisión Conjunta de Defensa de Estados Unidos-México y en la JID. Un vocero del jefe castrense norteamericano indicó que los dos discutieron contactos militares entre ambos países y el Programa de Educación Militar y Capacitación (IMET) para México, de un millón de dólares anuales (*La Jornada*, 23/VI/95).

Analistas militares en Washington consideraron por esos días que la resistencia de los militares mexicanos a involucrarse directamente en el plan de Williamsburg se debía a su tradicional renuencia a establecer vínculos cercanos con las autoridades civiles. Precisamente, uno de los puntos de la agenda fue el control civil de las fuerzas armadas, algo que podía provocar cierta preocupación entre los milites mexicanos.

No obstante, el columnista militar Javier Ibarrola sugirió, quizá de manera premonitrice, que la "sana distancia" que había prevalecido en las relaciones entre los ejércitos de Estados Unidos y México "comenzará a acortarse" luego de la visita de Cervantes a Washington (*El Financiero*, 21/VI/95). Ibarrola ubicó el viaje en el entorno de la actualización de la estrategia del ejército, la fuerza aérea y la marina de guerra incluida por el presidente Zedillo en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese plan se ordena la modernización y consolidación de las capacidades militares, operativas, de inteligencia y técnicas, y de respuesta inmediata a emergencias y desastres de las fuerzas armadas.

Sea como fuere, la visita del general Cervantes a Washington, con el antecedente de las realizadas por los generales Juan Arévalo Gardoqui, en 1987 y Antonio Riviello Bazán, en 1990, fue algo más que simbólica y dio lugar a muchas especulaciones.

¿Cuáles fueron los móviles? ¿A qué fue Cervantes realmente? El marco de la visita estuvo signado por el paulatino proceso de descomposición del sistema presidencialista mexicano y una ingobernabilidad creciente en el país. En ese contexto, ¿fue una mera visita de cortesía o, pese al bajo perfil en Williamsburg, ésta marcó el comienzo de un nuevo papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la unidad territorial mexicana, según los patrones del Pentágono? ¿Habría que buscar allí el origen de una nueva función de policía interna de los militares mexicanos? ¿Habló Cervantes con Perry y su amigo Shalikashvili sobre la insurgencia en

Chiapas y de la fuerza interamericana *de paz* impulsada por el Pentágono para hacer frente a un eventual rebrote guerrillero en las Américas? ¿Dejaría México a un lado los principios tradicionales de política exterior, para aceptar jugar un rol clave en la nueva diplomacia preventiva de Washington?

En agosto de 1995 el periodista Fausto Fernández Ponte, atento seguidor del tema militar entre México y Estados Unidos, registró los señalamientos de un general estadounidense miembro de la JID que en tono molesto hizo saber que en el Pentágono existía "irritación" ante la "incongruencia" del presidente Zedillo quien, habiendo cedido "virtualmente en todo" ante Estados Unidos en las órbitas económica y financiera, "no cedía" en materia de cooperación militar bilateral, multilateral e interamericana (Fernández Ponte. "Asimetrías", 14/VIII/95).

Cuando el 23 de octubre siguiente el secretario de Defensa William Perry visitó México, el coronel retirado Jack Cope, catedrático de la Universidad de la Defensa Nacional del Pentágono, afirmó que ese viaje significaba un hito en la estrategia norteamericana para convencer a las fuerzas armadas mexicanas de que, en la era posterior al NAFTA, Estados Unidos había dejado de ser un "adversario" intervencionista para constituirse en el "aliado" digno de confianza y con intereses de seguridad nacional compartidos (Dolía Estévez, *El Financiero*, 24/X/95).

Perry, quien llegó a México acompañado del general Barry McCaffrey, jefe del Comando Sur, fue el primer secretario de Defensa estadounidense en pisar suelo mexicano desde 1948, cuando se instauró ese cargo. Extraoficialmente se dijo que los temas centrales de su agenda fueron estrechar los mecanismos para una lucha conjunta contra las drogas y un mayor intercambio tanto de equipo como armamento. Por su parte, la cancillería mexicana adujo como motivo oficial de la visita que Perry venía a "corresponder" la que anteriormente le había hecho el general Cervantes.

Sin embargo, resultó obvio que Perry, de formación empresarial académica y matemático de profesión, ex asesor del general Collin Power, su antecesor en el cargo, en las áreas de tecnología, comunicaciones, inteligencia y energía atómica, con un abultado curriculum en el área de seguridad en la Universidad de Stanford y a la postre uno de los hombres más ocupados del mundo, no pudo darse el lujo de venir dos días a México a cumplir con un mero requisito "social".

Fue el propio Perry el encargado de desentrañar el motivo de su viaje. Durante una impresionante ceremonia en el campo militar 1, ante la plana mayor de las fuerzas armadas mexicanas y frente a casi 10 mil soldados y cadetes, el secretario de Defensa estadounidense dijo que la seguridad nacional entre su país y México "es el tercer vínculo" en que ambas naciones cimentarán su estrecha relación, pues "ya se tienen dos fuertes bases en nuestros lazos políticos y económicos".

Perry delineó cinco áreas de cooperación entre los dos ejércitos, que incluían la modernización de equipo militar y para la lucha antinarcóticos, dispositivos para vigilar los espacios aéreo y naval, además de intercambios en instrucción de cuadros y programas de auxilio a la población civil.

Sin ambages, Perry hizo evidente que el de la seguridad —lo que él definió como el "tercer vínculo"— fue el *leit motiv* de su visita como representante del llamado complejo industrial-militar de Estados Unidos. Su misión fue insistir en el involucramiento de las fuerzas armadas mexicanas, y en particular del ejército, en el esquema de seguridad interamericana diseñado por el Pentágono como caballo de Troya de los intereses del expansionismo estadounidense en la era de la globalización imperial.

Hasta entonces Estados Unidos no tenía acceso a las estructuras de decisión táctica-operativa y estratégica de las fuerzas armadas mexicanas, la única institución de América Latina, junto con la de Cuba, que no ha sido penetrada directamente por el Pentágono. Con un dominio enorme sobre la toma de decisiones estratégicas de política financiera, económica y diplomática de México, a Estados Unidos le faltaba cerrar el círculo en el área militar. Y sobre eso venía trabajando Perry: cerrar el círculo de la dependencia. En ese sentido fue, la suya, una misión

de ablandamiento, dadas las tradicionales resistencias y reticencias dentro del ejército mexicano a una subordinación en materia de seguridad.

Tras la visita de Perry se habló por primera vez de la posibilidad de maniobras militares conjuntas y de la expansión del Programa Internacional de Educación y Capacitación Militar de Estados Unidos (IMET) para México, con un costo de 500 mil a un millón de dólares anuales.

El tema formó parte de un informe del Pentágono presentado al Capitolio, donde el gobierno de Clinton sugería a los congresistas que podía fortalecer los vínculos con los militares mexicanos. Ya entonces se dijo que entre los nuevos aspectos que se introdujeron en el programa del IMET a partir de 1994 estaba un enfoque sobre relaciones públicas. "Un equipo de militares mexicanos participó en una gira por el Pentágono y varias bases militares estadounidenses para ver cómo funcionan los mecanismos de propaganda. Este año (1995), un oficial mexicano participó en un curso de nueve semanas sobre relaciones públicas en la Escuela de Relaciones Públicas del Ejército en Indianápolis, Indiana" (Jim Cason y David Brooks. *La Jornada*. 22/VII/95).

En ese contexto, el general-diputado Luis Garfias Magaña y el embajador mexicano Jorge Castro Valle admitieron públicamente que durante los gobiernos de De la Madrid y Salinas, 129 elementos de las fuerzas armadas mexicanas recibieron capacitación en tácticas de inteligencia militar y lucha antinarcóticos en escuelas especializadas del Pentágono (*La Jornada y Reforma*, 10/XII/95). El dato parece una caricatura de la cifra utilizada por la revista *Proceso* (4/VIII/96) según la cual, de 1984 a la fecha "poco menos de un millar" de elementos mexicanos, incluida tropa de élite, recibieron cursos bajo el programa del IMET en academias como West Point, en Estados Unidos y en bases como Albrook, Rodman y Fort Gulick, en el Comando Sur del canal de Panamá.

Según un despacho de Cason y Brooks fechado en Washington (*La Jornada*, 22/V/96), tres años después de la "mexicanización" de la guerra contra las drogas, el Departamento de Estado norteamericano se proponía otorgar cinco millones de dólares a un programa de capacitación y apoyo a militares mexicanos previsto para 1997.

En general, los entrenamientos y el voluminoso suministro de armamento sofisticado fueron encubiertos bajo la cobertura de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, los cursos y la entrada de armas al país se incrementaron a partir del alzamiento de Chiapas. Sólo durante 1994 la SDN adquirió, de acuerdo con su propia información, 70 tanques AMX-13 equipados con cañones de 75 y 90 mm especiales para combates de contrainsurgencia: cuatro helicópteros Sikorsky y 12 McDonnell Douglas: 20 equipos para el artillado de helicópteros tipo Bell 212 y MD 530F; 192 ametralladoras tipo CAL de .50 mm; 10 mil proyectiles luminosos: 500 lanzadores Blindice y 200 pistolas CAL de 26.5 mm para señales: 2 232 cuchillos Aitor para sobrevivencia: 2 232 machetes para operaciones en la selva y 14 mil bolsas de dormir, entre otros implementos.

Entre las compras que también tuvieron como destino la zona de conflicto en Los Altos y la selva Lacandona, destaca la adquisición de motoconformadoras, excavadoras hidráulicas, tractores buldozer, cargadores frontales y retrocargadores (*Proceso*, 4/VIII/96), muchos de los cuales fueron observados en funciones, por el autor, en obras de *acción cívica*, por ejemplo en el mejoramiento del camino que conduce de Guadalupe Tepeyac a La Realidad.

Para la fuerza aérea mexicana se compraron, según datos de la propia SDN, seis aviones Sikorsky, 17 Pilatus suizos, 16 Maule, cuatro Arava israelíes, un Hércules y dos Schweizer y otros tantos McDonnell Douglas.

Sin embargo, existía además otro tipo de preocupaciones. Por primera vez alguien escribió en letras de molde sobre un asunto manejado cada vez más en forma asidua en los círculos estratégicos, civiles y militares, del gobierno y la Defensa estadounidenses: la gran vulnerabilidad del Distrito Federal ante la eventual irrupción de una guerrilla urbana en México.

Fue Fernández Ponte quien aludió a las marchas, plantones y frecuentes cortes de energía eléctrica en el tren subterráneo, como ejemplo de la gran vulnerabilidad de una zona metropolitana en la que viven cerca de 20 millones de personas, y razonó desde el punto de vista militar sobre qué ocurriría si una guerrilla urbana, sin mucho esfuerzo logístico ni armamento

sofisticado (artillería y coherencia) quisiera tomar de "rehén" político a la ciudad más grande del mundo, haciéndola presa de la incertidumbre, el caos y el terror como instrumentos para acceder al poder ("Asimetrías", I/XI/95).

"El Pentágono parece preocupado", escribió el periodista y dijo que expertos mexicanos en antiterrorismo ya venían trabajando sobre esa hipótesis, asesorados incluso por movimientos guerrilleros de El Salvador y Nicaragua. Aunque Fernández Ponte no los identificó, se sabe que después del estallido en Chiapas y la aparición del EZLN, el exjefe del Ejército Popular Sandinista, general Humberto Ortega, Edén Pastora (ex comandante "Cero") y el ex comandante del FMLN, Joaquín Villalobos, asesoraron al ejército mexicano.

En previsión del surgimiento de grupos de guerrilla urbana, la policía militar fue dotada de 20 mil chalecos blindados; 19 mil cascos antimotines; casi tres mil toletes de policarbonato y detectores de vapores explosivos (*Proceso*, 4/ VIII/96).

Hubo otra área que también fue pertrechada, aunque ésta con especialistas en seguridad nacional. Según reveló José Luis Gaona en *El Financiero* (4/IV/95), por recomendación de Estados Unidos Zedillo dio el visto bueno para la creación de un centro de información y análisis, a cuyo frente quedó el jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda y donde participan militares de la Sección Segunda del EMP (Inteligencia), así como doctores, maestros y analistas en ciencia política.

El equipo de trabajo fue integrado por tres tipos de especialistas de la seguridad nacional: colaboradores del coronel Jesús Javier Castillo, funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación y ex funcionarios de la PGR.

Fuentes de la presidencia, que Gaona no identificó, aseguraron que el organismo "no tendrá un carácter persecutorio", aunque serían motivo de observación "los políticos de todos los colores, los hombres de negocios (particularmente la cúpula empresarial), clero, cuerpo diplomático (acreditado en México), organizaciones sociales y los miembros de la prensa nacional y extranjera [...] se abrirá un expediente de cada uno de los líderes de opinión [...] el trabajo de inteligencia recaerá sobre los militares, pero el análisis e interpretación de la información serán responsabilidad de los civiles, a fin de que los trabajos estén *científicamente* sustentados".

Pese a los desmentidos oficiales en México, el tercer vínculo se iba estrechando. El 15 de marzo de 1996 el diario *Reforma* destacó en primera plana: "Negocian plan antinarco ejércitos de México y EU." La información citaba al vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Arne Owens, según el cual oficiales de ambos ejércitos estaban discutiendo los términos de un entrenamiento conjunto antinarcóticos a los militares mexicanos y la posibilidad de establecer un intercambio de inteligencia básica.

Un día después el citado fue el general Barry McCaffrey, recién nombrado por Clinton como nuevo zar antidrogas estadounidense y quien anunció la creación de un grupo de contacto binacional de alto nivel (secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Guerra y Marina), para discutir la estrategia antidrogas.

La designación de McCaffrey vino a indicar, por otra parte, la intención de Clinton de acceder de una etapa defensiva y, por ende pasiva, a una etapa agresiva en la lucha antinarcóticos, bajo la coordinación del exjefe del Comando Sur. Esa coordinación tendría ahora un enfoque estratégico militar, con eje en la expansionista doctrina de seguridad nacional. A diferencia de su antecesor en el cargo, el policía Lee P. Brown, el general McCaffrey fue incorporado al Consejo de Seguridad Nacional con mando sobre agencias de inteligencia y contrainteligencia. En ese sentido la Casa Blanca transfirió el manejo estratégico de sus relaciones con México de los Departamento de Estado y del Tesoro al Pentágono y la DEA; en adelante México, considerado desde tiempo atrás como un asunto de seguridad nacional estadounidense, sería manejado por militares.

Pero la verdadera bomba propagandística la dejó caer el 16 de marzo William Perry, cuando a bordo del portaviones de propulsión nuclear Carl Vinson, anclado a 100 kilómetros de las costas de

San Diego, California, hizo un anuncio sorprendente: la realización de maniobras militares conjuntas entre las armadas de México y Estados Unidos, al tiempo que informó sobre una nueva visita del general Cervantes a Washington, en abril de ese año.

Desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial —donde el famoso escuadrón 201 mexicano combatió de manera casi simbólica al lado de la aviación norteamericana en Filipinas y se permitió la instalación de radares en territorio nacional— ambos países no realizaban maniobras de ese tipo; de allí lo insólito del anuncio. De inmediato, el gobierno mexicano emitió un enérgico comunicado desmintiendo el hecho; pero el buscapiés de Perry ya había sido lanzado. "La cooperación bilateral no incluye, en ningún caso, ejercicios conjuntos entre las fuerzas armadas de ambas naciones", dijo un comunicado oficial de Tlatelolco que aclaró el propósito de "evitar malentendidos" en relación con las declaraciones atribuidas a Perry.

El 19 de marzo, el vocero Owens intentó "contextualizar" los comentarios de su jefe: dijo que Perry sólo había hecho un "ofrecimiento", no un anuncio. "Hemos propuesto, hemos sugerido" la posibilidad de llevar a cabo ejercicios conjuntos, tanto navales como terrestres...

Pero la indiscreción de Perry reabrió el debate sobre el futuro de las fuerzas armadas mexicanas. Tal disyuntiva se planteó incluso en el seno de las tres armas y enfrentó a los sectores "nacionalistas" con los "globalistas", según el investigador Raúl Benítez (*El Financiero*, 23/111/96).

Algunas preguntas quedaron sin respuesta, como las que planteó Lorenzo Meyer:

¿Hay la intención de fortalecer al ejército ahora que la presidencia, el régimen y el Estado se debilitan? La crisis se prolonga sin visos de solución, ¿es por ello que hay que reequipar a las Fuerzas Armadas y acercarlas a Estados Unidos? Y si éste fuera el caso, ¿puede tolerar la enorme asimetría entre los ejércitos de México y Estados Unidos —superior a la que existe entre las economías— ese acercamiento sin debilitar la soberanía? (*Reforma*, 21/111/96).

En el marco de una evolución de las relaciones castrenses librada a su propia lógica, era obvio que la desigualdad absoluta entre los ejércitos de los dos países sólo podría conducir a una dependencia militar de México respecto de su socio del norte. Perry se había anotado ya una victoria: involucrar a las fuerzas armadas mexicanas en el combate al narcotráfico, y para ello existía incluso una herramienta de control: la existencia de un grupo binacional de soldados, marinos y diplomáticos, según la óptica del Pentágono.

El 29 de marzo el subsecretario asistente de Defensa para asuntos de narcotráfico, Brian Sheridan, declaró en Washington que el Pentágono capacitaría a 15 oficiales mexicanos en el uso de las unidades militares de reacción rápida. Los cursos estarían a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta 6, en la zona de la frontera con México, en el centro de operaciones de Cayo West, Florida, y en Fort Bragg. Un día después, también desde Washington, Jim Cason y David Brooks informaban con base en fuentes del gobierno estadounidense, que México reforzaría su flota aérea antidroga con la compra de 30 helicópteros Bell Huey, modelos 206 y 212, y que a comienzos de año el general McCaffrey había propuesto al Pentágono que ofreciera al ejército mexicano entre 20 y 50 helicópteros "de sobra" (inactivos) Huey UH-1H.

Jorge Fernández Menéndez, con acceso a fuentes de inteligencia mexicanas, relacionaría a su vez ambas noticias: los 15 oficiales mexicanos estaban entrenándose en Estados Unidos como "helicopistas de fuerzas especiales" (tanto pilotos como técnicos) y dicha capacitación guardaba relación "con la compra de helicópteros ultramodernos" por las fuerzas armadas de México ("Razones", *El Financiero*, 23/1V/96).

El 23 de abril de 1996 el secretario mexicano de Defensa, general Enrique Cervantes, era recibido con un estruendoso saludo de 19 cañonazos por su contraparte William Perry, sobre los verdes jardines del Pentágono, frente al río Potomac. Cervantes en uniforme militar y Perry vestido de civil, pasaron revista a las tropas y escucharon los himnos nacionales. Pero no hubo discursos ni palabras de bienvenida; fue un despliegue de imagen, no de contenido.

Cervantes había arribado unos minutos antes a la Base Andrew, acompañado de su secretario particular, el general Tomás Ángeles, ex agregado militar de la embajada de México en Washington y miembro del equipo negociador del gobierno mexicano en la mesa de San Andrés; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo y Ramón Ojeda.

El resultado de la visita fue un acuerdo "marco" para concretar aspectos de la cooperación militar bilateral y la "donación" de un número indeterminado de helicópteros Huey, por parte del gobierno de Estados Unidos a México —que algunas fuentes ubicaron en "decenas" y otras en 73 aparatos—, obtenidos al margen de la sección 505 del Acta de Asistencia al Exterior, es decir, sin que queden sujetos al monitoreo del uso final por parte del Departamento de Estado. Los helicópteros serán destinados a la lucha antidrogas, "pero no exclusivamente", admitió un alto funcionario del gobierno mexicano no identificado (*La Jornada*, 27/IV/96).

En esa ocasión, Cervantes afirmó que "capacitación, entrenamiento, inteligencia y tecnología pueden ser parte de la cooperación, cuyos únicos límites serán, y de ese presupuesto partimos, el respeto de la soberanía nacional y ningún viso de intervencionismo".

En junio el Pentágono solicitó al Congreso estadounidense aprobar hasta 10 millones de dólares de asistencia militar a México para el año fiscal de 1997, la cual incluiría equipos de visión nocturna, para posicionamiento global, de comando, comunicaciones e inteligencia, y para detección y monitoreo. Ese paquete sería adicional al de programas de asistencia antinarcóticos que incluía los helicópteros Huey para las nuevas unidades de reacción rápida y dos navíos Knox para la armada mexicana. El 14 de junio, un documento del Departamento de Estado dio a conocer que México permitiría el sobrevuelo de su territorio por parte de las agencias de seguridad pública estadounidenses (en especial del Servicio de Aduanas) y que la flota de helicópteros quedaría sujeta al monitoreo estándar de su "uso final" y otros reglamentos norteamericanos. La donación tendría "ataduras políticas" y la responsable de velar por su cumplimiento sería la Oficina de Enlace Militar de la embajada de Estados Unidos.

Pese a los desmentidos oficiales mexicanos, la "certificación" del Departamento de Defensa estadounidense terminó por imponerse. El 26 de agosto de 1996 el senador Jesse Helms levantó el veto sobre el envío de los primeros 20 helicópteros usados UH-1H Huey a México, pero en una carta enviada al secretario de Estado, Warren Christopher, el legislador advirtió que exigiría el monitoreo estricto del uso final del equipo. Helms aclaró que acordó liberar el envío porque "están destinados a los militares mexicanos y no a la policía de ese país, la cual es demasiado corrupta" (*Cason y Brooks, La Jornada*, 27/VIII/96).

En forma paralela, un grupo legislativo del Congreso norteamericano, preocupado por la potencial violación de los derechos humanos por parte de los militares mexicanos, también se opuso al envío de los Huey pero sin éxito. Para persuadirlos de que desistieran de tal posición, funcionarios del Departamento de Estado, del Pentágono y de la oficina del zar antidrogas visitaron a los miembros de la llamada "fracción de los derechos humanos" y alegaron que la donación era "crítica" para mejorar la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países. En un nuevo despacho con base en información proporcionada por un participante en las reuniones, Cason y Brooks afirmaron que se busca "un tipo de cambio en la psicología de los militares mexicanos que los lleve a acordar una cooperación más amplia con los militares estadounidenses en el futuro. Y los helicópteros son descritos dentro de ese contexto como el primer paso" (*La Jornada*, 28/VIII/96).

Según el experto Stephen Wager, un coronel retirado que en los ochenta fue agregado militar en la embajada estadounidense en México, el acuerdo de principio para ampliar la cooperación militar le representó a Washington "poner un pie en la puerta". Otros analistas lo interpretaron como un proceso de "maduración" en las relaciones militares y Roderick Camp, de la Universidad Tulane, lo definió como "muy significativo", ya que ofrece por primera vez "de forma estructural una cooperación entre las dos fuerzas armadas y un incremento del involucramiento estadounidense en el entrenamiento de los militares mexicanos" (*La Jornada*, 27/IV/96).

El cambio en las relaciones militares fue uno de los temas comentados en primera plana por el *Times* (2/V/96), en una nota donde se asentaba que el presidente Zedillo modificó poco a poco y "en

silencio" las posiciones de México respecto a los intereses del pentágono. El diario citó a Lorenzo Meyer, quien dijo que México cedía soberanía. "Estos cambios tienen un tremendo significado simbólico. Al final, esta cadena de eventos significa que estamos perdiendo la relativa independencia que México logró en los últimos 50 años. El gobierno es débil, y Estados Unidos se está introduciendo en los asuntos internos del país", declaró Meyer al diario neoyorkino.

Por esos días apareció un número especial de la revista trimestral *Joint Force Quarterly*, editada por el Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Nacional de Defensa, en Washington. Allí, bajo el título "Puentes sólidos hacen buenos vecinos", apareció un ensayo de Perry, el autor de la célebre frase sobre el "tercer vínculo" en relación con los lazos militares entre Estados Unidos y México.

Las relaciones entre militares se fortalecen en la medida que sus líderes construyen vínculos de trabajo: las fuerzas armadas han comenzado un diálogo entre estados mayores, tropas de paracaidistas han saltado de las respectivas aeronaves, oficiales de Estados Unidos enseñan inglés en institutos militares mexicanos, mientras que oficiales mexicanos enseñan español en instalaciones de Estados Unidos. El portaviones *USS Kittyhawk* recibió recientemente una cálida bienvenida al hacer una visita al puerto de Acapulco.

En su artículo, el jefe del Pentágono aprovechó para recordar los temas fundamentales de la reunión de Williamsburg, que reunió a 33 ministros de Defensa del subcontinente y en donde México se hizo representar por el embajador Silva Herzog. Entre esos temas destacan la cooperación para la defensa entre las fuerzas armadas americanas y el papel de los militares en una democracia. Al final listó los seis preceptos, que a su juicio, habrán de guiar las relaciones de seguridad en el hemisferio en el próximo siglo, a los cuales se refirió como los "Principios de Williamsburg": la preservación de la democracia como base de la seguridad mutua; el papel crucial de las fuerzas armadas en el apoyo y la defensa de los Estados democráticos y soberanos; el respeto de los militares a la autoridad democrática, la constitución nacional y los derechos humanos; una mayor apertura en el debate acerca de los programas, las políticas y los presupuestos de defensa; la resolución de disputas mediante acuerdos negociados y no por conducto de acciones militares, y una mayor cooperación en operaciones de paz y en la lucha contra los *narcoterroristas*.

Pero como los puentes sólidos y la buena vecindad al uso estadounidense no se construye sólo con palabras, a comienzos de junio de 1996 se conoció la designación de John Jack Leonard como director de la Oficina de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado.

Diplomático con amplia experiencia en coordinar los recursos tanto humanos como materiales y programas y planes de distintas agencias del gobierno de Washington, incluidas las de inteligencia, Leonard, como recordó Fernández Ponte (*El Financiero*, 10/VI/96), fue el encargado de negocios de la administración Bush en Nicaragua de 1988 a 1990, en lugar del embajador titular que fue expulsado por el gobierno sandinista. En tal circunstancia, Leonard fue comisionado para coordinar los esfuerzos de los funcionarios del Departamento de Estado, la CÍA y el Pentágono para librar la guerra de baja intensidad contra el gobierno de Daniel Ortega, misión en la que obtuvo un innegable éxito.

A partir de esos antecedentes puede presumirse que la designación de Leonard podría significar un indicador inequívoco de que el gobierno de Clinton "tiene planes serios" respecto a México, cuya implantación requiere una coordinación precisa de esfuerzos. Hipótesis que se confirmaría si, como se manejó en la prensa mexicana a comienzos de agosto de 1996, el sucesor del embajador James Jones es, finalmente, Thomas McClarty, asesor en materia de seguridad de Clinton en la Casa Blanca.

Cuando el 8 de junio de 1996 el general de división Enrique Tomás Salgado Cordero asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, su nombramiento provocó reacciones encontradas. Mientras algunos pidieron prudencia, otros, entre ellos diputados y asambleístas del PRD, lo interpretaron como el principio evidente de una militarización de la capital.

General brigadier, diplomado de Estado Mayor y hasta su nombramiento al frente de la SSP jefe de la 9a. región militar con sede en Acapulco, Salgado ocupó durante el sexenio salmista la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Cursó estudios en la Escuela Superior de Guerra y posee una maestría en seguridad nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. La tesis con la que obtuvo el grado académico fue *Los medios de comunicación masiva como factor de la seguridad nacional*. Fue también agregado militar en la embajada mexicana en Israel.

Como comandante en Guerrero durante 19 meses Salgado estuvo muy cerca del ex gobernador Rubén Figueroa —incluso después de la matanza de Aguas Blancas— y declaró que en ese estado no existían comunidades en extrema pobreza ni grupos armados guerrilleros. También negó que bajo su gestión la entidad se estuviera militarizando, cuando era evidente el aumento de la presencia de soldados en las regiones de la Sierra, la Montaña y la Costa Chica.

Entre sus primeras medidas como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Salgado designó a 20 generales y 10 coroneles de las fuerzas armadas para ocupar cargos directivos y operativos en la dependencia. El responsable directo de Salgado ya no fue el regente Óscar Espinosa ni el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, sino el titular de la SDN, general Cervantes.

Un editorial de la revista *Siempre!*, titulado "El ejército: única institución a salvo", saludó su nombramiento y dijo que "si el general Salgado Cordero logra combatir la delincuencia organizada en la ciudad de México y devuelve a la ciudadanía las garantías a las que tiene derecho, entonces, la población —con toda seguridad— comenzará a preguntarse, cada vez más, sobre la conveniencia de que sean militares los que vuelvan a gobernar el país" (*Siempre!*, 13/VI/96). Desde una perspectiva opuesta, Miguel Ángel Granados Chapa recordó, a 60 años del comienzo de la guerra civil española, "los riesgos de alentar políticamente a un ejército, constituido en un poder al margen de la Constitución. En México, acaso por un disfrazado deseo de exorcizar el tema, hemos preferido colocarnos en la hipótesis de que no hay peligro alguno de un golpe de Estado" (*Reforma*, 21/VII/96).

Como aclaró Granados, no estaba tratando de "inventar fantasmas". Otras voces, como la de los expertos José Luis Piñeyro y Saxe-Fernández, alertaron también sobre ese riesgo al opinar que el plan de seguridad pública en marcha forma parte de un esquema de contrainsurgencia diseñado por Estados Unidos que teme un estallido social en México. Tal visión le fue confirmada a David Fernández, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, por el encargado de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado norteamericano, Arturo Valenzuela. Durante una entrevista, Valenzuela le dijo que "la militarización de las policías [mexicanas] y el nuevo marco jurídico se estaba creando a sugerencia del Departamento de Estado" (*Proceso*, 15/IV/96). Ese proceso de homologación de la legislación mexicana con la estadounidense puede observarse, por ejemplo, en la reducción de la edad penal y la Ley Ricco, semejante a la ley anticrimen.

La nueva ley que creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, en octubre de 1995 —con el voto en contra del PRD por considerar que la misma "prepara un golpe de Estado"—, también generó reticencias en legisladores del PAN y el Partido del Trabajo (PT) ante el riesgo de una militarización.

Más allá del debate sobre la legalidad o conveniencia de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, las críticas se centraron sobre la aparente fusión de los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional. Como observó el comentarista Modesto Suárez, la labor militar y la labor policial son dos cosas de esencia diferentes, por eso históricamente se han ejercido de manera independiente. Cuando ambas han llegado a fundirse, "la acción policial se ha visto invariablemente sometida a la actividad castrense; y cuando la fusión ha sido prolongada, ha producido desgaste en la institución militar, por la fricción que tal encomienda genera al interior de las Fuerzas Armadas y entre éstas y la población civil" (*Reforma*, 14/VI/96).

Tales riesgos parecían no preocupar al nuevo hombre fuerte de las relaciones de Estados Unidos con México, el general Barry McCaffrey. El 22 de agosto, según un despacho de Dolia

Estévez desde Washington, el zar antidrogas aplaudió la decisión de Zedillo de ubicar a "oficiales militares dignos de confianza" en posiciones policiales clave y dijo que era "un paso en la dirección correcta". También elogió la formación de unidades especiales con capacidad de despliegue rápido en cualquier punto de la República mexicana.

Otra victoria del Pentágono: en mayo de 1994 el coronel Stephen Wager, un mexicanólogo en servicio militar activo en el ejército estadounidense y catedrático de la Academia Militar de West Point, había adelantado que uno de los propósitos del Pentágono era sustituir la estructura de zonas militares del ejército mexicano por un "sistema de cuerpos": unidades de movilización y reacción rápida, en prevención de "los disturbios sociales derivados de problemas económicos y de los temerarios barones de la droga" (*El Financiero*, 19/V/94). En la misma información, Donald Schultz, director de estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos con sede en Pennsylvania, afirmó que

la súbita aparición en Chiapas de una amenaza seria a la seguridad nacional, sugiere la necesidad de cambios en las estructuras de mando, inteligencia y misión de las Fuerzas Armadas [mexicanas]. Parece probable que la nueva realidad resulte en el alejamiento parcial de las Fuerzas Armadas de su tradicional papel de labor social y contranarcóticos, a cambio de la mayor participación en el trabajo de contrainsurgencia.

Con lo que la ausencia del general Cervantes en la cumbre castrense de Williamsburg no representó, a la postre, un obstáculo para que México asumiera de manera sumisa la "solución colombiana" propuesta por Cheney: poner al ejército en el papel de guardianes del orden interno.

En rigor, y mientras el ejército mexicano reestructuraba su sistema de inteligencia militar cambiando el nombre de la antigua Escuela de Grupos de Comando por el de Escuela Militar de Inteligencia, adscrita al Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, con el objetivo de reforzar "la cultura de la información y contrainformación" (*La Jomada*, 22/VII/96), el objetivo final de la militarización de la seguridad pública iba encaminado a concretar otro viejo anhelo del Pentágono: la creación, en México, de una policía o guardia nacional que recuperara el viejo concepto imperial británico y estadounidense de principios de siglo: la *Constabulary*, recetado ahora nuevamente por Washington para todos los ejércitos latinoamericanos. Según la nueva "doctrina democrática liberal [...] de estabilidad nacional", se debe definir a los militares una misión más estrecha, que sería por ejemplo la de convertirse en "una gendarmería nacional con entrenamiento especial" (véase *Los militares y la democracia: futuro de las relaciones civiles-militares en América Latina*, Lexington Books, 1990).

Así, la *colaboración estructural* de los dos ejércitos que bajo la lógica hegemónica de "América para los americanos" era la continuación de la firma del NAFTA como instrumento geopolítico, se amarraba ahora con el neopanamericanismo militar. Si se considera que el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos es casi igual al Producto Nacional Bruto de México, no es difícil advertir que en esa abismal asimetría el tipo de integración militar que han venido tejiendo de manera sutil y paciente William Perry y el aparato de seguridad nacional estadounidense, habrá de desembocar en una absorción de México en un nivel militar.

Durante una entrevista con el autor en julio de 1996, el académico Saxe-Fernández afirmó que el objetivo del Pentágono es alejar al ejército mexicano de cualquier función constitucional y terminar de minar su base logística y cualquier hipótesis de defensa de la soberanía nacional, por la vía de que la institución armada se involucre, directamente, en conflictos de orden interno, asumiendo responsabilidades de tipo policial.

Desde la perspectiva del Pentágono, dijo Saxe-Fernández, la idea central es que las fuerzas armadas mexicanas reduzcan su papel al control interno de la población, es decir, a reprimir los conflictos sociales derivados de la aplicación de la política económica diseñada por el FMI y el Banco Mundial, los organismos financieros multilaterales dominados por Estados Unidos.

Es un juego circular. Por una parte, la política económica del FMI desestabiliza a todo el sistema social y económico mexicano y polariza a las clases sociales, creando las condiciones del caos. Y por otra la política militar del Pentágono se orienta, consecuentemente, a transformar a las fuerzas armadas mexicanas en virtuales fuerzas policiales. La llegada de un nutrido grupo de generales a la policía capitalina es sólo un ejemplo.

—En apariencia, la teoría del caos contradice la política de estabilización. ¿Es esto así?

—Ese asunto hay que manejarlo desde una perspectiva histórica, porque no se trata, a fuerza, de un elemento puramente conspirativo. Debemos partir de la guerra civil norteamericana, que consagra la victoria del capitalismo que va a llevar adelante la segunda revolución industrial en Estados Unidos. Se trata de un capitalismo salvaje, depredador, un capitalismo que desestabiliza cuando actúa internacionalmente. Desde el siglo XIX, la política exterior de Estados Unidos fue dirigida y estuvo orientada en función de los intereses inmediatos de su aparato corporativo. En ese sentido fue, y sigue siendo, una política inmediateista. Es un capitalismo que desestabiliza afuera. Se vio en China, igual que en México durante la modernización del porfiriato, a partir de 1876, una modernización muy parecida a la actual que presenta muchos elementos de capitalismo Victoriano, neoporfiriano. En 1876 México producía más maíz, frijol y granos que en 1910 y en 1910 México estaba mucho más modernizado que en 1876. Sin embargo, la modernización capitalista desestabilizó socialmente al país y desembocó en el gran estallido revolucionario que le costó al país 10% de su población. Lo mismo pasó en Cuba, en Centroamérica, en Filipinas. En todos esos países el capitalismo desestabilizó.

Este proceso tiene una doble dinámica que opera en forma simultánea. Por un lado, se da una centrifugación, expresada por el expansionismo capitalista, el imperialismo. Por otra, se da una centripetación, es decir, una centralización del poder en la presidencia, que maneja la estructura policiaca y militar, nacional e internacionalmente, para restablecer el "orden" desestabilizado por el accionar del capitalismo y así volver a preparar otro ciclo de inversiones.

Lo que estamos viendo en América Latina, sobre todo a partir de 1982 cuando comienza a desarrollarse un proceso de hiperconcentración del ingreso, es el retorno del capitalismo salvaje, ese capitalismo desestabilizador que se expresa en el aumento del desempleo y en el desmantelamiento del aparato productivo. Aquí es donde entra el componente militar. Vivimos otro momento de la presidencia imperial, y en el caso de México, dicho proceso llegó acompañado de un profundo injerencismo [*sic*] del aparato militar de Estados Unidos en un medio ambiente caótico, que fue creado por la política económica diseñada por Washington.

El presidente Clinton y sus estrategias manejan esta doble dinámica a la perfección. Tanto es así, que antes del paquete de rescate, la Casa Blanca creó un programa a lo largo de la frontera con México, dirigido a preparar las contingencias derivadas del mismo. Previeron que el paquete de rescate y sus condicionamientos generarían múltiples estallidos del lado mexicano, lo que a su vez derivaría en una presión demográfica muy grande. De allí que las bases militares norteamericanas de los estados fronterizos con México se prepararon para hospedar a cientos de miles de mexicanos que, hipotéticamente, huirán de México por estallidos sociales a los cuales contribuirá ese paquete de rescate.

—No obstante, por lo menos en un nivel retórico, funcionarios del gobierno estadounidense afirman que sus políticas hacia México y Latinoamérica están dirigidas a generar estabilidad.

—No hay ninguna fundamentación histórica que demuestre la pretendida retórica de estabilidad pregonada por la política exterior de Estados Unidos. Eso es falso. La diplomacia estadounidense está diseñada en función de los intereses inmediatos y de corto plazo de sus corporaciones. Luego, en ese proceso, desestabilizan; se dan el poder centrífugo y el poder centripeto. Ésta es la hipótesis de trabajo que está manejando la Escuela de Análisis Histórico de Wisconsin, liderada por Walter Lafeber.

Esta relación de centrifugación y centripetación es muy importante para colocar en un contexto histórico la guerra de baja intensidad y la creación de fuerzas de intervención rápida. En la posguerra fría el Pentágono enfrenta un problema grave en el hemisferio occidental que viene arrastrando desde la guerra de Corea, cuando el general McArthur advirtió que Estados Unidos carecía de una base demográfica suficientemente amplia para hacer un juego de poder en Eurasia, que le permitiera un uso masivo de tropas. Estados Unidos no pudo tomar la península de Corea y McArthur llamó la atención sobre eso. El presidente Johnson volvió a esgrimir esa argumentación cuando repitió el mismo error en Vietnam. Justificó: "Somos sólo 200 millones de habitantes y el mundo tiene 3 700; nos aventajan 15 a 1. Ése es un gran problema."

Hoy el problema hemisférico que se le plantea a Estados Unidos es que hay un ejército

latinoamericano, el cubano, que tiene medio millón de soldados movilizados y aproximadamente otro medio millón de reserva. Ese factor es lo único que ha evitado que Estados Unidos avasalle Cuba; es la única explicación que existe para que Cuba siga allí desde 1991, cuando se colapsó todo el marco de referencia geopolítico y económico al que estaba inscrito la isla. Los costos de una invasión militar a Cuba serían muy altos para el Pentágono. Estados Unidos tendría que mantener ocupadas no menos de medio millón de tropas, por un periodo extenso, para controlar militarmente a Cuba.

Pero el ejemplo cubano representa un problema adicional para Estados Unidos en la posguerra fría. ¿Qué pasaría si surge en México un gobierno que ponga sobre las armas a medio millón de soldados y a otro medio millón de reservistas, a defender la soberanía nacional? ¿O si con una población de 140 o 160 millones de habitantes, Brasil monta un ejército de esa naturaleza? Eso es lo que el Pentágono está tratando de impedir siguiendo la advertencia de McArthur.

Ya en los tiempos del presidente Wilson Washington contempló la hipótesis de una invasión total a México, hizo un plan de contingencia y llegó a la conclusión de que el país era muy grande. Los estrategas militares percibieron que si invadían México, no podían enfrentar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Era Alemania o México, porque Washington no podía atar al medio millón de tropas que necesitaban en el territorio mexicano y al mismo tiempo intervenir en Europa. Esa situación volvió a repetirse con Roosevelt. Él mismo lo reconoció: "Nosotros no podíamos hacer nada contra el general Cárdenas, porque tenía una enorme capacidad de movilización militar y un gran apoyo popular. Nos hubiera costado una cantidad muy grande de tropas", y eso limitaba la capacidad de intervención estadounidense en Europa.

Roosevelt terminó aceptando las condiciones de Cárdenas, porque además temió que si propiciaba un golpe de Estado en México la derecha podría llegar al poder e instaurar un régimen militar de corte nazi-fascista, y los costos electorales en Estados Unidos hubieran sido devastadores para él. Roosevelt pensó en términos de nación y vio que era imposible invadir México, porque no podría operar ni en Europa ni en Asia.

Siguió la política que le recomendó el embajador Daniels: llegar a un arreglo con Cárdenas. Y fue Cárdenas quien influyó, junto con Churchill, para que Roosevelt propusiera el establecimiento de una empresa estatal petrolera en Estados Unidos, bajo el supuesto churchilliano de que el petróleo es demasiado importante para dejárselo a los petroleros privados, y que debe ser una función del Estado. Eso lo dijo Churchill en los años veinte, cuando se creó la primera empresa petrolera estatal en el mundo, la inglesa. La idea la retomó Roosevelt en 1942 y, para contrarrestarla, el senador Truman se alió con los petroleros.

En un nivel hemisférico, el asunto demográfico, combinado con el aspecto militar se ha venido agudizando en el último decenio. Estados Unidos tiene ahora 300 millones de habitantes y la balanza demográfica se revirtió hacia América Latina, que cuenta con aproximadamente 500 millones de habitantes. Es a partir de esta realidad demográfica que para Estados Unidos el Estado-nación en América Latina, y sus ejércitos nacionales, constituyen un problema. De allí que un objetivo prioritario sobre el que viene trabajando el Pentágono sea la redefinición de las funciones militares de los ejércitos nacionales y achicar, aminorar, debilitar la función del Estado para dejar las grandes actividades económicas, que controlan empresas estatales, en las manos más débiles posibles. Y las manos más débiles son la iniciativa privada de Argentina, la iniciativa privada mexicana o la iniciativa privada de Brasil, susceptibles de ser absorbidas, compradas o manejadas rápidamente a partir de alianzas estratégicas con corporaciones de matriz estadounidense.

Para Saxe-Fernández, toda la estrategia actual de Estados Unidos gira alrededor de la corporación. La corporación transnacional es el elemento central para articular el expansionismo norteamericano en la región, y el principal obstáculo a la corporación es un Estado latinoamericano fuerte. De allí que en el caso mexicano, lo que está haciendo Washington es debilitar la estructura del Estado, por la vía de reducir el presupuesto para que el Estado no pueda llevar a cabo muchas de las funciones que le son propias y, a la vez, está tratando de redefinir las misiones y responsabilidades específicas de las Fuerzas Armadas mexicanas; un modelo que se está aplicando en el hemisferio.

En opinión del experto y frente a esa debilidad demográfica,

Estados Unidos exhibe su gran fortaleza económica y tecnológica. Hablamos de una economía de siete billones de dólares. Si se comparan los tamaños de las economías y las empresas

latinoamericanas con los de las corporaciones globales de Estados Unidos estamos hablando, prácticamente, de una toma corporativa del hemisferio.

En este proceso, por razones de interés inmediato de las corporaciones y de manejo, como carta de negociación internacional, las transnacionales vendrán ahora por la última parte del botín: Pemex (hidrocarburos, petroquímica básica), energía nuclear, materiales radiactivos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, comunicaciones vía satélite, servicio telegráfico y radiotelegráfico, correos, Comisión Federal de Electricidad, impresión de dinero y el control y vigilancia de puertos y aeropuertos. Literalmente, se trata del desmantelamiento de toda la estructura y funcionamiento del Estado nacional."

Y es en este contexto histórico y estratégico más amplio, que se debe colocar el problema militar.

CAPITULO 11

Mitos y realidades

A comienzos de 1996 el proceso de paz en Chiapas atravesaba por una fase en donde, aunque no hubiera enfrentamiento directo, toda la capacidad bélica instalada y la lógica que predominaba entre las partes seguía siendo fundamentalmente militar.

En ese marco, el único logro de las negociaciones de San Andrés consistió en la conformación de una mesa que dio la apariencia de cierta estabilidad y donde, supuestamente, de cara a la opinión pública se iba tejiendo una vía política. Pero ésta podía naufragar peligrosamente, previéndose incluso un eventual punto de ruptura.

La estrategia del Estado en esa fase presentó algunos rasgos novedosos. Primero, el montaje de una enorme campaña diplomática internacional. Por medio de todas las embajadas mexicanas en el exterior y de las agencias noticiosas, nacionales e internacionales, el gobierno de México lanzó señales que intentaban robustecer la imagen de que ya no había conflicto armado en Chiapas. El argumento fue que se estaba en una fase de negociación avanzada y que habría una próxima solución.

Sin embargo, el énfasis del mensaje de "ya no hay guerra" contrastó con una nueva estrategia militar en extremo sutil y muy cuidadosa de no contradecir ese manejo público. En los hechos existía una ofensiva militar que se estaba llevando a cabo de manera muy diversificada. Fue una etapa en donde el ejército abandonó su actividad estática o pasiva de otros momentos y apareció especialmente activo.

Había una razón de Estado para ese proceder: inteligencia militar terminó por aceptar que la única explicación posible de la rebelión zapatista era su vínculo con las comunidades indígenas. La sorpresa no fue tanto que hubiese un pequeño grupo organizado y armado, sino que existieran vínculos estratégicos entre las comunidades basados en la familia, clase, etnia y lazos entre un gran conjunto de pueblos indios que soportaban al grupo armado. En ese sentido el ejército descubrió que el EZLN no era sólo una guerrilla sino todo un conjunto de acciones, decisiones y mecanismos indígenas y comunitarios.

Inteligencia militar se equivocó en 1993 durante su ofensiva en la Sierra Corralchén, porque creyó que el EZLN estaba *sembrado* en un nivel de organizaciones intermedias, y ahí fue donde atacó; pero tarde comprendió que la guerrilla tenía un arraigo mucho más profundo. Lo que estaba —y está— en juego es destruir las bases que dan vitalidad al EZLN; aislar al cuerpo armado de su base indígena. Dividir y debilitar el soporte social y político del grupo armado, para lo cual es necesario desmembrar la lógica de la comunidad que sirve de sostén al fenómeno de la rebelión.

De allí que se estuviera desarrollando una sutil pero envolvente acción del ejército para, usando los instrumentos del temor, la coerción, la conveniencia personal y/o familiar, debilitar y dividir a las comunidades y hacer proliferar organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas controladas en la zona de conflicto.

Es la *manera mexicana* de la guerra de contrainsurgencia. Y en esa fase el fenómeno zapatista fue encarado por los estrategas del ejército en su dimensión masiva y no sólo en su expresión estrictamente militar. Todo eso, cobijado con las supuestas operaciones contra el narcotráfico y otros elementos diversionistas manejados por el gobierno con perfil más bajo.

El representante gubernamental Jorge del Valle la definió como una *estrategia de contención-reducción*, en la cual el ejército cumple un papel de contención ante la falta de gobernabilidad y seguridad en Chiapas, donde sintomáticamente en los últimos meses surgieron nuevos y variados focos de conflicto, amén de los problemas poselectorales, demanda de tierras, delincuencia y

acciones paramilitares, con actores cada vez más polarizados y enfrentados bajo el signo de la violencia. Una *contención* que es presentada como viable para todos los conflictos, en el entendido de que sólo la acción del ejército puede ser capaz de restaurar el orden y la gobernabilidad en el estado.

En forma paralela, ese esquema de contención buscó encausar el proceso de diálogo con el EZLN —el ritmo, la viabilidad y el carácter— en función de los objetivos e intereses del Estado. La disputa en la mesa de San Andrés fue ahora por el modelo y alcance de la negociación. Y el Estado buscó imponer un modelo donde el EZLN quedase reducido a un movimiento de tipo "peticionario". La fórmula: los zapatistas demandan y el Estado responde. Mientras el Estado lograra imponer y mantener ese modelo, controlaría las negociaciones. Finalmente, era la lógica de los negociadores gubernamentales, las soluciones no se negocian. "Se negocia el que yo te escucho y yo decido de lo que entiendo me pides, lo que en mi lógica, capacidades y programa te puedo responder." El Estado es la parte siempre dominante en el modelo de demanda-respuesta.

Ése fue el modelo con el que operó el comisionado Manuel Camacho y al que ahora quería volver el gobierno. Pero el vigente, y que rigió después de la ofensiva de febrero de 1995, fue el que logró construir con paciencia la Conai: una mesa con dos partes negociando. Entonces, por razones coyunturales, el Estado tuvo que sentarse a negociar una agenda y un reglamento con el EZLN, y se vio obligado a conceder a la mediación (Conai) la conducción metodológica, con lo que no pudo controlar el proceso.

Pero ese esquema generó tensión en la parte oficial y por ello el gobierno trató de impedir que se fortaleciera y consolidara, y pretendió volver al modelo anterior de demanda-respuesta. En el fondo el Estado hubiera querido imponer una salida que implicara cambios mínimos (gatopardismo) y con los menores costos políticos (y eventualmente militares) posibles.

Por su parte, el EZLN se cuidó de no caer en ese esquema y extremó los cuidados para no actuar solo, para no aislarse y recoger propuestas de la sociedad civil a través de sus asesores e invitados.

En esta fase la lógica del gobierno siguió estando regida por la "Doctrina Iruegas". En el momento en que el EZLN dio señales de que podría caminar hacia la formación de una fuerza política, el triunfalismo gubernamental lo llevó a interpretar que los zapatistas ya estaban caminando adonde ellos querían.

El triunfalismo tiene dos corrientes: una, integrada por aquellos que sienten que la vía militar está básicamente controlada por el Estado y consideran que el EZLN ya no puede creer que la guerra sea viable, por lo que el problema para el gobierno se reduce a hacer un buen documento que "envuelva" o disimule lo mejor posible una rendición incondicional del EZLN.

La otra corriente agrupa a quienes son partidarios de una salida política. Para ese sector la cuestión se reduce a quién conduce la salida política. Obviamente, plantean que el Estado la diseñe y la conduzca y, para ellos también, desde que el EZLN optó por la vía política se ubicó en el terreno en donde el Estado quería que estuviese.

Pero, ¿estaba el EZLN caminando en esa dirección? Al entrar a la vía de la negociación, las dos partes aceptaron tácitamente el riesgo del *bluff*, la presión y el chantaje. La decisión de entrar en una negociación contiene costos inevitables y las dos partes tienen cartas ocultas y distintas estrategias, tácticas y formas de presión. A lo largo de un año de pláticas en San Andrés las dos partes cayeron en las trampas de su enemigo. Y la única garantía de continuidad —la no ruptura de las negociaciones— fue la mediación, que impuso el "juego limpio" y la "formalidad" del diálogo a las dos partes, aunque en los hechos no pudo evitar las suspicacias, el juego sucio y la existencia de fuertes contradicciones.

El embajador Gustavo Iruegas, el hombre que se adjudicó la victoria por la "reconversión" zapatista de grupo armado inactivo a movimiento social, se había retirado de la escena y para muchos ése fue su suicidio político. Mientras tanto, Marcos y sus comandantes indígenas se dedicaron a hacer política, pero con una novedad: también pusieron el acento en lo internacional y convocaron a un encuentro internacional "por la humanidad y contra el neoliberalismo".

Sin embargo, y ante la ausencia de guerra, tal y como pregonaban por el mundo funcionarios y voceros oficiales, no se comprendía por qué, en forma paralela, el ejército federal siguió apretando el cerco contrainsurgente, y tanto los jefes castrenses destacados en Chiapas como el gobernador interino, Ruiz Ferro, insistieron en instrumentar la guerra de baja intensidad de acuerdo con los manuales del Pentágono. De tal suerte que el contrapunto política-guerra, con los actores bien definidos de uno y otro lado, adquirió rasgos de una danza macabra:

"He podido constatar que en Chiapas existe un régimen de terror, en el que imperan las guardias blancas [...] La situación es extremadamente represiva y en cualquier momento puede ocurrir un choque militar [entre el ejército y el EZLN]", fueron las palabras de Oliver Stone, el laureado director cinematográfico de Hollywood que hablaba desde La Realidad, después de recibir de manos de Marcos el regalo de un pasamontañas negro y una pipa usada.

Ganador de tres Óscares, uno como guionista del filme *Expreso de media noche* de Alan Parker y dos por dirección en *Pelotón y Nacido el 4 de julio*, Stone había rechazado ocupar esa noche su asiento entre las luminarias del Dorothy Chandler Pavillion y viajó a la selva Lacandona a esperar el veredicto sobre su última película nominada: *Nixon*. Era el 25 de marzo de 1996 y había llegado a la selva acompañado de Ofelia Medina y Rosario Ibarra como una "avanzada" del foro convocado por los zapatistas. No había llegado a esa aldea tojolabal a hablar de cine sino de tanques, aviones, tropas y guerra de baja intensidad.

Dijo que exigiría al gobierno de Clinton que hiciera lo posible por dar a Chiapas un respiro y cesara la asesoría militar al ejército mexicano. "Respetamos a los zapatistas como grandes combatientes en su lucha por el cambio y por la paz, y aunque se dicen los más pequeños los encontramos gigantes por lo que están tratando de hacer."

Estaba todavía fresca la matanza del 21 de marzo en el municipio Nicolás Ruiz, donde la "banda de los cuatro" integrada por Ruiz Ferro, Eraclio Zepeda, Uriel Jarquim y el procurador Jorge Hernández —según la llamó el comandante Tacho—, había procedido al desalojo violento del predio El Gran Poder, con saldo de tres campesinos muertos, 124 detenidos, varios animales balaceados y un vehículo destruido y otro desaparecido. En la acción participaron ocho convoyes del ejército y 300 efectivos de la Policía de Seguridad Pública. La diputada Adriana Luna Parra exhibió en el Congreso de la Unión 480 cartuchos quemados, los cargadores, la visera de un casco de un policía judicial y un par de cajas con leyendas que decían: "Secretaría de la Defensa Nacional, Departamento de la Industria Militar, 50 cartuchos calibre 30 milímetros. Bala normal" y "Made in USA, Twenty Cartridges". Marcos Rascón subió a la tribuna para decir que Ruiz Ferro y Eraclio Zepeda descubrieron en Chiapas "al Figueroa que llevan dentro".

Oliver Stone se fue impresionado después de una reunión colectiva con 28 comandantes indígenas zapatistas y describió a Marcos como un hombre y un guerrero: "Inteligencia y fuerza, sensibilidad, valor y determinación." También dijo percibir cierto paralelismo entre lo que ocurre en México y una etapa del conflicto en el sureste asiático, donde él peleó como soldado de las fuerzas de intervención estadounidenses. "El gobierno corrupto y centralista del PRI me recuerda al gobierno de Saigón, un gobierno artificial, creado con fines de favorecer únicamente intereses empresariales, sin ningún respaldo de la gente. Me parece que el PRI se está encaminando hacia allá" (*La Jornada*, 4/IV/96). Otra reflexión:

Puede que el gobierno mexicano no este cazando a Marcos activamente, o al menos lo niega. Pero sí lo están presionando militarmente, están cerrando el cerco. Su situación me recuerda la película *Zoófito* —mi favorita—, cuando el gobierno asegura estar negociando con él, pero los generales que realmente manejan el poder están complotando para asesinarlo. Zapata, Marcos... es lo mismo. Hay la intención de liquidarlo.

Una fotografía de Stone con pasamontañas y a su lado Marcos fue publicada en el *Time* bajo una cita que reproducía una frase del diario oficial mexicano *El Nacional*: el director es "la cereza del helado propagandista del zapatismo".

El siguiente 9 de abril era el actor y director mexicano-estadunidense Edward James Olmos, conocido por su aparición en la serie televisiva *Miami Vice* y por haber encarnado a Gregorio Cortez en la película de Robert Young, quien visitaría La Realidad y diría: "Estamos rodeados de militares, con niños y familias en medio. Parece Vietnam. Bosnia [...] ¿Por qué tiene aquí el gobierno de México a su ejército? Si hay paz, ¿a quién están protegiendo?" Embajador de Unicef y reconocido exponente de la cultura chicana de California. Olmos, admirador de César Chávez, a quien considera un Gandhi, dijo que iría a la Casa Blanca a decirle a Clinton que debe tomar con responsabilidad el caso de Chiapas o de lo contrario "va a haber mucha sangre mexicana derramada por mexicanos".

Es público que tanto Stone como Olmos son invitados con frecuencia por Hillary Rodhain y su esposo Clinton a la sede del gobierno estadounidense, y que entre ellos intercambian impresiones en una atmósfera sociable e informal. Y se supo, también, que el matrimonio Clinton tomó nota de que en represalia por su presencia en Chiapas, la Secretaría de Gobernación sacó de circulación la película *Nixon*, de Stone, recién estrenada, y que familiares de Olmos en México fueron hostigados por el gobierno. Fausto Fernández Ponte responsabilizó de ambas medidas a Emilio Chuayffet y a Liébrano Sáenz, de quienes dijo que "flirteaban" con la tentación del "neofascismo" ("Asimetrías". *El Financiero*, 1 I/IV/96).

El 14 de abril Régis Debray se encontraba en La Realidad: "El zapatismo es la mejor autocrítica de la teoría del foco [...] el EZLN es una verdadera revolución dentro de la revolución." El ex foquista y escritor francés devenido en socialdemócrata y neodegaullista publicaría después en *Le Monde* y en la revista *Proceso* sus impresiones de viaje. Se trató de una crónica muy favorable al zapatismo: en ella suscribió la teoría de que el gobierno mexicano quiere circunscribir a la guerrilla a las montañas y dejar que se pudra o apostar a la solución más barata de echar a los sicarios de los latifundistas, las "guardias blancas", para que acaben con Marcos y *disfrazarlo* como un ajuste de cuentas. Dijo que "uno se espera una guerrilla y se encuentra con un pueblo (un mosaico de comunidades)" y describió a Marcos como un militante inventivo "que no tiene la publicidad por fin sino por medio: los medios, para él, son la guerra de Clausewitz en papel periódico: lo político prolongado por otros medios".

Habló también de "un Estado de derecho de baja intensidad" y de "una guerra psicológica antes que militar"; del no vanguardismo del EZLN y su culto al consenso y de que "el final de las utopías no era la rendición, sino el regreso a lo esencial: la resistencia". Si llegamos a desaparecer —dijo Marcos a Debray— "entonces sí, sólo quedaría la violencia, salvaje y sin esperanzas. Yugoslavia en el sureste mexicano".

Después llegaría el turno de las mujeres: la ex primera dama de Francia, Danielle Mitterrand y la dirigente de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, "Doña Daniela", confiaría Anita Teixer, tenía un último deseo antes de morir: conocer a los zapatistas y a Marcos. Y así, la vieja luchadora de la resistencia antinazi y viuda de François Mitterrand, que había tratado protocolariamente en el Palacio del Eliseo con Margaret Thatcher, Ronald y Nancy Reagan, Mijail y Raisa Gorbachov, Indira Gandhi y otras celebridades de la política internacional, descendió a esta realidad de cuarto mundo y se alojó en una choza de madera, con piso de tierra, sin drenaje ni agua ni electricidad y con el techo de paja infestado de alacranes, para traer su solidaridad y la promesa de que su voz se alzaría en el orbe si el gobierno iniciaba una nueva ofensiva militar de exterminio contra el zapatismo.

Por "encargo de don Durito de la Lacandona", Marcos le entregó una flor de papel y después, durante una conferencia de prensa conjunta, explicó:

Con las visitas de Oliver Stone, Edward James Olmos, Régis Debray y ahora Daniela Mitterrand, los zapatistas queremos dar una señal clara de que existen dos políticas internacionales. La del gobierno, que busca ayuda en el extranjero para hacernos la guerra, y la del Ejército Zapatista, que recurre a sus amigos en todo el mundo para decirles que deseamos sinceramente la paz [...] El gobierno ha apostado su futuro a su imagen virtual en el extranjero. A Zedillo no le importan las manifestaciones en

el Zócalo, sino lo que se diga fuera del país. [Marco Antonio] Bernal estuvo en Europa vendiendo la mentira de que el conflicto en Chiapas ya está resuelto [...] pero están estableciendo un cerco de tipo militar que en los manuales de contrainsurgencia norteamericanos se llama *lazo corredizo*.

¿Cómo influyeron las visitas de Stone, Olmos, Mitterrand y Debray al interior de la negociación? Fue obvio que a la delegación gubernamental no le afectó. Pero al Estado mexicano sí, y al ejército también. Porque para la estrategia contrainsurgente cuantos menos ojos y testigos haya, mejor. Y porque una de las claves de la estrategia del Estado fue no darle ninguna dimensión internacional a la problemática de Chiapas, ni posibilidad de que vía la *beligerancia* del EZLN se tuviera que reconocer otra legislación y otras actuaciones multilaterales (como la ONU y la OEA) para resolver el conflicto. Ése fue un tapón de origen de la estrategia del Estado: todo lo que fuera participación internacional, incluida la prensa, para el gobierno y el ejército significaron focos rojos, porque ello atentaba contra su argumento central de que el de Chiapas es un problema local, no nacional y mucho menos internacional.

De allí que la presencia de personalidades extranjeras resultó molesta para el gobierno y los militares, mientras que el EZLN se benefició, y eso fue una clave de la IV Declaración de la selva Lacandona. Ahí los zapatistas definieron con precisión distintos niveles e iniciativas simultáneas: EZLN como fuerza indígena; su articulación con otros movimientos indígenas (nacionales e internacionales); la Constitución de un Frente Zapatista de Liberación Nacional (político-legal); la edificación paralela y simultánea de un Movimiento de Liberación Nacional; la articulación continental aglutinada en torno a la lucha contra el neoliberalismo; la articulación intergaláctica, vía Internet... fueron otras tantas dimensiones jugadas por el EZLN que cobraron relevancia y le ayudaron a contrarrestar la estrategia oficial.

Pero la *diplomacia virtual* del canciller Gurría tenía algunos aliados furtivos que amplificaban la verdad oficial. Dos asomarían su rostro por esos días: el corresponsal de *Le Monde* en México, Bertrand de la Grange y el corresponsal del *Miami Herald*, Andrés Oppenheimer. Ambos, en la tónica del nieto del dictador Porfirio Díaz, Carlos Tello Díaz y su tutor Héctor Aguilar Camín.

La visita de Danielle Mitterrand a Chiapas coincidió con la publicación de un comentario en París, de la revista humorística *Charlie Hebdo*, que vino a revelar hasta dónde había calado el fenómeno del zapatismo en Francia. Firmado por Olivier Cyran, director del semanario, el texto se llamó: "Según *Le Monde*, Marcos usaría un pasamontañas Hermes", y anunciaba en un subtítulo: "*Le Monde* revela que los zapatistas mexicanos no son otra cosa que demagogos expertos en mercadotecnia y sus simpatizantes franceses —entre ellos *Charlie Hebdo*— astrosas víctimas de la moda. El problema es que el autor de ese artículo es adepto de otra moda: la manipulación informativa."

La reproducción del artículo en México, por Jaime Avilés (*La Jornada*, 207 IV/96) provocó un gran berrinche de parte de De la Grange, a quien de paso Avilés acusó de ser parte de una campaña contra el EZLN, motivo por el cual *Le Monde* envió a La Realidad a Debray, luego de las protestas de círculos intelectuales galos por las distorsiones de su corresponsal en México.

Escribió Olivier Cyran:

¿Innovadores y estimulantes los zapatistas? ¡Qué va! En su edición del 10 de abril *Le Monde* corrige algunas ideas banales. "En cuestión de mercadotecnia, estos revolucionarios se las traen", afirman Arianne Chemin y Bertrand de la Grange en un artículo conjunto. Como pruebas de cargo citan, con una pesada ironía, la invitación del EZLN a Jodie Foster y Kevin Costner, o más aun, el encuentro del subcomandante Marcos con Oliver Stone.

No es cuestión de ver en estos gestos una tentativa, fútil quizá, de llamar la atención de los medios sobre una rebelión que, a falta de apoyo internacional, corre a cada instante el riesgo de ser aplastada por los blindados mexicanos. Si los zapatistas se obstinan en sobrevivir pacíficamente en su selva, sitiados por los militares y diezmados por las enfermedades, es sólo para hacerse los interesantes ante la crema y nata del *show-biz* (las estrellas del entretenimiento de Hollywood).

¿Su llamado a la reunión intergaláctica de este verano? "¡Demagogia!" La modesta corriente de

simpatía que Marcos provoca en Francia no es sino la resurrección de un "romanticismo revolucionario para insurrectos en busca de una nueva Meca". Un fenómeno de moda, en suma.

Para dar crédito a esta tesis, *Le Monde* encontró síntomas alarmantes: "Las tardeadas-tequila y el entusiasmo tercermundista en las universidades", una manta "¡Viva Zapata!", en una manifestación contra el Grupo de los 7 en Lille, y también el número especial de *Charlie Hebdo*. Desgraciadamente, los autores no dicen cómo detener esta avalancha espectacular de "escalofríos y pasiones" [sic]. No es más que un juego de niños: bastaría con que los medios se pusieran a hablar de Chiapas, exactamente como lo hace *Le Monde*. Efecto de vacunación garantizado. Esperemos los reportajes sobre los travestís en pasamontañas o las citas de Marcos en el noticiero de Ivan Levai.

Pobre Bertrand de la Grange. No ha digerido bien el rechazo glacial de Marcos a su petición de entrevista en enero pasado. Corresponsal de *Le Monde* en México, De la Grange es conocido incluso entre sus propios colegas como una suerte de cónsul neocolonial, lleno de vieja ternura por los militares.

En octubre de 1995 De la Grange firmó un artículo en el que se esforzaba por demostrar que los zapatistas habían "perdido el apoyo de los indios", con una argumentación basada 90% en declaraciones de militares mexicanos. Como de costumbre. Sólo que, por esta vez, el *lamebotas* fue sorprendido en flagrante delito de manipulación. En ese artículo De la Grange atribuye a un cura de Ocosingo, Rafael Díaz, la terrible confesión según la cual los zapatistas contribuyeron a "destruir el tejido social". Un notición, ya que Díaz forma parte de los pocos sacerdotes que apoyan al EZLN.

Un lector de *Le Monde*, que conoce personalmente a Rafael Díaz, quedó admirado de este viraje y le escribió para pedirle información. Respuesta indignada del religioso: "Varios de mis amigos en Francia, que han leído el artículo del señor De la Grange, me han dicho, como tú me lo dices también, que él tiene la costumbre de deformar la realidad. Sería interesante saber cuáles son los intereses que él tiene en difamar a los zapatistas y a la Iglesia. Él pone en mis labios afirmaciones falsas. Yo le dije que el ejército mexicano es el responsable de la destrucción de las comunidades tzeltales, a través del alcohol, la prostitución y la droga."

Sin embargo, para los lectores del periódico de referencia Díaz culpa a los zapatistas de la destrucción del tejido social, mientras que en realidad el sacerdote responsabiliza al ejército por esa situación. Este es un montaje tan deshonesto, que ni P.P.D.A. [considerado como uno de los periodistas menos confiables de Francia] se habría atrevido a hacerlo. *Le Monde* se ha negado, hasta ahora, a publicar una rectificación al respecto. Quizá para no ser víctima, a su vez, de la "mercadotecnia" de los zapatistas...

Abril coincidió también con los "descubrimientos" de droga por parte del general Mario Renán Castillo en las puertas de sus cuarteles en Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas —¡justamente en torno de los *Aguascalientes* construidos por los zapatistas!— y con el lanzamiento del nuevo *best seller* de Andrés Oppenheimer, *México: en la frontera del caos*. Como su amigo De la Grange, Oppenheimer es un periodista privilegiado por sus fuentes en la inteligencia militar, dato que no oculta aunque se cuida bien de encubrir a sus informantes reales. Hizo un buen refrito periodístico de *La rebelión de las cañadas* de Tello, con algunos pocos nuevos datos *sembrados* y que provocaría una agria polémica entre Oppenheimer y Denise Dresser.

Cultivador del género literario de la realidad virtual, como lo demostró su anterior libro, *La hora final de Castro* (1992), donde pronosticó "la inminente caída del comunismo en Cuba", en el caso de los zapatistas Oppenheimer usó, según Dresser, "ciertas fuentes cuestionadas o cuestionables" —entre las que cita documentos provistos por seguridad nacional— y concluye que

no sería sorprendente que se convirtiera en libro de cabecera de antimexicanistas como Jesse Helms o Alfonse D'Amato: no sólo por las credenciales profesionales de Oppenheimer, sino porque el libro — aunque se jacta de lo contrario— alimenta las peores percepciones del país [...] Habrá muchos estadounidenses que se sentirán tentados de anexas a México y convertirlo en un club de golf ("Oppenheimer, corresponsales y caos", Denise Dresser, *Enfoque*, 19/V/96).

No dejó de ser curioso el título del libro de Oppenheimer, que implícitamente avala la teoría

del caos, así como la amplificación que hizo de él un cuadro orgánico de los servicios de inteligencia estadounidenses, el cubano-norteamericano Carlos Alberto Montaner, uno de los autores del *Manual del perfecto idiota latinoamericano*. ¿Fue el de Oppenheimer un producto hecho por encargo, en el marco de una ofensiva de desestabilización contra México? Según lo que sugería Denise Dresser, sí.

Como antecedente, vale la pena citar las revelaciones de John Horton, exjefe de operaciones de la CÍA entre 1948 y 1975, quien en 1984 renunció al cargo de coordinador nacional de Actividades de Inteligencia para América Latina, a causa de la presión de la que fue objeto por parte del director de la agencia, William Casey, quien le exigió reescribir un informe sobre México durante la gestión de Miguel de la Madrid.

El informe original que Horton había entregado a su jefe y que fue producto de las deliberaciones de diversas agencias de inteligencia estadounidenses, contenía una visión positiva de la marcha de México y la labor del gobierno. Pero Casey, interesado en proporcionar una visión totalmente opuesta, pretendió que el analista lo modificara presentando los problemas económicos y políticos mexicanos como un "peligro para la estabilidad interna" del país, así como un riesgo indirecto para la seguridad global de Centroamérica y de Estados Unidos.

El analista prefirió renunciar a violar su integridad profesional presentando estimaciones que concordaran con las "políticas deseables" de Casey. Once años después *México: en la frontera del caos* también habría sido el libro de cabecera del ex director de la CÍA; sólo que ya había muerto.

"Cunden *guardias blancas*: CNDH. Hay omisión o tolerancia de las autoridades: Madrazo." Ése fue el titular del diario *La Jornada* del 15 de enero de 1996, que en el cuerpo de la nota destacaba que en siete estados mexicanos se reportaba la mayor actividad de los grupos paramilitares: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y el estado de México.

Según Jorge Madrazo, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las "guardias blancas" son "un fenómeno que se presenta con *contemplación*, donde la autoridad es por lo menos omisa o tolerante en que particulares realicen funciones que sólo corresponden a las corporaciones policíacas [... "Guardias blancas y caciques es casi hablar del mismo tema", declaró Madrazo, quien citó entre otros los sucesos sangrientos de Chicomosuelo (donde seis personas perdieron la vida en enero de 1995), Nuevo Zinacatlán y Palenque].

En Chiapas, casualmente, empezaba el tiempo de seca y, como venía advirtiendo Marcos, era una época ideal para que el ejército intentara su propia operación "Tormenta del Desierto". En Los Altos se registraba un inusual movimiento de tropas y los zapatistas esperaban una nueva ofensiva militar; aunque según la SDN, eran simples operativos de seguridad en el combate a la delincuencia e indocumentados.

Sin embargo, reportes de prensa hablaron de sobrevuelos nocturnos de aviones y de helicópteros; durante el día convoyes militares circulaban a diario, cruzando lenta y perturbadoramente el territorio de las comunidades indígenas, con armas y cámaras de video visibles, y con los números de identificación de los vehículos cubiertos de lodo; preparativos para la instalación de más campamentos y guarniciones militares muy cerca de donde vive la población civil; incursiones de soldados y su instalación en pequeñas comunidades; visitas repentinas de vendedores y distribuidores de mercancías no requeridas; infiltración de elementos de la PGR disfrazados de curas, monjas, periodistas o de benefactores extranjeros.

Todos esos movimientos "normales", según el general Renán Castillo, jefe de la fuerza de tarea Arco Iris, se daban en el contexto del anuncio de William Perry sobre maniobras conjuntas de los ejércitos de Estados Unidos y México. Como señaló Paulina Fernández, "hay razones para pensar que se ha estado preparando el terreno informativo para justificar como en otros países de América Latina, la participación del ejército estadounidense so pretexto de ayudar al ejército nacional del país en cuestión a combatir el narcotráfico... y otros problemas" (*La Jornada*, 22/11/96).

A comienzos de mayo, la sentencia contra Javier Elorriaga y Sebastián Entzin movilizó a la Conai y la Cocopa para evitar la ruptura del diálogo de San Andrés. Integrantes de ambas instancias mostraron preocupación y no descartaron la posibilidad de una ruptura total del proceso negociador. Según varias

fuentes de la Conai y la Cocopa, la puja de posiciones entre los "duros" y los "negociadores" al interior del gobierno podía hacer descarrilar la salida pacífica.

La noche del 13 de mayo, luego de una reunión de cuatro horas entre miembros de la mediación, ambas instancias emitieron un comunicado donde expresaron "preocupación por la forma en que, sin llegar a la ruptura, se ha afectado el proceso de diálogo". Presumiblemente, el sector "duro" de civiles y militares que rodea al presidente Zedillo estaba tratando de convencerlo de que existían condiciones para el aniquilamiento del EZLN, al menor costo político para el Estado. ¡Y que había que golpear ya! Quienes apostaban a una victoria militar en seis horas sobre el EZLN habían evaluado varios escenarios bélicos posibles y sus adecuaciones militares, y estimaban que era el momento de actuar.

En ese contexto resultó esclarecedora una denuncia del superior de los dominicos en México, padre Miguel Concha, que vino a desnudar algunos de los elementos contemplados por el sector belicista del Estado. Señaló en la prensa que los estrategias gubernamentales habían previsto "la dislocación de unidades, aseguramiento de vituallas y pertrechos, reclutamiento de personal de reserva, la modificación o creación de leyes que sirvan para dar legalidad a los actos de la guerra, afinar la herramienta de la propaganda, fortalecer las relaciones internas e internacionales con sus amigos o aliados naturales y con los aliados tácticos, así como para neutralizar la acción de sus adversarios [EZLN] y la de sus aliados y amigos" ("No a la guerra, sí a la paz", *La Jornada*, 1 I/V/96).

Concha, a la vez miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que el boicot de la delegación oficial durante las dos últimas rondas de San Andrés alimentaba la sospecha de que se trató de un esfuerzo deliberado y muy bien planificado del gobierno para hacer naufragar la salida pacífica. Sugirió, incluso, la existencia de un plan ("esfuerzo", dijo) que "tiene objetivos, cronograma, ejecutores, medios [y que] es dirigido por alguien que cuenta con las facultades suficientes para ello [...] Se trata de un proceso único en el que se conjugan diversas modalidades y actores, con mayor o menor intensidad, de acuerdo con las necesidades coyunturales pero de manera sistemática e ininterrumpida".

Sin embargo, el gobierno no estaba en las mejores condiciones políticas para ordenar una ofensiva militar de ese tipo. Tampoco existían garantías de que la tropa de élite de la guerrilla no estuviese en la montaña y que, como había ocurrido desde febrero de 1995, sus combatientes tuvieran órdenes de evitar cualquier choque frontal con el ejército.

Durante una entrevista con el poeta argentino Juan Gelman, Marcos había denunciado que inteligencia militar venía trabajando en detectar el movimiento del grupo de mando del EZLN con la intención de descabezarlo. Ésa parecía ser, en verdad, la apuesta más fuerte del gobierno. Para ello y según el estratega del EZLN, existieron varios planes de atentado que fueron descubiertos a tiempo; entre ellos, disfrazar como una purga interna o como una acción de la disidencia el asesinato de la dirigencia zapatista. Otra variante era hacerlo aparecer como un ajuste de cuentas por parte de los terratenientes.

La hipótesis de una nueva ofensiva militar oficial pareció consolidarse cuando, el 19 de mayo, efectivos del Grupo Especial Ledín del ejército mexicano peinaron las faldas de los cerros entre los parajes Tianal y Sikilucum en busca de "enervantes" e instalaron cuatro campamentos alrededor del *Aguascalientes II*, a un kilómetro del poblado de Oventic, montaña arriba. La incursión militar provocó que el EZLN declarara el estado de alerta máxima. La coartada del narcotráfico fue alimentada por filtraciones de prensa del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), que identificó aun supuesto cártel del Sureste en los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco, versión que no fue desechada por el general Castillo.

Pero había otros elementos que contribuían a enrarecer el ambiente. El 5 de mayo estalló de nuevo la violencia en San Jerónimo Bachajón, población tzeltal del municipio de Chilón, cerca de Ocosingo. Fue un domingo trágico, con seis asesinados, cuatro de ellos miembros del grupo paramilitar de filiación priísta, los Chinchulines, a manos de unos 300 ejidatarios, que un día antes habían sido copados en un cruce de caminos por elementos del grupo armado. La prolongada impunidad del también llamado Frente Cívico "Luis Donald Colosio" u Organización Juvenil Independiente, que según denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actúa con el apoyo de

elementos policíacos estatales, provocó por parte de una comunidad harta de injusticias, vejaciones, secuestros y torturas una reacción tipo Fuenteovejuna, que terminó con el asesinato del jefe de la banda paramilitar, Gerónimo Gómez.

En represalia, miembros de los Chinchulines sometieron a Bachajón a un virtual estado de sitio, mataron a dos campesinos e incendiaron 25 casas y ocho vehículos, y parte de la iglesia y del convento de los jesuitas. El cadáver del profesor Gerónimo Hernández, del PRD, apareció entre las ruinas de su casa incendiada con las manos atadas y un balazo en el cráneo.

Aunque la Academia Española [de la lengua] ofrece de Chinchulines una definición gastronómica (ya que es un vocablo quechua que designa a las tripas menudas), en la picaresca mexicana se denomina de esa manera a las ladillas, esos parásitos que se alojan en las partes vellosas del cuerpo humano cuya mordedura es molesta en extremo, y cuyo tamaño milimétrico los hace muy difíciles de localizar y extirpar. Metafóricamente, entonces, los Chinchulines significan una molestia lacerante y de la que no es fácil, y quizá ni posible, desembarazarse. De ese modo, es exacto el mote con que los sufridos habitantes de Chilón han bautizado a una banda armada, con fines políticos, que asola la región desde hace por lo menos ocho años", describió gráficamente Granados Chapa (*Reforma*, 9/V/96).

En realidad, los Chinchulines chiapanecos son fáciles de localizar. Surgieron durante el gobierno de Patrocinio González y desde un comienzo contaron con el apoyo abierto del hoy diputado federal priísta Rafael Ceballos Cancino, y más recientemente de Rafael Sánchez, también legislador del PRI. Y según denuncias de la iglesia local y de varios grupos de derechos humanos, han sido solapados por el gobernador Ruiz Ferro y su jefe de gobierno, Eraclio Zepeda.

Pero la violencia paramilitar también estaba presente en el municipio de Tila, donde el autodenominado grupo priísta Paz y Justicia venía cometiendo secuestros y asesinatos de opositores desde 1994, con el apoyo de políticos como el diputado local Samuel Sánchez. Las denuncias, entre ellas las del párroco de Tila, Heriberto Cruz, señalan que las actividades de las organizaciones Paz y Justicia y los Chinchulines aumentaron en los municipios del norte de Chiapas (principalmente Sabanilla, Tila, Chilón, Tumbala y Salto de Agua), a partir de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995. Según Cruz, policías y militares han ocupado edificios de las iglesias de esa región: "hasta el atrio han invadido" (*La /ornada*, 18/VI/96).

Otro grupo de características similares apareció en Sabanilla, en la frontera con Tabasco, y el 22 de julio asesinó a tres personas e hirió a ocho. Los paramilitares se hicieron pasar por "zapatistas", ya que llevaban el rostro cubierto con pasamontañas y emboscaron a una camioneta de pasajeros. Los muertos fueron brutalmente macheteados.

En un estado militarizado al extremo como Chiapas, donde el ejército gasta 200 millones de dólares anuales para mantener su estructura de guerra —según denuncias formuladas en Ginebra por Javier Elorriaga—, sólo es posible que proliferen y actúen bandas armadas y nunca se encuentre a los responsables de los crímenes si se cuenta con el visto bueno del gobierno.

De acuerdo con el *Manual de sabotaje y guerra psicológica de la CÍA para derrocar al gobierno sandinista*, los conflictos de baja intensidad tienen como uno de sus objetivos generar un consenso contra la fuerza enemiga que, como tal, conlleve un alineamiento activo y organizado en favor de la contrarrevolución. Se busca promover una

adhesión emocional, el reclutamiento de contactos locales y su organización celular, la infiltración de organismos de la sociedad civil o *grupos blancos* (cuadros internos de sindicatos, asociaciones agrarias, juveniles, profesionales y otras) y el montaje de frentes fachada. Por ende, se intenta desarrollar el aparato contrarrevolucionario en las bases sociales. Pero también se procura apoyo logístico y de información de inteligencia (Madrid, Editorial Fundamentos, 1985).

Además, según el manual, se recurre a la coacción y a la violencia selectiva y, adicionalmente, se aconsejan actos de provocación o de terrorismo indiscriminado contra la población civil

(violencia no selectiva), de acuerdo con el axioma de que "el dilema es ganar la masa o destruirla". Por lo que esta cara de la guerra psicológica tiene una matriz terrorista, que está más encausada al apoyo y desarrollo del aparato contrarrevolucionario que al servicio de las necesidades y aspiraciones populares.

Según un informe del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", a mediados de 1996 se vivía en el norte de Chiapas un estado de guerra civil latente. Diversas ONG denunciaron la convivencia de las bandas paramilitares con las fuerzas de seguridad de la entidad. Al margen de la zona de conflicto, en el periodo 1994-1996 murieron en Chiapas por problemas agrarios más de 600 campesinos de una docena de organizaciones de base diferentes; todos a manos de agentes de Seguridad Pública del estado, "guardias blancas" o paramilitares.

Todo indicaba que se estaba en una fase avanzada de la creación de un "consenso" contrarrevolucionario, que tenía como zona experimental el norte de Chiapas. De acuerdo con los esquemas contrainsurgentes, los Chinchulines y demás grupos paramilitares iban camino a reeditar, en un corto plazo, a los otrora *combatientes de la libertad*, como llamó Ronald Reagan a los *contras* nicaragüenses, financiados y adiestrados por la CIA.

Por otro lado, la construcción de un consenso de base activo y organizado resulta más fácil para organismos y agencias civiles, no militares. De ahí la importancia que, en el marco de una guerra de baja intensidad, adquiere la participación del sector público y privado, como parte de una estrategia cívico-militar donde se diluye la distinción entre la guerra y la paz.

Se trata de una fase preventiva, disuasiva, que busca evitar la escalada del conflicto. De allí que el concepto de iniciativa, tan álgido en esta doctrina, conserve su vitalidad incluso en periodos no armados. Se trata, sobre todo, de desarrollar tareas de influencia en el modelo de sociedad (sistema político y económico), con el fin de legitimar y mejorar la imagen del gobierno local, puesto que su deterioro (ostensible en el caso del gobernador Ruiz Ferro) configura un obstáculo para el logro de consenso y apoyo popular.

A esa tarea contribuyen de manera directa las campañas de *acción cívica* y la "ayuda humanitaria" del ejército, como parte de una idea global que apunta a restaurar la estabilidad institucional. En el caso de El Salvador, por ejemplo, la *acción cívica* abarcó desde el montaje de organizaciones juveniles (las Brigadas Juveniles Patrióticas) hasta el desarrollo de proyectos educativos por las fuerzas de seguridad (por ejemplo, la Policía de Hacienda realizó labores de alfabetización). Y los propios comandantes de los batallones de contrainsurgencia aportaron lo suyo: al llegar a los poblados organizaban mítines con la población y distribuían "ayuda humanitaria", principalmente a ancianos y enfermos.

En el caso de Chiapas y según consignó el periodista Jorge Luis Sierra, el diputado priísta jalisciense, general Luis Garfías, no dudó en considerar que la labor social que realiza el ejército es parte de la guerra psicológica.

[Los zapatistas] saben que la guerra que ellos quieren es la guerra de la propaganda, la guerra de los periódicos, la guerra de los medios de comunicación [...] Es una guerra psicológica. La contraguerra psicológica de las Fuerzas Armadas consiste en la labor social, dándole atención a las comunidades marginadas, atención médica, llevándoles comida, en las escuelas, abriendo caminos, hablando a los medios de comunicación, contrarrestando las supuestas violaciones a los derechos humanos ("Fuerzas Armadas. La crítica lealtad", *Enfoque*, 17/XII/95).

Como indican los remozados cánones de la guerra de baja intensidad, la acción psicológica realiza la persuasión frente a frente, en el nivel local y macrosocial. Como lo expresó en su momento el ex asesor de seguridad nacional estadounidense, Gaspar Weinberger, la idea-fuerza es construir una sociedad estabilizada y con menos vulnerabilidad. Si en la GBI el conflicto es esencialmente político y el objetivo estratégico consiste en ganar el apoyo de la población civil, entonces resulta vital garantizar la credibilidad del gobierno ante los ciudadanos. De allí que en esta etapa preventiva, en el

caso de Chiapas se esté configurando una "democracia de seguridad nacional" o "democracia militarizada".

En tal sentido y como informó Jorge Fernández Menéndez, el gobierno creó una especie de "equipo de crisis" para que asumiera el control de esa estrategia en los tres frentes (las negociaciones, la gobernabilidad y la política social) de manera simultánea. En ese equipo Fernández mencionó, entre otros, a Luis Téllez, Marco Antonio Bernal, Emilio Chuayffet, Julia Carabias y Carlos Rojas ("La estrategia de Chiapas", *El Financiero*, 27/V/96).

Según el columnista, el principal coordinador y operador de esa estrategia es el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Carlos Rojas, quien desplegó un activismo inusitado al lado del gobernador Ruiz Ferro, "estableciendo contactos y haciendo trabajo político" con organizaciones sociales y políticas como la CIOAC y la Unión de Ejidos de la Selva. "A partir de ahora se verá a Rojas todas las semanas en Chiapas: implicará, sería absurdo ignorarlo, una suerte de intervención federal directa en apoyo a un gobierno estatal rebasado por las circunstancias", pronosticó Fernández.

Lo que algunos denominaron la danza de los billetes tuvo como contraparte "el baile de los políticos". Así, el 24 de mayo de 1996, mismo día en que los diarios capitalinos informaron sobre la gira de Zedillo por algunos municipios chiapanecos, aparecieron inserciones pagadas (a dos planas, en el caso de *La Jornada*) bajo el título "Bienestar y desarrollo sustentable en Chiapas: avances y metas", donde se reseñaba la inversión gubernamental durante 1995 y la prevista para 1996, en 14 rubros (alimentación, abasto, educación, vivienda y servicios básicos, reforma agraria, desarrollo agropecuario, etcétera) y donde destacaban un "Programa Emergente de Las Cañadas" y un "Programa para las Zonas Norte, Altos y Selva". De acuerdo con el desplegado, los gobiernos federal y estatal programaron para el ejercicio presupuestal 1996 un gasto total de 9 692.9 millones de pesos. Además, la derrama crediticia del sistema financiero de fomento en 1996 ascendería a 2 921.9 millones de pesos.

Y, en efecto, Carlos Rojas y Ruiz Ferro comenzaron a aparecer un día en Ocosingo, otro en Jiquilpan, uno más en Amatan o en La Grandeza y Amatenango de la Frontera, en la Sierra Madre de Chiapas —donde los indígenas mames, cakchiquiles y jacaltecos hacía 20 años que no eran visitados por una autoridad estatal— derramando proyectos y algo de dinero como "palanca de armonía" y "reconciliación", según las palabras de Marco Antonio Bernal, a quien tocó anunciar una inversión federal de 110 millones de pesos durante 1996, en el área de Las Cañadas, zona de influencia zapatista.

En el fondo, el gobierno reprodujo de manera inercial la vieja usanza de enfrentar los problemas con respuestas de tipo populista, haciendo gala del clientelismo, la inversión interesada, la intermediación convenenciera y la política de Estado partidista, y en vez de abandonar fortaleció la tradición autoritaria de gobierno de caciques, caudillos y patrones.

Por otra parte, los informes oficiales nunca revelaron a cuánto han ascendido los costos de la guerra de baja intensidad en Chiapas, que con su óptica no convencional y política del conflicto puso el acento en unidades militares móviles (grupos de élite, de reacción inmediata y órganos estilo comando) y en el apoyo aéreo (aviones y helicópteros artillados, tropas helitransportadas).

Según una ponencia anónima presentada en la mesa de Diálogo de la Sociedad Civil ("¿Cuánto cuesta el ejército federal en Chiapas?", 18/1/95) y otros cálculos posteriores a la ofensiva del 9 de febrero realizados por Antonio García de León, el costo de la guerra no se reducía precisamente a "tinta e Internet".

De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, García de León manejó que en el año fiscal de 1994 se destinaron 6 200 millones de nuevos pesos para gastos de defensa (para 1995 la cifra se incrementó en 14%: se presupuestaron 7 100 millones). Los 880 millones de pesos adicionales eran equivalentes en 1994 a 251 millones de dólares y estuvieron destinados a Chiapas: cifra cercana a la de los posibles gastos de la campaña militar durante 1994.

La alimentación de la tropa, calculada a 15 nuevos pesos por persona al día, alcanzaría los 219 millones

de nuevos pesos, es decir, 63 millones de dólares, de los de 1994. Este costo ha crecido después de la devaluación, gracias a que varios insumos son importados: material militar, de cómputo y —sobre todo— la comida, que es suministrada en parte por el ejército de Estados Unidos [sic]; raciones de *corned beef hash, pork and rice in barbecue sauce, Tabasco sauce*, etcétera, que han generado ya un nuevo problema de basura en las localidades ocupadas, lo cual hace ascender la cifra hasta 102.2 millones de dólares al año. Gracias a los permanentes vuelos de reconocimiento, el combustible también nos cuesta: seis millones de dólares al año, por el incremento en ciertos periodos, y eso si se consideran sólo 1 500 unidades con un gasto diario de 10 dólares. La suma total, sin contar la reciente ofensiva (9/II/95), el acondicionamiento y la fortificación, ni la compra de nuevos aviones, tanquetas y helicópteros durante la gestión de Carlos Salinas ni los gastos de municiones, pérdida de aparatos y vidas, gastos de hospitalización (ni, por supuesto, los salarios de asesores militares extranjeros, legisladores de Cocopa y funcionarios de PGR y Gobernación, o asesores de Aric-Unión de Uniones oficiales que están ya activos en el plan de contrainsurgencia) asciende, por lo menos, a la suma de 200 millones de dólares como gasto de guerra anual en Chiapas ("El costo de la guerra". Antonio García de León, *La Jornada*. 11/V/1995).

Datos del propio Pentágono aseguran que México tuvo gastos militares totales en 1994 por 2 246 millones de dólares. 40% arriba de lo que había invertido en 1993. A su vez, cifras oficiales mexicanas, citadas por Carlos Acosta, señalan que en 1995 la SDN (ejército y fuerza aérea) ejerció un gasto directo de 7 685 millones, mientras que la Secretaría de Guerra y Marina erogó 2 657 millones. Para 1996, el presupuesto destinado a la SDN fue de 11 122 millones de pesos y para la armada, de 3 849 millones. Es decir, un incremento de 44.7% en el primer caso, y de 44.8% en el segundo. Con esas cantidades las fuerzas armadas ocuparon el segundo lugar —después de la Secretaría de Educación Pública— dentro del gasto de la administración pública centralizada (*Proceso*. 4/VIII/96).

Aunque tales datos son globales y sólo un porcentaje de ellos se destinaron a Chiapas, la militarización del estado creció desmesuradamente entre 1995 y 1996, según sendos mapas elaborados por la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz (Conpaz). La organización identifica por lo menos 111 asentamientos militares en Chiapas, siendo ostensible el aumento de cuarteles y campamentos al interior y en torno de la zona de conflicto.

Resultados de una misión de observación realizada por integrantes de la sociedad civil a comienzos de junio de 1996, que recogieron testimonios entre la población de cinco regiones: Ocosingo-Zapata (San Miguel, La Garrucha, Patihuitz, Rómulo Calzada, El Prado, La Soledad, La Sultana, Bethania, San Quintín y Zapata); Ocosingo-Taniperlas (El Edén, Monte Líbano, Taniperlas); Ocosingo-Chilón-Sabanilla (Cuxulha, Sibaca, Patihuitz, Sabanilla); San Cristóbal-Palenque (Roberto Barrios) y Tuxtla Gutiérrez (penal de Cerro hueco y desplazados de Bachajón), permiten identificar una serie de acciones llevadas a cabo por el ejército mexicano.

Entre esas acciones, el informe de Conpaz destaca patrullajes día y noche en comunidades y caminos ejidales (utilizando incluso vehículos civiles), así como vuelos rasantes de manera constante y periódica e incursiones permanentes en las montañas aledañas a las comunidades: fotografían, filman, piden datos personales y registran las placas de los vehículos de todas las personas que pasan por los caminos ejidales; invasión de potreros y terrenos ejidales para la construcción de campamentos militares; hostigamiento selectivo a miembros de comunidades y al turismo; entrenamiento militar a grupos de pistoleros; cultivo de enervantes por parte del ejército federal así como la sospecha de los pobladores de que los aviones militares en vuelos nocturnos tiran semillas de mariguana sobre los terrenos de los campesinos; allanamientos de viviendas sin orden judicial e interrogatorios constantes sobre dirigentes de organizaciones sociales y del EZLN y sobre la tenencia de armas; construcción de trampas y uso de perros en contra de los habitantes de las comunidades; destrucción de siembras de maíz y frijol; introducción de la prostitución y el alcoholismo en las comunidades; apoyo preferente a miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo "oficial" (ARIC progubernamental).

Entre las secuelas de esas y otras acciones del ejército se señalan el desabasto de las

comunidades, como consecuencia de que la población no puede salir libremente a trabajar en las tareas del campo por la presencia de soldados; incremento del nivel de confinamiento de la mujer indígena debido al miedo de ser hostigadas (sexualmente) o violadas por miembros del ejército; la población manifestó que la presencia militar ha causado un impacto negativo en la salud mental (depresión, aumento de la violencia intrafamiliar e intracomunitaria, incremento de padecimientos psicosomáticos y de consumo de alcohol); incremento de la polarización en las comunidades indígenas, lo que trastoca su vida social y familiar; gasto militar desmedido en relación con el gasto social en la zona.

Asimismo, la ubicación de soldados con armas de tecnología avanzada en áreas comunales representa una posición de guerra, ya que ocupan lugares estratégicos en torno de las poblaciones, con guardia militar en torretas y trincheras localizadas afuera de los cuarteles y en posiciones de vigilancia sobre la comunidad; la ocupación militar no permite que la sociedad civil pueda decidir libremente el uso y manejo político de su territorio; los recursos públicos destinados al desarrollo de las comunidades (abono, maíz, etcétera) son asignados, preferentemente, a los grupos incondicionales del gobierno, con la intención de suscitar confrontaciones y dividir a las comunidades. En forma paralela, se permite la actuación impune de grupos paramilitares como los Chinchulines y Paz y Justicia que han provocado la migración de centenares de desplazados, mientras la composición de los grupos de poder local (caciques) no ha sufrido cambio alguno.

En rigor, el ejército aplicó en Chiapas el esquema del coronel John Waghelstein, asesor estadounidense veterano de la guerra civil en El Salvador, que plantea que en una situación de contrainsurgencia "el único territorio que se quiere tomar es el de las seis pulgadas existentes entre las orejas del campesino... En los conflictos de baja intensidad hay tres palabras importantes de recordar y son inteligencia, inteligencia e inteligencia".

CAPITULO 12

Elisa, Javier, Fritz y los quebrados

El 2 de mayo de 1996, las condenas en contra de Javier Elorriaga y Sebastián Entzin a trece y seis años de prisión, respectivamente, por el delito de terrorismo, desencadenaron una grave crisis política y amagaron con interrumpir las negociaciones de paz entre el gobierno y el EZLN.

Pese a los desmentidos oficiales y a las invocaciones al "imperio de la ley" y la "autonomía" del poder judicial formulada por altos funcionarios del régimen, la decisión política de sentenciar a Elorriaga y Entzin —después de 14 meses de prisión— salió del centro, presumiblemente de la PGR y Los Pinos, y la misma se inscribió dentro del plan contrainsurgente reactivado el 9 de febrero de 1995. Ese día Ernesto Zedillo apareció en televisión actuando más en calidad de fiscal o agente del Ministerio Público que de presidente de la República, acusó a Javier Elorreaga (sic), alias Vicente y a cuatro personas más: Rafael Sebastián Guillen Vicente, alias Marcos; Fernando Yáñez, alias Germán; Jorge Santiago, alias Santiago, y Silvia Fernández Hernández, alias Sofía o Gabriela, de ser los "principales" dirigentes del EZLN.

Después se supo que tanto María Gloria Benavides Guevara —quien al salir de prisión en los años setenta adoptó el nombre de Elisa— como los ocho presuntos zapatistas de Cacalomacán, Estado de México, y los siete de Yanga, Veracruz, así como el propio periodista e historiador Elorriaga habían sido detenidos horas antes de que el presidente ordenara la cacería de supuestos miembros del EZLN, y que el ejército había entrado con tanquetas y artillería pesada a las zonas de influencia zapatista en Chiapas.

Desde un inicio el proceso contra Elorriaga fue calificado como una aberración jurídica: su detención en un retén de la ranchería de Gabino Vázquez fue un acto ilegal porque la practicaron militares, sin ninguna orden y no //; fraganti, es decir, durante la comisión de hechos delictuosos. Luego, el juez Juan Manuel Alcántara dictó sentencia sin más prueba que la acusación de Zedillo por televisión y con base en las declaraciones de un testigo inexistente o desaparecido. Salvador Morales Garibay, y que por eso nunca fueron ratificadas. Tampoco se le imputaron la comisión de hechos específicos, y resultó evidente que Elorriaga no incurrió en ninguno de los actos materiales en que se concreta el delito de terrorismo: no utilizó explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego ni cualquier otro medio violento, por lo que resultó un "terrorista" por inferencia, es decir, por su presunta pertenencia al EZLN.

Simplemente, como declararía después Elorriaga, el juez alegó que él era parte de la Comisión de Ideología del EZLN "y como el EZLN es terrorista, el acusado es terrorista también".

Los delitos por los que Elorriaga y Entzin fueron encontrados culpables eran políticos, es decir, contra el Estado, y cuando eso ocurre éste tiene la obligación de sustentar ética y jurídicamente su afirmación, puesto que en un estado de derecho nadie está por encima de la ley y menos quienes están encargados de su cumplimiento. En un estado de derecho las acusaciones se apoyan en hechos, no en suposiciones, y no se castiga por lo que se piensa. Puesto que Zedillo —a partir de las declaraciones del otro acusador, que nunca se presentó y del que sólo se supo que dicen que dijo— y la PGR los condenaron por lo que para las autoridades representa el zapatismo, y no por los actos de terrorismo que, según el gobierno, ellos cometieron, Elorriaga y Entzin eran rehenes de conciencia.

La condena contra ambos por terrorismo provocó una enérgica respuesta del subcomandante Marcos, quien interpretó la sentencia como una acusación de que el EZLN era, a su vez, un grupo terrorista, con lo que la vía pacífica quedaba clausurada de manera unilateral por el gobierno. En un mensaje, Marcos dijo que el diálogo de paz había recibido un "golpe definitivo" y que la

decisión política de condenar a Elorriaga y a Entzin era una señal de guerra.

En una respuesta inmediata, Bucareli advirtió que si se rompía el diálogo se reiniciaría la acción penal contra los zapatistas. Así, las posturas de Gobernación y el EZLN se radicalizaron y tensaron el diálogo de paz que parecía dirigirse hacia un despeñadero.

El politólogo Luis Hernández Navarro, asesor del EZLN, dijo

que la sentencia fue una carambola a tres bandas: gracias a la decisión del juez Alcántara los zapatistas eran ahora terroristas, la Cocopa una instancia de mediación desgastada y en crisis — agudizada por la renuncia del diputado perredista Heberto Castillo, que acusó al gobierno de torpeza política al pretender usar a la comisión de legisladores como un instrumento para presionar al EZLN—, y la comisión negociadora gubernamental una instancia rebasada y con escasa influencia en la posible solución del conflicto.

Hernández intuyó que, movido por afanes protagonicos, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet enviaba señales de que prefería congelar y diluir el alcance de los compromisos alcanzados en la mesa sobre Derechos y Cultura Indígena, entre el gobierno y el EZLN. Es decir, se trataba de "achicar" la mesa de San Andrés para no "reventar" las negociaciones con los partidos políticos sobre la reforma electoral. En el punto que los zapatistas consideraban clave, el de la transición a la democracia, no había oferta gubernamental.

Desde esta perspectiva, la sentencia contra Elorriaga y Entzin no se debió a la iniciativa de un juez que procedió de manera aislada y errática, sino que operó como un elemento adicional de una política estatal elaborada a dos manos: mientras hablaba de paz, el gobierno preparaba la guerra. De que era una decisión política no quedó duda luego de que el negociador oficial, Marco Antonio Bernal, recibió la orden de Zedillo y Chuayffet de lanzarle a los zapatistas el señuelo de que el caso Elorriaga-Entzin debía "negociarse" en San Andrés, lo que vino a significar que para el gobierno la ley sí se negocia.

Paradójicamente, el gobierno reconocía la existencia legal del EZLN, con el cual dialogaba desde hacía un año, y el propio procurador Lozano, quien en febrero de 1995 acusó de terroristas a Elorriaga y Entzin, se retractó el 25 de abril de 1996, cuando al participar en la Conferencia Interamericana sobre Terrorismo, realizada en Lima, afirmó que el zapatismo armado no es una organización terrorista.

Pero lo que más llama la atención era que cuando fue detenido por los militares, Elorriaga servía de correo entre Zedillo y la guerrilla, según la revelación que nos hiciera en octubre de 1995 el subcomandante Marcos. Con posterioridad se supo, a partir de un par de editoriales de Miguel Ángel Granados, que nunca fueron desmentidos (Reforma, 2/IV/96 y 10/V/96) que Carlos Payan, entonces director de La Jornada y miembro del consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue el conducto para que el periodista Epigmenio Ibarra se convirtiera en el mensajero entre el presidente electo y el EZLN.

El historiador y también periodista Elorriaga quedó adscrito a esa tarea como miembro del equipo de Argos Servicios Informativos, una agencia productora de programas de televisión y videos, propiedad de Payan e Ibarra.

Un video de Argos, grabado por Elorriaga y con Epigmenio Ibarra en el papel de entrevistador y productor, fue usado como prueba del vínculo de Elorriaga con el EZLN: Viaje al centro de la selva, memorial zapatista.

¿Qué había ocurrido? ¿Capturó el gobierno a su propio mensajero, para acusarlo luego de pertenecer a una organización que estaba amnistiada? ¿Pudo Elorriaga, en su papel de cartero, haber cometido actos que sembraran el terror? O, como sugirió después el mismo Elorriaga desde su celda en el penal de Cerro hueco, ¿violaron el doctor Zedillo y Esteban Moctezuma el código de honor al ordenar su captura?

La conjetura de una traición por parte del presidente y su secretario de Gobernación hicieron que se especulara con que la sentencia buscaba salvarle la cara a Zedillo o que se estaba

"castigando" a Elorriaga porque las autoridades consideraron que procedió de manera inconveniente en su papel de mensajero, y no podían decirlo de forma pública. Pero, de no ser así, la sentencia adquiriría un carácter monstruoso, como la calificó Granados Chapa, pues se estaba penalizando la realización de una misión de enlace, pacificadora y útil.

Diversas fuentes vinculadas a las negociaciones, incluidos algunos legisladores, responsabilizaron de la medida al sector "duro" del gobierno, integrado por civiles y militares partidarios de una salida de fuerza.

En los hechos, desde abril anterior y con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el ejército realizaba acciones de penetración en territorio zapatista. Ese hecho era relevante porque se estaba en la temporada de siembras y la presencia armada inhibía a los campesinos en su tarea de preparar la tierra. Además, los peligros de un choque armado entre los militares y la base civil zapatista eran cada vez mayores.

Desde el punto de vista militar, la estación seca creaba condiciones óptimas para una ofensiva relámpago y de saturación por parte del ejército, similar al esquema utilizado por el general Schwarzkopf en la guerra del Golfo Pérsico, y algunos mandos castrenses estaban convencidos de que podrían acabar con el EZLN en seis horas.

Sin embargo, como se dijo, el gobierno no estaba en las mejores condiciones políticas para ordenar una ofensiva militar de ese tipo ni existían garantías de que los zapatistas no se hubiesen replegado a sus escondites.

En ese contexto había que ubicar la sentencia de un juez local de Tuxtla Gutiérrez contra Elorriaga y Entzin, que se apoyó en pruebas anteriormente rechazadas por los jueces federales que en octubre de 1995 absolviéron a María Gloria Benavides (la supuesta subcomandante Elisa) y a Fernando Yáñez (el presunto comandante Germán), identificados por el gobierno como los jefes "primero" y "tercero" del EZLN y acusados de los mismos delitos.

En los casos de Benavides y Yáñez, así como en los de Elorriaga y Entzin, la PGR y el presidente Zedillo se habían apoyado, para acusarlos de pertenecer al EZLN, en la presunta declaración del misterioso Morales Garibay, de cuya existencia tenía que dar cuenta el gobierno mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA), pues estaba en curso una denuncia sobre su desaparición caratulada como "caso 11 484" de la CIDH.

Como señaló Granados Chapa en su artículo "Agravios" (Reforma, 27/V/ 96), aparecido en los días en que Elorriaga y Entzin apelaron la sentencia en medio de una tormenta política, Morales Garibay se había hecho humo, aunque tal vez "se le oculta para protegerlo (y al mismo tiempo impedir que sustente las acusaciones que vertió o se le atribuyen, y que tan peligrosas consecuencias han generado)".

Si bien era cierto que un proyecto de Ley contra el Crimen Organizado incluía la figura de los "testigos sin rostro", al no haber sido aprobado todavía por el Congreso, jurídicamente no se podía aplicar a Morales Garibay. Sin embargo, las dudas subsistían: ¿dónde estaba Garibay?, ¿recibía protección policiaca?, ¿la PGR había puesto en práctica mucho antes de plantearlo como reforma legal la protección a testigos o canjeó información por perdón?, ¿estaba el gobierno actuando al margen de la ley?, ¿estaría muerto Garibay?

Pese a todas las anomalías, el juez Alcántara asumió el testimonio de Morales Garibay como imparcial, sin averiguar cómo y por qué formuló el testigo esa extraña acusación y sin querer advertir que éste no acudió ante el Ministerio Público por su libre y espontánea voluntad — "arrepentido" por haber traicionado y delatado a los principales dirigentes del movimiento en el que presuntamente militaba, como se intentó justificar desde círculos gubernamentales— sino en calidad de inculpado, según consta en un documento del 3 de marzo de 1995 en el cual la PGR informa que Morales "fue detenido habiendo rendido declaración ministerial dentro de la averiguación previa 1125/D/95", aunque más adelante señala que compareció de manera "voluntaria". Tampoco quedó claro de qué extraños privilegios gozó el testigo, que fue liberado sin causa legítima o dejó de ser "detenido" tan pronto formuló sus declaraciones.

El propio Alcántara nunca escuchó directamente a Morales Garibay ni éste compareció en ninguno de los juicios causados por su declaración ministerial. Sólo en el caso de Elorriaga y Entzin se le citó siete veces y jamás acudió ante el juez que requirió su presencia. Pero ello no pareció a la justicia motivo suficiente para restar crédito a su testimonio ni, de acuerdo con su criterio, la falta de rectificación disminuyó "su eficacia probatoria". Como observó Granados Chapa, al desestimar la ausencia de Morales el juez faltó a lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, que otorga al procesado el derecho de saber quién lo acusa y, eventualmente, carearse con él. Los careos sirven para encontrar la verdad que se busca y superar discrepancias, pero el juez consideró que no importaba tener o no presente al testigo. Y con ese rigor juzgó no sólo a dos personas, sino que puso al borde de la ruptura todo el proceso negociador en Chiapas.

Sin embargo, debido por un lado a una fuerte presión nacional e internacional en favor de la liberación de Elorriaga y Entzin y, por otro, a los reacomodos producidos en la élite de poder, en el marco de una encarnizada pugna de ribetes sucesorios el gobierno comenzó a dar signos de distensión en torno al conflicto de Chiapas.

El 6 de junio de 1996, a las 15:20 horas, Elorriaga y Entzin obtuvieron su libertad después de que el magistrado Enrique Duran revocó sus sentencias absolviéndolos de todos sus cargos, en contradicción con lo dispuesto por el juez Alcántara y exhibiendo la equivocación del presidente Zedillo cuando, el 9 de febrero de 1995, señaló al "subcomandante Vicente" como uno de los jefes zapatistas.

A fin de cuentas todo pareció inscribirse en el contexto de una maquinación de trama represiva para hacer negociar al EZLN bajo presión. Algunos, incluso, lo definieron como una suerte de escarmiento que buscaba apretarle las "clavijas" a los negociadores indígenas de San Andrés.

La crisis de mayo quedó atrás pero el "eterno recomenzar" de San Andrés aún podía llevar a la ruptura y a las hostilidades, según advirtió desde La Realidad el subcomandante Marcos, el día que declaró el cese de la alerta máxima del EZLN (10 de junio).

Apenas un mes después, la mañana del 12 de julio de 1996, el sol caía a plomo sobre el Distrito Federal. Elisa Benavides y Javier Elorriaga llegaron puntuales a la cita. Tras sus respectivas excarcelaciones, ambos se habían integrado a labores de acción civil en el nuevo Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y el que sigue es su testimonio sobre las circunstancias que rodearon sus capturas en febrero de 1995:

—Elisa, ¿qué ocurrió el 9 de febrero?

—Mi detención la sigo viendo como un pretexto para la operación militar en la zona zapatista. Como una manera de justificar la teoría inicial: que era un grupo no indígena, cuya dirigencia estaba integrada por gente foránea. Fue un montaje.

Javier interviene: dice que por alguna razón las autoridades decidieron recuperar el territorio que estaba en manos del EZLN, pero que el operativo incluía un golpe de mano contra la dirigencia del EZLN: le quisieron caer al mando. Al fallar la operación, decidieron quedarse con el territorio.

Elorriaga considera, no obstante, que los militares no querían una confrontación armada abierta porque sabían que el repliegue del EZLN hacia la selva y la montaña haría muy costoso política y económicamente el choque, y además sería casi imposible acabar con la guerrilla.

—¿A partir de qué factores tiene esa percepción?

—Fue la actitud de los soldados que me capturaron: "Vamos a entrar caminando. No nos van a disparar, los zapatistas se van a replegar", decían. Calculaban algún tipo de resistencia, pero pensaban que sería mínima y que la aplastarían muy rápido. Sabían que el EZLN tenía su retaguardia en la selva y no parecían estar dispuestos a entrar en la montaña. Ellos planearon capturar al mando y

recuperar territorio.

Ocupan territorio, levantan su bandera y la "soberanía" queda restaurada. Dan dos o tres golpes bien planeados en El Prado y La Realidad, los bastiones morales del zapatismo. Ahí entraron y deshicieron todo, como siguiendo un modelo. Cortaron la ropa de los campesinos a tiras, destrozaron sus instrumentos de labranza... todo se hizo en forma sistemática. Igual hicieron en la casa con la ropa del Vic, nuestro hijito. Como diciendo: "Éstos son los bastiones morales del zapatismo, te los hago pedazos." Ese fue el mensaje.

—¿Pero por qué los capturaron a ustedes?

—Porque como dice Elisa, habían planeado una campaña político-ideológica donde nosotros calzábamos perfectamente. Sólo que al fallarles la captura de Marcos y los miembros del CCRI, la arman sobre sus rodillas. Tan es así que al principio no sabían qué hacer con nosotros. El teniente coronel Lara, el que nos detuvo a Epigmenio Ibarra, Víctor Horcasitas y a mí en Gabino Vázquez, cuando vio llegar el helicóptero azul y blanco de la Procuraduría, comentó: "Ah, bueno, es civil." No sabía ni quién iba a venir a recogerme. Si el ejército o la PGR.

Estaban evaluando qué hacer en función de si agarraban o no a Marcos. Y eso les falló.

—Hay otra versión que indica que Marcos nunca fue el objetivo del Operativo Arco Iris, porque su captura habría radicalizado e internacionalizado el conflicto. Que fue un simple operativo de control para retomar la iniciativa política y recuperar los territorios ocupados por el EZLN.

—Sí, eso lo filtró inteligencia. Pero no fue lo que pasó. El objetivo era capturar a Marcos y se les escapó. Los aerotransportados le cayeron a Marcos a diez minutos de La Realidad. No cayeron sobre Prado, en La Garrucha o Palenque. Tampoco en Guadalupe Tepeyac, porque tenían miedo que les derribaran los helicópteros. Bajaron en la zona donde ellos sabían que estaba Marcos y después entraron las columnas de blindados, la infantería. Pero a los helicópteros los mandaron adonde estaba Marcos. ¿Para qué hicieron eso si no fue para agarrarlo? Fueron sobre Marcos, y después mandaron a la tropa a ocupar territorio.

—A su ida y al regreso de su cita con Marcos, hasta que los paran en Gabino Vázquez, ¿detectó algún movimiento anormal de tropas?

—No, hasta llegar a Tuxtla cuando me llevaban detenido. El retén de Gabino Vázquez estaba como cualquier otro día. Pero al llegar al aeropuerto de Terán, como a las cuatro de la tarde del día 9, vi que todo estaba listo para la ofensiva. Pensé: "En la madre, van pa'dentro." Había hileras de mochilas, cada una con su arma, listas para ser subidas a los helicópteros. Y esa primera noche de prisión en Cerro hueco comprobé que no estaba equivocado. Cerro hueco es la ruta hacia la selva y toda la noche del 9 y la madrugada del 10 estuvieron pasando helicópteros y la infantería tres días.

—Durante su encuentro con Marcos, ¿percibió usted si él se esperaba algo?

—Estaba nervioso. Decía: "No nos gusta nada. Hay movimientos de tropas en varias partes y parece que van a entrar." Intuía una traición. "Pero, ¿cómo van a entrar si está esta madre?", le dije pensando en las negociaciones secretas con Moctezuma.

—Decía que usted y Elisa calzaban perfectamente en un plan prefabricado.

—Sí, y pese a que fallaron en su principal objetivo militar, agarrar a Marcos, siguieron adelante con la conjura político-ideológica. Razonaron: "A los cabecillas del EZLN no los pudimos agarrar, pero los tenemos metidos en la montaña y no van a poder hablar." Es cuando lanzan la campaña ideológica en los medios. Y de nuevo, como en enero de 1994, vuelven a insistir en que el EZLN no es un grupo indígena ni chiapaneco, que es un grupo de los setenta, comunista, marxista-leninista cien por ciento y que sus dirigentes son blancos, universitarios. Pero la campaña se les deshace en dos semanas y se termina cuando los comandantes David y Tacho aparecen en San Miguel, sin Marcos. Si quedaba alguna duda de que la dirigencia era indígena, cuando los ven negociar a ellos solos y contestar y hacer los comunicados del CCRI, dicen "ay, en la madre".

—Pero, ¿por qué los detienen a Elisa en el Distrito Federal y a usted en Chiapas?

—Porque reuníamos los requisitos para el manual que estaban siguiendo. Elisa, presa en los

años setenta, de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN); Jorge Santiago, la mano derecha del obispo Samuel Ruiz en cuanto a recabar ayuda social y productiva para las comunidades, por sus contactos con las fundaciones internacionales. Elorriaga, universitario, historiador, periodista, esposo de Elisa... y armaron el rompecabezas.

—¿Cuál era su papel como correo entre Zedillo-Moctezuma y el EZLN?

—Una persona me entregaba lo que venía de Zedillo y yo se lo tenía que entregar al CCRI, luego recogía lo del CCRI y se lo entregaba a esa persona para que se lo diera a Zedillo. Una vez que Zedillo asumió la presidencia, el interlocutor del EZLN fue el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma.

—¿Por qué en el retén de Gabino Vázquez el ejército libera a los otros dos miembros de la productora Argos, Epigmenio Ibarra y Víctor Horcasitas y a usted lo retienen? Se ha escrito que Epigmenio tenía un salvoconducto y que además Zedillo intercedió directamente por él. También se dijo que Zedillo ignoraba su participación como correo. Eso, por ejemplo, lo manejó Sergio Sarmiento en Reforma ("El Cartero", 8/V/96) cuando resaltó el comportamiento "ético" del presidente e intentó alejar toda sombra de una traición presidencial a uno de sus correos. ¿Es verdad que Zedillo no estaba al tanto de su participación como mensajero?

—Sobre ese punto específico el doctor Zedillo no ha dicho nada. Es la versión de Sarmiento. Cuando nos detienen, a Epigmenio y a Horcasitas los dejan libres porque no había ninguna orden de aprehensión contra ellos, y contra mí, sí. Es extraño que eso sucediera diez horas antes de que el propio presidente saliera por cadena de televisión a pedir mi captura. Ahora, no sé si Zedillo intervino para que dejaran libres a mis compañeros. Eso sólo lo sabe el mandatario y hasta ahora no ha querido decir nada. Tal vez Zedillo no sabía que yo servía de enlace entre él y el EZLN, no sé. Nunca hablé con él. Pero después sí supo, cuando Marcos se los dijo al periodista Samuel Blixen y a usted en su entrevista en La Realidad, yo se los ratifiqué en Cerro hueco y salió publicado en el semanario Brecha de Montevideo (27/X/95) y en el diario Reforma de México (1/XI/95).

Cuando vi que habló una de las partes, entonces hablé. Forzosamente Zedillo se tuvo que enterar y no dijo nada.

—A su juicio, ¿Moctezuma estaba enterado del operativo del 9 de febrero? De ser así, ¿actuó con un doble juego, el de la negociación y el de los aprestos militares?

—Ésa es la tristeza del sistema político mexicano. Moctezuma debía saber que se preparaba el operativo, y si no lo sabía y su conciencia le dijo que estuvo mal, debió renunciar. Pero lo que hizo fue sacar un comunicado en donde se decía que "hemos recuperado la soberanía nacional". Su actitud fue un asumir que "yo estaba al tanto y lo apruebo". Que no vengan con el cuento de que tenía que proceder así porque así es la política mexicana. No es cierto. Así es la política porque así la hacen ellos. Si Moctezuma no hubiera sabido nada del operativo, como le dijo a Proceso, cuando aceptó que Elorriaga era mensajero, ¿por qué no expresó ahí mismo que todo era una cochinada?

Él siguió en su papel de secretario de Gobernación por lealtad al presidente. Entonces que asuma el costo político. Eso debe ser la democracia: ¿a quiénes les piden cuentas de las acciones? No me la pueden pedir a mí o a Epigmenio o a Marcos o al coronel que se metió con la tanqueta en la selva o al que piloteó el helicóptero. No, se la tienen que pedir al responsable de la política interior y ése era Moctezuma. ¿Queda la duda de si sabía o no del operativo del 9 de febrero? Él declaró a la prensa que no sabía. Pero él era el máximo responsable de la política interior del país y tuvo que saberlo. En caso contrario, ese día hubo un golpe de Estado técnico. Ahora, con la creación del Consejo de Seguridad Nacional y los cambios legales que hicieron, pueden actuar con la tranquilidad con que lo hicieron en aquella fecha. ¡Pero en febrero de 1995 no podían y menos sin estar enterado el secretario de Gobernación!

—¿Ustedes detectaron algún movimiento extraño, seguimientos, algo, en los días previos a que los capturaran?

—No, nada —responde Elisa.

—¿Quién la detuvo en su casa?

—El ejército, judiciales, seguridad nacional. En el procedimiento participaron dos personas ya grandes. Por su aspecto, las armas que portaban y por el trato eran militares. También llegaron agentes para el papeleo.

—¿Qué quiere decir con que había dos personas mayores?

—Fueron los que llegaron a identificarme. Conocían al detalle la historia de las FLN y traían fotografías de esa época, algunas mías. Manejaban datos muy precisos como si los tuvieran muy a la mano. Uno de ellos aludió al hecho de que era 8 de febrero y comentó: "Ayer fue el aniversario de la muerte de Julieta Glockner", una compañera nuestra que murió el 7 de febrero de 1975 durante un enfrentamiento con el ejército. Ese hombre lo recordó, era gente de esa época.

—¿Traían orden de cateo judicial? ¿Cómo fue ese primer interrogatorio en su casa?

—La casa fue cateada sin orden. En cuanto al interrogatorio fue intimidante, aunque no hubo violencia física. Amenazaron con hacerle algo a mi hijito, me amenazaron a mí. Me enseñaron las fotos, hicieron preguntas, que identificara a las personas. Eran casi todos compañeros muertos en los setenta. El discurso era: "Sabemos quién eres tú y quién es Marcos", y me enseñaron una foto de Sebastián Guillen.

—Antes dijo que destrozaron la ropita de su hijo a tijeretazos... ¿Lo hicieron en su presencia?

—No, eso fue mucho después. Hubo dos partes. En la primera se llevaron las computadoras y todos los archivos. Y después, los que quedaron copando la casa, la tomaron de supermercado. Se robaron la cuna, la ropa, los tenis. Pero dejaron algunas repitas del Vic cortadas con tijeras, el mismo patrón que utilizaron en las comunidades de la selva.

—Según información de la PGR, durante el allanamiento en su casa fue encontrado un documento atribuido presuntamente a las FLN, los famosos "Estatutos".

—Eso y de los tupamaros, del PROCUP, de todo —señala Elorriaga—. Soy historiador. Tenía documentos y papeles de todos los movimientos y grupos armados de América Latina. Un amplio archivo histórico, de México sobre todo, desde los sesenta, cosas que vas recopilando.

—¿A qué atribuye esa insistencia de la PGR sobre el "hallazgo" del documento de las FLN en su casa, recogida en los libros de Carlos Tello y Andrés Oppenheimer?

—Fue la lectura que la policía quería inducir: el de los setenta es el mismo grupo armado del 94, disfrazado con un nuevo ropaje ideológico y la pantalla del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. El CCRI es un engaño, no crean esa patraña.

Ésa fue la lectura que quisieron "vender". Están entrenados para eso: la misma gente que operó en los años setenta-ochenta en contrainsurgencia dirige actualmente la campaña contra el EZLN. No pueden entender lo que han explicado Marcos, Tacho, Moisés, de cómo un grupo guerrillero tradicional de los setenta fue absorbido por las comunidades y a partir de ese proceso de absorción se creó un ejército popular. No lo pueden entender, como no pueden entender lo de Tepoztlán y otras formas de organización del pueblo.

Durante cinco días, entre el 21 y el 25 de octubre de 1995, lapso en que fue detenido y luego liberado Fernando Yáñez, quedó en entredicho la estructura de seguridad del Estado mexicano y se exhibieron las contradicciones y el descontrol del gobierno.

La captura de quien fue señalado por Zedillo como el "comandante Germán" y principal mando del EZLN, generó dudas, entre ellas quién o quiénes planearon y ejecutaron la detención. La versión oficial indicó que el arresto de Yáñez fue hecho por policías judiciales del Distrito Federal. Éstos lo habrían puesto a disposición de la PGR, que lo informó a Zedillo, a Chuayffet y a los procuradores Lozano y José Antonio Fernández (del D.F.). Pero hubo un mando que no fue informado: el general Enrique Cervantes, titular de la SDN. Pequeño detalle...

La versión no oficial, reconstruida por Raymundo Riva Palacio, mostró una realidad diferente: "La detención de Germán fue hecha por un grupo especial de inteligencia militar al mando del

general Arturo Acosta Chaparro, un oficial con larga experiencia en la guerra de contrainsurgencia, de cuyo equipo de trabajo salió el expediente de las Fuerzas de Liberación Nacional y [...] el libro La rebelión de las cañadas de Carlos Tello Díaz, y quien formó este año, con la colaboración de otro general, Humberto Quiroz Hermosillo, un grupo paramilitar vinculado a los servicios de inteligencia militar del Estado mexicano" (Reforma, 30/XI/95).

¿Eran Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo las dos "personas mayores" y con aspecto de militares que detuvieron a Gloria Benavides?

En su editorial titulado "La guerra sucia" Riva Palacio señala que la detención de Germán benefició a la mano dura del régimen y no al ejército como institución, ya que "no se puede hablar de la estructura militar como un todo". Ajuicio del analista, el punto medular del acontecimiento no se dio por el qué, sino por el cuándo. Es decir,

los ganadores son aquellos que, en niveles inferiores a los del secretario de Defensa, decidieron cuándo realizarían el operativo del arresto [...] En el interior de las fuerzas armadas traslucen dos líneas antagónicas, oscilantes en cuanto a su predominio sobre el escenario nacional. Una, la negociadora, había prevalecido hasta el 8 de febrero y fue derrotada por la corriente dura al día siguiente, cuando se reveló la identidad de Marcos [...] la detención de Germán se ubica en la misma lógica del 9 de febrero [...] Poco a poco, el sector duro en las fuerzas armadas, concentrado en los cuerpos de inteligencia militar y en las unidades especiales de seguridad del Estado, están acotando los márgenes políticos y estrechando los espacios de negociación, convirtiendo cada vez más al poder civil en su rehén.

Señalada por Tello y Oppenheimer como "la número 3" del EZLN y cuadro dirigente de las antiguas FLN, Elisa dice que cuando ocurrió la ejecución de Napoleón Glockner y Nora Rivera en la ciudad de México, en 1976, ella estaba muy lejos, en la selva de Chiapas, buscando a compañeros desaparecidos. Las FLN habían sido golpeadas y "ya no era una organización". Ella y otros compañeros se dedicaban a localizar desaparecidos. De lo de Glockner se enteró por un recorte de periódico que alguien le hizo llegar. Preguntó, pero nadie le supo explicar. Después se enteró por los familiares de Napoleón y Nora, que a partir de sus propias investigaciones ellos concluyeron que los había asesinado la policía o la Brigada Blanca.

—¿A qué atribuye las versiones de Tello y Oppenheimer? ¿Por qué insisten ambos en presentarte como una heroína de los setenta transportada a mediados de los noventa como la encargada de propaganda del EZLN?

—Le repito, es parte de una historia prefabricada. Buscan desacreditar a los zapatistas. Desacreditar a un movimiento que tiene fuerte sustento en las reivindicaciones indígenas y al que quieren hacer aparecer como "comunista". Aunque tampoco el EZLN ha negado su vínculo con la lucha de los setenta, porque eso sería negar la historia.

Javier Elorriaga explica que durante los dos primeros meses que siguieron al 9 de febrero, la única versión que existió fue la oficial y después se desvaneció. Los zapatistas estaban en la montaña, Elisa en el reclusorio y él en Cerro hueco. Así, dice, podían inventar la historia que quisieran, y lo hicieron. "Manejada por Época, por el Ovociones, por los medios, la versión oficial se transforma en la verdad absoluta."

Javier Elorriaga considera que fue una campaña dirigida a los intelectuales, a los estudiantes, a la clase media, a los integrantes de las caravanas con ayuda humanitaria de la UNAM y la UAM, a la Red Democrática Universitaria. Según él,

el mensaje fue: 'Ustedes están apoyando a un grupo comunista que quiere revivir el estalinismo en México'. Y con ese discurso lograron meter ruido. Generaron duda y miedo, porque entre el chantaje de que podían perder sus becas y las listas negras que el gobierno hizo circular, donde se identificaba a gente de la solidaridad y se echaba a andar el rumor de que los iban a matar o detener a todos, algunos lo entraron a pensar.

Pero cuando recuperan la voz los zapatistas, se va al carajo la campaña. Cuando baja Tacho a San Miguel para hacer el protocolo de las negociaciones y habla, y hablan David y los otros dirigentes reales del EZLN, falla toda la orquestación jurídico-política y la campaña se desinfla. El propio Marcos reconoce que venían de esa matriz de los setenta y que la propia realidad los transformó en otra cosa.

A Elorriaga le queda la impresión de que "alguien" le dijo a la PGR: "Acúsalos de terroristas." Y agrega: "Pero fue tan burdo todo, hicieron las cosas con las patas. Por eso se metieron los abogados a defendernos, porque vieron la burrada de la PGR. Y eso empezó a socavar la campaña, porque no pudieron empatar el discurso jurídico con el discurso político."

—Parecería que quienes orquestaron la campaña exhibieron gratuitamente al presidente de la República. Zedillo sólo podía aparecer de jefe de policía por televisión, con Marcos capturado. Pero Marcos zafó a la montaña. ¿Qué falló ahí?

—Que no agarraron a Marcos y que nos capturaron a nosotros que no dirigíamos nada — responde Elisa—. A la PGR le "vendieron" que éramos parte de la dirigencia y no éramos nada. Eso es lo que no pueden entender, porque los ciega su racismo: que la dirigencia está en las comunidades. La dirigencia es el CCRI. Eso no es propaganda y eso no lo pueden entender. Y no sólo ellos...

—A propósito de racismo —interviene Elorriaga—, vea mi condena y la de Entzin. A mí me dan terrorismo, rebelión y conspiración. A Entzin sólo terrorismo y rebelión. ¿Qué se infiere de ello? Entzin es la carne de cañón. Él no puede conspirar. ¿Cómo va a conspirar el indio? Elorriaga sí, pero Entzin no...

Autores de sendos *best sellers*, Carlos Tello Díaz y Andrés Oppenheimer reprodujeron casi sin matices la versión oficial de la PGR y de la inteligencia militar sobre el EZLN y el presunto zapatismo de Elisa Benavides y Javier Elorriaga. Tello nunca lo admitió, Oppenheimer sí.

—¿Tanto usted como Elisa conocían de antes a Tello?

—Yo era amigo de su hermana. Carlos Tello estaba estudiando en Inglaterra y cuando venía de vacaciones a México se le pegaba a su hermana. Alguna vez vino con nosotros a conocer la costa de Guerrero.

—¿Por qué piensa que escribió ese libro?

—A Tello le metieron un gol, pero él lo quiso comprar. Tiene un familiar en Seguridad Nacional. Mi opinión es que el trabajo se lo encargaron al grupo Nexos y como estaban todos muy quemados por su salinismo y sus críticas al zapatismo, eligieron a una joven promesa: Carlos Tello Díaz. Empujaron a Tello y Tello compró. Compró y dio por bueno lo que le quisieron dar los policías o el ejército.

—Algunos asesores del EZLN dicen que a Tello le dieron la oportunidad de entrevistar a Salvador Morales Garibay, el hombre que, presuntamente, traicionó a la guerrilla y los acusó a ustedes. ¿Les consta eso?

—No, para nada. Lo que sí está muy raro en el libro de Tello es que no cita el origen de algunas fotos donde aparecen el supuesto Marcos, Rafael Sebastián Guillen, el "subcomandante Pedro" y las instalaciones de Las Calabazas en la Sierra Corralchén. Tello pone como crédito de esas fotos un denominado "Fondo Chiapas". ¿Fondo Chiapas de quién? ¿Del Archivo General de la Nación? ¿De la hemeroteca de la UNAM o de la PGR? A las mismas fotos, por lo menos este señor Oppenheimer le da el crédito a la PGR, pero Tello no. Pone "Fondo Chiapas". Pregunta: Como investigadores, todos tenemos acceso al Fondo Chiapas ¿o no?

Además, ¿a qué papeles tuvo acceso Tello? Porque es mentira lo que dice que fue a San Andrés y a la selva, y que los indígenas del cinturón de paz o los milicianos del EZLN le dieron datos y hasta le contaron quién era Javier Elorriaga. Y es muy curioso lo que declaró a Proceso: "Yo tenía los seudónimos de todos y me faltaban los nombres. Al revés de Elorriaga, que conocía su nombre pero

me faltaba su seudónimo." Como que los indígenas le hubieran dicho: "Uno de los comandantes es Javier Elorriaga, pero no sabemos su seudónimo." ¡Es absurdo!

Cualquier periodista que cubrió Chiapas lo puede confirmar: si tú o yo vamos con los milicianos y les pedimos información, no nos dicen nada. ¿Y a él sí? ¿Por qué? Vamos... tampoco si recurres al Cisen o a la PGR te dan un expediente como lo facilitaron a él. No te dejan ni pasar la puerta de entrada. Desde ahí huele feo el libro de Tello: ¿Por qué no cita sus fuentes verdaderas? ¿Por qué no dijo, por ejemplo, "fuentes reservadas de inteligencia militar"? Pretende engañar al lector con que se lo dijeron los indios y eso no es ético. Si eres historiador, y Tello se precia de ello, es básico identificar tus fuentes. No puedes engañar al lector con tus fuentes. Y él lo hace. Aparte de que usa una técnica tramposa de entrecomillar párrafos, para que uno se haga la idea de que lo que leyó más arriba tiene como fuente a quien sí identifica en su cita. Usa una serie de trucos y trampas que le enseñaron muy bien.

—¿Por qué cree que recurrió a esa metodología?

—Por vergüenza o porque tal vez así se lo especificaron en el contrato. Le dio pena decir que sus fuentes eran la policía y el ejército, o le dijeron "te damos esto pero no nos cites" y así lo estipularon en el contrato verbal.

—Antes sugirió que Nexos o Aguilar Camín lo habían escogido a él.

—Pues, sí. Si salía un libro firmado por Héctor Aguilar Camín todo el mundo se habría dado cuenta de la maniobra. Hubiera sido muy burdo que lo firmara cualquiera de ellos y entonces escogieron a "un joven valor, toda una promesa" como dijo Aguilar Camín en Proceso.

—¿Qué piensa de lo que Oppenheimer escribió de ustedes en su libro sobre México?

—Creo que como Tello, consciente o inconscientemente, Oppenheimer juega un papel en la campaña ideológica de contrainsurgencia. Ahora, en la parte de Chiapas casi no dice nada nuevo. Hace un buen refrito de Tello. Aunque agrega algunos datos, por ejemplo cuando dice que Morales Garibay estaba en Los Angeles y mandaba las notas firmadas como Javier. Eso no lo trae el libro de Tello pero es la misma visión, el mismo impulso. Como que son parte de la misma campaña orquestada. Aunque no puedo asegurar si ambos sean conscientes o no de eso, no soy como el juez Alcántara. Pero cuando empiezas a ver que falsean sus fuentes dices, bueno, algo están ocultando, ¿no?

Una cosa que sí me llamó la atención en el libro de Oppenheimer es que en general identifica a los protagonistas de sus entrevistas: Zedillo, Miguel Alemán Velasco, Manuel, El Meme Garza o el propio Marcos. Pero, curiosamente, nunca cita sus fuentes cuando maneja información que suele considerarse como clasificada y que pertenece a los servicios de inteligencia.

—Elisa, ¿cuál es su versión del "misterioso Javier", como lo llama Oppenheimer, el obicuo Salvador Morales Garibay?

—Mientras estuve presa nunca tuve la seguridad de que esa persona fuese real. Sé que existió y que según las versiones oficiales estuvo en el núcleo inicial del EZLN. Pero no me consta que haya ido a la policía a decirle lo que la policía dice que le dijo, ya sea por su propia voluntad o porque lo capturaron y confesó bajo tortura. Porque siempre la versión de que un tal Morales "llegó y dijo y te acusó" fue de la propia policía. A mí también me inventaron la historia de que había declarado y firmado que ese señor Guillen era Marcos. Entonces, pensaba: ¿Quién me asegura que no están haciendo lo mismo, que armaron una historia con base en las fichas policiales que tienen? Porque ése es su trabajo. ¿Por qué la PGR nunca presentó a mi presunto acusador Morales Garibay? ¿Por qué éste nunca acudió a ninguno de los citatorios a ratificar sus acusaciones?

[Elorriaga retoma el hilo]: Al analizar la declaración de Morales se ve en ella dos manos distintas. Se ve el archivo policial de los años setenta, el de Elisa sobre todo, de su juicio que, por cierto, son cosas que están en los periódicos de la época y que Tello y Oppenheimer las dan chuecas, incluidos nombres y fechas que no se tomaron el trabajo de cotejar como investigadores que dicen ser. Y la otra mano negra que se observa en la declaración es el tratar de meter, a fuerza, la participación de los curas en la guerrilla zapatista. Eso se nota muy claro. Es lo que dice Elisa: tal vez Morales murió en la tortura y le hacen decir todo eso. No se sabe. La única fuente es la policía, pero lo que dicen que

dijo Morales lo pudo haber escrito un buen analista de la propia inteligencia que persigue a los zapatistas. Se nota que son datos viejos, que cuando mucho llegan a 1992 o 1993. En esa supuesta declaración casi no se habla del EZLN, se habla del grupo anterior, de las FLN y después, ¡rájale! toda la presunta participación del obispo Samuel Ruiz y sus curas en el levantamiento. Eso lo pudo escribir cualquiera que conociera la historia de las FLN y tenga una interpretación de lo que es el EZLN hoy.

—En la entrevista de noviembre de 1995 en Cerro hueco, usted señaló que a Morales le decían el Macizo.

—Eso me dijo el de la PGR. Cuando me soltó todo el rollo de la acusación del tal Morales, le comenté: "¿Agarraron un buen tesoro, no?" Y él se volteó a otro: "Dile cómo le decimos." Y el achichinle soltó: el Macizo. Entonces pregunté por qué el Macizo. "Ah, es que la información que suelta es oro macizo". Eso me lo dijeron en el juzgado los muy cínicos, y todavía cuando acabó la diligencia me confiaron: "A Morales Garibay no lo conocemos. Nunca ha estado y quién sabe en dónde esté."

[Elisa prosigue]: Pero por otro lado, cuando estaba presa, el periodista Oppenheimer, que quería entrevistarme, me mandó decir que "inteligencia militar" tenía a Morales, que "es real, existe y es un arma contra Marcos. Por eso no lo han presentado lo harán cuando agarren a Marcos". Otra versión, también filtrada por la policía, es que Morales está en un plan de protección a testigos, lo que sería ilegal, ya que esa figura no se ha legislado.

—Con base en fuentes de inteligencia mexicanas, Oppenheimer escribe que usted es la "número 3" del EZLN y que estuvo en Nicaragua. ¿Es cierto eso?

—Sí, sí estuve en Nicaragua. Pero eso no cambia nada. Fui a Nicaragua a los dos años del triunfo de la revolución, en una brigada de apoyo de la Universidad Metropolitana. Dimos un curso de serigrafía y propaganda. ¿Pero eso qué tiene que ver? No cambia nada...

—Bueno, sí cambiaría si realmente es la número 3 del EZLN.

—Ésa es la versión policiaca, pero es obvio que lo que dicen la policía, Tello y Oppenheimer ha quedado rebasado por la realidad y por los propios hechos a partir de que nos detienen. ¡Qué número 3 ni qué nada! cuando todos estamos viendo de dónde vienen las decisiones dentro del EZLN y cómo siguieron adelante sin que los presos incidiéramos absolutamente en nada.

—A su juicio, como dice su esposo, ¿el grupo Nexos, Tello y Oppenheimer son parte de un plan orquestado? Se podría agregar incluso a Gustavo Hirales...

—O a Morales Garibay, exista o no. Todo forma parte de una misma visión. La historia es la misma. La trama prefabricada que cuentan a través de Morales es la de la policía y los otros la reproducen. No me consta que formen parte de un equipo estructurado y que participen de manera consciente del plan de contrainsurgencia. Pero en todo caso, son utilizados para los fines de inteligencia en contra del EZLN.

—Aunque fueran de distintas organizaciones, usted conoció a Hirales en los setenta. ¿Cómo explicaría su cambio hasta convertirse en uno de los principales críticos del EZLN?

—No sólo Hirales, hay varios. Es gente que fue derrotada y desmoralizada por sus captores y torturadores. Los convencieron de que no había opción ni alternativa de cambio social en México y en el mundo, y fueron cooptados. Es el caso de Hirales.

—¿Leyó su último libro?

—No, pero muchas de mis amigas expresas políticas de los setenta están escandalizadas. Dicen que Hirales inventa ahí muchas cosas. Que el texto no se corresponde con la realidad y exagera los defectos del movimiento de los setenta.

[Elorriaga interviene]: Mira, a ellos los quiebran. Los derrotan militar y políticamente, y luego los coopta el sistema. Cuando sucede lo del 1 de enero de 1994, ¿qué es lo que ellos leen de los zapatistas? Esto: "Te vendiste, camarada." Sí, los indígenas de Chiapas vinieron a demostrar que había posibilidades de cambiar la historia. Pero los Hirales, los Camín, los Cordera ya habían renunciado a toda posibilidad de un cambio y habían sido asimilados por el sistema. Cuando apareció el EZLN lo más honesto era decir: me equivoqué, me rendí. Pero como el sistema los tiene amarrados por el lado económico, temen perder lo que ahora poseen. Por eso ven al EZLN

como su enemigo y apuestan a su derrota. Ellos ya no luchan por la transformación social, porque al fin de cuenta viven bien y se quebraron ideológicamente. Por eso pueden ser utilizados en la campaña contrainsurgente. Como dice Elisa, tal vez no muy conscientemente, aunque yo pienso que sí, que su actuación es muy consciente.

La noche del 5 de octubre de 1976 Napoleón Glockner caminaba por la calle Medellín en la colonia Roma. Regresaba a su casa de comprar el pan. De una camioneta blanca se bajaron tres hombres e intentaron secuestrarlo. Glockner quiso huir y dispararon sobre él. Su cuerpo fue descubierto horas más tarde con nueve impactos de bala; también el de su compañera, Nora Rivera, embarazada de cuatro meses: la hallaron ahorcada en el interior de la camioneta; 19 años después la PGR y la Secretaría de Gobernación identificaron ese doble asesinato como uno de los actos fundacionales del EZLN. Tal versión, que recogieron como fidedigna Tello y Oppenheimer, señala a Napoleón Glockner, ex miembro de las FLN, como un "delator" y por eso mismo "ajusticiado", junto con su compañera Nora, por integrantes de las FLN.

Para Fritz Glockner, la exhumación de la memoria de su padre Napoleón por los servicios de inteligencia, el 9 de febrero de 1995, fue una coartada que tuvo como objetivo tender un puente hacia el pasado guerrillero de los años setenta y al momento más agudo de la guerra sucia contra los grupos radicales armados, a fin de desvirtuar, en el presente, el componente indígena del EZLN.

La filtración intencional de viejas fichas policiales a escritores y medios de prensa formó parte de una estrategia de propaganda que pretendió hacer retroceder la atención de los mexicanos hacia el decenio de los setenta, para negar autenticidad a un movimiento que irrumpió en los noventa. Con bombos y platillos, la PGR y Gobernación reprodujeron la versión que dio a conocer el 5 de noviembre de 1976 el jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, a media hora de que fuera asesinado mi padre y sin que todavía se hubieran investigado los hechos [dijo Fritz Glockner durante una entrevista con el autor].

Glockner, quien escribió la novela Veinte de cobre (memoria de la clandestinidad), se preguntó: "¿Cómo pudo afirmar eso la policía en 1976 sin siquiera investigar el caso? ¿Y cómo, 19 años después, se reproduce textual la misma versión policial?" Su respuesta es que se necesitaba un nexo entre el movimiento armado de los noventa y la guerrilla de los setenta, y se escogió a su padre.

Afirma que las versiones asumidas por Tello y Oppenheimer son falsas y que él tiene pruebas contundentes. Por ejemplo, el reporte del médico forense, donde se asienta que Napoleón Glockner fue ejecutado con nueve impactos de balas de tres diferentes calibres y no con dos proyectiles calibre 22, como indica la versión de los servicios de inteligencia con base en un supuesto "documento interno" de las FLN. Además de que una pistola 22 tiene seis tiros, no nueve.

Pero más allá de la escenografía montada con base en ese "comunicado confidencial", que intuye fue elaborado por miembros de la antigua Dirección Federal de Seguridad, entonces bajo el mando de Miguel Nazar Haro, hay otro dato sugerente que ocurrió en diciembre de 1994.

El 14 de diciembre su hermano Napoleón —que lleva el mismo nombre del padre de ambos— sufrió lo que Fritz califica como uno de los asaltos más raros en los anales de la criminalidad en México. A la una de la madrugada, mientras iba al volante de su auto, se le aparejó otro vehículo y uno de sus tripulantes le preguntó dónde quedaba determinada calle. Le indicó. Pero al intentar avanzar en su ruta el otro auto se le cerró y obligó a Napoleón a meterse en un callejón. Cuando quiso poner reversa, dos taxis ya le habían cerrado el paso por detrás. Napoleón descendió de su coche y al hacerlo alcanzó a sentir por unos segundos el frío acero de una pistola sobre su sien. Un trapo sobre su cara lo asfixió de inmediato, aunque antes de perder el conocimiento se percató de un pinchazo. Despertó 17 horas después, seminconsciente.

En esos días Napoleón compartía el departamento con un amigo. Cerca de las tres de la mañana, éste oyó medio dormido que se había abierto la puerta y 15 minutos después sintió que se cerraba. Pensó que Napoleón había vuelto a salir.

Tras reconstruir los hechos, pudo establecerse que sus captores no dejaron a Napoleón tirado en

la calle. Le quitaron su automóvil, una cámara fotográfica, la grabadora, tarjetas de crédito y lo llevaron... a su casa. ¡Lo subieron 64 escalones, hasta el cuarto piso y lo acostaron en su cama! Recuperó su lucidez hasta las seis de la tarde. El carro fue encontrado en la carretera a Toluca dos días después, intacto. No le faltaba nada.

La familia hizo una serie de elucubraciones acerca del suceso. Todo resultaba confuso: no usaron las tarjetas de crédito y al auto no le robaron nada. Tampoco sustrajeron algo del departamento. Pero el 9 de febrero les dio mucho qué pensar. "No sabemos quién fue", dice Fritz. "Pensamos que fue una práctica, llamémosle, institucional. Tenían los ojos puestos en la familia."

Napoleón estuvo cuatro o cinco días mal. Luego de un análisis que le practicaron en Puebla, pudo descifrarse la razón de aquel pinchazo: le habían aplicado pentotal, la llamada droga de la verdad experimentada por la policía uruguaya con los detenidos tupamaros a comienzos de los setenta. Después de escuchar la opinión del médico laboratorista, la conclusión del incidente protagonizado por Napoleón Glockner fue que no se trató de un trabajo de aficionados; le habían suministrado la dosis justa.

Es a partir de ese episodio que Fritz asegura que toda la historia sobre los orígenes zapatistas fue armada antes del 9 de febrero. Incluso hubo gente que le informó que Carlos Tello estuvo corrigiendo su texto sobre la marcha, luego de que el ejército rompió la tregua con la excusa de capturar a Marcos. Empero, la primera edición de La rebelión de las cañadas salió atrasada, cuatro meses después.

A Fritz Glockner no le consta, como dice el subcomandante Marcos, que Héctor Aguilar Camín haya estado detrás de Tello en la factura del libro. Lo que sí sabe, por la relación de su familia con Angeles Mastretta, esposa del autor de La guerra de Galio, es que Aguilar Camín tuvo acceso a los archivos militares y de Gobernación sobre la guerrilla de los setenta en México. "Héctor negó después que le hubieran abierto esos archivos, pero mi fuente es de primer nivel y muy cercana a él. Tuvo a dos ayudantes trabajando sobre ellos."

—¿Se los abrieron para que escribiera La guerra del Galio?

—Sí. Aunque hay una cosa curiosa: en la página 515 Aguilar Camín relata, con otros nombres, los asesinatos de Napoleón y Nora, y maneja la historia de la ejecución de mi padre como la reconstruimos nosotros y se la contamos, no a partir de la versión entregada por la PGR a los medios el 9 de febrero, que se basa en el supuesto documento secreto de las FLN, que luego recoge Tello. Pero en mayo de 1995, en un artículo entregado a Proceso ("Regresando a Maquiavelo", 1/V/95) suscribe la versión oficial, es decir, que mi padre fue ejecutado por las FLN, a las que liga con el EZLN. ¿Por qué modificó tan radicalmente su parecer? No lo sé. Pero no dudo que las investigaciones de Aguilar Camín sirvieron, en gran medida, para la reconstrucción de la historia de los años setenta que aparece en el libro de Tello Díaz.

—A partir de su hipótesis de que todo lo ocurrido en torno al Operativo Arco Iris fue un montaje, ¿por qué utilizaron a Carlos Tello para diseminar información de inteligencia?

—Es pública la amistad del padre de Carlos, el embajador Tello, con el entonces comandante del ejército en Chiapas, general Godínez, desde la época de López Portillo. Godínez conocía a Garlitos, y cuando estalló lo de Chiapas, éste lo comentó en Nexos y Aguilar Camín le dijo: "Lánzate". Se fue como enviado especial de la revista, y ya en Chiapas se presentó con el general amigo y Godínez le echó la mano. Sé esta versión por varias fuentes, incluso me la contaron gentes de Nexos.

—Aguilar Camín presentó a Carlos Tello como un historiador con gran porvenir...

—Ese juego por aparentar que Tello es un historiador acucioso, como dijo el maestro Aguilar Camín en una respuesta a mi carta, cae por su propio peso. Para armar su historia Tello entrecomilla testimonios de indígenas pero, curiosamente, cuando alude información de fondo, polémica, ni la entrecomilla ni cita fuentes. El libro está lleno de citas y parece un libro bien documentado, pero un lector que siga el texto al detalle comprobará que las comillas son basura y lo que debería llevar comillas, no las tiene. Si es historiador, como dice, ¿por qué no identifica sus fuentes?

Pretende exhibir su cientificidad con comillas fuera de lugar, en testimonios ramplones y absurdos. Se puede diseccionar el libro y comprobar esto que afirmo. Aunque la pretensión fue presentarlo como algo académico y Aguilar Camín lo levanta como el gran historiador...

—¿A su juicio el libro de Gustavo Hiraes es parte de la misma campaña?

—¡El libro de Hiraes es una madre! Es parte del intento por desvirtuar la realidad de antes y de ahora. Como a partir de la irrupción zapatista los servicios de inteligencia centraron los reflectores en los setenta, Hiraes aparece para dar la versión oficial y evitar que salga a luz pública la verdad de lo que ocurrió en aquellos años. Los noventa traen al presente el pasado de hace 20 años, provocado por ellos. Entre el EZLN y el FLN hay dos décadas de distancia, concepciones distintas y no es la misma gente. Pero llevar los reflectores a los setenta generó contradicciones a las autoridades, porque empezaba a salir a flote la verdad sobre el terrorismo de Estado de aquellos años. Según mis investigaciones, en el periodo 1968-1978, entre desaparecidos y asesinados por razones políticas en el marco de la guerra sucia, las víctimas suman entre tres y cinco mil. Incluyo a militantes de las guerrillas urbana y rural, y a numerosos miembros de comunidades campesinas de Guerrero y Oaxaca que fueron arrasadas por los militares y donde desaparecían de a cien personas de una sola vez y nunca más se supo de ellas. La gente que logró escapar de las matanzas en esa época no tenía ni voz ni foro para denunciar esas desapariciones masivas.

Entonces, si los reflectores se van a los setenta para justificar el accionar oficial de los noventa, eso comienza a ser contraproducente para el sistema, porque se corre el riesgo de revivir la verdadera historia. Frente a ese riesgo inventan una historia oficial y como anillo al dedo sale la novela de Hiraes. Él jura y perjura que la escribió hace cinco años y que era muy pendejo para la computadora y borró varios archivos. Pero ocurre que hay una coincidencia sospechosa: su libro aparece en el momento en que empieza a develarse el horror de los setenta. Además de que es asesor de Zedillo y miembro del equipo oficial de negociación en Chiapas...

En tales circunstancias, Hiraes era una figura manejable. Así como el embajador Iruegas, el negociador de Nicaragua y El Salvador, Hiraes es el actor mexicano con pasado guerrero que encaja muy bien en el discurso oficial para las negociaciones con el EZLN. Es la pieza de revestimiento, de justificación, de supuesto conocimiento y comprensión de las causas por las cuales se levantaron los indígenas; casi, casi como poner a interlocutores "iguales".

Pienso que, obviamente, Hiraes fue cooptado. Pero no sólo Hiraes, como él hay unos 20 ex guerrilleros que andan por ahí y que con Salinas encajaron muy bien en Solidaridad, en Infonavit, como asesores, y que hoy siguen cobrando un sueldo en dependencias gubernamentales. Ahora, en la mesa del diálogo, Hiraes ha estado calladito porque los asesores del EZLN no lo bajan de traidor y otras lindezas.

CAPITULO 13

¿Una grotesca pantomima?

Bajaron en hilera, con disciplina. Uno portaba una bandera mexicana nuevecita, que exhibía todavía los pliegues que evidenciaban que hasta hacía poco estuvo doblada. Otro, un lábaro verde con una estrella roja de cinco puntas, cruzada por un machete, un fusil y un martillo y con las siglas EPR.

Por entre la maleza de los cerros que rodean el vado de Aguas Blancas, en Guerrero, el grupo de embozados se fue acercando al templete, sus rostros cubiertos con paliacates de franela roja y luciendo en sus cabezas gorras verde olivo tipo militar. Portaban armas de asalto AK-47 y R-15 que empuñaban con decisión. Otros llevaban pistolas desenfundadas, con el cañón hacia arriba. Todos vestían el mismo uniforme: camisa verde, pantalón café y botas militares.

Eran las 15:30 del viernes 28 de junio de 1996, primer aniversario de la matanza de 17 campesinos que fueron emboscados por la policía motorizada. Cuauhtémoc Cárdenas, invitado especial del acto conmemorativo organizado por el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) terminaba de hablar cuando irrumpieron. Un grupo de los armados ocupó el presidium. Sorprendidos, Cárdenas y su comitiva se retiraron en medio del desconcierto. Después, un encapuchado leyó el "Manifiesto de Aguas Blancas", firmado por la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (CG-EPR), donde anunciaron su decisión de levantarse en armas.

Lo que todo el mundo sabía y las autoridades negaban, terminó por confirmarse: la guerrilla existía en Guerrero y ahora salía a la luz pública a declarar que "frente a la violencia institucionalizada, la lucha armada es un recurso legítimo y necesario del pueblo para restituir su voluntad soberana y restablecer el estado de derecho".

En la proclama pidieron "el derrocamiento del gobierno antipopular, antidemocrático, demagógico e ilegítimo al servicio del gran capital nacional y extranjero" y ante el estupor de los dos mil presentes en el acto llamaron "al establecimiento de una república democrática"; se definieron como hombres y mujeres sencillos dispuestos a luchar por sus intereses y convocaron a formar grupos de autodefensa armada y tribunales populares para juzgar "a los enemigos del pueblo".

Terminada la lectura del manifiesto, una mujer habló en náhuatl y, después, como homenaje a los campesinos asesinados, un grupo de guerrilleros hizo una salva de 17 disparos. Luego se dirigieron a los montes cercanos y desaparecieron entre la maleza.

Sin violencia esa vez, demostrando organización y exhibiendo poderoso armamento, el EPR había protagonizado su primera acción de propaganda armada.

Su irrupción provocó duda. El primero en reaccionar fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien todavía en caliente calificó la aparición del EPR como una "grotesca pantomima" de los victimarios de los labriegos ejecutados un año antes en Aguas Blancas y un "agravio" hacia sus deudos. El diputado Marco Rascón, antiguo guerrillero de los setenta, se preguntó si la aparición del EPR fue "un error o una provocación". A partir de la impunidad de los terratenientes locales y de la intolerancia política, la represión y la violencia desatada por el gobernador con licencia Rubén Figueroa — quien fue acusado por la alcaldesa de Coyuca de Benítez de ordenar la matanza, pero luego exonerado por la diputación priísta—, Rascón no dudó que los campesinos guerrerenses hubiesen optado por organizarse militarmente para la autodefensa.

Pero se preguntó si la presencia del EPR en el acto de aniversario del 28 de junio no contribuía a justificar a Figueroa y a dar argumentos a los aparatos de seguridad nacional y al ejército para una mayor militarización del país, además, reflexionó acerca de si la dirigencia del

EPR había tomado en cuenta el tiempo político de México y que si con su accionar no le estaba cerrando puertas al EZLN y al proceso de negociación en Chiapas.

Sin embargo, un informe especial del diario El Financiero señaló que "el origen oscuro y sospechoso del EPR es lo de menos. El hecho es que la violencia y la inestabilidad está incrustada en muchas regiones del país como Chiapas, Hidalgo y Guerrero, y que ello ha dado pie para que el ejército salga de sus cuarteles y naturalice su presencia en muchas zonas rurales, curiosamente las más pobres".

En el mismo sentido, el investigador Carlos Montemayor, experto en la guerrilla de Lucio Cabañas (1973-1974), se extrañó de que a partir del abandono, la miseria y la represión en Guerrero sólo hubiera aparecido un grupo armado. Dijo en una entrevista:

El surgimiento del EPR no debe considerarse como una luz de alerta de tipo militar, sino como otra luz de tipo social. La guerrilla es efectivamente una violencia armada, pero surge solamente después de una prolongada violencia social, que tiene como su fase última la expresión armada [...] Esa violencia social es la que debemos reconocer antes y a ella debemos dirigir nuestra atención. Esa violencia social es provocada por la imposición de un modelo económico [el neoliberalismo] que empobrece más al país y lo polariza, y que está llevándonos a la confrontación.

Otra hipótesis, filtrada por círculos políticos oficiales, indicó que el EPR sería el resultado de una estrategia novedosa que combina los intereses del narcotráfico con los de aquellos grupos de poder regionales, desplazados por la tecnoburocracia del salinismo-zedillismo. Esto llevaba a pensar en una alianza entre el gobernador cesado, Rubén Figueroa y grupos caciquiles del PRI vinculados al tráfico ilegal de estupefacientes.

Al comenzar septiembre, la aprehensión en Tabasco de un presunto cabecilla del EPR, José García Marín, El Cálaho, quien resultó ser un conocido priísta con 22 años de militancia en el partido oficial y público colaborador del gobernador Roberto Madrazo, robusteció la teoría de que detrás del nuevo grupo armado podría estar la mano del sindicato de los gobernadores resentidos con el zedillismo y a quienes su correligionario Julio Hernández López señaló, junto con Carlos Salinas y Carlos Hank González, como posibles causantes de muchos de los hechos desestabilizadores ocurridos en México desde 1994 ("¿EPR?", La Jornada, 5/IX/96).

Por su parte, las autoridades nacionales no se pusieron de acuerdo. Así, y en franca contradicción con las instancias encargadas de la seguridad interior, Gobernación y PGR, que minimizaron el hecho calificándolo como la irrupción de un grupo de "gavilleros" a quienes sólo se les imputaba el delito de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la SDN concluyó que el EPR es una verdadera guerrilla, amalgama de grupos radicales, con mayor decisión y mejor equipo que los zapatistas y cuyo origen se encuentra en la miseria ancestral de las comunidades rurales.

En realidad, informes de inteligencia militar de junio de 1994 ya identificaban siete focos rojos guerrilleros en la legendaria cordillera de la Sierra Madre y desde entonces había comenzado la militarización del estado, el segundo del país por el número de efectivos castrenses. De entonces también datan los operativos de rastrillaje por tierra y aire con sobrevuelos de helicópteros, soldados en jeeps artillados y tropa empuñando sus FAL, peinando zonas serranas y montañosas, y estableciendo un virtual estado de sitio en misérrimas y olvidadas rancherías a las que sólo se llega por abruptos caminos de herradura.

La razón de tal despliegue había sido justificada hasta ahora con el argumento del combate al narcotráfico y/o la acción cívica en beneficio de la población. Después del 28 de junio de 1996 agregaron la razón de que tan nutrida presencia, calculada en unos 10 mil uniformados, obedecía a "tareas de auxilio" a los damnificados del huracán Boris.

Pese a la justificación del narcotráfico, tanto la siembra de amapola y marihuana en la región se ha mantenido en los niveles habituales, al amparo según múltiples denuncias, de grupos paramilitares y policías judiciales que lucran dando protección a los narcopolíticos de la zona; y tampoco era explicable la presencia de tanquetas y vehículos militares Hummer equipados con

lanza-morteros y ametralladoras HK21, si de lo que se trataba era de realizar "tareas de asistencia social" a los damnificados del Boris. Según testimonios de campesinos, el ejército no se estaba dedicando precisamente en Guerrero a "sacar muelas y reparar escuelas", sino a catear a quienes transitan a diario por caminos y veredas de las regiones serranas, con soldados que revisan meticulosamente vehículos y personas que son interrogadas y fotografiadas, tanto en la zona de Coyuca de Benítez como en Atoyac, la Montaña, Tierra Caliente o la Costa Chica... a la sazón cinco de los focos rojos identificados por los servicios de inteligencia militar en 1994.

Organizaciones sociales denunciaron la existencia de una virtual cacería del ejército en las montañas, valles y ciudades guerrerenses, incluida Acapulco, y que los caseríos de Tepetitla y Hierba Santita, en la sierra de Coyuca, fueron sitiados por el ejército que instaló campamentos y retenes, según ellos para aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Tepetitla había sido el reducto de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), cuyos dirigentes y simpatizantes fueron vinculados con el EPR por los servicios de inteligencia. Los 17 campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 pertenecían a la OCSS. También en Aguas Blancas existía ahora un campamento militar y los cerros cercanos eran sobrevolados, a baja altura, por helicópteros de reconocimiento.

Hilario Mesino, uno de los fundadores de la OCSS, fue detenido en la ciudad de México el 5 de julio y recluido en una prisión de Acapulco, acusado de sedición y privación ilegal de la libertad, delitos presuntamente cometidos durante la toma de la alcaldía de Atoyac en mayo de 1995. Su captura, más de un año después y luego de la aparición del EPR, fue considerada como un intento de hostigar y descabezar a las organizaciones sociales.

La policía anunció la captura de ocho personas en dos operativos en la sierra de Guerrero, a quienes acusó de pertenecer al nuevo grupo armado y tener en su poder AK-47 y pistolas calibre .45; pero el EPR aseguró en un comunicado que "ninguno de nuestros combatientes ha sido capturado". El documento estaba firmado por el comandante insurgente José Arturo, el primer nombre que se conoció de la llamada comandancia general de ese grupo.

Según el EPR, los cuatro detenidos presentados por el ejército el 9 de julio "son campesinos secuestrados y torturados cuya desaparición había sido denunciada públicamente por sus familiares desde los días 3 y 4 de julio". Los otros cuatro "forman parte de la población civil y no tienen ninguna vinculación con nuestro ejército".

En otro comunicado, fechado en la Sierra Madre del Sur y firmado por el comandante Antonio, de la "Comandancia militar de la zona", el EPR dio cuenta que el día de su aparición se produjeron dos enfrentamientos en las carreteras Iguala-Chilpancingo y Chilpancingo-Acapulco, con saldo de seis policías judiciales muertos, información desmentida por el gobierno de Guerrero.

El comunicado señaló que "no existe hasta el momento una declaración de guerra del EPR en contra del gobierno federal, dada la modalidad de propaganda armada revolucionaria que reviste hasta ahora nuestro accionar. La orden emitida por esta comandancia zonal hacia nuestras fuerzas es la de evitar en lo posible un enfrentamiento armado con las fuerzas gubernamentales". No obstante, agregó, "ante el acoso y persecución que en estos momentos sufren algunas unidades de nuestro ejército de la Sierra Madre del Sur, es inminente un choque armado con el ejército y cuerpos policiacos de la oligarquía, como sucedió en Zupango, lo cual abriría una nueva fase en el desarrollo del conflicto".

En su carácter de fuerza irregular, el EPR exigió al gobierno apego a los convenios de Ginebra sobre conflictos bélicos, en particular en lo referente al trato a la población civil y a los prisioneros de guerra.

Mientras se definía si el novedoso grupo era una "grotesca pantomima" o no —calificativo incorporado por el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet—, la frase aplicada por Winston Churchill al sistema político soviético parecía quedarle justo al EPR: es "un enigma envuelto en un misterio".

No obstante, y pese a que después de su presentación pública el EPR se replegó sin accionar militarmente y sin dar a conocer su estrategia, algo parecía estar claro: no se trataba de un foco

reducido a la usanza de las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. El que se hubieran diluido sin dejar rastro pareció evidenciar que contaban con una retaguardia segura entre las comunidades rurales.

Una hipótesis fue que la aparición del EPR formó parte de una estrategia concertada por distintos grupos revolucionarios del país, que durante más de dos años y medio se mantuvieron en la clandestinidad en espera de ver cómo evolucionaba el conflicto en Chiapas, y que cuando evaluaron que éste se empantanó y no daba para más, decidieron lanzar una segunda fase de "la guerra revolucionaria". Se llegó a hablar de un frente integrado por 14 organizaciones político-militares, que sumarían 15 con el EZLN, sobre un total de 18 identificados en 1994, que no conformarían un foco, tendrían distinto tamaño y que operaban en varios puntos del país. Su apuesta sería la de formar un solo ejército y un partido.

Pero hubo observadores que manejaron una variante: en realidad, y luego de una articulación de organizaciones armadas que incluyó inicialmente al EZLN, la irrupción del EPR significó un rompimiento de los grupos más radicales —señalados invariablemente como maoístas, senderistas o polpotianos— que expresaron así su descontento por la manera en cómo el EZLN condujo la representatividad, la negociación y su tránsito en el conflicto chiapaneco. Esa visión parecía contar con más adeptos, pero con un agregado: el distanciamiento del EPR con el EZLN podía ser pasajero y no era descartable un reagrupamiento, ya que no se trató de una ruptura irreversible.

Una tercera hipótesis montada sobre la teoría costo-beneficio apuntó que el nuevo grupo armado representaba un "antídoto" contra el EZLN o una estrategia de distracción de los jefes de la contrainsurgencia que derrotaron a la guerrilla de los años setenta y que ahora conducían la guerra psicológica contra el zapatismo armado.

En la primera semana de septiembre de 1996 comenzó a circular, de manera limitada, un Libro negro atribuido al general brigadier Arturo Acosta Chaparro donde se consigna que, desde 1990, un informe confidencial elevado por este experto en contrainsurgencia a la sección II del ejército (inteligencia militar) —entonces bajo el mando del general Domiro García Reyes—, advertía sobre la existencia de "grupos extremistas" que se preparaban en la clandestinidad. Raymundo Riva Palacio atribuyó la difusión restringida del informe a una "calculada operación de propaganda para limpiar la cara al ejército" y endosarle la responsabilidad a los civiles, pero formuló una serie de interrogantes, entre ellas, por qué no presionaron las autoridades militares si tenían detectados los focos armados.

Al respecto y según analistas, no habría que descartar que varios de los grupos integrados al frente estuviesen infiltrados por elementos provocadores, algunos de los cuales habrían logrado acceder a puestos de dirección del EPR y que desde allí hubieran decidido acelerar las acciones de provocación, lo cual, inevitablemente, conduciría a un fortalecimiento de los sectores duros del gabinete de seguridad nacional.

Puesto que diversas versiones filtradas desde el gobierno llevan a identificar al EPR con una matriz maoísta, cabe recordar que Raúl Salinas de Cortad fue impulsor en los años setenta de grupos proclives a esa expresión ideológica y que luego, con su hermano en Los Pinos, prácticamente creó un nuevo partido de nivel nacional, el Pronasol, cuyos principales cuadros organizativos se nutrieron de esos grupos de corte maoísta.

En la lógica de que los únicos beneficiados con la aparición del EPR fueron los sectores golpistas del régimen, se argumentó que después de haber neutralizado al EZLN en Chiapas, los "duros" montaron una maniobra tendiente a legitimar la militarización de todas las zonas indígenas del país, para ofrecerse de cara al país como baluarte y único garante de "la ley, el orden y la estabilidad".

Tras la aparición del EPR, una alta fuente del ejército mexicano pronunció una frase que tuvo que resultar grata a los oídos de los cultores del tercer vínculo en Washington: "Salir de los cuarteles resultó más fácil de lo que creíamos. Pero qué difícil va a ser que nos regresen a ellos."

Por otro lado, el discurso del EPR demostró que no es un grupo esencialmente indígena y que una cosa es que haya surgido en una zona donde hay condiciones militares para operar (las montañas), y otra que pretendan reducir su accionar a ese terreno. A fines de agosto algunos expertos pronosticaron

que "era cuestión de días" que el EPR comenzara a operar en las ciudades.

Escenario de importantes movimientos armados, el estado de Guerrero, con más de dos millones de habitantes y 75 municipios miserables enclavados en la Sierra Madre y costeros sobre el Pacífico, tiene como epicentro de dinero el puerto de Acapulco y la colonial ciudad de Taxco.

Historias de piratas, bandidos, gavilleros, caciques sangrientos, narcotraficantes y guerrilleros comunistas salpican la historia de esta tierra violenta a través de los siglos. De hecho, el estado debe su nombre al primer gran "guerrillero" mexicano: el insurgente Vicente Guerrero. Aunque, históricamente, la primera generación de guerrilleros, y la más afamada, es la de Pancho Villa y Emiliano Zapata, los mitos revolucionarios de 1910. El genio militar de Villa lo llevó a utilizar ataques sorpresa, emboscadas, retiradas rápidas e improvisación. Por su parte, el Caudillo del Sur, que retomó la consigna anarquista de "Tierra y Libertad" y contó con una propuesta social más acabada, se movió en los escenarios de los actuales estados de Morelos y Guerrero.

La segunda generación guerrillera en México no tuvo el arrastre ni la repercusión destabilizadora que lograron otros grupos armados del Cono Sur y Centroamérica en los años sesenta-setenta. Esa generación la inició el agrarista Rubén Jaramillo, asesinado por el ejército en 1962, mientras en forma paralela el maestro rural Genaro Vázquez fundaba la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) en Guerrero, movimiento que se fue radicalizando hasta optar por las armas en 1966 y crear el Consejo de Autodefensa del Pueblo, luego que la policía mató a 80 trabajadores copreros. La guerrilla de Vázquez logró algunos golpes espectaculares, como el secuestro del entonces gerente de la Coca-Cola, Jaime Castrejón, pero fue exterminada por el ejército después de que su líder muriera en un sospechoso accidente automovilístico.

Lucio Cabañas, otro profesor rural de Guerrero, abandonó el Partido Comunista y fundó, en 1971, el Partido de los Pobres y su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Antes de ser asesinado en 1974, Cabañas secuestró al entonces senador guerrerense y candidato a la gubernatura, Rubén Figueroa (padre del imputado responsable de la matanza de Aguas Blancas) quien después de ser liberado por el ejército y obtener el poder local, ordenó una guerra sucia contra la guerrilla que no tuvo nada que envidiarle a las emprendidas por los militares en el Cono Sur.

La guerrilla de tercera generación irrumpiría en Chiapas el 1 de enero de 1994 bajo la denominación de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en plena posguerra fría y en el país modelo del neoliberalismo tercermundista. El neozapatismo se ha caracterizado por una propuesta política de corte reformista y ha hecho gala de un gran sentido de oportunidad política, lo que ha sabido combinar con un manejo comunicacional inusual y una legitimidad discursiva basada en la explotación y miseria de los indígenas chiapanecos.

El EZLN ha sido la primera guerrilla que hizo sentar al gobierno mexicano en una mesa de negociación, logrando avances y consensos que no obtuvieron las de Lucio y Genaro, ni los demás grupos armados de los años setenta como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Movimiento Armado Revolucionario y las propias Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), consideradas como la matriz del EZLN.

En ese contexto, la aparición del EPR no resultaría algo atípico, ya que surgió en uno de los semilleros históricos de la guerrilla mexicana. Y aunque en un principio se desconocieron sus objetivos estratégicos, hubo certeza de que el sistema político mexicano se está enfrentando a otra expresión de la tercera generación guerrillera; aunque para algunos expertos dicha caracterización es aplicable sólo al EZLN, ya que el EPR sería parte de la segunda generación, más ligada a los movimientos guerrilleros de Centroamérica de los años ochenta como el FSLN, la URNG y el FMLN.

Una pregunta comenzó a flotar en los ambientes político y académico: si la irrupción del EPR puede servir para acelerar el proceso de transición a la democracia en México —en tanto el Estado pudiera ver en ese estallido una expresión más del expandido descontento popular— o si, por el contrario, como muchos opinan, será el factor detonante del control del poder —directo o indirecto— por parte de las fuerzas armadas.

La mañana del viernes 28 de junio Arturo Núñez estaba tenso. Momentos después, el subsecretario de Gobernación recibiría al obispo Samuel Ruiz, a quien debía informar que el gobierno había decidido tomar una serie de medidas duras en Chiapas, y que las decisiones, de corte represivo, afectarían a la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Como desde el primer momento del estallido zapatista, el gabinete de seguridad nacional seguía considerando a la diócesis como parte del conflicto armado, es decir, veía al obispo y a su equipo de sacerdotes, religiosas y catequistas como agentes de desestabilización.

Núñez informó al obispo y mediador que había una serie de denuncias muy concretas que involucraban directamente a varios agentes de pastoral en los sucesos violentos ocurridos durante junio en Tila, Tumbala, Sabanilla, Salto de Agua y Simojovel, en la zona norte del estado. Dos de esos "agentes desestabilizadores" identificados y acusados por "la gente" de estar incitando a las tomas e invasiones de tierras, eran los sacerdotes Joel Padrón, párroco de Simojovel, y Heriberto Cruz, de Tila.

En los últimos 10 días se habían registrado varios hechos de sangre en los cuales perdieron la vida 14 personas y otras 20 resultaron con lesiones. El 25 de junio, después de una gira por el norte de Chiapas, el obispo coadjutor Raúl Vera responsabilizó a los grupos paramilitares Paz y Justicia y los Chinchulines, y advirtió que si se los seguía solapando se provocaría una "guerra civil" o se precipitarían acciones "que luego serán incontrolables". Pero "lo más impresionante" que pudo constatar el obispo coadjutor en el lugar fue que las bandas paramilitares "no son ningún fantasma, son grupos muy bien definidos, que tienen libertad de organizarse y trabajar a la luz del día".

Un día después era Samuel Ruiz quien denunciaba el inicio de una guerra que "amenaza con ser fratricida y de exterminio". Dijo que existía una "inducción clarísima de actores que se mueven con funciones específicas de azuzamiento", y aludió concretamente a un esquema "donde el partido oficial está armado en casi todos los municipios y se ha arbitrado para agredir a la sociedad civil". A su juicio, existía un plan deliberado que buscaba hacer aparecer a las comunidades como enfrentadas entre sí, para que después "venga el salvífico ejército federal a imponer un poco de orden".

Las visiones de los obispos Vera y Ruiz no eran descabelladas. Es sabido que cuando dos fuerzas se enfrentan en un conflicto, existen otros actores que pueden contribuir al entendimiento. Pero en este caso, y después de la irrupción del EZLN que generó un vacío de poder en Chiapas, el gobierno privilegió una solución autoritaria por la vía de auspiciar el crecimiento de grupos paramilitares y de policías privadas, así como a una militarización de la policía y a una constante movilización de tropas y comandos de élite en las regiones más conflictivas.

La lógica de la transición democrática que debía corresponderse con un proceso de negociación ante el cual el gobierno decía estar comprometido fue sustituida por la de la seguridad nacional, lo que condujo a la represión e incluso muerte de dirigentes locales que, en un nuevo escenario democrático, serían los representantes naturales de la población.

Entre las organizaciones afectadas figura la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco, que fue dividida por el gobierno lo mismo que la CIOAC. El "gobernador en rebeldía" Amado Avendaño sufrió un atentado fallido y robos en su residencia, como parte de una presión psicológica individualizada que redujo en forma notoria su activismo político. El PRD local se sumergió en pugnas internas, muchas de ellas alimentadas desde el poder por el ex comunista Eraclio Zepeda, y hasta los mismos ganaderos y cafetaleros priístas fueron involucrados en pugnas de poder que terminaron por dividir a sus gremios.

En ese contexto, las declaraciones de los obispos Vera y Ruiz molestaron a los sectores encargados de aplicar la guerra contrainsurgente en Chiapas y tocó a Núñez advertir —en la forma usual de la clase política— el golpe que se preparaba: "Comprenda, don Samuel, que el gobierno de la República no puede quedarse cruzado de brazos y que vamos a empezar a poner orden, porque si no se nos va de las manos el problema y nadie lo va a poder controlar." El subsecretario encargado de la seguridad interior mencionó los nombres de una serie de sacerdotes, monjas y catequistas que figuraban en una larga lista de personas a las que se vinculaba con el clima de desestabilización en

la entidad.

Pero ese mismo día, a las tres de la tarde, hizo su aparición el EPR en Guerrero y la Secretaría de Gobernación suspendió el operativo que estaba previsto en Chiapas para la semana siguiente, por lo que el nuevo enfrentamiento entre el gobierno y la diócesis se pospuso.

En realidad, la orden dada meses atrás por el presidente Zedillo de dar una vuelta de hoja al voluminoso expediente seguido en contra de Samuel Ruiz por la PGR, cuando el procurador Lozano, en presencia del mandatario, exhibió a dos cardenales y a don Samuel el pedido de detención en su contra, no significó limpiarlo de acusaciones ni quitar su nombre del "caso Chiapas", donde invariablemente y con base en presuntas declaraciones de testigos se le mencionaba como el "comandante Sam".

Si el gobierno siguió tolerando a Ruiz como mediador fue porque todavía les era útil mientras los encargados de la vía militar ajustaban los planes, pero no porque fuese confiable para las autoridades. Pese a sugerencias contrarias de funcionarios del gobierno, Zedillo congeló todo trato con el obispo y llegó incluso a expresarse en forma negativa de él.

El gobierno desarrolló una serie de acciones indirectas para desembarazarse del prelado y en varias ocasiones de los diálogos de San Andrés, la táctica estuvo dirigida a debilitar la gestión mediadora de la Conai. Ello se hizo evidente en julio de 1996, cuando el gobierno acusó a Samuel Ruiz ante la Unión Europea de "financiar la subversión en Chiapas y Guerrero".

A lo largo de 1995 el gobierno creyó poder controlar al obispo atacando a la Conai y a su diócesis. Pero como ambas instancias habían resistido el asedio, se ensayaron nuevas fórmulas. Como parte de la estrategia del Estado para golpear al EZLN se comenzó a manejar que la solución del problema ya estaba próxima y que no era necesaria la actividad de la Comisión religiosa-civil. Esto fue esbozado en un documento distribuido por las embajadas de México en el exterior, denominado "Informe sobre los avances de las negociaciones de paz en Chiapas". Una copia del documento en poder del autor, acompañado por una nota de presentación del embajador mexicano en Francia, Jorge Carpizo, y fechado en París el 13 de marzo de 1996, asienta en su primera página la aceptación por parte del gobierno de la Conai, "cuya integración (al mecanismo de diálogo de San Andrés) fue propuesta del EZLN".

Pero en realidad la génesis de la mediación fue distinta. El 1 de enero de 1994, el mismo día del levantamiento zapatista, tres funcionarios de alto nivel (dos secretarios de Estado y un ex gobernador de Chiapas) solicitaron a Samuel Ruiz, a nombre del gobierno de México, que oficiara de mediador. Don Samuel respondió con una contrapropuesta: que fueran los tres obispos chiapanecos los que asumieran la tarea. Finalmente, de común acuerdo entre las partes (gobierno-EZLN), el obispo de San Cristóbal aceptó fungir como único miembro de la Conai y el 10 de enero de 1994, comisionado por el presidente Salinas, Camacho buscó a don Samuel y el obispo comenzó la mediación; el primero en reconocer al mediador fue el gobierno, y después el EZLN.

El 13 de octubre de 1994 Samuel Ruiz propuso a las partes incorporar a la Conai ocho miembros civiles. El EZLN aceptó de inmediato y, cuando Zedillo asumió, los zapatistas incluyeron la propuesta de una Conai ampliada en una lista de condiciones al nuevo gobierno —ante los indicios de que éste pretendía deshacerse de la mediación eclesial—, que finalmente dio el 23 de diciembre el aval a la permanencia de Ruiz al frente, ahora de una comisión plural.

Según el documento de la cancillería citado, hasta marzo de 1996

el logro más importante ha sido la construcción y consolidación de un proceso de diálogo inédito, porque cuenta con una ley que compromete a las partes a una salida pacífica [...] Este conjunto de avances permite asegurar que las posibilidades de confrontación armada prácticamente han desaparecido. El conflicto ha pasado a ser un asunto fundamentalmente político. Por todo esto, existe hoy en Chiapas un clima de mayor tranquilidad y distensión, que fortalece la convivencia social en un marco de derecho, que contribuye a impulsar las actividades productivas, y que permite el ejercicio de las libertades civiles en un marco de seguridad pública al imperio de la ley.

Tres meses y medio después de emitido el documento, y cuando organismos humanitarios no gubernamentales ya situaban un marco abierto de guerra sucia en Chiapas, el gobierno presionó a la Unión Europea para evitar que financiara las actividades de la Conai.

El primer indicio de la maniobra gubernamental en contra de la Conai apareció en la columna "Templo Mayor" del periódico Reforma cuando, con motivo de la presencia en el país de Manuel Camos, jefe del departamento para México y Cuba de la Comisión Europea, el columnista (que firma F. Bartolomé) informó que éste se reuniría ese día con Samuel Ruiz para discutir un proyecto de cooperación mediante el cual "la Unión Europea le daría 250 mil dólares a la Conai". Dos preguntas del columnista llamaron la atención: "¿Se trata de un espaldarazo oficial de la UE a la Conai? ¿No se trata de una intromisión en asuntos de la vida interna de México?" (4/VII/96).

Para preservar su autonomía respecto de las dos partes del diálogo la Conai no cuenta con apoyo financiero ni del gobierno federal ni del EZLN, por lo que debe procurar sus fondos para operar (mantenimiento de dos sedes de trabajo, equipo, movilización de miembros y asesores, así como labores de relación y enlace con el gobierno y los zapatistas) de donaciones recibidas del exterior.

El gobierno mexicano conocía de los tratos de la Conai con la UE, puesto que Tlatelolco fue el conducto —por razones de orden diplomático— para que una delegación de embajadores europeos acreditados en México se entrevistara con Samuel Ruiz, en Chiapas, en febrero de 1996. De esa entrevista se derivaron distintos contactos entre la Conai y la Unión Europea en México, así como una visita del obispo a la sede de los miembros de la UE en Bruselas, que finalmente aprobó dar un donativo por 265 mil ECU (unos 320 mil dólares), dentro del Programa de Cooperación Europea denominado "Democratización y Derechos Humanos".

Allí comenzaron las presiones del gobierno mexicano. El mismo día en que F. Bartolomé escribió sobre la visita de Camos a Chiapas, Samuel Ruiz y los miembros de la Conai se enteraron por el funcionario europeo que el gobierno de México había protestado por ese financiamiento, bajo el argumento de que la Unión Europea no podía intervenir en los asuntos internos del país y que se entendería como un apoyo político a la Conai que la administración de Zedillo no recomendaba.

Como el proyecto ya había sido aprobado y no podía ser suspendido, la UE ofreció al gobierno varias opciones —como por ejemplo el apoyo a la pacificación más que a la intermediación— y aun la reducción del monto de la cooperación, lo que la Conai aceptó. Sin embargo, el 25 de julio la Comisión Europea convocó a Bruselas, por razones de urgencia, a una representación de la Conai. Allí, el enviado Miguel Álvarez fue informado por el director para América Latina de la Comisión Europea, que el 10 de julio anterior Tlatelolco había entregado una nota diplomática al representante de la UE en México, cuyos términos y argumentos obligaban a suspender el proyectado apoyo financiero.

Una reconstrucción de los hechos permite afirmar que la presión del gobierno de México fue progresiva y utilizó varios canales. Así, por ejemplo, la cancillería presionó directamente sobre el representante de la Unión Europea en México; el embajador Manuel Armendáriz, jefe de la misión mexicana ante la UE en Bruselas, hizo lo propio con su contraparte en Bélgica; también se presionó a los funcionarios europeos que visitaron el país en julio y, finalmente, siguiendo los pasos protocolarios de rigor, se entregó la nota diplomática con sello de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el número de identificación DGE02490, fechada el 9 de julio de 1996 pero que llegó a su destino un día después. En todos esos pasos, los emisarios mexicanos recurrieron a insinuaciones y confidencias que resultaron delicadas y agresivas en cuanto a su carácter diversionista respecto del papel de la mediación.

En su texto la nota de protesta —la primera en las relaciones diplomáticas entre México y la Unión Europea— resalta el marco del convenio vigente de 1991 entre ambas instancias; lamenta el rechazo de la UE a apoyar directamente proyectos gubernamentales en Chiapas, así

como la reducción del monto total anual de la cooperación europea al gobierno de México. También se subrayó la "preocupación" de que mientras sucede lo anterior, "en cambio se tiene interés en financiar a una Intermediación [...] Vemos con extrañeza y preocupación que se pretenda otorgar cuantiosos recursos de los Estados europeos por la vía de la Comisión Europea, a una Comisión cuya única tarea (sic) es mediar para la paz. Tomen en cuenta [...] que ello traería como efecto alterar el delicado equilibrio de la negociación".

También se argumentó que ese apoyo sería "violatorio del acuerdo vigente, pues éste no contempla la cooperación para la Democratización, los Derechos Humanos y la Intermediación política" y que contravenía el artículo 45 relativo a la progresión del convenio, que establece que cualquier modificación deberá contar con el consentimiento explícito de ambas partes.

La nota generó primero sorpresa y luego molestia en la Unión Europea y también en la Conai, que en un comunicado fechado el 7 de agosto de 1996 manifestó su "profunda preocupación" por la obstrucción gubernamental a su labor mediadora en beneficio de la paz en Chiapas, y rechazó "las argumentaciones escritas y verbales, carentes de verdad, que ofreciera el gobierno de México para lograr la cancelación definitiva de la ayuda".

El 5 de agosto, en Bruselas, el embajador Armendáriz intentó explicar las motivaciones del despacho de José Ángel Gurría en el "lamentable" incidente —como lo definió la Conai—, y enumeró entre ellas que la Comisión de Intermediación es "una instancia creada ad hoc y de naturaleza temporal [...] por lo que está llamada a desaparecer una vez que se consolide el proceso de paz".

En ese ir y venir diplomático la Conai no aclaró a qué se refería con las "argumentaciones verbales" del gobierno.

Según fuentes diplomáticas europeas acreditadas en México y consultadas por el autor, los emisarios del gobierno reprodujeron ante las autoridades de la UE los argumentos de los sectores duros del régimen, acusando verbalmente a Samuel Ruiz de ser el generador de la guerrilla zapatista. Lo nuevo y más preocupante es que ante las mismas instancias se acusó a Ruiz de ser el responsable del surgimiento del EPR y se insinuó que el obispo "financiaba la subversión" en Chiapas y Guerrero.

Fue en esa coyuntura que el gabinete que atiende Chiapas dentro del equipo de Seguridad Nacional instrumentó otra medida para preparar una "salida" al conflicto en ese estado. Hasta entonces, y como constaba en el documento distribuido por el embajador Carpizo en Francia, la línea de argumentación oficial había sido que la rebelión tuvo causas de fondo que el gobierno estaba en disposición de atender, aunque circunscribía el problema a un marco local indígena radicado en cuatro municipios de Los Altos. Junto con ello, el gobierno seguía insistiendo en adjudicar la autoría intelectual del estallido a "agentes externos", de allí que la táctica del equipo de contrainsurgencia —donde se inscribe la delegación gubernamental al diálogo— buscara separar al EZLN como fuerza militar de su base social para, una vez arrinconados o aniquilados, "negociar" una módica paz con los indios.

La nueva variante fue decir que en Chiapas el fondo del conflicto tenía una matriz religiosa, además de extranjera, y que don Samuel y su diócesis eran los responsables. La etiqueta que se le colgó al prelado fue la del "fundamentalismo", y esa acusación también la llevó el gobierno a la Unión Europea.

Guerra religiosa, fundamentalismo y una Conai que no era mediadora sino parte (del EZLN) y cuyo "jefe", Samuel Ruiz, hacía finanzas para las guerrillas con el fin de desestabilizar a México fue la línea de argumentación utilizada oficialmente.

Al iniciar septiembre de 1996 la situación era muy delicada y algunos miembros de la Conai temieron un nuevo atentado desestabilizador como los de 1994, con las muertes de Colosio y Ruiz Massieu, en cuyo caso el obispo Ruiz era una presa fácil y con un alto impacto político. Pero también lo eran Tacho, David y los demás comandantes zapatistas durante cualquiera de los traslados hacia y desde la mesa de diálogo de San Andrés.

El negociador Bernal negó por esos días tal eventualidad y dijo en varias ocasiones a los asistentes a la mesa:

Cómo no habremos de dar condiciones de seguridad si llevamos casi dos años sentados aquí, se han hecho treinta viajes y nunca ha pasado nada porque nosotros hemos cuidado que no pase. Si quisiéramos, pasaba. Sabemos dónde se mueven estos cabrones. No tienen ni idea cómo los tenemos de localizados, dónde viven, qué hacen, dónde se mueven. Absolutamente todo. No se les ha querido pegar y cuidamos de que no haya provocaciones.

Chiapas, julio de 1996: dos actores, dos dinámicas. Uno, el EZLN haciendo esfuerzos para eludir un golpe que de ocurrir sería demoledor para el movimiento. El otro, el Estado, presionando para que los indígenas aceptaran la caridad oficial mientras persistía, según los observadores, la maniobra de aislar a las comunidades de la guerrilla y el ejército buscaba el momento propicio para desatar una nueva ofensiva.

En ese contexto el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo organizado por el EZLN, a inicios de agosto, permitió constatar su capacidad de convocatoria, aun en condiciones de cerco militar, con la presencia de tres mil personas de 43 países que se reunieron en cinco puntos (los llamados Aguascalientes) de Los Altos y la selva Lacandona, para discutir formas y políticas de resistencia al modelo de globalización. Del encuentro también surgió la idea de crear una red de solidaridad con el zapatismo en tanto movimiento indígena, que pueda servir como factor de contención ante un eventual plan de exterminio militar.

Durante el foro se puso de manifiesto el interés mundial en relación con la experiencia del EZLN, en especial su discurso no vanguardista y de renuncia a la toma del poder en los términos tradicionales. La heterogeneidad de los convocados provenientes de círculos políticos, intelectuales y de la solidaridad, fue sintetizada así por el subcomandante Marcos: "Hay gente que lo ha perdido todo y se agarra de un clavo ardiendo." Ante ellos reconoció: "Sabemos qué no hay que hacer, no sabemos lo que hay que hacer."

El politólogo francés Alain Touraine, presente en Chiapas, destacó la enorme importancia que él veía en el esfuerzo de renovación política, social e intelectual que representaba el EZLN. Se refirió, también, a la universalidad del movimiento campesino-indígena que sorprendió al mundo en contra del anunciado fin de la historia y de las ideologías: "El zapatismo representa uno de los grandes esfuerzos sociales, como los que en su tiempo encarnaron Martin Luther King y (aún hoy) Nelson Mandela."

El escritor uruguayo Eduardo Galeano explicó a su vez: "He venido aquí porque les creo." Se refería a los zapatistas y al hecho de que "estamos entrenados para mentir diciendo y para mentir callando, porque el poder que miente, obliga a los demás a mentir por miedo o costumbre". Pero, dijo, "los zapatistas hablan con la verdad".

Un Woodstock de tercer o cuarto mundo, el encuentro intergaláctico —como lo llamó simpáticamente Marcos—, fue una fiesta de colores y de razas. Un gran mercado persa donde los protagonistas no fueron el pensador estadounidense James Petras, Danielle Mitterrand o el cineasta ruso de la perestroika, Pavel Luguín ni tampoco Marcos, sino las comunidades indígenas de Los Altos y el lodo. Una vieja luchadora mexicana, maestra de profesión, sintetizó: "Aquí todo es en exceso: la lluvia, el sol, el lodo." Y agregó: "El lodo es todo un aprendizaje, nos obliga a tener los pies firmes sobre la tierra."

Llueve a baldes sobre el techo de lámina de la escuelita primaria de La Realidad. Comparten la mesa Petras, Touraine, el mexicano Pablo González Casanova, doña Danielle, el obispo Thomas Gumbleton, el especialista en cultura maya Ivon Le Bot, Tessa Brisac, la feminista y pensadora Giselle Halimi, Eduardo Galeano. A ellos se suman los cineastas Patrick Grandperret y Carmen Castillo, el cantor Daniel Viglietti, Adolfo Gilly, los poetas Juan Bañuelos y Óscar Oliva, los ex guerrilleros Douglas Bravo, de Venezuela y Hugo Blanco, del Perú y el dirigente tupamaro Julio Marenales.

James Petras arriesga alternativas al neoliberalismo. Para el corto plazo, sugiere el establecimiento de un poder popular en los niveles local y regional, a partir de movimientos multisectoriales de carácter sociopolítico a la manera de "una estructura paralela a la del Estado burgués". Recupera el lenguaje en desuso, habla de organizaciones clasistas, de la necesidad de socializar la propiedad y de impulsar una planificación democrática descentralizada. Para el largo plazo, propone socializar las principales fuentes de producción, combinando esto con cooperativas y la propiedad familiar; llama a introducir formas de autogestión y estimular la presencia de trabajadores con vocación empresarial en empresas colectivas bajo la dirección popular, para investigar y aplicar tecnologías apropiadas.

Dice también que hay que estimular un nuevo internacionalismo: una asociación de todos los grupos que están contra el capitalismo y contra el estatismo burocrático y en favor de un socialismo autogestionario. Y frente "al imperialismo y sus aliados burgueses que promueven la integración entre capitales", plantea una integración de las economías regionales con carácter completario, producción compartida, suma de conocimientos técnicos y solidaridad.

Alain Touraine —cuya presencia en La Realidad fue impugnada por un grupo de sindicalistas franceses que criticaron al politólogo por haber apoyado las medidas neoliberales de Jacques Chirac—, trató de acomodar el zapatismo a sus creencias: "Una idea expresada en los textos zapatistas, y que comparto profundamente, es que no hay que mirar hacia atrás. La destrucción de los Estados-nación es la destrucción a la vez de formas degradadas, es la decadencia de formas corporativistas y autoritarias."

Ya el mexicano Octavio Rodríguez Araujo había hecho la defensa del Estado-nación como mecanismo para luchar contra el neoliberalismo y sus efectos. Para el académico de la UNAM, la oposición al proceso de mundialización tendrá que pasar por el fortalecimiento del Estado-nación "sobre bases populares, democráticas y verdaderamente representativas", con lo cual no estuvo de acuerdo Touraine.

En la búsqueda de un proyecto opcional al neoliberalismo, el francés igualó, sin embargo, a las organizaciones de defensa de los trabajadores con las formas corporativas y autoritarias, lo que según Rodríguez Araujo encubre el propósito de persistir con las viejas fórmulas de control. El mexicano estimó que quien supone como fundamento del Estado-nación a esas formas "degradadas", no puede estar de acuerdo en que la sociedad se organice e intente constituir nuevas formas de convivencia.

Cuando Danielle Mitterrand pidió la palabra, su voz fue acallada por el vuelo rasante de un avión militar que —así lo confirmaría el subcomandante Marcos— transportaba a un comando de tropas especiales. Alguien comentó que ése era el "saludo oficial" a los delegados intergalácticos que pudieron observar también el paso de helicópteros y movilización de tropas en Guadalupe Tepeyac, prácticas de tiros con mortero en Ocosingo, el transitar de un convoy de la policía militarizada por Oventic y al menos ocho horas de demora en un puesto migratorio a la salida de Las Margaritas, donde cerca de una treintena de camiones con delegados al encuentro fueron retenidos y los pasajeros fotografiados e interrogados.

Cuando en una rueda de prensa la enviada del New York Times, Julia Presten, le preguntó a Marcos sobre el proceso de transformación del EZLN de organización armada a fuerza civil, éste habló de la construcción de un frente zapatista como alternativa civil, existente ya en 31 de los 32 estados del país. Según Marcos,

el aspecto principal que hereda el EZLN al FZLN es que no se debe luchar por el poder y que no se puede aspirar o detentar cargos públicos o de elección popular. La otra pista se refiere a las condiciones políticas y sociales para que el EZLN pueda optar por la vía política para plantear sus demandas. Ahí nos enfrentamos con el doble discurso del gobierno: reitera que está por la vía política y la salida negociada del conflicto, pero en los hechos aumenta la presión militar.

El jefe militar agregó que el gobierno se estaba preparando para dar un golpe rápido y

contundente sobre la cabeza del EZLN... y después negociar.

Otro periodista le preguntó qué pedía el EZLN a cambio de dejar las armas: "Un mundo nuevo", dijo escuetamente. Luego aclaró: "No es un problema de armas sino de caminos. El problema es saber si hay otro camino para hacer política que no sea el de las armas."

Esa indefinición estuvo presente en las conversaciones de Marcos con algunos invitados y en la plenaria: la evidencia de que llegar al poder por las armas no es garantía para la instauración de una nueva política democrática, como podrían ejemplificarlo Nicaragua y la Cuba asediada.

Otras dudas que se formularon en el marco del encuentro estuvieron relacionadas con el problema de la logística y de los suministros para un movimiento de resistencia, siendo aludido el caso del FMLN en El Salvador, que exhibió ese talón de Aquiles y debió negociar una paz asimétrica. Se habló también de que la salida más viable podría consistir en una resistencia popular tipo Vietnam, con todo el pueblo incorporado, ante el riesgo de que el gobierno aplique en Chiapas la táctica Marulanda, en relación a la experiencia del guerrillero Manuel Marulanda Vélez, quien en 1964 instaló un foco armado en el valle de Marquetalia, una región selvática colombiana, de donde nacerían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que 32 años después y con largos periodos de aislamiento en las montañas... siguen peleando.

La clausura fue el 3 de agosto. Marcos habló de la "loca locura" de los inconformes de cinco continentes que tuvieron que romper múltiples cercos para llegar a La Realidad. Aludió a la otra realidad, la de un mundo en guerra para que las bolsas de valores mundiales sigan saqueando. Una guerra brutal, completa, universal, efectiva, en cada país, en cada ciudad, en cada campo, en cada casa. Una guerra de la maquinaria de la muerte contra el ser humano. Habló de la globalización de los mercados que borra las fronteras nacionales en beneficio de la especulación y el crimen, y de la mentira de la unipolaridad.

Desde Sao Paulo, Luis Inacio Lula da Silva llamó a los zapatistas "utópicos y románticos" y definió a Los Altos de Chiapas como "la última Meca de la izquierda mundial". Mientras, Daniel Viglietti estrenaba la guitarra valenciana que la delegación española le regaló al comandante Tacho y volvió a entonar sus viejas canciones de hacía tres décadas: "Dale tu mano al indio, dale que te hará bien."

CAPITULO 14

Danza con lobos

La crisis iniciada en mayo de 1996 en la mesa de San Andrés reflejó dos problemas de fondo acerca de cómo se había desarrollado el diálogo, que afectaron su diseño, la metodología y las negociaciones mismas. La contribución de la Conai, en 1995, fue lograr que los dos actores fundamentales se sentaran en una mesa de diálogo en donde las partes, gobierno y EZLN, aceptaran discutir una salida política. Del esquema de ventanilla que se había dado entre el EZLN y el gobierno con la interlocución de Camacho, en donde el zapatismo formulaba pedidos y el comisionado se limitaba a hacer acuse de recibo, se pasó a un esquema de partes con el compromiso de lograr acuerdos por consenso.

Lo que falló fue el supuesto de la mediación, de que a mayor avance político tendría lugar un retroceso de lo militar. Y hubo un segundo error de cálculo: que a mayores logros en la mesa de diálogo avanzaría el conjunto del proceso de pacificación en Chiapas y en todo México, considerando la demanda del EZLN de abrir una discusión política en todo el país.

El estancamiento de San Andrés durante cuatro meses y medio, en mayo-septiembre, cuando se discutía un tema eminentemente político como el de democracia y justicia, mostró los límites del proceso al tiempo que se reforzaba la presencia armada en la entidad, y no sólo como parte del cerco para inhibir al EZLN, sino que se registró una ofensiva contra las comunidades, con el objetivo de debilitar la base de sustentación del zapatismo.

Desde el 1 de enero de 1994 la mayor preocupación del Estado había sido que no volviera a reproducirse la especie armada en México. Frente a ese desafío, hubo dos visiones sobre cómo enfrentar el fenómeno zapatista: una planteó el aniquilamiento del EZLN, la otra propuso concederle la opción de convertirse en actor político. Pero las dos posturas gubernamentales persiguieron desde un inicio el mismo fin: evitar, a futuro, la reproducción de una base social indígena en Chiapas como soporte de un cuerpo armado.

Un año de negociaciones en San Andrés demostró que la lógica de fuerza y presión del Estado había terminado por imponerse. A través de la militarización, los negociadores oficiales, que actuaron como parte política del esquema contrainsurgente, bloquearon de hecho el proceso de paz y en septiembre de 1996 la polarización en todo el estado era aún más dramática que al 31 de diciembre de 1993.

Para muestra un ejemplo: el 2 de septiembre 500 campesinos irrumpieron con violencia en la cárcel municipal de Belisario Domínguez, municipio de Motozintla, sacaron a tres presuntos ladrones, los ataron a un poste de luz eléctrica, los rociaron con gasolina e intentaron quemarlos vivos. Dos murieron, uno sobrevivió.

La ley del ojo por ojo no había llegado sola sino que fue estimulada por el clima de ingobernabilidad propiciado por las autoridades locales y el ejército. La táctica fue enfrentar entre sí a las organizaciones comunitarias, sociales y civiles, y buscar que parte de ellas (las no zapatistas) evitaran el crecimiento del EZLN, sin que tuviera que ser el ejército o las fuerzas de seguridad las que se desgastaran en esa tarea. La guerra psicológica, la acción cívica y la ayuda humanitaria fueron herramientas complementarias para generar caos, y el resultado de ese método fue el desborde de las contradicciones locales —económicas, políticas, religiosas— que como señalaron el EZLN y la Conai, plantean en Chiapas un cuadro de virtual guerra civil, independientemente de la existencia del zapatismo.

El escenario del conflicto fue trasladado por el ejército de la zona de Las Cañadas al norte del estado, donde inteligencia militar supone que existen bases zapatistas. Esa táctica sirvió, de forma indirecta, para neutralizar el avance de la mesa de San Andrés. Analistas aseguran que el ejército siguió una doble estrategia: exhibir su presencia bélica en los bastiones del EZLN, sin

operar militarmente, y mostrar un nivel de actividad discreto en la zona de influencia rebelde donde desde 1995 se ha venido alentando un tipo de violencia incontrolada, cuyo propósito —si nos guiamos por los manuales de la guerra sucia— sería el de ejercer un terror paralizante sobre la población civil. En los municipios del norte de Chiapas esa misión fue encomendada a los organismos locales de seguridad (Seguridad Pública, Policía Judicial), a las "guardias blancas" y grupos paramilitares, entre ellos los Chinchulines.

De paso, el Estado insistía en su esquema original de mantener aislada la negociación con el EZLN y los resultados de los eventuales acuerdos de San Andrés, con los problemas del resto de Chiapas, reduciendo el impacto del levantamiento a sólo cuatro municipios de Los Altos y que, en caso de que el Congreso emitiera leyes emanadas del diálogo éstas tuvieran ese alcance limitado.

La doble dinámica promovida por el gobierno federal de militarización-polarización en Chiapas, mientras se seguía negociando a cuentagotas, condujo a las dos partes, a partir de mayo de 1996, a una etapa de enfrentamiento que rebasó a la mesa de San Andrés. Si ésta fue vista inicialmente como un espacio de confrontación estratégica entre el Estado y el EZLN, desde la crisis de Elorriaga y Entzin la disputa se trasladó a otros ámbitos y quedaron en evidencia los límites de San Andrés.

La ronda de agosto fue un nuevo fracaso. La reforma electoral aprobada por consenso y la aparición del EPR jugaron objetivamente a favor del gobierno. El EZLN ya no era el único interlocutor ni político ni militar y el acuerdo con los partidos en la sede de Barcelona (Gobernación) fue el "techo" de las propuestas gubernamentales. El impasse en la mesa sobre Democracia y Justicia parecía ser el anticipo de un fracaso del diálogo, lo que colocaba al EZLN en un punto crítico, ya que una ruptura dejaba automáticamente sin efecto la Ley de Pacificación y Concordia y habilitaba la represión del Estado.

El EZLN rechazó la propuesta oficial sobre democracia y la calificó de retórica, ambigua y racista. Según los zapatistas, la misma no resolvía las demandas legítimas de democracia y justicia por las que se habían levantado en armas, ya que al negar el gobierno el camino de las reformas constitucionales sobre temas sustantivos y hacia una transición a la democracia —en la lógica de Bernal y sus jefes la democracia es una realidad en México, sólo hay que "normalizarla"—, quedaban intactos los mecanismos que permiten reproducir las estructuras de opresión.

Según el diputado Marcos Rascón, la frase "todo o nada" en boca de Bernal debía ser entendida por el EZLN así: pactar con el carrancismo o aceptar, como un asunto de determinismo histórico, la fatalidad de los llanos de Celaya. El gobierno quería el desarme de la insurgencia y no un diálogo para la reforma y la apertura.

La pregunta, al iniciar septiembre de 1996, era si existían condiciones para un debate político que, como supusieron un año antes los miembros de la Conai, era la vía idónea para que el proceso de paz avanzara, o si éste era ineficaz para una salida pacífica. Tras 17 meses de diálogo intermitente en San Andrés, fue notorio que el gobierno seguía escatimando las respuestas a las demandas originales del EZLN —el único acuerdo a que se llegó sobre cultura y derechos indígenas yacía en el papel—, y en lugar de auspiciar un espacio franco para fortalecer a los actores políticos, los golpeaba y dividía.

Así las cosas, pocos eran quienes creían ya en que el Estado estaba realmente comprometido en resolver los reclamos indígenas, cuya legitimidad había sido aceptada por los dos últimos presidentes de México.

Al empantanamiento de la mesa de San Andrés contribuyó un nuevo factor: la aparición del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero. El gobierno usó ese elemento para aumentar la presión sobre el EZLN. Si hasta entonces la delegación oficial se había mantenido firme en su lógica de Estado, de que mientras los zapatistas persistieran como grupo armado no podrían recibir más prerrogativas que las que el gobierno había concedido a los otros actores nacionales, en particular los partidos políticos —a quienes por otra parte estaba obligado a reconocerles representatividad—, ahora, con la excusa del EPR, el mensaje fue que no valía la

pena invertir tanto en el EZLN, ya que con ello no se resolvía el problema de la especie movimiento armado.

La irrupción del EPR, cualesquiera que fueran su origen e intenciones, llevó inevitablemente a las dos partes a radicalizar sus posiciones. Las cosas se complicaron aún más cuando el 9 de agosto el EPR anunció ante un reducido grupo de periodistas en la montaña la creación de la estructura político-militar Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), fruto de la unión de 14 organizaciones armadas.

Según un documento que distribuyó el EPR, éste se conformó el 1 de mayo de 1994, aunque sus orígenes se remontan a 1972, con integrantes del grupo de Lucio Cabañas. Entre los movimientos clandestinos fusionados mencionaron a los Comandos Francisco Villa y Morelos, las Brigadas Genaro Vázquez y 18 de Mayo, las Células Comunistas, la Brigada de los Trabajadores, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y la Organización Armada del Pueblo (ORAP).

La comandancia general del EPR formada por José Arturo, Victoria, Antonio y Francisco, dio a conocer un programa político-militar que aspira lograr un nuevo gobierno de carácter provisional, una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución (basada en la de 1917), la construcción de una República Democrática Popular y el reordenamiento económico. Se reivindicaron como un movimiento armado de autodefensa, de carácter urbano, dispuesto a luchar contra un gobierno ilegítimo y al servicio del capital financiero internacional, y dejaron en claro que "buscamos el poder. No dialogaremos con el gobierno represor y asesino". Puntualizaron también que su accionar estaría dirigido a golpear "al Estado y la oligarquía, por lo que el pueblo no tiene nada que temer".

La primera reacción del ejército fue informar que comenzarían una lucha "antiguerrillera" en Guerrero y que para ello recurrirían a los censos de población de 1990 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para levantar un registro sobre los posibles miembros del EPR, tal y como se hizo cuando estalló el conflicto en Chiapas. (Con base en datos del INEGI, la SDN editó en 1994 el folleto Individuos involucrados en el conflicto de Chiapas, en el que la sección II de Inteligencia del estado mayor de la Defensa Nacional concluyó que había 2 725 personas sospechosas de pertenecer al EZLN, entre ellos los obispos Samuel Ruiz y Arturo Lona, así como 134 sacerdotes y religiosas nacionales y extranjeros.)

Las fuentes militares citadas por Jesús Aranda en La Jornada (10/VIII/96) adelantaron la implantación de un "intenso programa de labor social" para penetrar las comunidades donde se presume hay influencia del grupo rebelde. Entre las tareas inmediatas, escribió Aranda, se proponen "peinar" las comunidades de la sierra guerrerense para obtener información.

Sin embargo, el 14 de agosto el secretario Chuayffet afirmó que los líderes del EPR estaban plenamente identificados, que el nuevo grupo armado no tiene una estructura militar y que se trata de un movimiento en donde convergen "dos o tres" organizaciones políticas "conocidas", cuyo objetivo es crear un clima de inseguridad en el país. Para Chuayffet, el EPR seguía siendo una "pantomima". Un día antes el EPR dijo en un comunicado haberle causado 59 bajas al ejército federal, 13 muertos y 46 heridos, y que la presencia militar en Guerrero se elevaba a 23 mil efectivos.

El día 18, en Atoyac de Álvarez, durante una gira de Zedillo por el estado, la diputada federal Leticia Burgos le demandó a gritos que sacara al ejército de Guerrero: —"Eso sí que no... ¡Hasta que entreguen las armas!" —respondió el mandatario. (Durante una entrevista con Blanche Petrich, Marcos dijo que allí Zedillo legitimó al EPR como grupo armado y les dio el estatus de fuerza beligerante: "El ejército está combatiendo contra otro ejército y, hasta que se rinda, nos quitamos. Al hacer eso les está dando la beligerancia que no tenían.")

Luego, en un discurso, Zedillo dijo que se equivocan las minorías que creen que en la violencia hay respuesta o esperanza. Entonces el EPR respondió con sendas entrevistas a medios en el Distrito Federal y en el estado de México: "El secretario de Gobernación dice que ya sabe dónde estamos, quiénes y cuántos somos, como dando a entender que en el momento que decida nos va a golpear. Pero la realidad es que si no nos ha golpeado es porque no ha podido. Ésa es la

verdad." El calificativo de "pantomima" lo adjudicaron a parte de la guerra psicológica y de contrainformación de las fuerzas armadas (Proceso, 25/VIII/96).

Los comandantes Vicente y Óscar afirmaron que el EPR tiene "fuerzas frescas" en la capital del país y en el estado de México; denunciaron la política intervencionista de Estados Unidos al recomendar "descaradamente" una mayor concentración de tropas, así como proporcionar equipo, armamento y asesores militares para reprimir al pueblo; calificaron la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas como un acto típico de contrainsurgencia y un "mensaje de escarmiento" del Ejecutivo federal para amedrentar e inhibir el desarrollo de la lucha política y revolucionaria en México. También lamentaron por "apresurado" el comentario de Cuauhtémoc Cárdenas, el primero que los llamó "pantomima", lo que luego fue recogido con "habilidad propagandística" por Chuayffet; dijeron que el ejército mostró lentitud e incapacidad para resolver la contradicción que se le presenta entre dispersarse y concentrarse, y reivindicaron operativos de hostigamiento contra objetivos militares en las inmediaciones del campo militar número 1, Hidalgo y Guerrero, cuando la insurrección del EZLN.

Respecto a los zapatistas, el EPR rechazó la existencia de una rivalidad y sostuvo que "sigue vigente nuestro planteamiento de que cuantas veces necesiten de nuestra solidaridad con acciones militares, lo estaremos haciendo".

El 28 de agosto el fantasma atacó. Ese día el EPR desató una ofensiva en siete estados del país. Fueron en total 18 acciones de fuerza, cuatro de ellas de propaganda armada, que dejaron un saldo de 15 muertos, 14 heridos y un desaparecido, según fuentes oficiales. En La Crucecita, Huatulco (Oaxaca), el EPR atacó cinco puestos de vigilancia militar, naval y policiaca, y hubo nueve muertos, cinco de ellos marinos y dos miembros del EPR. También incursionaron en Tlaxiaco (Oaxaca), en Guerrero, en el estado de México, en Nuevo Necaxa (Puebla) en San Francisco del Rincón (Guanajuato), en Villahermosa (Tabasco) y en Chiapas.

Fue entonces que el gobierno reaccionó: se combatirá al EPR con las armas de la ley (el ejército) dijo Zedillo, al tiempo que afirmó que no negociaría con terroristas. Aclaró que existen "evidentes" diferencias entre el EPR y el EZLN, ya que si bien este último irrumpió en la vida nacional por la vía violenta, no lo hizo por la vía del terror. Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, dijo que el EPR podría no ser una pantomima, como originalmente se le consideró, pero lo ubicó como "un grupo de trasnochados de los setenta". Núñez identificó al EPR como el brazo armado del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP-PDLP), mientras Felipe Soriano y David Cabañas eran trasladados de la penitenciaría de Santa Marta Acatitla al penal de Almoloya, bajo el supuesto de que ambos son los cerebros de la nueva organización clandestina.

Los inesperados ataques de la guerrilla y la contracción del Dow Jones provocaron una sesión de incertidumbre en la Bolsa Mexicana de Valores, que resintió la sexta caída más significativa del año al perder 2.23%, en lo que el diario El Financiero calificó como "el efecto Chuayffet".

El 30 de agosto Zedillo reiteró: al EPR, trato de criminales. Y ahora fue el mandatario quien durante una entrevista concedida a TV Azteca dijo que el grupo armado —al que antes había definido como una "patología"— es en realidad una "pantomima", porque dice tener una causa social y no la tiene. Mientras, un militar (anónimo) pidió la suspensión de garantías en zonas de alta peligrosidad y la iniciativa privada exigió "mano dura".

En su segundo informe de gobierno, el 1 de septiembre, Zedillo dijo que la democracia, y no el terrorismo, es la vía al poder y en la parte más aplaudida de su discurso enfatizó, con semblante y gesto adusto —"con alteración y rabia", escribió Raymundo Riva Palacio— que se perseguiría a los actos terroristas (del EPR, al que no mencionó por su nombre) "con toda la fuerza del Estado".

Para entonces la comparación ya había quedado establecida: el EZLN se había transformado por obra y gracia del Estado en la guerrilla buena y el EPR en la guerrilla mala. La primera

cuenta con una base social, un líder carismático y poeta, y una página en Internet. La segunda con un pasado oscuro y sin aparente base social, se reduce a grupúsculos terroristas que esgrimen un discurso trasnochado y mal redactado. Como señaló el comentarista Jorge Zepeda Patterson, la comparación ha hecho del EZLN la guerrilla "buena" incluso para las autoridades: "Es curioso el tono nostálgico con el que hablan de la guerrilla chiapaneca algunos que llegaron a hacer del EZLN su pluma de vomitar. Ante la llegada de los rudos, el EZLN ha adquirido carnet de luchador técnico, con el glamour que ello supone" (Reforma, 1/IX/96).

Pero la realidad es siempre menos simplista que una lucha de rudos versus técnicos a la que parecía querer llevar el gobierno. Como dijo Carlos Montemayor ("México y la guerrilla", La Jornada, 30/VIII/96),

el surgimiento del EZLN y del EPR comenzó el 23 de septiembre de 1965, con el asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, en la sierra de Chihuahua y luego de la cruenta represión de los años setenta, los sobrevivientes de aquella generación de guerrilleros continuaron un trabajo de organización en la clandestinidad y fortalecieron las bases de lo que luego serían el EZLN y el EPR.

Otras voces señalaron que la definición de "terroristas" aplicada a los miembros del EPR es un calificativo reduccionista para llenar espacios retóricos y salir al paso de las angustias de las élites que piden mano dura. En su corta vida pública, el EPR ha demostrado ser un grupo armado bien organizado, que combina elementos del foquismo con una guerra de guerrillas que parece estar preparada para el largo plazo.

En ese sentido, como enseñan los manuales del Pentágono, se trata de una organización que plantea una guerra política, y que eventualmente puede recurrir al terror como estrategia secundaria. Sus años de preparación en la clandestinidad permiten suponer que cuentan con una buena cobertura logística y que ella fue producto de un trabajo político e ideológico en las comunidades de las áreas en donde operan y en centros urbanos como el Distrito Federal. Por lo que pareció poco menos que riesgosa la insinuación oficial de que no cuentan con una base social legal y en la opinión pública.

Lo más probable, como señaló Raymundo Riva Palacio, es que sean "cuadros ideológicamente entrenados y que esperaron pacientemente, organizándose y preparándose, hasta que las condiciones (objetivas) para buscar el cambio mediante la vía armada fueran las apropiadas" ("La pantomima de Zedillo", Reforma, 2/IX/96).

Lo que a todas luces no puede ser calificado como una pantomima es la creciente militarización de México. Las fuerzas armadas conocen, como era de esperar, de táctica y estrategia, y esperan el momento oportuno para golpear a la guerrilla. Lo que no supone ni justifica aspirar a llenar los vacíos de poder dejados por el mando civil, como comenzaron a sugerir distintos medios de comunicación desde la insurrección zapatista.

Una somera radiografía del proceso de militarización en todo el territorio nacional, a septiembre de 1996, arroja el siguiente panorama: el ejército extendió su presencia a los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guerrero, en una franja que abarca desde el Pacífico hasta el Golfo de México; en la Huasteca hidalguense y sierra de Puebla se incrementaron los patrullajes militares en tanto toda organización campesina es vista como un brazo del EPR; también hay movilización de soldados en la sierra de Chihuahua y en Durango, y continúan los adiestramientos de supervivencia en el desierto de Agua Salada, Baja California, donde en julio de 1996 murieron de sed 15 militares.

Si el surgimiento del EZLN en 1994 había llevado al ejército a crear un primer frente de guerra en Chiapas, el EPR obligó en junio a crear un tercer frente en varios estados, porque el segundo ya existía desde semanas atrás, cuando el general Enrique Salgado fue puesto al frente de todas las policías del Distrito Federal y colocó a generales y coroneles en los puestos de mando. Para enfrentar la eventual aparición de una guerrilla urbana en el Distrito Federal, las autoridades habían incrementado los entrenamientos del agrupamiento de granaderos, la fuerza de tarea "Zorros" y el

Grupo Especial de Respuesta Inmediata (GERI).

Pero la presencia de los militares en la capital no era exclusiva de la mayor urbe del mundo. Tropas del ejército habían asumido ya en 1995 funciones antes encomendadas a la policía judicial en la persecución al tráfico de drogas en Chihuahua. Militares dirigieron el operativo para capturar a los presuntos capos del narcotráfico, los hermanos Lupercio Serratos, en Aguascalientes. Uniformados de verde prosiguieron la búsqueda de cómplices y propiedades en Ciudad Juárez. Ejército, auxiliado por policía federal, realizó el Operativo Alacrán en Tijuana, en marzo de 1996, en busca de los hermanos Arellano Félix. Elementos de la Región Militar estaban bien activos en la batalla antinarco en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, donde pusieron en evidencia probables nexos del gobierno panista con cárteles de la droga.

A las anteriores funciones castrenses habría que agregar otra, que en general es cubierta por las fuerzas armadas, pero que el tipo de accionar utilizado por el EPR —que hasta el momento de escribir este libro sólo se había limitado a atacar objetivos militares y policiales— llevó a reforzar de inmediato: la de resguardo de las instalaciones estratégicas en todo el país. Ello comprende la protección de torres de luz, presas, pozos petroleros, centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, además de otros centros neurálgicos que, en el marco de una guerra de baja intensidad, genera desgaste físico y psicológico entre los soldados, lo que obliga a sus superiores a relevarlos periódicamente.

La teoría del experto Saxe-Fernández de que la intención del Pentágono es ocupar a las fuerzas armadas mexicanas en tareas de represión interna (guerrilla y narcotráfico), se convirtió en realidad. El problema, según ironizó un alto jefe militar ya citado, será cómo hacer volver al ejército a sus cuarteles.

Pero ese activismo castrense en los tres frentes contrainsurgentes delineados —además de asumir la lucha antinarcóticos— podría a futuro exhibir sus pies de barro, como apuntaron separadamente Marcos y la comandancia del EPR: al desparramar a sus fuerzas en todo el territorio nacional en una guerra contra un enemigo elusivo e invisible, el ejército pudo haber caído en una trampa táctica de distracción y dispersión de efectivos, con el consiguiente problema logístico que ello implica, en cuanto a suministros, material bélico y recursos financieros. "La dislocación de fuerzas —incluso como profilaxis— es malo para un ejército que tiene que hacer eso a la ofensiva; eso sirve para la defensiva", dijo Marcos durante una entrevista con *La Jomada* (18/VIII/96).

De acuerdo con algunas expresiones de gobernantes, militares, políticos y funcionarios, como las del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, la presencia de soldados en las calles, los pueblos y las montañas en tareas policiales es pedida y aplaudida por la población. Pero según Marcos, ese "entusiasmo equivocado" contiene algunos peligros, desde el argumento mismo: si la policía no sirve, que entre el ejército. "Entonces se puede decir: 'si el gobierno no sirve, que entre el ejército'. De esa manera, se está llamando a un golpe de Estado" (*La Jornada*, 18/VIII/96).

Otra versión no descartable que vino a avalar la teoría del caos fue la que atribuyó la aparente pasividad gubernamental ante la ola de violencia imperante en el país, que incluye los ataques del EPR contra objetivos de las fuerzas de seguridad, pero también los robos, secuestros, violaciones, ejecuciones sumarias y asesinatos, así como la impunidad del narcotráfico y la de los delincuentes de cuello blanco, a la existencia de un plan deliberado que la dejó crecer ex profeso y que apareciera como fuera de control, para hacer inevitable el llamado a las fuerzas armadas a imponer la ley y el orden. En esta perspectiva, no dejó de ser curioso que la asunción del general Salgado en la policía capitalina generara menos expectativas que los rumores sobre las apariciones del chupacabras; sin descartar que ambas cosas hayan formado parte de un mismo operativo de acción psicológica en contra de la población.

En otra vertiente, la teoría del caos se vinculó también con varios hechos de sangre: la muerte violenta del teniente de comunicaciones del ejército, Pablo Monsalvo; el asesinato del teniente coronel de infantería, José Luis Arroyo, jefe de seguridad del Estado Mayor Presidencial; la muerte del general de división diplomado de Estado Mayor, Vinicio Santoyo, director general de artillería de la SDN y el asesinato del técnico de servicios de inteligencia del Cisen, Jorge

Torres Mondragón.

Mientras Yuri Serbolov consideró la posibilidad de que esas muertes hayan sido parte de un intento por desestabilizar a las fuerzas armadas y de seguridad nacional, y de minar sus bases para forzar a la estructura militar a asumir otra actitud ("Columbros: ¿el ejército al rescate?", El Grito, 17-23/VI/96), Javier Ibarrola, en su columna "Fuerzas Armadas" consideró ese análisis como hartamente simplista y adelantó que "el ejército no responde a provocaciones calenturientas" (El Financiero, 15/V/96).

Por otro lado, el surgimiento del EPR planteó la incógnita de qué pasaría con el EZLN y si el radicalismo del nuevo grupo armado dejaba al zapatismo en una situación similar a la que vivió el PRD en 1994: un desplazamiento desde la izquierda hacia el centro.

La mesa de San Andrés III, prevista para el 4 de septiembre y donde se vería el resultado de la consulta de la dirigencia del EZLN con sus bases, luego de que la ronda anterior terminó sin acuerdos y con acusaciones mutuas ("No aceptaremos limosnas: EZLN"; "Venían por todo o nada: Bernal", sintetizó La Jornada por esos días), sería el primer encuentro de las partes luego de que Zedillo aceptara públicamente al EZLN como una guerrilla legítima.

Durante dos semanas el EZLN y Marcos permanecieron en silencio. En apariencia, con sus declaraciones, el EPR había tendido un puente hacia el zapatismo, cuidando las formas. Si en algún momento se había registrado una ruptura EZLN-EPR, como sugirieron algunos analistas que avalaron la idea de un frente armado común, ésta podía vincularse al tema de la autonomía para operar, por lo que era posible pensar en una reconciliación.

Pero no parecía ser éste el caso: la aparición del EPR sí había afectado al EZLN en la mesa de San Andrés. La proclama de Aguas Blancas sobre solución a demandas o guerra colocaba a la lucha armada en el terreno tradicional y debilitaba lo que el EZLN había incorporado como aportación a las experiencias insurreccionales en América Latina. A la vez, el EZLN no podía aparecer ahora como un movimiento reformista ni como una guerrilla domesticada, cuando precisamente el gobierno comenzó a enviar signos en esa dirección; Zedillo le dio al EZLN, en una entrevista con Zabludovsky, el estatus sui generis de guerrilla legítima.

El EZLN podía optar por asumir esa imagen, haciéndole el juego al Estado, o reivindicar su carácter de movimiento revolucionario sin abandonar la vía del diálogo. Pero de todos modos esta última opción lo obligaba a radicalizar su postura, lo que a su vez alejaba la posibilidad de un acuerdo.

En la cumbre contra el neoliberalismo, Marcos reiteró que el EZLN estaba en un punto de indefinición el cual tenía que resolverse. Quedaban dos caminos: aceptar la oferta del gobierno de convertirse en un grupo político dentro de los marcos del sistema o volver a la montaña como una fuerza clandestina...

Ésa fue la discusión que se suscitó en el seno del EZLN durante las dos últimas semanas de agosto. Fuentes cercanas a la guerrilla dijeron que un sector se pronunció por retomar la vía militar y otro por transitar hacia la arena política como una fuerza legal. Ésos fueron los ejes de la discusión, condicionada por las últimas acciones del EPR que hicieron aún más complejos los interrogantes. Para quienes apoyaron la idea de que el EZLN es un ejemplo de que es posible ser revolucionario haciendo política, mientras se deja descansar las armas, la contradicción se planteó en cuanto a que si esa combinación es viable y si el camino de la negociación conduce a los cambios estructurales demandados por la sociedad indígena.

El debate, calificado de intenso por el propio EZLN, incluyó la discusión de que al retomar la lucha armada le servía en bandeja de plata al Estado la justificación para una salida militar al conflicto.

En tanto, un Marco Antonio Bernal crecido acariciaba la idea de festejar su triunfo sobre el zapatismo. Según él, el EZLN optaría por el diálogo en los términos oficiales para que no se vinculara al EPR, entregando finalmente las armas.

El 2 de septiembre, después de consultar con sus bases, el CCRI anunció que suspendía su participación en el diálogo de San Andrés.

La comandancia del EZLN responsabilizó de esa decisión a la estrategia gubernamental del "olvido y el achicamiento": luego de siete meses los acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena eran letra muerta, la Comisión de Seguimiento y Verificación seguía sin instalarse y en la mesa de Democracia y Justicia la política oficial había sido aplicada con "intransigencia y cerrazón", lo que redujo ambas demandas a "cuestiones locales". La estrategia del sube y baja, como la llamó el CCRI: "Poco en Bucareli y nada en San Andrés".

Según el EZLN y en cuanto a la reforma del Estado, la propuesta oficial fue de abstracciones y cero reformas, y de continuar con la política indigenista tradicional: prepotencia, racismo, intolerancia. "El gobierno insiste en ver a los indígenas como sujetos de recibir limosnas y fotografías, pero no como actores políticos."

En un segundo punto, el extenso comunicado se refirió a la situación de los presuntos zapatistas que aún continuaban presos y que según el EZLN son "rehenes del terrorismo de Estado". Con la condena a los presos de Yanga, el gobierno insistía en tratar a los zapatistas como si fuesen "una pandilla de delincuentes" mientras los entretenía con una mesa de negociación. El documento agregó que contrario a la PGR y al poder judicial, "el subsecretario de Gobernación, el señor Núñez, declara que el gobierno no negocia con delincuentes y terroristas (para argumentar por qué no negocian con el EPR), pero trata y condena como delincuentes a ciudadanos acusados de ser parte del EZLN, organización con la que negocia".

En el punto tres sobre el estado de derecho en Chiapas, los zapatistas acusaron al gobernador Ruiz Ferro de ser "cómplice del ladrón Raúl Salinas" y de darle una "careta legal al estado de sitio" en que vive la población chiapaneca. Según el EZLN, Ruiz Ferro y "su banda (encabezada por Eraclio Zepeda y Uriel Tarquín)" fueron impuestos por los militares y han sumido en el terror a miles de familias indígenas por medio de los escuadrones paramilitares. En el norte del estado, "de facto [...] gobierna la brutalidad de una guerra civil que ya es inocultable [...] los verdaderos gobernantes de Chiapas (es decir, los militares), siguen sus planes de aniquilamiento y (el ejército) ha aumentado y mejorado la calidad de su técnica y de la composición de sus soldados".

Según la enumeración zapatista,

tropas aerotransportadas, especializadas en la persecución y aniquilamiento en terreno selvático fueron colocadas en los diferentes puntos de despliegue militar dentro de la llamada zona de conflicto. Los patrullajes por tierra y aire continúan y aumentan su tiempo y presencia. Las columnas terrestres han incorporado tanquetas y armamento pesado a sus convoyes. Hay una creciente inquietud dentro de las guarniciones federales y ha aumentado el número de desertiones entre la tropa gubernamental (como siempre ocurre cuando los federales se preparan para una acción ofensiva) y son ya incontrolables los rumores de que el ejército prepara una acción relámpago contra los zapatistas... como respuesta a las acciones del EPR.

En ese contexto, agregó el CCRI, las comunidades indígenas "son usadas como rehenes de una negociación que pretende lo imposible: la rendición incondicional del EZLN.

Para la comandancia rebelde, la aparición del EPR no fue leída por el gobierno como un nuevo y urgente llamado a abrir los espacios de participación democrática, sino como la posibilidad de "tender la trampa" de la opción entre la guerrilla buena y guerrilla mala en la negociación con el EZLN.

De acuerdo con el documento, "esperando la lógica del deslinde del EZLN respecto del EPR, el gobierno supuso que ahora sí" los zapatistas aceptarían "cualquier cosa que se les ofrezca [...] Se equivoca el gobierno: en las montañas del sureste mexicano no hay guerrilla buena y guerrilla mala; hay ciudadanos rebeldes en armas que no tienen espacios democráticos de participación política pacífica y sí tienen una base social harta de declaraciones de bonanza y repunte económico, y de realidades de miseria. Somos diferentes del EPR, pero no somos sus contrarios".

El CCRI se preguntó: "¿Cómo mantener una negociación en estos términos? ¿Debemos permitir

que la mesa de San Andrés se convierta en la pantomima que desea la delegación gubernamental?" Luego dijeron que en su consulta los pueblos zapatistas se manifestaron por la paz, pero no a cualquier precio. "No dejarse engañar, no venderse, no rendirse", ésa fue la orden que les dieron los pueblos, dijeron los comandantes. De allí la decisión de no asistir a la ronda del 4 de septiembre, "sin importar las consecuencias".

El EZLN anunció además que había adoptado posiciones defensivas y aseguró que no realizaría acciones militares de tipo ofensiva. Respecto del EPR, concluyó que no se lo ve como a un enemigo ni un rival, que no tienen relación y que la lógica política y militar del EZLN responde a su situación interna y a sus demandas propias.

En otros cuatro comunicados simultáneos Marcos profundizó en algunos de esos temas. Un mensaje estuvo dirigido al presidente Zedillo, a quien le dijo que su discurso del 30 de agosto anterior (acerca de que haría caer todo el peso de la ley contra el EPR y que no dialogará con subversivos) le había hecho recordar el del 5 de febrero de 1995, que precedió a "la traición de ese año". Marcos le preguntó si quienes le aconsejaron la solución militar en 1995 "han vuelto a su lado" y le adelantó que si "su estrategia (era) esperar el momento oportuno para la vía militar, pues ni modos. Parece que han creado el clima de terror que necesitaban y, es seguro, consideran que ya tienen el respaldo de la opinión pública nacional e internacional para atacar a los zapatistas. Si es así pues entonces nos vemos en el infierno".

En el mismo tono lúgubre y con el sentido de inmolación de otras veces, el líder zapatista firmó su comunicado "desde las montañas de Numancia", en alusión al episodio histórico en que los habitantes de esa ciudad española prefirieron morir calcinados, antes que rendirse a las tropas romanas que incendiaron la ciudad después de un prolongado sitio en el año 133 antes de Cristo.

En otro comunicado Marcos trazó la línea que diferencia al EZLN del EPR. Rechazó el apoyo ofrecido por el nuevo grupo armado:

No lo necesitamos, no lo buscamos, no lo queremos [...] el apoyo que queremos es el de la sociedad civil, y son movilizaciones pacíficas y civiles las que esperamos. No son armas, combatientes o acciones militares. De los primeros, armas y combatientes, tenemos suficientes. De las segundas, las acciones militares, tenemos la capacidad que tenemos y eso nos basta [...] No nos salven ni nos rescaten [...] Por nosotros no se preocupen. No los atacaremos. No hemos caído en el juego del poder dominante que promueve el enfrentamiento entre la guerrilla buena y la guerrilla mala. Ustedes no son nuestro enemigo [...] Somos diferentes [...] No luchamos por el poder y sí le declaramos la guerra al ejército federal (desafío que nunca nos perdonarán). La diferencia está en que nuestras propuestas políticas son diametralmente distintas y eso es evidente en el discurso y la práctica de las dos organizaciones [...] Ustedes luchan por la toma del poder. Nosotros por democracia, libertad y justicia. No es lo mismo.

En otra parte Marcos le reprochó agriamente al EPR su operativo propagandístico en Chiapas el 28 de agosto (extraños bloqueos de carreteras que nadie vio, pero que fueron consignados por los boletines de prensa gubernamentales), y le dijo que fue

inútil y tonto en el mejor de los casos, y provocador en el peor. Ese acto vino a colocarse en el final de nuestra consulta interna y puso en peligro la vida y libertad de los dirigentes indígenas que, en esos días, recogían los resultados de la opinión de los pueblos [...] ¿Para qué un operativo de propaganda en Chiapas si ya habían demostrado que tienen capacidad para moverse en muchas partes de México? ¿Cayeron ustedes en la trampa del juego de las rivalidades que les propuso el gobierno?

En un cuarto comunicado Marcos hizo un recuento de la relación del EZLN con la "señora" sociedad civil a quien le dirigió el mensaje y formuló tres definiciones:

Federales. El gobierno tiene soldados. El pueblo indígena tiene soldados [...] Los soldados del gobierno disparan para abajo, a donde están los nuestros. Los indígenas rebeldes disparan para arriba. No para matar

gobiernos, dicen. Para que despierte la historia, gritan. Jodidos. Los más poderosos de los poderosos practican una democracia curiosa, la democracia del desprecio. Para ellos no hay indios o mestizos, blancos o morenos. Para los poderosos, los otros tienen un solo nombre: jodidos. Uno. Uno no es siempre uno. Uno es, unas veces, tres: uno el que fue, uno el que es, uno el que puede ser. Uno es, otras veces, lo que los demás quieren que uno sea. Hoy, uno no es ninguno. En el mañana que soñamos nosotros uno será uno.

Hubo un quinto mensaje del sub, también "desde las montañas de Numancia" y dirigido a la prensa nacional e internacional, donde Marcos dio a entender que podría ser ejecutado por elementos a los cuales no identificó. Pero, sugestivamente, aludió a la experiencia de división interna de la guerrilla salvadoreña que llevó a la ejecución en 1975 del poeta Roque Dalton, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), a manos de sus dirigentes encabezados por Joaquín Villalobos. Dijo Marcos:

P.D. Que confiesa sus desviaciones. Cuando Roque Dalton escribía que era posible llegar a "la revolución por la poesía", la dirección del ERP salvadoreño planeaba el asesinato del poeta guerrillero por "desviaciones" y "agente enemigo". Hoy, la antigua y "revolucionaria" dirección del ERP hace alianzas con la criminal derecha salvadoreña, y desde la tumba Roque sigue maldiciendo al Poder y caminando a la revolución por la poesía. ¿Alguna semejanza? Además, creo que para ser sólo unos poetas, hemos dado ya bastantes problemas al Poder, ¿o no?

El 31 de agosto de 1996 La Jornada divulgó en una nota de primera plana los fragmentos no censurados de un reporte atribuido al Pentágono, clasificado como "secreto y confidencial" y decodificado en diciembre del año anterior. El título encerraba el mensaje: "Previsible, buena acogida a tropas de Estados Unidos si peligran el gobierno mexicano."

Elaborado a comienzos de 1994, el informe de inteligencia militar destacaba como "concebible" el hecho de que un eventual despliegue de tropas estadounidenses en México fuera recibido favorablemente, si el gobierno mexicano se viera enfrentado a la amenaza de ser derrocado como resultado "del caos económico y social generalizado". Ese riesgo de desestabilización fue considerado en el documento como de rango "medio".

Clasificado por el Pentágono bajo el código INSCOM SCG 90-01, fue decodificado bajo el estatus llamado OADR, a raíz de una demanda de información interpuesta por el periodista independiente Jeremy Bigwood al amparo del Acta de Libertad de Información.

El reporte identificó a "grupitos terroristas" como el PROCUP y organizaciones "comunistas" afines que "suelen poner bombas, ocasionalmente, en bancos, agencias de venta de autos y empresas estadounidenses" en la ciudad de México y otras localidades. Al EZLN lo definió como un grupo insurgente.

Ya entonces el análisis de la situación previo que el sistema de inteligencia y la estabilidad de México enfrentarían serios problemas causados por la corrupción y la inversión inadecuada de recursos.

Respecto al probable escenario de un despliegue de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano, el documento del Pentágono contenía dos párrafos legibles y uno censurado. Uno señalaba que debido a la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, era altamente improbable que los mexicanos pudieran ver con buenos ojos la presencia de tropas estadounidenses en su territorio. "A los mexicanos les desagrada profundamente la interferencia estadounidense en sus asuntos internos. Este sesgo sólo podría ser superado mediante un requerimiento del gobierno mexicano de ayuda militar estadounidense para manejar una crisis." El otro párrafo agregaba:

Es concebible que un eventual despliegue de tropas estadounidenses en México sea recibido favorablemente si el gobierno de México enfrentara la amenaza de ser derrocado como resultado del caos económico y social generalizado [...] En un escenario así, los servicios de inteligencia y de seguridad probablemente cooperarían con la inteligencia estadounidense en la identificación de amenazas a su

estabilidad interna.

Concluía que "los terroristas y los grupos insurgentes mexicanos" no representan una fuerza suficiente como para amenazar seriamente a tropas de Estados Unidos.

La divulgación del documento no provocó una reacción pública del gobierno ni del Congreso mexicanos. Los días 4 y 5 de septiembre El Financiero confirmó que desde mediados de 1999, la Agencia de Inteligencia Militar de Estados Unidos (DÍA, por sus siglas en inglés) había detectado la presencia de grupos armados en 12 estados de México, aparte de Chiapas.

El análisis "secreto", que también fue decodificado parcialmente el 26 de agosto de 1996 a petición de El Financiero (que recurrió al Acta de Libertad de Información), consignó que además del EZLN había grupos de "guerrilleros/ terroristas" operando en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Hidalgo y Veracruz.

Fechado el 10 de enero de 1995, el informe de la DÍA hizo alusión de los desmentidos recurrentes de la SDN de México sobre la inexistencia de otros grupos armados en el país —aparte del zapatismo—, y comentó que "eso es bueno para el consumo interno". Sin embargo, el documento expresó la preocupación del Pentágono ante la "capacidad limitada" de las fuerzas armadas mexicanas para responder a la eventualidad de una insurrección generalizada.

El reporte formó parte de un total de 264 documentos desclasificados por el Pentágono. Otro análisis de la DÍA identificó a 37 organizaciones "subversivas-guerrilleras" que operan en México desde Chiapas hasta Sonora (13 grupos en Chiapas incluyendo al EZLN, tres en Oaxaca, nueve en Hidalgo y un número aproximado de 150 guerrilleros del PROCUP, la Organización Campesina de la Sierra del Sur y el Partido de los Pobres en la sierra guerrerense), que pudieran capitalizar el descontento social ante la crisis mexicana. Advirtió que en caso de reanudarse las hostilidades en Chiapas, el ejército mexicano tendría dificultades para librar una guerra en varios frentes.

El pentágono interpretó:

Hay indicios de que partes del sector civil pudieran estar aplicando presión a favor de lo que consideran será una solución militar rápida al complejo problema político, lo que luego (es de esperarse) ayudará a poner fin a los problemas político-económicos que enfrenta actualmente México. De ser cierta, dicha percepción —de que el ejército ofrece una solución fácil, de corto plazo y rápida a las dificultades de Chiapas— es engañosa e irreal.

La divulgación de los documentos no tuvo comentarios oficiales de Los Pinos ni de la SDN, pero las evidencias de una posible explosión social en el país, anticipada ya por la inteligencia militar de Estados Unidos y de México, estaban a los ojos de cualquier observador imparcial tras dos años de gobierno zedillista. Desde Santiago de Chile y luego del segundo informe de gobierno, el líder del PAN, Felipe Calderón, advirtió con preocupación sobre la tendencia hacia una militarización y un endurecimiento que reviva "tentaciones autoritarias" en México, como preámbulo para un golpe de mano o una especie de fujimorazo de Zedillo.

Un día después del segundo informe de gobierno y en presencia del presidente Zedillo el secretario de, SDN. Enrique Cervantes, pronunció un discurso con un lenguaje de contenido antineoliberal: definió a la pobreza como el principal enemigo del país, y dijo que el surgimiento de las guerrillas es consecuencia de una situación de marginación en grado de desesperación. "Hoy la urgencia es la justicia económica", dijo el general quien, a conciencia o no, recuperó un viejo concepto socialdemócrata y tercerista que, en el pasado, fue de la mano del no alineamiento político y militar.

Expresado a pocas horas de que el mandatario ratificara su vocación neoliberal, y ante los signos irradiados desde la dirección del PRI en favor de "una economía para la justicia social", ambos mensajes fueron interpretados como la antesala de un posible cambio de nimbo, con Zedillo o sin Zedillo; lo que en una cierta lectura pareció coincidir con las premoniciones del panista Calderón.

El 7 de septiembre Zedillo anunció un programa nacional contra la pobreza y dijo que se libraría una lucha sin cuartel de pueblo y gobierno contra el terrorismo. Ese mismo día las bases del PRI se pronunciaron por la expulsión de Carlos Salinas del partido oficial.

El día 8 Gobernación dio finalmente respuesta a los pronunciamientos zapatistas de seis días antes. A través de un comunicado ampliamente difundido en los medios, afirmó que el EZLN "miente" y llamó a Sebastián Guillen Vicente a "honrar el compromiso" de que la violencia no es la salida.

La réplica del EZLN no se hizo esperar: "Diálogo serio, o ninguno." De nuevo fueron varios los comunicados zapatistas y en uno de ellos, Marcos denunció que las guarniciones federales ubicadas en La Garrucha, Patiwitz, La Sultana, Guadalupe Trinitaria, Laguna Santa Elena y Las Tacitas habían iniciado su avance hacia las posiciones de montaña de la guerrilla. "Las tropas gubernamentales pretenden chocar con nuestras tuerzas y justificar, de esta forma, la ofensiva militar. Hasta en cinco ocasiones, los días 3, 4 y 5 del presente mes, nuestros puestos de avanzada han hecho contacto visual con las columnas federales cuando éstas han entrado, sin saberlo, en sendas emboscadas defensivas. La situación en la selva Lacandona es cada día más tensa, y se hace más difícil el control de los combatientes."

La paz volvía a pender de un hilo mientras la escalada verbal iba en aumento. El cambio de tono de Gobernación, que hizo olvidar la medida de Zedillo cuando aludió en su segundo informe al conflicto en Chiapas, retrotrajo el escenario a los comunicados oficiales del 9 de febrero de 1995.

Mientras, y a 19 meses de distancia, un sondeo nacional realizado por Alianza Cívica reveló ante la pregunta de quién se esfuerza más por la paz, que 21.9% de las personas encuestadas consideraba que el gobierno y 75.6% que el EZLN.

Al momento de escribir estas líneas y dos meses antes de los comicios estadounidenses donde el presidente Clinton podría ser reelecto, la valoración temprana de quienes en 1990 identificaron al Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio como algo que escapaba a lo meramente comercial para proyectarse a lo geopolítico, era ya una certidumbre. La profecía formulada entonces por académicos de la Universidad de Texas, que aseguraron en un estudio que existía un plan elaborado por la inteligencia estadounidense para integrar militarmente a México, "considerándolo como el flanco sur, so pretexto de librar la guerra a las drogas", se había cumplido.

También iba camino de consumarse la previsión del catedrático de la Universidad de Harvard, Jorge Domínguez, de que al convertirse México en un aliado de la seguridad militar estadounidense, las fuerzas armadas mexicanas cambiarían sus funciones y misiones, de lo propiamente militar a lo policial. La vieja teoría del ex director de la CÍA, William Colby, quien ante la hipótesis de una invasión de Estados Unidos a México, dijo que "lo más probable es que el ejército mexicano no pueda evitarlo; en ese sentido, obviamente México no necesita ejército; lo que necesita internamente es algún tipo de fuerza policial" (Excélsior, 19/VI/1990). En junio de 1996, y en el marco de la llegada del general Salgado al mando de la policía capitalina, el analista Gustavo Lomelín reveló la existencia de un proyecto "confidencial" para crear la policía nacional (una especie de guardia nacional).

Por otra parte, altos funcionarios estadounidenses dejaron claro a lo largo de todo el proceso de integración vertical de México a la superpotencia mundial, que el NAFTA es la piedra angular de una articulación geopolítica que contempla tres esferas: comercial, política y militar. El jefe de la diplomacia estadounidense, Warren Christopher, fue muy preciso al describir el tratado firmado por la Casa Blanca con Canadá y México como "un puente para una fuerte cooperación económica y política con América Latina", y al agregar que una proyección hemisférica del NAFTA será "nuestra prioridad para fortalecer la seguridad económica de Estados Unidos".

A partir de entonces, como señaló John Saxe-Fernández, el Departamento de Defensa, la CÍA y la Agencia Nacional de Seguridad apresuraron la articulación de una línea de "proyección de poder" desde la frontera norte de México hasta Chiapas, siguiendo los parámetros y mecanismos de seguridad tradicionales que han caracterizado el comportamiento de lo que historiadores como Walter Leféber apropiadamente han denominado "la presidencia imperial".

Si en septiembre de 1996 seguía suspendida la privatización de las petroquímicas y el gas natural,

y se había aplazado la venta del tren transistmico que permitirá la integración ferrocarrilera continental de México, bajo control de empresas estadounidenses como Burlington, Santa Fe Pacific y Southwest Pacific y como parte de un megaproyecto que incluye la construcción de una autopista y dos unidades generadoras de energía eléctrica en el istmo de Tehuantepec, para competir con el canal de Panamá y completar la integración vertical con Estados Unidos, no se había detenido en cambio lo que el jefe del Pentágono, William Perry, definió en el campo militar número 1 como "el tercer vínculo": las fuerzas armadas mexicanas dependían de una forma cada vez más creciente del complejo militar-industrial estadounidense en materia de suministro de inteligencia obtenida por vía tecnológica; capacitación doctrinaria y operativa en contrainsurgencia, además de asesoría y el material bélico destinado a esos fines.

Por otra parte, dos meses antes de los comicios de noviembre en Estados Unidos, distintas instancias políticas y civiles de ese país presionaban a Clinton para que aportara una solución final al "caos" imperante en México, a fin de evitar una nueva oleada masiva de inmigrantes ilegales a territorio norteamericano.

Para entonces la política económica diseñada para México por Wall Street, el FMI, el Banco Mundial y el BID había demostrado su incapacidad para frenar el flujo de indocumentados y la militarización de México parecía ser la respuesta de Clinton a ese pedido. Así como a través de la línea dura el general Augusto Pinochet logró generar cierta estabilidad en Chile, país que se convirtió en vidriera del neoliberalismo en América Latina, ahora le tocaba el turno a México.

Pareció cada vez más evidente que la militarización del país estaba directamente ligada a lo que Peter Phillips definió como un sistema de "mercantilismo corporativo" manejado por multinacionales que se rigen con normas "totalitarias" (revista Challenge, enero-febrero 1992). El profesor estadounidense Noam Chomsky señala en su libro Política y cultura afinales del siglo XX, que "para que el club de los hombres más ricos pueda gobernar el mundo con eficacia en función de los intereses de sus miembros, hay que mantener a la chusma en el lugar que le corresponde: en el Sur, hambrienta y reprimida; en el propio país, aislada y distraída". Chomsky afirma que el caso más ilustrativo es el NAFTA, que será un filón de oro para los inversionistas que podrán trasladar la producción a zonas de bajos salarios: zonas donde elevados niveles de represión, controles dictatoriales y una inmensa fuerza laboral sobrante los mantendrá bajos.

Por lo mismo, queda la idea de que la frontera del caos tan largamente anunciada en México es parte de un diseño global que busca asegurar el control de las transnacionales y sus operadores locales sobre los recursos geoestratégicos del país, mediante el uso de la fuerza. Y si, como afirma el Pentágono, para impedir el caos económico y social generalizado y mantener al país con bajos salarios y alta represión —al decir de Chomsky— las fuerzas armadas locales no se dieran abasto, el gobierno mexicano ya sabe que tiene a su disposición al ejército de Estados Unidos.

EPILOGO

La convulsa XVII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, celebrada los días 20 y 21 de septiembre, y las posteriores acciones del presidente Zedillo no fueron una buena noticia para los mexicanos.

Los analistas se enredaron en la disputa entre "dinosaurios" y "tecnócratas" y hubo coincidencia de que ese "round" lo ganaron los sectores "duros" y "caciquiles", es decir, los políticos tradicionales cultivadores del corporativismo y clientelismo.

Gráficamente, un columnista ironizó: "Bienvenidos al pasado." Aunque hubo, sí, cambios, y mucho se habló de los famosos "candados" que las bases del PRI pusieron al jefe máximo del partido y titular del ejecutivo, de cara a los comicios intermedios de 1997 y a las elecciones presidenciales del año 2000.

En adelante, los requisitos que deberán cumplir los priístas que aspiren a ser candidatos a la presidencia de la República y gubernaturas son: una militancia mínima de diez años, haber ocupado un cargo dirigente dentro del partido y ostentar al menos un cargo de elección popular. Esos "candados", que algunos observadores definieron como un cobro de factura de la militancia del PRI a la dirigencia tecnoburocrática que accedió a los controles del poder político desde el sexenio de Miguel de la Madrid imponen, en teoría, un límite a la tradicional facultad metaconstitucional del presidente en turno para designar a su sucesor; el famoso "dedazo".

De cumplirse esos requisitos en el proceso de selección de los futuros candidatos del PRI a la presidencia, dejaría prácticamente a todos los tecnócratas del gabinete eliminados; entre ellos a personajes como el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz; el titular de Comercio, Herminio Blanco; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Téllez, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Adrián Lajous, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Antonio Ruiz Sacristán.

Del actual cuerpo de secretarios de Estado sólo tres funcionarios reúnen las condiciones impuestas por la XVII Asamblea: el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffét; el titular de Agricultura, Francisco Labastida Ochoa, quien está aglutinando a varios zedillistas y que, por su formación y carrera, será el más directo beneficiario del hecho de que ninguno de los hombres del equipo económico pueda ser candidato, y la secretaria de Turismo, Silvia Hernández, por quien nadie parece apostar. Fuera del gabinete, pero desde la presidencia del Senado, Fernando Ortiz Arana cuenta con amplios sectores del PRI dispuestos a apoyarlo. Pero también, entre quienes ganaron con los "candados", aparecen los gobernadores Roberto Madrazo, Manuel Bartlett, Patricio Chirinos y Víctor Cervera.

Pero de acuerdo con algunos analistas, el epílogo de la asamblea priísta no se refugia en el concepto lampedusiano de cambiar para no cambiar. El PRI cambió, pero no para adelante. No hay una "nueva cultura priísta" como dijeron al término de la reunión algunos ideólogos del partido. Al contrario, en esa visión se habría producido una reconquista de las posiciones del poder por los viejos grupos corporativos antidemocráticos, que enarbolando supuestas banderas nacionalistas reaccionaron contra el manipuleo que se ha hecho de su partido en el último decenio. Eso no significa de ninguna manera que el camino elegido por la tecnoburocracia haya sido mejor. En todo caso, deben compartir la derrota: unos, por resistirse a reinventarse como partido, y los otros por haber estirado el tejido político pensando que la elasticidad era inagotable.

Uno de los perdedores momentáneos fue Zedillo, quien de acuerdo con diversas fuentes mostró irritación y enojo ante la nueva exigencia de acreditar un puesto de elección popular para acceder a la candidatura del PRI a la presidencia. Sin embargo, el presidente reaccionó rápidamente y dos días después de concluida la asamblea (23/IX/96), se anunció que uno de los hombres de su círculo íntimo, Esteban Moctezuma, ocuparía la secretaría técnica del Consejo Político Nacional del PRI. Momentos después, César Augusto Santiago —reputado como el principal exponente de las técnicas fraudulentas del partido— "renunció" a esa secretaría, con lo que se fracturó la tríada dirigente conformada por el propio César Augusto Santiago, por Santiago Oñate y por Fernando Ortiz Arana,

considerados como los operadores más fuertes dentro del priísmo y que, hasta entonces, conformaban de manera visible el principal obstáculo en la carrera del Grupo Toluca (el de Chuayffet) hacia la presidencia en el año 2000.

Definido como el exponente más joven del equipo tecnocrático, Moctezuma estaba en receso desde junio de 1995, cuando los conflictos poselectorales en Tabasco y la matanza de Aguas Blancas lo obligaron a salir de la sede de Bucareli, tras siete meses de gestión. Su arribo al CPN —organismo rector de los procedimientos internos del PRI, desde donde tendrá la facultad estatutaria de aprobar o desaprobar las candidaturas partidarias, incluso la presidencial— significa que en la disputa por la hegemonía entre las fracciones del poder, el titular de Los Pinos le puso su propio "candado" a la clase política y que el próximo candidato presidencial priísta será designado, según la fórmula tradicional, por "dedazo" presidencial. Sin esa atribución, de la que queda claro ahora que no quiere abdicar —como consignó Miguel Granados Chapa—, Zedillo iba a ser un presidente infinitamente más débil. El humor corrosivo del cronista Carlos Monsiváis, sintetizó: "Se acabó el dedazo. Ahora es el tiempo de las designaciones por consenso de una sola persona."

Entre los analistas existe coincidencia en que el choque de trenes, entre el PRI y el presidente, no es el fin de la batalla, sino el principio de una guerra de la cual saldrá perfilado, en el largo plazo, el nuevo PRI. Por eso, hay quienes dudan que Moctezuma pueda enfrentar con éxito a los sectores "duros" del PRI si antes, desde la Secretaría de Gobernación, la encargada de la seguridad interior y el manejo con los partidos políticos, demostró que es bisoño.

Se adelanta que el papel de Moctezuma será deshacerse lo más rápidamente posible del poder de veto y de voto de las bases priístas en el proceso de designación de los candidatos presidenciales, por lo que se augura poca vida a los nuevos lineamientos de la XVII asamblea. Hay quienes señalan que con la decisión de colocar a Moctezuma en el PRI, el presidente dio inicio de facto a la XVIII asamblea, y que la misión de aquél será ejecutar una nueva reforma que rectifique los documentos básicos y cambie los "candados" de los estatutos. Se adelantan, también, cambios en el gabinete y movimientos de piezas en el Senado, con miras a no dejar vestigio alguno de la llamada "rebelión de las bases" en dicha asamblea.

De manera genérica, los estatutos de un partido político representan la correlación de fuerzas que hay en su interior. Por el momento, en el PRI existe una fuerza hegemónica: la de los viejos cuadros "nacionalistas" del partido. Pero los movimientos ordenados por el presidente Zedillo parecen indicar que los grupos "modernizadores" reaccionaron de inmediato y que Zedillo está en las mejores condiciones de reorganizar su gabinete e imponer a sus incondicionales en las próximas candidaturas de gobernadores.

Por otra parte, la llegada de Moctezuma al PRI parece favorecer a Labastida Ochoa, quien se coloca como cabeza visible del Grupo Sinaloa, detrás del cual estaría el ex presidente Miguel de la Madrid. Esteban Moctezuma inició su ascenso político a la sombra del entonces gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, con quien colaboró como secretario de Finanzas y de Administración entre 1986 y 1987. Sin descartar que con esos "padrinos" y con el apoyo de su amigo, el presidente, luego de un pasaje por algún puesto de elección popular el propio Moctezuma pueda ser el candidato oficialista del año 2000.

Se considera que a partir de la irritación presidencial que se tradujo en una sobreacción para imponer a Moctezuma, Zedillo abrió abruptamente el proceso de sucesión presidencial y al caer en esa lucha dio inicio a su propia cuenta regresiva. El problema de fondo es que el "banderazo" por la puja del 2000 fue dado antes de tiempo; su impericia política le hizo quemar etapas (poco más de dos años) cuando, como es tradicional en el proceso sexenal mexicano, aún no llegaba al punto de inflexión del poder máximo como presidente de la República.

Esa situación explica por qué un grupo de hombres del entorno presidencial intentó convencer a Zedillo de que en la XVII asamblea hubo una "conspiración" o un "golpe virtual" contra el jefe del Ejecutivo, según reveló Jorge Fernández. De existir la conspiración, se deduce, existe al interior de la clase política priísta. Lo que no han podido explicar Zedillo ni sus ideólogos es si se ha llegado a un

paradigma de gobierno de presidente sin partido o partido en el poder sin presidente, y cómo puede garantizar así la gobernabilidad.

Hay que anotar que a la inestabilidad política se suma la ausencia de paz social, y que esa combinación afectó, desde comienzos de octubre, la marcha de la economía con un nerviosismo devaluatorio. Esa perspectiva fue atizada por el catedrático del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Rudiger Dornbusch, quien anticipó un escenario de "incertidumbre" porque las dudas en la efectividad del modelo económico mexicano se conjugan con un panorama político negativo de desmembramiento y choques entre los grupos de poder que afectan la confianza de los inversionistas.

Para los analistas financieros, la señal que envió Zedillo a los mercados fue de inseguridad y debilidad por la falta de control en su partido, la ausencia de consensos al interior de la clase política, de la oposición y de la sociedad civil y el descontento por la rigidez del programa económico. "Las fuerzas reales de poder se muestran ya seriamente preocupadas por la ausencia de manejo y de respuestas", escribió Gustavo Lomelín en *El Financiero* el 6 de octubre. El mismo día, la portada de la revista *Proceso* exhibió una imagen de Zedillo con su mano derecha extendida y su índice apuntando, bajo un titular que sentenciaba: "No persuade", y con un balazo que complementaba las materias en las que el presidente no convence: "EZLN, política, economía, justicia..."

Sin embargo, no todos los analistas se guían por la lógica que sugiere la existencia de una pugna real entre "dinosaurios" y "tecnócratas". Más aún: de la XVII asamblea habría surgido un nuevo acuerdo cupular entre las tres tendencias mayoritarias del partido en el poder, destinado a restituirle al PRI los votos perdidos como consecuencia del crack financiero, económico y productivo detonado a raíz de la devaluación de diciembre de 1994, y de la posterior aplicación de draconianas medidas de ajuste estructural.

Los costos políticos de ese crack los vivió el PRI en 1995: perdió tres gubernaturas y vio el avance irrefrenable del PAN en las principales capitales del país. Los costos sociales están a la vista: elevados índices de delincuencia, derivados del desempleo, y la pérdida del poder adquisitivo. De allí que se estime que una fracción de la élite tecnocrática y los grupos tradicionales priístas llegaron a una especie de "nuevo pacto político" a fin de garantizar la estabilidad del proyecto económico y el control del Congreso y la capital de la República por el PRI en 1997. En materia económica, los analistas dicen que los resultados de la convención representan un matrimonio de conveniencia entre los elementos de línea dura, la vieja guardia y los reformistas moderados del PRI, que necesitan responder a la furia de la población sobre la prolongada recesión.

El politólogo Roger Bartra afirmó que más que un distanciamiento real entre el presidente y la clase política, las diferencias son de forma y obedecen a la necesidad momentánea de espectacularidad política para reinstalar al PRI en las preferencias electorales perdidas. Según su visión, la aparente fisura políticos-tecnócratas es parte de un escenario muy bien montado, que intenta lavar la imagen al PRI y echarle la culpa de la corrupción a los tecnócratas, con meros fines electoreros.

Para Luis Javier Garrido, la asamblea sirvió al gobierno para lanzar una campaña de desinformación, a fin de hacer creer a la ciudadanía que hubo grandes cambios. A su juicio, los priístas terminaron por avalar el control que ejerce Carlos Salinas sobre la vida pública del país. Para el profesor de la UNAM ése es el punto clave, pues a pesar de las denuncias contra el ex mandatario, la reunión estuvo controlada por sus operadores y, finalmente, se impidió que fuera expulsado del PRI como demandaron algunos cuadros medios.

Así, los gritos de "¡Fuera Salinas!", y contra el capitalismo salvaje, junto con la eliminación de "liberalismo social" como ideología del PRI y la defensa del petróleo y "todos los hidrocarburos", fueron una catarsis, ya que el prisma quedó atrapado en su contradicción: se enjuició y condenó todo lo negativo del salinismo porque afecta la imagen del partido, pero los asambleístas se resistieron a sancionar al autor de todos los agravios (desde abuso de poder, corrupción, narcotráfico, la distribución de la pobreza y el aumento de la miseria, hasta los asesinatos políticos y la crisis

económica más aguda del siglo), porque saben que sin parte de esos excesos, pierden toda su base de apoyo y la posibilidad de seguir existiendo como partido del poder. Como señaló Paulina Fernández, es en esos episodios de la vida interna del PRI "en donde contradicción se convierte en sinónimo de complicidad, y complicidad, en este sistema, equivale a razón de Estado".

Externamente, y a juzgar por la información que circuló, Salinas tiene dividido al PRI. El mensaje que salió a la luz pública es que el "salinismo estructural" fue enterrado con todo y su "solidaridad" a cuestras. Sin embargo, un análisis más riguroso de los verdaderos resultados de la asamblea permite comprobar que desde Los Pinos y las alturas del PRI se sigue protegiendo a Salinas; de allí que los reclamos irritados de algunos cuadros partidarios fueran olímpicamente ignorados, por lo que la tan exaltada militancia fue sólo "carne de convención", como la definió Alejandro Ramos Esquivel.

Pero fuera del escenario de mercadotecnia política de la XVII asamblea, entre los principales grupos de poder se filtró la preocupación porque el presidente se puso virtualmente en manos del ejército, pues la SDN maneja ya toda la seguridad nacional y pública del país. Si bien uno de los problemas más graves del México actual es la inseguridad —para algunos analistas, por encima del desempleo, el sobreendeudamiento de empresas y particulares, y la emergencia del EPR—, ni siquiera durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, después de la matanza de Tlatelolco, las fuerzas armadas aceptaron el control de la seguridad total de la nación.

Según consignó Gustavo Lomelín, el presidente reconoce en privado los riesgos que implica esa decisión, pero la argumenta bajo la hipótesis de que un acto de violencia genera una reacción en cadena y debe frenarse de raíz con el uso de la fuerza del Estado. El columnista de El Financiero señaló que en altas esferas del poder se tiene información de que existe "grave peligro de violencia" una vez que salgan a la luz los hechos delictivos "sanguinarios" que se han empezado a presentar en las principales ciudades del país.

Hasta ahora la postura del ejército mexicano ha sido muy institucional. Y como se argumenta desde sus filas, su creciente presencia afuera de los cuarteles en todo el país —lo que partidos políticos de oposición y ONGs vinculadas a los derechos humanos denuncian como una creciente militarización de México— se debe simplemente a que no van a permitir el desorden y el caos ni van a conceder márgenes a grupos interesados en desestabilizar la nación.

En este sentido, el pronunciamiento de la asamblea sobre la necesidad de impulsar un tipo de desarrollo basado en una "economía para la justicia social", podría no ser un mero manejo discursivo o demagógico. Ya opera en Oaxaca y Guerrero (la zona de influencia de la guerrilla del EPR) un programa emergente que instrumenta el Banco Mundial, similar al proyecto iniciado en Chiapas en 1994 tras la irrupción del EZLN, lo que es un reconocimiento implícito de que "la crisis económica aparejada al malestar y la presión social es la causa del resurgimiento de la guerrilla en México", según advirtió el empresario David Garza Lagüera, del Grupo Alfa.

De acuerdo con revelaciones de Lomelín, que citó reportes de la Sección 2 (Inteligencia) de la SDN, el 4 de marzo de 1996 se conoció un comunicado emitido por un supuesto Ejército Popular Magonista, donde sentenciaron a muerte a una serie de personas encabezadas por Zedillo, los gobernadores Rubén Figueroa, Patricio Chirinos, Roberto Madrazo y Otto Granados, así como Guillermo Ortiz, el canciller Gurría, el regente Óscar Espinosa y los generales Arturo Acosta Chaparro y Alejandro Óscar Várela. Las primeras investigaciones militares, consignó Lomelín, arrojaron que ese grupo tiene "raros" orígenes de una mezcla de Sendero Luminoso y la organización priísta Antorcha Campesina (El Financiero, 29/IX/96).

Aunque podría tratarse de filtraciones "confidenciales" interesadas en crear un clima de inestabilidad que justifique el avance de los sectores "duros", la pregunta que se formulan muchos analistas es por qué la autoridad no ha sido capaz de conducir políticamente la inconformidad social. Para algunos, en el fondo, la ausencia de liderazgo y de capacidad de negociación política del régimen han derivado en el cierre de los espacios de diálogo y cedido el control de la situación a sectores castrenses. Esa militarización de la sociedad, se ha dicho, no es un síntoma de fortaleza del presidente sino reflejo de debilidad, y exhibe a la vez una falta de voluntad para ajustar el modelo

económico y atender las necesidades sociales de la población, al grado de que hasta el Banco Mundial manifestó su preocupación en un documento muy poco publicitado.

El argumento optimista ante un escenario tan alarmante es que Zedillo se encuentra aun ejerciendo sus funciones, y lo mismo puede decirse de los partidos políticos y del Poder Legislativo. Sin embargo, la imposición de la disciplina en el PRI durante la clausura de la XVII asamblea —cuando Zedillo pronunció la frase "la línea es que no hay línea"— y en los días posteriores, cuando el gobierno ratificó su modelo económico y, pese a algunos cambios sustanciales también la privatización de la petroquímica, podrían indicar que dentro del poder se tomó la decisión de no seguir haciendo política pública, ciudadana, electoral, sino más bien de enfriar el espacio de la política.

A partir de ese enfoque, especialistas como Sergio Zermeño indican que una concatenación de elementos podría dar paso a una "fujimorización" de la política, es decir, al advenimiento de alguna forma de liderazgo presidencial necesariamente autoritario que pondría en sordina a los partidos políticos, a las cámaras y a los dirigentes sociales. Dicha personalización del poder encontraría terreno favorable en el llamado a "poner orden" por parte de un sector de la ciudadanía desesperada por el ascenso de la delincuencia y la violencia política, y tendría su plataforma en unas fuerzas armadas crecientemente protagónicas. Escenario, por otra parte, que podría darse con o sin Ernesto Zedillo.

Un elemento adicional que involucra de manera directa al factor externo en la disputa por el poder en México, es el petróleo. No es un secreto que desde Washington y Nueva York se diseñó la estrategia de apertura que ha comenzado a tocar las fibras más sensibles del sistema político mexicano y que amenaza con generar un crack institucional. Michel Camdessus ratificó esa postura cuando anunció a finales de septiembre que el FMI prepara el programa que servirá de marco para asegurar el crecimiento de la economía mexicana durante los próximos años. En el fondo, ese programa pretende la apertura total del sector energético.

Las fallas en el equipo de Adrián Lajous, director de Pemex, en cuanto al esquema de instrumentación jurídica y de negociación política con el sindicato petrolero, complicaron el proceso de privatización de la petroquímica e intensificaron la presión de la comunidad internacional, bajo el pretexto de "las malas señales al mercado".

Hasta el momento Zedillo ha rechazado la idea de privatizar la exploración y explotación petrolera, pero impulsa la desincorporación de la petroquímica básica, reclasificada semánticamente como secundaria, para captar inversión privada nacional y extranjera y desarrollar ese sector "no estratégico". No obstante, las presiones sociales y las necesidades de financiamiento son de tal magnitud, que la idea de los estrategas del gabinete de seguridad nacional en Estados Unidos es forzar los tiempos de las privatizaciones en México y envolver al gobierno de Zedillo en una presión adicional para abrir totalmente la rama petrolera.

En esa línea se interpretó la amenaza del embajador estadounidense en México. James Jones: "El gobierno de México tiene la obligación de proceder con responsabilidad en la privatización de la petroquímica secundaria, ya que si el proceso fuera detenido se enviarían señales negativas a los inversionistas (...) La preocupación sobre los secuestros, grupos guerrilleros y otros delitos han restado impulso a las inversiones estadounidenses en México en el segundo semestre del año." Una alta fuente del PRI interpretó la reacción de Jones como una advertencia directa a Zedillo, luego de que el presidente anunció que adoptaría los lineamientos de la XVII asamblea como políticas de gobierno.

Aunque el voto de la asamblea sobre la privatización petroquímica se consideró de naturaleza ideológica y destinado a reducir el atractivo de las reivindicaciones de Cuauhtémoc Cárdenas sobre la soberanía energética, algunos analistas interpretaron que quizá los servicios de inteligencia de Estados Unidos advierten más claramente el peligro de freno a la apertura económica por la pugna por el poder entre grupos políticos en México.

Sea como sea, lo cierto es que el gobierno y los empresarios mexicanos entendieron el mensaje de Jones, y los días siguientes hubo una serie de pronunciamientos del secretario de Energía, Jesús Reyes Heróles, Zedillo, la cúpula empresarial, el PAN y del secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz,

en Washington, que vinieron a ratificar que la petroquímica es vital en el proceso de privatizaciones, proceso que se acelerará en 1997.

Según pronósticos del servicio geológico de Estados Unidos, existe una gran riqueza petrolera en aguas profundas del Golfo de México. Se estima que el potencial de hidrocarburos es diez veces más grande que las reservas probadas actuales. Se habla de una cifra del orden de los 600.000 millones de barriles, lo que convertiría a México en la potencia petrolera mundial del siglo XXI. En ese escenario, y para no frenar las "señales al mercado", el Congreso aprobó con el voto único del PRI las reformas de ley sobre petroquímica, que en los hechos implica una privatización de Pemex "en pedazos", como admitió el diputado priísta Alejandro Rojas.

Todo indica que los tecnócratas se mantendrán apegados a su estrategia "economicida" y no están dispuestos a renunciar a su ideología. Zedillo y su minigabinete económico no tienen conflictos de intereses, aunque como tecnócratas y priístas sostengan compromisos distintos e, incluso, antagónicos. Su compromiso, finalmente, no es con el pueblo de México sino con los centros financieros del poder mundial.

El "lobby" petrolero de Estados Unidos, el mismo que promovió el NAFTA, está muy activo y presiona para que se abra la industria petroquímica, como el fruto maduro de la reestructuración deudora de marzo de 1982. Se trata de un poderoso grupo de interés donde figuran el ex presidente George Bush y el ex secretario del Tesoro, Lloyd Bentsen, ambos texanos con negocios en el sector petrolero, y por el lado demócrata el vicepresidente Al Gore y el asesor presidencial de seguridad nacional Thomas McLarty, también cercanos a la industria del petróleo y el gas natural.

Para ellos, la marcha atrás de Zedillo en la privatización ciento por ciento de la petroquímica, que derivó en una burbuja especulativa y una salida de capitales de casi 700 millones de dólares, puso en duda la funcionalidad del presidente de México quien, como aliado, les estaría fallando...

Por otra parte, la larga crisis iniciada en mayo de 1996 entre el gobierno y el EZLN, llevó a los negociadores a un punto casi de ruptura a finales de septiembre, en un marco de amenazas de que se aplicaría todo el peso del Estado, entendido éste como la represión selectiva y/o la reanudación de las hostilidades por parte del ejército, si los zapatistas insistían en hacer política pública fuera de los linderos de Chiapas.

Pero la conflictividad oficial abarcó también a la Conai, contra cuyos miembros Gobernación dirigió duros conceptos descalificadores e, incluso, insinuó que podía desconocerla como instancia de mediación.

En realidad, cuando la mesa de San Andrés se empantanó en mayo de 1996, dentro del gobierno se vivía una pugna de posiciones que pareció dirimirse cuatro meses después. El forcejeo se acentuó luego de la aparición del EPR, elemento que dio preeminencia a la lectura de Seguridad Nacional y fortaleció a quienes, dentro del régimen, abogaban por una salida de fuerza contra las guerrillas de Chiapas y Guerrero.

La disputa del poder en el área de la seguridad pareció definirse en septiembre en favor del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien finalmente logró disciplinar al equipo encabezado por Marco Antonio Bernal, que hasta entonces dependía directamente del presidente Zedillo y del secretario de Defensa, general Cervantes. Chuayffet heredó la delegación gubernamental para el conflicto de Chiapas de su antecesor Esteban Moctezuma y, por lo tanto, nunca la sintió como "suya". En el marco de sus atribuciones como encargado de la seguridad interior, cuando llegó al Palacio de Covián reclamó su intervención directa en el conflicto chiapaneco y para conseguir ese objetivo se valió de la Cocopa a fin de establecer un vínculo entre Bucareli y el EZLN, lo que significó un desplazamiento "de facto" al equipo de Bernal.

La puja Chuayffet-Bernal culminó en septiembre, cuando quedó claro que la jefatura formal del proceso la asumía Gobernación, como entidad articuladora de toda la estrategia de Seguridad Nacional. Al equipo de Bernal, Jorge del Valle y el general Ángeles, no les quedó más remedio que alinearse e instrumentar las decisiones de su nuevo jefe operativo.

A partir de ese momento, los miembros de la delegación oficial comenzaron a jugar un nuevo papel. Así, Bernal se convirtió en un vocero beligerante y, como tal, incursionó en aspectos que

iban más allá de sus atribuciones; en rigor, fue comisionado por sus jefes para aplicar la línea dura de Seguridad Nacional contra el EZLN y la mediación presidida por Samuel Ruiz.

Los excesos de Bernal y Del Valle llevaron al EZLN a suspender las conversaciones. Entre sus cinco requisitos mínimos para reanudar el diálogo, y que a la vez sirvieran como garantía de un compromiso serio por parte del gobierno, la insurgencia planteó la designación de un "interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, voluntad política de negociación y de respeto a la delegación zapatista".

En los hechos, el EZLN no pidió el cambio de interlocutor, sino que a éste se le dotara de facultades decisorias y se le mandatara para llegar a un acuerdo negociado sobre la base del respeto para su enemigo. Gobernación salió en defensa de la delegación oficial y en ese momento quedó en evidencia que Bernal y su equipo habían perdido autonomía. Los referentes para Bernal ya no fueron únicamente el presidente y el ejército; a través de Chuayffet, la conducción operativa del proceso quedó en manos de los duros del gabinete de Seguridad Nacional.

Cuando el EZLN, en el lenguaje de dominó "puso la muía", patentizó que la suspensión del diálogo era lo más seguro para sus intereses. En San Andrés, gobierno y guerrilla habían acordado que ninguna de las dos partes podía denunciar que la otra había roto el diálogo. Para ello, ambos actores habían definido un mecanismo según el cual se debía consultar la opinión de las dos partes y de la mediación (Conai), y que, con posterioridad, su resultado tendría que ser dictaminado por el Congreso a través de la Cocopa.

Con esa garantía, y viendo que la mesa de San Andrés sobre Democracia y Justicia estaba empantanda, ante la falta de voluntad del gobierno que llegó a la reunión sin posiciones y evidenció que no tenía voluntad de llegar a ningún acuerdo, el EZLN suspendió de manera unilateral el diálogo. En su valoración para tomar esa decisión, que no significó una ruptura de las conversaciones, tuvo que haber incidido la prédica del gobierno de que se iba a actuar "con todo el peso del Estado" en contra del EPR. A pesar de sus diferencias públicas, el EZLN no podía seguir negociando la paz en Chiapas mientras el gobierno hacía la guerra en Guerrero y otros estados en donde el EPR parecía tener comandos armados. De allí que la opción más segura fue suspender las pláticas y ganar tiempo para que otras fuerzas sociales se movieran e incidieran sobre el conflicto global.

En esa coyuntura emergieron como actores políticos y sociales la Cocopa y la Conai. La primera, presionando para llegar a una solución sobre la base de las cinco condiciones del EZLN y la reanudación del diálogo de San Andrés. La mediación señaló que ante la aparición de nuevos elementos que amenazaban la paz en México, entre ellos la irrupción del EPR y la progresiva militarización del país, el mecanismo de negociación resultaba ya insuficiente y que era necesario impulsar un diálogo nacional a fin de fortalecer las vías políticas y de negociación como la única manera de solucionar la crisis de fondo existente.

En esas circunstancias, la Conai elaboró una serie de documentos dirigidos a las cuatro distintas dimensiones del problema. Uno abordó las cinco condiciones del EZLN para regresar a la mesa de San Andrés. Otro analizó la crisis y planteó la necesidad de reorientar del modelo de diálogo y negociación. Uno más, denominado "Primer acercamiento hacia un plan de emergencia y de fondo para el impulso de la reconciliación en Chiapas, en particular en la zona norte", fue entregado al subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, el 20 de septiembre. En el diagnóstico se define la existencia de una guerra civil larvada en los municipios del norte del estado, y se aboga por la desmilitarización de Chiapas y el desarme de las "guardias blancas".

El cuarto documento, con eje en la pacificación, tuvo una dimensión nacional. En su elaboración la Conai participó como corresponsable; como una instancia más de la sociedad civil, junto con 355 organizaciones sociales y 8,550 personas de 25 entidades federativas. En el documento, que provocó una iracunda respuesta del gobierno, los firmantes señalaban la crisis del modelo de diálogo y negociación acordado en San Andrés, la ausencia de acuerdos sustantivos y la no instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación prevista por las partes; el aumento del cerco militar en torno a las comunidades de Los Altos, y la constante

campaña de agresión y acusaciones dirigidas contra la Conai y Samuel Ruiz.

En consecuencia, decía, "siendo indispensables, ya no son suficientes un ajuste del modelo de diálogo ni una solución limitada al estado de Chiapas. El problema de la paz adquirió dimensión nacional, porque no es sólo la ausencia de enfrentamiento armado". Entre los "problemas" enumera la limitación de la reforma del Estado al área electoral y la exclusión en la misma de muchos actores sociales; la creciente inconformidad social por la aplicación de políticas y medidas económicas que han empobrecido a millones de mexicanos; la aparición y accionar del EPR en distintos puntos del país y la respuesta del gobierno, que lo considera un grupo "terrorista" contra el cual advirtió utilizaría toda la fuerza del Estado, así como la generalización de la violencia bajo distintas formas (insurreccional, espontánea del pueblo, criminal e institucional), al tiempo que "aumenta peligrosamente la militarización del país". Esos elementos "conforman un grave riesgo para la nación; asoma, como posible, el camino de las salidas autoritarias, en el que se estrechan los caminos pacíficos para el tránsito a la democracia y, en suma, en el que se pone en cuestión la unidad y soberanía nacionales".

La respuesta de Gobernación fue inmediata. En un comunicado responsabilizó a la Conai de promoverlo; no obstante, el documento estaba firmado por personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas, varios diputados independientes y del PRD, seis obispos (Lona, Carrasco, Aguirre Franco, Ramírez, Vera y Ruiz) y los provinciales de tres congregaciones religiosas, junto con 355 organizaciones sociales.

Gobernación no se quedó en las formas. Arremetió contra la "autodesignada" Comisión Nacional de Intermediación, creada por "insistencia" del EZLN, y la acusó de no ser neutral y pretender erigirse en un actor político más. "La Conai debe definir con claridad qué lugar quiere ocupar en el proceso de negociación: o es mediador entre las partes o es actor político." Según el despacho de Chuayffet, los "juicios unilaterales" de la Conai "no reflejan con claridad la situación en que vive nuestro país. No deben sustituirse la objetividad y la responsabilidad por el tremendismo y los afanes protagónicos".

El incidente entre Gobernación y la Conai iba en aumento, mientras la convocatoria a un Congreso Nacional Indígena en el Distrito Federal, bajo el lema "Nunca más un México sin nosotros", se convirtió en una presión adicional del momento. Bernal se despachó por partida doble al definir como grave que la Conai "descalificara" la mesa de San Andrés convocando a un diálogo nacional, al tiempo que afirmó que el traslado de zapatistas al Distrito Federal era "imposible" y se les aplicaría la ley.

El subsecretario Arturo Núñez advirtió que Gobernación podía desconocer a la Conai como mediadora. Mientras Zedillo exhibió su animadversión contra el obispo Samuel Ruiz, al referirse veladamente a él, durante un programa televisivo, como un "redentor autonombrado" que promueve la versión de que el país está en una situación de violencia generalizada para surgir como "salvador" en un diálogo nacional (Programa Nexos, TV Azteca, 29/IX/96). El presidente exhortó al EZLN a regresar a la mesa de San Andrés y dijo que las cinco condiciones mínimas de los zapatistas "son atendibles". En ese sentido, Samuel Ruiz apuntó que el presidente también debió llamar al diálogo a Bernal y se preguntó por qué si los requerimientos del EZLN eran atendibles, "no los ha resuelto".

En esa guerra de posiciones, Gobernación afirmó que el traslado de zapatistas a la Ciudad de México se consideraría como un "acto de provocación deliberado", frente al cual sólo correspondía aplicar la ley. Para entonces, diversos abogados habían analizado la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que rige para las autoridades federales y el EZLN, y reivindicaron la categoría de ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos de los zapatistas y, por lo tanto, no sujetos a arraigo alguno a Chiapas y a los que el Estado les debía garantizar el libre tránsito y su integridad. Luis Javier Garrido dijo que el jurisperito Chuayffet debería saber que la ley tiene que aplicarse en todo momento, pero que como para él "la ley" es la fuerza represiva, lo que quiso decir fue lo contrario: amenazó con violarla si los zapatistas salían de Chiapas (La Jornada, 4/X/96).

El gobierno estaba utilizando objeciones políticas disfrazadas de justificaciones legales al aplicar a los miembros del EZLN la categoría de "delincuentes en suspenso", confinados en la selva e impedidos de actuar políticamente por el cerco del ejército. El régimen tenía motivos para temer el traslado, pero no tenía razones. La participación del EZLN en una consulta nacional legal en la capital, venía a socavar la "política del achicamiento" y al amagar con el recurso de la fuerza, un nervioso gobierno amenazó con violar garantías constitucionales y leyes federales, con lo que pareció confirmar que, en realidad, no quería alcanzar una paz negociada con los zapatistas.

Cuando el 2 de octubre el presidente de turno de la Cocopa, José Narro, dijo que la liberación de órdenes de captura contra dirigentes del EZLN violaría la ley, fue Zedillo quien calificó como "provocación" una eventual presencia de zapatistas en la capital. En tanto, el subcomandante Marcos respondió con un burlón y desafiante "¡¡UUY!!" al comunicado de Gobernación, "en donde reitera que seguirá haciendo lo que ha hecho desde el 9 de febrero de 1995, es decir, tratar de matarnos".

Un día después, en Palenque, Zedillo reiteró que las diferencias con el EZLN eran "salvables" y llamó a los zapatistas a evitar que "afanes protagonicos" los alejaran del diálogo. Mientras el PAN advertía que si los insurgentes salían de Chiapas "desaparecería el Estado mexicano", la Conai respondió que en vez de "descalificar apresuradamente" —en alusión a las acusaciones de tremendismo y afán protagonico aderezadas por Gobernación a la mediación— esperaba que el gobierno escuchara los exhortes que reclaman la paz como camino. A su vez, la Cocopa se dirigió a las partes exigiéndoles que actuaran sin chantajes ni amenazas, y pidió al Ejecutivo que precisara cuándo cumpliría los acuerdos ya alcanzados con la guerrilla.

El 4 de octubre, mientras la Cocopa anunciaba que Gobernación estaba dispuesta a negociar el traslado de los rebeldes a la capital del país, se estableció un cerco policiaco-militar en torno de La Realidad y se detectaron movimientos inusuales de tropas en el cuartel de Rancho Nuevo. Bernal siguió jugando su papel de duro y afirmó que si los dirigentes del EZLN salían de Chiapas, el diálogo quedaba roto. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Conai, Miguel Álvarez, dijo que sería "un error político e histórico" que el gobierno aprehendiera a los zapatistas que acudieran al congreso indígena y definió que las declaraciones de Bernal apuntaban hacia un "escenario de alto riesgo".

Sin embargo, un sorpresivo encuentro entre la dirigencia del EZLN y miembros de la Cocopa y de la Conai, en La Realidad, el mismo día en que daba inicio el cónclave indígena en la capital (7/X/96), abrió el camino para una negociación que, finalmente, posibilitó el viaje de la comandante Ramona a la Ciudad de México en representación de los zapatistas. Lo que se combinó con dos hechos que no fueron producto de la casualidad: el recorrido del presidente por varias bases militares de Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y la reedición del "efecto chupacabras", ahora con la febril búsqueda de los restos del "hombre de Cuajimalpa" —presuntamente el desaparecido Muñoz Rocha— por elementos de la PGR.

Según Marcos, dentro de la comandancia zapatista Ramona representa a la parte más "beligerante e intransigente" y su designación como delegada al congreso fue la "mayor señal de guerra" del EZLN. La frágil líder rebelde, aquejada de una enfermedad terminal y cuya talla inferior a un metro cincuenta recuerda la muerte lenta que la desnutrición ha asestado a los marginados, resume en su persona varias formas de marginación: es mujer, india y pobre. Como dijo Daniel Cazés, firme en su agonía, define la subversión de la paz, de la democracia y de la dignidad reivindicada por los indios.

Su presencia en la clausura del encuentro indígena y un día después, 12 de octubre, en el Zócalo capitalino, fue el resultado de una negociación política en la cual intervinieron de manera activa miembros de la Conai y la Cocopa, que sirvieron de puente entre el EZLN y Zedillo, Gobernación y el ejército. Finalmente se alcanzó una fórmula de compromiso que concilio el principio de autoridad del Estado con el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Según escribió Álvaro Arreola Ayala, fue un acuerdo negociado básica y políticamente entre el titular del Ejecutivo federal y el secretario de Defensa, en la "gira" que el primero hizo por diferentes comandancias militares de la República

(El Financiero, 11/X/96).

El gobierno terminó dejando a un lado su teoría de la provocación y aceptó el viaje de una delegación zapatista de "hasta diez" delegados. Pero el EZLN eligió romper el cerco militar y político con una única representante, con lo que para muchos analistas puso en ridículo a un régimen que había hecho del asunto una cuestión de Estado. Y que todavía después, para despojar de las ocho columnas de los diarios a la indígena enferma, llegó al colmo de desenterrar una calavera en el rancho "El Encanto", en un acto macabro exaltado luego por el procurador Lozano y el fiscal Pablo Chapa.

"Soy el primero de muchos pasos de los zapatistas en el Distrito Federal y en todos los lugares de México", dijo Ramona encapuchada en el Zócalo, delectando con dificultad su castilla, al tiempo que anunciaba que el EZLN estaba dispuesto a "participar en un gran diálogo nacional". La multitud le respondió: "¡Ramona/ salió/y el cerco se rompió!"

Desde San Cristóbal, el mediador Samuel Ruiz consideró como un hecho significativo la presencia de la comandante zapatista en la capital. Dijo: "Quiere decir que los indígenas ya tienen una plataforma de escucha." Para Lorenzo Meyer, que la insurgente hubiera llegado al centro histórico, político e ideológico de México demostró "la fuerza de la debilidad" (zapatista) y "la debilidad de la fuerza" (del régimen y la clase política mexicana). A su juicio, el EZLN había asestado un golpe político genial y ganado, una vez más, la batalla de la imaginación a una coalición integrada por el PAN, los empresarios y un gobierno que cuenta con un poderoso ejército, y al que le sobran armas pero le falta autoridad moral.

Pero no todos lo interpretaron así. Para Adolfo Aguilar Zinser, por ejemplo, la presencia "casi fantasmal" de Ramona fue resultado de un movimiento estratégico fallido del EZLN. "Marcos se vio obligado a sucumbir ante las contradicciones, y negociar con el gobierno quedarse en Chiapas y transigir mandando a México a la comandante Ramona, prácticamente en artículo monis" Según el legislador, "el ciclo mítico del zapatismo, frondoso, ocurrente, selvático, trashumante y clandestino, se aproxima ya a su pendiente de descenso. Marcos y los suyos tienen que hallar la salida del laberinto para entrar en una nueva línea de continuidad y de ascenso político". Para él, había llegado el momento de que la dirigencia del EZLN "se saque las máscaras" (Reforma, 18/X/96). Con matices, su colega Juan Guerra, miembro de la Cocopa, aseguró que Marcos y los zapatistas quieren salirse de la selva porque ya no ven un camino de cambio en la vía de las armas; pero "no a cualquier costo".

El 16 de octubre comenzó una nueva fase de negociaciones en San Cristóbal entre una delegación integrada por dieciséis comandantes zapatistas y Marcos, y miembros de la Cocopa y de la Conai, por separado, con el fin de destrabar las pláticas de San Andrés entre el EZLN y el gobierno.

Marcos pidió al gobierno que formulara una propuesta seria, "no parches", y se pronunció por un diálogo nacional para buscar soluciones integrales a los problemas de México. El jefe insurgente declaró a Bruno López, de Univisión, que el EZLN se acercaba cada vez más al momento de una definición, porque llegó "al límite" de ser una fuerza armada y clandestina que "no está peleando con armas y tampoco haciendo política afuera". Dijo que al gobierno le conviene más un zapatismo haciendo política abierta que armada y clandestina, aunque advirtió que el grupo que respalda a Marco Antonio Bernal y Jorge del Valle insiste en "venderle" a Zedillo la posibilidad de obtener una victoria militar contundente sobre el EZLN.

El 18 de octubre, un rumor ganó las redacciones de las agencias noticiosas y los medios de comunicación mexicanos: como resultado de un enfrentamiento entre dos tendencias opuestas, decenas de zapatistas habían muerto en Ocosingo. En forma paralela, filtraciones de inteligencia insistían en amplificar, a través de columnistas de Estado, la supuesta existencia de graves divergencias entre el subcomandante Marcos y el obispo Samuel Ruiz. Durante una entrevista con los enviados de El Universal, Marcos dijo que ambos "borregos" habían sido soltados por los militares e identificó como fuente de los rumores al jefe de la VII región militar de Chiapas, general Mario Renán Castillo.

Cuando el día 23 el EZLN llegó a un acuerdo con la Cocopa y la Conai acerca de la instalación

de la Comisión de Seguimiento y Verificación, Marcos fue claro: "La paz será con Samuel Ruiz o no será." Reivindicó el papel de ambas instancias y dijo que lejos de "los burócratas de la guerra, que esconden su cobardía detrás de gritos histéricos y amenazas" —llamó también a Bernal y Del Valle "grises y tercerones hombrecitos" para quienes la paz es una mala noticia porque hacen de la guerra su negocio y escalera política—, la Cocopa y la Conai pudieron junto con la delegación zapatista reconstruir el clima de confianza necesario para "descubrir que la paz nueva es incluyente".

Pero se refirió de manera particular al obispo Ruiz, convertido en "involuntaria y obsesiva pesadilla del poder que mal gobierna" por su "máximo defecto de decir la verdad". Mientras el "ladrón y criminal" responsable directo del alzamiento zapatista descansa en la verde Dublín, dijo Marcos, un régimen torpe, lleno de miedo y de rencor acorrarla al justo. "Quienes quieren la guerra exigen la cabeza de Samuel Ruiz. Quienes quieren la paz tendrán que aprender que será también con él o no será."

Un día después, Marcos dijo que el EZLN está dispuesto a firmar una paz digna antes de los comicios de 1997, sin entregar las armas. Sobre la "oferta" del gobierno de que la guerrilla se convierta en una asociación política y participe a nivel electoral, dijo que esa opción fue rechazada porque a los zapatistas no les interesa competir por puestos de elección; aunque no descartó del todo que una parte del grupo armado pudiera asomarse a la lucha política legal, no partidaria, para abrir espacios de participación popular.

Regidas por la indefinición, las declaraciones del jefe insurgente apuntaban a la voluntad de cerrar el ciclo de la lucha armada por parte del EZLN, e iniciar otro con eje en la construcción de una fuerza política de nuevo tipo, al margen de las esferas y estructuras de poder tradicionales en México.

En octubre de 1996, el otro gran actor social surgido del levantamiento zapatista, el ejército, había adquirido una relevancia fundamental en la vida política mexicana. En pocos meses, la presencia castrense fuera de los cuarteles se extendió a 29 estados de la República y el patrullaje militar pasó de cinco millones 912 kilómetros, entre enero y mayo de 1995, a ocho millones 54,000 en igual lapso del año siguiente. Según informes de la SDN, en 1992 la institución armada contaba con 170,000 efectivos, que ascendieron a 236,000 durante 1996 (34%).

Más significativo fue, sin embargo, el cambio de la doctrina militar de seguridad nacional adoptado por el ejército y la fuerza aérea mexicana, a sugerencia de Donald Schultz, académico del Colegio de Guerra del Pentágono. En función de la nueva doctrina, se decidió impulsar tareas de inteligencia y contrainteligencia, bajo la responsabilidad de la Sección 2 del estado mayor de la SDN, para lo cual se creó el Servicio de Inteligencia. En ese ámbito específico se decidió incrementar la búsqueda de información para conocer los efectivos y actividades de los "transgresores"; actividades de patrullajes en áreas potenciales de conflicto, y el adiestramiento de tropa en la búsqueda de información sobre grupos subversivos para actuar en casos de probables enfrentamientos. También se decidió mejorar el área que atiende las tareas de comunicación social del ejército, dada su imagen negativa, para lo cual se contrataron los servicios profesionales de agencias de publicidad, nacionales y extranjeras.

Esos cambios permitieron una mayor intervención del ejército en los problemas internos de México, y de hecho quedó legalizada su actuación fuera de los cuarteles en áreas de responsabilidad civil, tales como seguridad pública, salud y combate a la pobreza, que sirven como mampara para las actividades de inteligencia sobre la población. Los ejemplos concretos más importantes fueron la llegada del general Salgado a la policía del Distrito Federal, junto con 20 militares de igual rango y 10 coroneles; el desarme de las corporaciones de policía por el ejército y su sustitución por mandos militares en Sinaloa; el hecho de que al menos 400 miembros del ejército fueron comisionados para incorporarse a diversas delegaciones de la PGR en todo el país; la dirección militar del Plan de Servicios Sociales de las Cañadas en Chiapas, que incluye la atención médica y la distribución de alimentos, y la intensificación de la llamada "labor social" del ejército en varios estados de la República.

Pero tal vez el dato más alarmante de las nuevas relaciones cívico-militares y del creciente involucramiento de las fuerzas armadas en los asuntos políticos nacionales, fue la presencia del presidente Zedillo en varios cuarteles de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, junto al general secretario Enrique Cervantes Aguirre.

El hecho, que no tuvo casi ninguna repercusión en México, no pasó desapercibido en los círculos políticos y financieros liberales de Washington, y motivó un editorial de The New York Times titulado "Un riesgoso nuevo rol para el ejército mexicano." El diario expresó preocupación ante la eventualidad de que el ejército "se convierta en otro centro de poder inexplicable e independiente", lo cual sería "una calamidad para México y socavaría las esperanzas de Zedillo y las de Washington por una continuada reforma política y económica (...) Sería trágico que México siguiera los pasos de algunos de sus vecinos hacia la brutalidad militar y la anarquía" (20/X/96).

Los signos de desgaste del poder civil y de sus instituciones ante la incompetencia y deslegitimación de la clase política son evidentes; como también lo es la acumulación de cuotas de poder por los militares. Junto con la propuesta de senadores del PAN, de crear una Guardia Nacional —el renovado anhelo del Pentágono para México y otros países del área—, comenzó a tomar cuerpo el escenario en el que miembros de las fuerzas armadas se pudieran incorporar en áreas estratégicas del gabinete presidencial. Incluso, se aseguró que una vez aprobada la nueva legislación anticrimen en el Senado, se creará una Secretaría de Seguridad Nacional.

Sin descartar en forma mecánica la posibilidad de un golpe de Estado en México, la idea parece remota. Pero el ejército ya tiene una plataforma desde la cual empieza a controlar la vida política del país. El papel de las instituciones armadas es proteger a México, no administrarlo. Sin embargo, Zedillo parece vivir de modo pasivo el "síndrome de Bordaberry" y tal vez desconoce el viejo axioma que dice que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. De allí que pueda repetir el error de pensar que el caos, la anarquía y la corrupción —introyectados en buena medida por el Pentágono— puedan detenerse con orden y disciplina. Sería bueno que no olvidara las experiencias al sur del Suchiate y se decidiera de una vez por todas a gobernar a México como estadista; pero para eso tendría que deshacerse de los grupos de poder que lo tienen de rehén en Los Pinos.

Queremos creer que el gobierno aún está a tiempo de salvarse y de salvar al país, antes de que éste se vea afrontando a la desesperación o a la servidumbre. Para un gobernante comprometido con los intereses de su nación, la clave está en el respaldo de sus conciudadanos. Igual ocurre con el ejército: la población es el único fundamento logístico capaz de disuadir cualquier hipótesis de invasión, incluso de la única superpotencia mundial, como de forma mañosa y provocadora plantea el exjefe del Pentágono, Gaspar Weinberger en su libro *La próxima guerra*, donde presenta el escenario de una invasión estadounidense a México en el año 2003.

Encubierto como parte de una narrativa ficticia producto de simulacros computarizados, el capítulo sobre México del libro del ex secretario de Defensa de Ronald Reagan, encierra varios mensajes. Parte del temor de que "algo" puede ocurrir en México; Weinberger habla de "caos" y días antes de que se conociera aquí una versión resumida de su libro (*La Jornada*, 5/XI/96), el magnate Nelson Rockefeller había aludido, después de reunirse con Zedillo, a los riesgos de "desestabilización" en México provocados por el modelo económico fondomonetarista, que al oponer al ejército con el pueblo debilita una defensa de la soberanía con apoyo de la población.

La para nada inocente advertencia de Weinberger se ubica en los parámetros de la guerra psicológica: si un gobierno nacionalista radical asume el poder en México, Washington está dispuesto a invadir el país e incluso bombardear la capital. En el fondo, se trata de la misma política que se repite desde Woodrow Wilson quien autorizó al general Pershing un plan de contingencia que contemplaba la invasión de México durante el gobierno de Venustiano Carranza. Sólo que, en la hora actual Weinberger pretende encubrir con el señuelo del narcotráfico el contexto real de una invasión posible: la política de privatizaciones y las reformas al artículo 27 constitucional.

Como ocurrió durante el porfiriato, el eje de la cuestión pasa por el control, por las transnacionales, de los contratos de propiedad sobre el petróleo y los recursos estratégicos del subsuelo, junto con las vías de comunicación (puertos, aeropuertos, ferrocarriles). El embajador James Jones ya se anotó un gran triunfo al provocar las reformas en materia petroquímica que permitirán el control extranjero sobre el 49 por ciento de las acciones de las 61 plantas existentes, como primer paso para el desmembramiento de Pemex y de las cadenas productivas generadas por la paraestatal desde la nacionalización petrolera. Concluido el ciclo de las privatizaciones en México, los inversionistas estadounidenses estarán en posibilidad de solicitar la "protección" de su gobierno si sienten amenazados sus intereses por "hordas" de mexicanos, como plantea Weinberger. Visto así, y al ritmo que van los hechos, la del 14 de abril de 2003 podría ser una fecha no tan ficticia...

México, 5 de noviembre de 1996.